TEC | Tecnológico de Costa Rica

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
CONSEJO INSTITUCIONAL
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N.° 3406
Aprobada en Sesión Ordinaria N.° 3408

FECHA: Miércoles 07 mayo de 2025
HORA: 7:30 a.m.
LUGAR: Sala de sesiones del Consejo Institucional (participación presencial) y plataforma Zoom (participación remota)

ÍNDICE

ARTÍCULO 1. Verificación del cuórum y apertura de la sesión 3
ASUNTOS DE TRÁMITE 4
ARTÍCULO 2. Aprobación de la agenda 4
ARTÍCULO 3. Aprobación del Acta N.° 3405 6
ARTÍCULO 4. Informe de Correspondencia 6
ARTÍCULO 5. Informe de Rectoría 49
ARTÍCULO 6. Propuestas de comisiones permanentes 51
ARTÍCULO 7. Propuestas de integrantes del Consejo Institucional 51
ARTÍCULO 8. Designación y habilitación de la representación del Consejo Institucional en comisiones *ad hoc* para la selección de personas representantes ante el Consejo Editorial *(A cargo de la Presidencia)* 51
ASUNTOS DE FONDO 54
ARTÍCULO 9. Reglamento para la creación, modificación, traslado o eliminación de subdependencias en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Atención oficio EMT-095-2025) *(A cargo de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles)* 54
ARTÍCULO 10. Modificación del acuerdo de la Sesión Ordinaria N.° 3394, artículo 12, del 26 de enero de 2025, a fin de dejar sin efecto lo dispuesto en el inciso b, relacionado al cambio del título de “Máster en Computación con énfasis en Ciencias de la Computación” por “Máster en Ciencia de la Computación” (Atención oficio MC-052-2025) *(A cargo de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles)* 79
ARTÍCULO 11. Modificación de los artículos 16, 17 y 65 del Reglamento de Carrera Profesional del Instituto Tecnológico de Costa Rica y sus Reformas, con el fin de incorporar nuevos atestados susceptibles de reconocimiento *(A cargo de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles)* 86
ARTÍCULO 12. Informe de Modificación Presupuestaria N.° 01-2025 (Atención a oficio R-314-2025) *(A cargo de la Comisión de Planificación y Administración)* 94
ARTÍCULO 13. Modificación del artículo 12 del Reglamento del Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica *(A cargo de la Comisión de Planificación y Administración).* 104
ARTÍCULO 14. Resolución del Recurso de revocatoria en contra del acuerdo del Consejo Institucional, tomado en la Sesión Ordinaria N.° 3398, Artículo 12, del 26 de febrero de 2025, relativo a la modificación de los requisitos y productos que deben

cumplir las personas postulantes como investigadoras o extensionistas para integrar el Consejo de Investigación y Extensión (Atención oficio EAU-134-2025) -Segunda sesión ordinaria *(A cargo de la Comisión de Estatuto Orgánico)* 121
ARTÍCULO 15. Pronunciamiento sobre el proyecto de ley Expediente N.° 24.648 “LEY PARA LA REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EN CASA (HOMESCHOOLING) EN COSTA RICA” *(A cargo de la Presidencia)* 157
ARTÍCULO 16. Pronunciamiento sobre el proyecto de ley Expediente N.° 23.919 “LEY PARA LA PROMOCIÓN RESPONSABLE DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN COSTA RICA” (texto sustitutivo) *(A cargo de la Presidencia)* 168
ARTÍCULO 17. Pronunciamiento sobre el proyecto de ley Expediente N.° 24.038 “LEY DE INCENTIVO DEL USO DE LOS LABORATORIOS REMOTOS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN COSTA RICA” (texto sustitutivo) *(A cargo de la Presidencia)*..188
ARTÍCULO 18. Pronunciamiento sobre el proyecto de ley Expediente N.° 24.142 “LEY PARA LA REACTIVACIÓN, INNOVACIÓN, FOMENTO DEL SECTOR AGROEMPRESARIAL” *(A cargo de la Presidencia)* 197
ARTÍCULO 19. Pronunciamiento sobre el proyecto de ley Expediente N.° 24.776 “CIERRE DEL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA PROMOTORA DE COMERCIO AGROPECUARIO DE COSTA RICA” *(A cargo de la Presidencia)*…… 211
ARTÍCULO 20. Pronunciamiento sobre el proyecto de ley Expediente N.° 24.876 “LEY PARA EL REGISTRO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS FORMULADOS PARA USO AGRÍCOLA” *(A cargo de la Presidencia)*..... 231
ARTÍCULO 21. Pronunciamiento sobre el proyecto de ley Expediente N.° 017-2025 del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) “REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY 2, CÓDIGO DE TRABAJO, DE 27 DE AGOSTO DE 1943, Y DE LA LEY 7983, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR, DE 16 DE FEBRERO DE 2000. LEY DE DERECHOS LABORALES DEL SIGLO XXI” *(A cargo de la Presidencia)* ……..……239
ARTÍCULO 22. Pronunciamiento sobre el proyecto de ley Expediente N.° 23.719 “LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA DE LOS CUIDADOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CUIDADO, ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y APOYOS PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL” (texto actualizado) *(A cargo de la Presidencia)* 251
ARTÍCULO 23. Pronunciamiento sobre el proyecto de ley Expediente N.° 24.819 “LEY PARA LA GESTIÓN POSCONSUMO DE RESIDUOS FARMACÉUTICOS Y COSMÉTICOS” *(A cargo de la Presidencia)* 263
ARTÍCULO 24. Pronunciamiento sobre el proyecto de ley Expediente N.° 24.675 “LEY PARA LA RECUPERACIÓN SOSTENIBLE DE CRUCITAS Y LA CREACIÓN DEL POLO DE DESARROLLO DE LA REGIÓN HUETAR NORTE DE COSTA RICA” *(A cargo de la Presidencia)* 273
ASUNTOS VARIOS 285
ARTÍCULO 25. Temas de Asuntos Varios 285

INTEGRANTES PRESENTES

Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc.	Rectora y presidencia
M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández	Representante administrativa
MAE. Nelson Ortega Jiménez	Representante administrativo
Mag. Randall Blanco Benamburg	Representante docente
Dr. Teodolito Guillén Girón	Representante docente
M.Sc. Laura Hernández Alpízar	Representante docente
Ing. Raquel Lafuente Chryssopoulos, M.Eng.	Representante docente
Srta. Francini Mora Chacón	Representante estudiantil
Sr. Wagner Segura Porras	Representante estudiantil
Ing. Rita Arce Láscarez	Representante profesional graduada
Ph.D. Rony Rodríguez Barquero	Representante docente de Campus Locales y Centros Académicos

INTEGRANTES AUSENTES JUSTIFICADOS

Sra. Keila Sibaja Mata	Representante estudiantil

PERSONAS FUNCIONARIAS

MAE. Maritza Agüero González	Directora de la Secretaría
Lic. José Mauricio Pérez Rosales	Auditor interno

ARTÍCULO 1. Verificación del cuórum y apertura de la sesión

La señora María Estrada Sánchez, quien preside, inicia la sesión a las siete horas con cuarenta y cuatro minutos, y procede a corroborar la asistencia:

Nombre	Ubicación desde donde participa
Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc.	Sala de sesiones
Dr. Teodolito Guillén Girón	Sala de sesiones
Srta. Francini Mora Chacón	Sala de sesiones
MAE. Nelson Ortega Jiménez	Sala de sesiones
Mag. Randall Blanco Benamburg	Sala de sesiones
Ing. Raquel Lafuente Chryssopoulos, M.Eng	Casa de habitación, Cartago
M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández	Casa de habitación, Tres Ríos
MSc. Laura Hernández Alpízar	Casa de habitación, Desamparados
Ph.D. Rony Rodríguez Barquero	Casa de habitación, San Carlos
Sr. Wagner Segura Porras	Casa de habitación, Alajuela
Ing. Rita Arce Láscarez	Oficina San Blas, Cartago
MAE. Maritza Agüero González	Sala de sesiones
Lic. José Mauricio Pérez Rosales	Oficina Auditoría Interna

Participan en la sesión 11 integrantes, 5 presentes en la sala y 6 en línea mediante la herramienta de videoconferencia ZOOM; por cuanto se confirma el cuórum necesario para la presente sesión.

La señora María Estrada Sánchez informa que la Sra. Keila Sibaja Mata cuenta con justificación para ausentarse en la presente sesión.

ASUNTOS DE TRÁMITE

ARTÍCULO 2. Aprobación de la agenda

Siendo leída la agenda preliminar, el señor Nelson Ortega Jiménez solicita que se retire el punto 14 que se titula: "Modificación de los artículos 20, 23, 67, 73, 74 y 78, y eliminación de los artículos 68, 69 y 70 del Reglamento Interno de Contratación Administrativa del Instituto Tecnológico de Costa Rica", el cual se agendó a cargo de la Comisión de Planificación y Administración.

Siendo eliminado el asunto solicitado, la señora María Estrada Sánchez somete a votación la agenda ajustada y es aprobada con el siguiente resultado: 11 votos a favor, 0 votos en contra.

Por lo tanto, la agenda se aprueba de la siguiente manera:

1. Verificación del cuórum y apertura de la sesión

ASUNTOS DE TRÁMITE

2. Aprobación de la agenda
3. Aprobación del Acta N.° 3405
4. Informe de correspondencia
5. Informe de Rectoría
6. Propuestas de comisiones permanentes
7. Propuestas de integrantes del Consejo Institucional
8. Designación y habilitación de la representación del Consejo Institucional en comisiones *ad hoc* para la selección de personas representantes ante el Consejo Editorial *(A cargo de la Presidencia)*

ASUNTOS DE FONDO

9. Reglamento para la creación, modificación, traslado o eliminación de subdependencias en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Atención oficio EMT-095-2025) *(A cargo de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles)*
10. Modificación del acuerdo de la Sesión Ordinaria N.° 3394, artículo 12, del 26 de enero de 2025, a fin de dejar sin efecto lo dispuesto en el inciso b, relacionado al cambio del título de "Máster en Computación con énfasis en Ciencias de la Computación" por "Máster en Ciencia de la Computación" (Atención oficio MC-052-2025) *(A cargo de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles)*
11. Modificación de los artículos 16, 17 y 65 del Reglamento de Carrera Profesional del Instituto Tecnológico de Costa Rica y sus Reformas, con el fin de incorporar nuevos atestados susceptibles de reconocimiento *(A cargo*

de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles)

12. Informe de Modificación Presupuestaria N.° 01-2025 (Atención a oficio R-314-2025) *(A cargo de la Comisión de Planificación y Administración)*
13. Modificación del artículo 12 del Reglamento del Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica *(A cargo de la Comisión de Planificación y Administración)*
14. Resolución del Recurso de revocatoria en contra del acuerdo del Consejo Institucional, tomado en la Sesión Ordinaria N.° 3398, Artículo 12, del 26 de febrero de 2025, relativo a la modificación de los requisitos y productos que deben cumplir las personas postulantes como investigadoras o extensionistas para integrar el Consejo de Investigación y Extensión (Atención oficio EAU-134-2025) -Segunda sesión ordinaria *(A cargo de la Comisión de Estatuto Orgánico)*
15. Pronunciamiento sobre el proyecto de ley Expediente N.° 24.648 “LEY PARA LA REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EN CASA (HOMESCHOOLING) EN COSTA RICA” *(A cargo de la Presidencia)*
16. Pronunciamiento sobre el proyecto de ley Expediente N.° 23.919 “LEY PARA LA PROMOCIÓN RESPONSABLE DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN COSTA RICA” (texto sustitutivo) *(A cargo de la Presidencia)*
17. Pronunciamiento sobre el proyecto de ley Expediente N.° 24.038 “LEY DE INCENTIVO DEL USO DE LOS LABORATORIOS REMOTOS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN COSTA RICA” (texto sustitutivo) *(A cargo de la Presidencia)*
18. Pronunciamiento sobre el proyecto de ley Expediente N.° 24.142 “LEY PARA LA REACTIVACIÓN, INNOVACIÓN, FOMENTO DEL SECTOR AGROEMPRESARIAL” *(A cargo de la Presidencia)*
19. Pronunciamiento sobre el proyecto de ley Expediente N.° 24.776 “CIERRE DEL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA PROMOTORA DE COMERCIO AGROPECUARIO DE COSTA RICA” *(A cargo de la Presidencia)*
20. Pronunciamiento sobre el proyecto de ley Expediente N.° 24.876 “LEY PARA EL REGISTRO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS FORMULADOS PARA USO AGRÍCOLA” *(A cargo de la Presidencia)*
21. Pronunciamiento sobre el proyecto de ley Expediente N.° 017-2025 del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) “REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY 2, CÓDIGO DE TRABAJO, DE 27 DE AGOSTO DE 1943, Y DE LA LEY 7983, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR, DE 16 DE FEBRERO DE 2000. LEY DE DERECHOS LABORALES DEL SIGLO XXI” *(A cargo de la Presidencia)*
22. Pronunciamiento sobre el proyecto de ley Expediente N.° 23.719 “LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA DE LOS CUIDADOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CUIDADO, ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y APOYOS PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL” (texto actualizado) *(A cargo de la Presidencia)*
23. Pronunciamiento sobre el proyecto de ley Expediente N.° 24.819 “LEY PARA LA GESTIÓN POSCONSUMO DE RESIDUOS FARMACÉUTICOS Y COSMÉTICOS” *(A cargo de la Presidencia)*

24. Pronunciamiento sobre el proyecto de ley Expediente N.° 24.675 “LEY PARA LA RECUPERACIÓN SOSTENIBLE DE CRUCITAS Y LA CREACIÓN DEL POLO DE DESARROLLO DE LA REGIÓN HUETAR NORTE DE COSTA RICA” *(A cargo de la Presidencia)*

ASUNTOS VARIOS

25. Temas de Asuntos Varios

ARTÍCULO 3. Aprobación del Acta N.° 3405

La señora María Estrada Sánchez somete a votación el Acta N.° 3405, quedando aprobada con el siguiente resultado: 10 votos a favor y 1 abstención del señor Nelson Ortega Jiménez, quien no estuvo presente en la referida sesión.

La discusión de este punto consta en el archivo digital de la Sesión Ordinaria N.° 3406.

ARTÍCULO 4. Informe de Correspondencia

La señora Maritza Agüero González informa este informe incluye dos semanas de correspondencia, con un total de 140 registros y menciona algunos de ellos. A continuación, se presenta el detalle de la correspondencia registrada para la presente sesión:

CORRESPONDENCIA DIRIGIDA AL CONSEJO INSTITUCIONAL

1. **RR-145-2025** Resolución con fecha de recibida 21 de abril de 2025, suscrita por la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., rectora, dirigida a la M.B.A. Evelyn Hernández Solís, directora de la Oficina de Planificación Institucional, a la MBA. Sofía Brenes Meza, directora a. i. del Departamento de Gestión del Talento Humano y a la Secretaría del Consejo Institucional, en la cual autoriza la modificación temporal de un 20% de la plaza CF2913-1, adscrita a Producción Industrial en el Centro Académico de Limón, correspondiente al puesto de Profesor (a), para ser usada en la Oficina de Planificación Institucional, como Bodeguero (a), para contribuir con la elaboración de un plan de gestión de bienes para mejorar la capacidad de gestión de la Institución.

Se ha trasladado para conocimiento a la Comisión de Planificación y Administración.

2. **RR-144-2025** Resolución con fecha de recibida 21 de abril de 2025, suscrita por la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., rectora, dirigida a la Dra. Désirée Mora Cruz, coordinadora de la Unidad de Cultura, al Dr. Giancarlo Protti Ramírez, director de la Escuela de Cultura y Deporte, a la MPsc. Camila Delgado Agüero, vicerrectora de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos, al MAE. Roy D´Avanzo Navarro, director del Departamento Financiero Contable, a la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo

Institucional, a la M.B.A. Evelyn Hernández Solís, directora de la Oficina de Planificación Institucional, a la DG. Ivonne Madrigal Gaitán, directora de la Oficina de Comunicación y Mercadeo y a la MBA. Sofía Brenes Meza, directora a. i. del Departamento de Gestión del Talento Humano, en la cual declara de interés institucional el evento denominado: "I Foro Técnico Regional de Voluntariado Centroamericano y Caribeño RED UNIVOCES-CSUCA", el cual tendrá lugar los días 22, 23 y 24 de abril del 2025, en el Centro de las Artes del Campus Central Cartago.

Se toma nota. Esta información llega para conocimiento del Consejo Institucional por encontrarse así dispuesto en las Normas generales para la declaratoria de una actividad de interés institucional del ITCR.

3. **Correo electrónico** con fecha de recibido 21 de abril de 2025, suscrito por el Mag. Randall Blanco Benamburg, integrante del Consejo Institucional, dirigido a las direcciones electrónicas de la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., presidencia del Consejo Institucional, con copia a las direcciones electrónicas de la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, coordinadora de la Comisión de Estatuto Orgánico y de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual manifiesta el interés de reincorporarse a la Comisión de Estatuto Orgánico.

Se dejó consignado dentro de la documentación recibida por la Comisión de Estatuto Orgánico, quien fue copiada en el correo. La dirección de la Secretaría del Consejo Institucional confirmó que la reincorporación rige a partir del 22 de abril de 2025. La dirección electrónica de la comisión fue actualizada por el DATIC.

4. **MC-052-2025** Nota con fecha de recibido 22 de abril de 2025, suscrita por la Dra.-Ing. Lilliana Sancho Chavarría, coordinadora de la Unidad de Posgrado en Computación, dirigida a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., presidencia del Consejo Institucional, con copia al Mag. Randall Blanco Benamburg, coordinador de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles, al Dr. William Delgado Montoya, director del Centro de Desarrollo Académico, al Dr. Luis Alexander Calvo Valverde, director de la Dirección de Posgrado y al MGP. René D'Avanzo Trejos, director del Departamento de Admisión y Registro, en el cual solicita la modificación del acuerdo de la Sesión N.° 3394, Artículo 12, del 29 de enero del 2025, referido al cambio de nombre de la Maestría en Computación con énfasis en Ciencias de la Computación a "Maestría en Ciencia de la Computación" y cambio de título de "Máster en Computación con énfasis en Ciencias de la Computación" por el título de "Máster en Ciencia de la Computación"**,** para que se corrija el acuerdo respecto al título otorgado. **Lo anterior por cuanto los oficios que acompañaron la gestión hacían referencia exclusivamente al cambio de nombre de la maestría.**

Se dejó consignado dentro de la documentación recibida por la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles, quien fue copiada en el oficio y de quien se espera el respectivo dictamen.

5. **AL-281-2025** Memorando con fecha de recibido 22 de abril de 2025, suscrito por la Lcda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de Asesoría Legal, y la

máster Xinia Guerrero Araya, asesora legal, dirigido a la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual se brinda respuesta al oficio SCI-266-2025 emitiendo criterio legal sobre el proyecto "LEY PARA LA REACTIVACIÓN, INNOVACIÓN, FOMENTO DEL SECTOR AGROEMPRESARIAL", Expediente N.º 24.142. Se indica que el citado proyecto transgrede las competencias propias de la Institución y presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por cuanto ordena la participación institucional en la realización de un inventario de tecnologías inteligentes, de precisión y productivas y poner a disposición de los agroempresarios dichas tecnologías, así como buscar y poner a disposición las tecnologías de punta provenientes de centros de investigación.

Tema a cargo de la Presidencia. Se incorpora en el expediente del respectivo proyecto de ley.

6. **AL-282-2025** Memorando con fecha de recibido 22 de abril de 2025, suscrito por la Lcda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de Asesoría Legal, y la máster Xinia Guerrero Araya, asesora legal, dirigido a la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual se brinda respuesta al oficio SCI-266-2025 emitiendo criterio legal sobre el proyecto de ley "REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 49 Y 53 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LEY N.º 6227, DEL 2 DE MAYO DE 1978 Y SUS REFORMAS", Expediente N.° 24.492. Se indica que el citado proyecto no transgrede las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por cuanto su contenido no regula ni interfiere en el funcionamiento interno, la organización, la administración, ni la gestión de los recursos de las universidades públicas, que son los elementos esenciales protegidos por el principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica.

Tema a cargo de la Presidencia. Se incorpora en el expediente del respectivo proyecto de ley.

7. **AL-283-2025** Memorando con fecha de recibido 22 de abril de 2025, suscrito por la Lcda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de Asesoría Legal, y la máster Xinia Guerrero Araya, asesora legal, dirigido a la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual se brinda respuesta al oficio SCI-266-2025 emitiendo criterio legal sobre el proyecto de ley "CIERRE DEL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA PROMOTORA DE COMERCIO AGROPECUARIO DE COSTA RICA", Expediente N.° 24.776. Se indica que el citado proyecto transgrede las competencias propias de la Institución y presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por cuanto su contenido interfiere en la gestión de los recursos de las universidades públicas, uno de los elementos esenciales protegidos por el principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica.

Tema a cargo de la Presidencia. Se incorpora en el expediente del respectivo proyecto de ley.

8. **AL-284-2025** Memorando con fecha de recibido 22 de abril de 2025, suscrito por la Lcda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de Asesoría Legal, y la máster Xinia Guerrero Araya, asesora legal, dirigido a la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual se brinda respuesta al oficio SCI-266-2025 emitiendo criterio legal sobre el proyecto de ley "REFORMA DEL ARTÍCULO 146 DEL CÓDIGO ELECTORAL, LEY NO. 8765, PARA CERRAR PORTILLOS A LA BELIGERANCIA POLÍTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", Expediente N.° 24.837. Se indica que el citado proyecto no transgrede las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por cuanto su contenido no regula ni interfiere en el funcionamiento interno, la organización, la administración, ni la gestión de los recursos de las universidades públicas, que son los elementos esenciales protegidos por el principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica.

Tema a cargo de la Presidencia. Se incorpora en el expediente del respectivo proyecto de ley.

9. **AL-285-2025** Memorando con fecha de recibido 22 de abril de 2025, suscrito por la Lcda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de Asesoría Legal, y la máster Xinia Guerrero Araya, asesora legal, dirigido a la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual se brinda respuesta al oficio SCI-266-2025 emitiendo criterio legal sobre el proyecto de ley "MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 3, 36 Y 60 DE LA LEY CONSTITUTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, LEY NO. 17, DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, PARA ESTABLECER EL LÍMITE DE 65 AÑOS PARA OBTENER EL DERECHO A LA PENSIÓN Y 40 AÑOS COMO PLAZO MÁXIMO DE COTIZACIONES PARA QUE LAS PERSONAS ASEGURADAS PUEDAN ACCEDER A UNA PENSIÓN POR VEJEZ", Expediente N.° 24.852. Se indica que el citado proyecto no transgrede las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por cuanto su contenido no regula ni interfiere en el funcionamiento interno, la organización, la administración, ni la gestión de los recursos de las universidades públicas, que son los elementos esenciales protegidos por el principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica.

Tema a cargo de la Presidencia. Se incorpora en el expediente del respectivo proyecto de ley.

10. **AL-288-2025** Memorando con fecha de recibido 22 de abril de 2025, suscrito por la Lcda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de Asesoría Legal, dirigido a la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual da respuesta al oficio SCI-284-2025 referido a

la corrección del oficio SCI-266-2025 de fecha 31 de marzo de 2025, en cuanto al nombre del proyecto de ley "MEJORA DE LAS CAPACIDADES TECNICO CIENTIFICAS DE INCOPESCA", Expediente N.° 24.863. Se indica que dicho proyecto ya había sido trasladado en oficio SCI-257-2025 de fecha 26 de marzo de 2025.

Se toma nota. Se incorpora en el expediente del respectivo proyecto de ley.

11. **AL-289-2025** Memorando con fecha de recibido 22 de abril de 2025, suscrito por la Lcda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de Asesoría Legal, dirigido a la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual en atención al oficio SCI-266-2025 de fecha 31 de marzo de 2025, en cuanto a la consulta del proyecto de ley "REFORMAS A VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY N.º 9986, LEY GENERAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, DEL 27 DE MAYO DE 2021 Y SUS REFORMAS", Expediente N.° 24.821. Se indica que dicho proyecto ya había sido trasladado por oficio SCI-222-2025 de fecha 17 de marzo de 2025 y emitido el criterio en oficio AL-185-2025 de fecha 24 de marzo de 2025, siendo el texto que se remite en consulta exactamente el mismo.

Tema a cargo de la Presidencia. Se incorpora en el expediente del respectivo proyecto de ley. La Presidencia brindará respuesta a la comisión legislativa consultante indicando que se tome en respuesta el criterio vertido por el Consejo Institucional en acuerdo de la Sesión N.° 3403, Artículo 09, del 02 de abril de 2025, comunicado en oficio SCI-275-2025.

12. **AL-290-2025** Memorando con fecha de recibido 22 de abril de 2025, suscrito por la Lcda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de Asesoría Legal y la máster Xinia Guerrero Araya, asesora legal, dirigido a la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual se brinda respuesta al oficio SCI-257-2025 emitiendo criterio legal sobre el proyecto "LEY PARA EL FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DE MANCOMUNIDADES MUNICIPALES", Expediente N.° 24.080. Se indica que el citado proyecto no transgrede las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por cuanto su contenido no regula ni interfiere en el funcionamiento interno, la organización, la administración, ni la gestión de los recursos de las universidades públicas, que son los elementos esenciales protegidos por el principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica.

Tema a cargo de la Presidencia. Se incorpora en el expediente del respectivo proyecto de ley.

13. **AL-291-2025** Memorando con fecha de recibido 22 de abril de 2025, suscrito por la Lcda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de Asesoría Legal y la máster Xinia Guerrero Araya, asesora legal, dirigido a la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual se brinda respuesta al oficio SCI-257-2025 emitiendo criterio legal sobre el proyecto "TRASLADO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR

AL MINISTERIO DE SALUD", Expediente N.° 24.585. Se indica que el citado proyecto no transgrede las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por cuanto su contenido no regula ni interfiere en el funcionamiento interno, la organización, la administración, ni la gestión de los recursos de las universidades públicas, que son los elementos esenciales protegidos por el principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica.

Tema a cargo de la Presidencia. Se incorpora en el expediente del respectivo proyecto de ley.

14. **AL-292-2025** Memorando con fecha de recibido 22 de abril de 2025, suscrito por la Lcda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de Asesoría Legal y la máster Xinia Guerrero Araya, asesora legal, dirigido a la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual se brinda respuesta al oficio SCI-257-2025 emitiendo criterio legal sobre proyecto de ley "REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 151, 152, 156 Y 157, Y CREACIÓN DEL ARTÍCULO 152 BIS DE LA LEY 7794, CÓDIGO MUNICIPAL DEL 30 DE ABRIL DEL 1998", Expediente N.° 24.802. Se indica que el citado proyecto no transgrede las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por cuanto su contenido no regula ni interfiere en el funcionamiento interno, la organización, la administración, ni la gestión de los recursos de las universidades públicas, que son los elementos esenciales protegidos por el principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica.

Tema a cargo de la Presidencia. Se incorpora en el expediente del respectivo proyecto de ley.

15. **Correo electrónico** con fecha de recibido 22 de abril de 2025, suscrito por el señor Kevin Hernández Cordero, coordinador de la Comisión Auxiliar de Salud Ocupacional del Campus Tecnológico Local San Carlos, dirigido a la dirección electrónica de la Secretaría del Consejo Institucional y de la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, con copia a varias direcciones electrónicas, en el cual solicita información sobre el nombramiento de las personas representantes de la parte patronal ante la Comisión Institucional de Salud Ocupacional (CISO), tras el despido de la Dra. Hannia Rodríguez Mora. Indica que dicho nombramiento es urgente, ya que de él depende la conformación formal de la Comisión Auxiliar en San Carlos. Solicita también conocer a quién puede dirigirse para dar seguimiento al tema.

La dirección de la Secretaría del Consejo Institucional ha informado al señor Hernández que el tema se encuentra en análisis en la dirección de la Secretaría del Consejo Institucional.

16. **AL-295-2025** Memorando con fecha de recibido 23 de abril de 2025, suscrito por la Licda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de la Asesoría Legal y la máster Xinia Guerrero Araya, asesora legal, dirigido a la MAE. Maritza Agüero

González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual se brinda respuesta al oficio SCI-239-2025 emitiendo criterio legal sobre el texto dictaminado del proyecto de ley "REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE CONTROL INTERNO", Expediente N.° 24.007. Se indica que el citado proyecto no transgrede las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por cuanto su contenido no regula ni interfiere en el funcionamiento interno, la organización, la administración, ni la gestión de los recursos de las universidades públicas, que son los elementos esenciales protegidos por el principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica.

Tema a cargo de la Presidencia. Se incorpora en el expediente del respectivo proyecto de ley.

17. **AL-296-2025** Memorando con fecha de recibido 23 de abril de 2025, suscrito por la Licda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de la Asesoría Legal, y la máster Xinia Guerrero Araya, asesora legal, dirigido a la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual se brinda respuesta al oficio SCI-239-2025 emitiendo criterio legal sobre el texto sustitutivo del proyecto "LEY PARA LA REGULACIÓN DE PERROS DE ASISTENCIA, ANIMALES DE APOYO EMOCIONAL Y PERROS PARA INTERVENCIONES ASISTIDAS", Expediente N.° 24.124. Se indica que el citado proyecto no transgrede las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por cuanto su contenido no regula ni interfiere en el funcionamiento interno, la organización, la administración, ni la gestión de los recursos de las universidades públicas, que son los elementos esenciales protegidos por el principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica.

Tema a cargo de la Presidencia. Se incorpora en el expediente del respectivo proyecto de ley.

18. **AL-297-2025** Memorando con fecha de recibido 23 de abril de 2025, suscrito por la Licda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de la Asesoría Legal, y la máster Xinia Guerrero Araya, asesora legal, dirigido a la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual se brinda respuesta al oficio SCI-239-2025 emitiendo criterio legal sobre el texto actualizado del proyecto de ley "TIERRA PARA MUJERES: LEY PARA EL ACCESO, USO Y CONTROL DE LA TIERRA POR PARTE DE LAS MUJERES PARA AUMENTAR EL EMPLEO EN ACTIVIDADES CON SISTEMAS PRODUCTIVOS BAJOS EN CARBONO, CONSERVACIÓN Y FORESTALES", Expediente N.° 24.444. Se indica que el citado proyecto no transgrede las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por cuanto su contenido no regula ni interfiere en el funcionamiento interno, la organización, la administración, ni la gestión de los recursos de las universidades públicas, que son los elementos esenciales protegidos por el principio de autonomía

universitaria consagrado en el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica.

Tema cargo de la Presidencia. Se incorpora en el expediente del respectivo proyecto de ley.

19. **AL-298-2025** Memorando con fecha de recibido 23 de abril de 2025, suscrito por la Licda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de la Asesoría Legal, y la máster Xinia Guerrero Araya, asesora legal, dirigido a la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual se brinda respuesta al oficio SCI-239-2025 emitiendo criterio legal sobre el texto del proyecto "LEY DE ALIVIO TRIBUTARIO PARA MUJERES JEFAS DE HOGAR", Expediente N.° 24.729. Se indica que el citado proyecto no transgrede las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por cuanto su contenido no regula ni interfiere en el funcionamiento interno, la organización, la administración, ni la gestión de los recursos de las universidades públicas, que son los elementos esenciales protegidos por el principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica.

Tema a cargo de la Presidencia. Se incorpora en el expediente del respectivo proyecto de ley.

20. **AL-299-2025** Memorando con fecha de recibido 23 de abril de 2025, suscrito por la Licda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de la Asesoría Legal, y la máster Xinia Guerrero Araya, asesora legal, dirigido a la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional en el cual se brinda respuesta al oficio SCI-239-2025 emitiendo criterio legal sobre el texto del proyecto "LEY PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL COOPERATIVISMO", Expediente N.° 24.730. Se indica que el citado proyecto no transgrede las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por cuanto su contenido no regula ni interfiere en el funcionamiento interno, la organización, la administración, ni la gestión de los recursos de las universidades públicas, que son los elementos esenciales protegidos por el principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica.

Tema a cargo de la Presidencia. Se incorpora en el expediente del respectivo proyecto de ley.

21. **AL-300-2025** Memorando con fecha de recibido 23 de abril de 2025, suscrito por la Licda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de la Asesoría Legal, y la máster Xinia Guerrero Araya, asesora legal, dirigido a la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual se brinda respuesta al oficio SCI-239-2025 emitiendo criterio legal sobre el texto del proyecto de ley "REFORMA DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY NO. 7097, LEY DE PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO, DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 1988, PARA AMPLIAR LA COMPENSACIÓN POR PROHIBICIÓN, ESTABLECIDA

EN LA LEY N.° 5867, DEL 15 DE DICIEMBRE DE 1975, Y SUS REFORMAS, A PROFESIONALES EN INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN", Expediente N.° 24.838. Se indica que el citado proyecto no transgrede las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por cuanto su contenido no regula ni interfiere en el funcionamiento interno, la organización, la administración, ni la gestión de los recursos de las universidades públicas, que son los elementos esenciales protegidos por el principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica.

Tema a cargo de la Presidencia. Se incorpora en el expediente del respectivo proyecto de ley.

22. **AL-301-2025** Memorando con fecha de recibido 23 de abril de 2025, suscrito por la Licda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de la Asesoría Legal, y la máster Xinia Guerrero Araya, asesora legal, dirigido a la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual se brinda respuesta al oficio SCI-239-2025 emitiendo criterio legal sobre el texto del proyecto "LEY PARA EXCEPTUAR A LAS PYMES Y ORGANIZACIONES SOCIOPRODUCTIVAS DEL PAGO DE TASAS POR CONCEPTO DE REGISTRO DE MARCA: REFORMA DEL ARTÍCULO 94 DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS DEL 6 DE ENERO DE 2000, LEY 7978, Y SUS REFORMAS", Expediente N°24.844. Se indica que el citado proyecto no transgrede las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por cuanto su contenido no regula ni interfiere en el funcionamiento interno, la organización, la administración, ni la gestión de los recursos de las universidades públicas, que son los elementos esenciales protegidos por el principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica.

Tema a cargo de la Presidencia. Se incorpora en el expediente del respectivo proyecto de ley.

23. **AL-302-2025** Memorando con fecha de recibido 23 de abril de 2025, suscrito por la Licda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de la Asesoría Legal, y la máster Xinia Guerrero Araya, asesora legal, dirigido a la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual se brinda respuesta al oficio SCI-227-2025 emitiendo criterio legal sobre el texto del proyecto "LEY DE INCENTIVO DEL USO DE LOS LABORATORIOS REMOTOS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN COSTA RICA", Expediente N.° 24.038. Se indica que las Universidades Públicas podrán participar del programa y los fines de la ley únicamente en el marco de su autonomía y competencias, lo cual podría presentar roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica y las Universidades Públicas, al interferir en las funciones realizadas en los laboratorios y sus condiciones de uso.

Tema a cargo de la Presidencia. Se incorpora en el expediente del respectivo proyecto de ley.

24. **AL-303-2025** Memorando con fecha de recibido 23 de abril de 2025, suscrito por la Licda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de la Asesoría Legal, y la máster Xinia Guerrero Araya, asesora legal, dirigido a la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual se brinda respuesta al oficio SCI-227-2025 emitiendo criterio legal sobre el texto actualizado del proyecto "LEY PARA LA DINAMIZACIÓN DE LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN COSTA RICA", Expediente N.° 23.460. Se indica que el citado proyecto no transgrede las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por cuanto su contenido no regula ni interfiere en el funcionamiento interno, la organización, la administración, ni la gestión de los recursos de las universidades públicas, que son los elementos esenciales protegidos por el principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica.

Tema a cargo de la Presidencia. Se incorpora en el expediente del respectivo proyecto de ley.

25. **AL-304-2025** Memorando con fecha de recibido 23 de abril de 2025, suscrito por la Licda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de la Asesoría Legal, y la máster Xinia Guerrero Araya, asesora legal, dirigido a la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual se brinda respuesta al oficio SCI-227-2025 emitiendo criterio legal sobre el texto del proyecto "LEY PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS RURALES EJECUTADOS POR SUJETOS PÚBLICOS Y PRIVADOS Y EL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER), MEDIANTE LA ADICIÓN DE UN INCISO E), SUBINCISOS I) Y II) AL ARTÍCULO 12, UN INCISO O) AL ARTÍCULO 15, UN INCISO R) AL ARTÍCULO 16, Y UN PÁRRAFO FINAL Y LOS INCISOS A), B), C), D), E), F), G), H), I), J), K), L), M), N), Ñ), Y O) AL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 9036, TRANSFORMACIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO (IDA) EN EL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER) DE 11 DE MAYO DE 2012", Expediente N.° 24.334. Se indica que el citado proyecto no transgrede las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por cuanto su contenido no regula ni interfiere en el funcionamiento interno, la organización, la administración, ni la gestión de los recursos de las universidades públicas, que son los elementos esenciales protegidos por el principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica.

Tema a cargo de la Presidencia. Se incorpora en el expediente del respectivo proyecto de ley.

26. **AL-305-2025** Memorando con fecha de recibido 23 de abril de 2025, suscrito por la Licda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de la Asesoría Legal, y la máster Xinia Guerrero Araya, asesora legal, dirigido a la MAE. Maritza Agüero

González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual se brinda respuesta al oficio SCI-227-2025 emitiendo criterio legal sobre el texto del proyecto de ley "ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 162 A LA LEY N.° 6683, LEY DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS", Expediente N.° 24.415. Se indica que el citado proyecto no transgrede las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por cuanto su contenido no regula ni interfiere en el funcionamiento interno, la organización, la administración, ni la gestión de los recursos de las universidades públicas, que son los elementos esenciales protegidos por el principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica.

Tema a cargo de la Presidencia. Se incorpora en el expediente del respectivo proyecto de ley.

27. **AL-306-2025** Memorando con fecha de recibido 23 de abril de 2025, suscrito por la Licda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de la Asesoría Legal, y la máster Xinia Guerrero Araya, asesora legal, dirigido a la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual se brinda respuesta al oficio SCI-227-2025 emitiendo criterio legal sobre el texto del proyecto "REFORMA AL ARTÍCULO 227 DEL CÓDIGO PENAL, LEY N° 4573 DE 4 DE MAYO DE 1970 Y SUS REFORMAS, REFORMA AL ARTÍCULO 3° Y ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 58 BIS A LA LEY FORESTAL, LEY NO. 7575 DE 13 DE FEBRERO DE 1996. LEY PARA COMBATIR EL TRÁFICO DE TIERRAS", Expediente N.° 24.562. Se indica que el citado proyecto no transgrede las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por cuanto su contenido no regula ni interfiere en el funcionamiento interno, la organización, la administración, ni la gestión de los recursos de las universidades públicas, que son los elementos esenciales protegidos por el principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica.

Tema a cargo de la Presidencia. Se incorpora en el expediente del respectivo proyecto de ley.

28. **AL-307-2025** Memorando con fecha de recibido 23 de abril de 2025, suscrito por la Licda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de la Asesoría Legal, y la máster Xinia Guerrero Araya, asesora legal, dirigido a la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual se brinda respuesta al oficio SCI-227-2025 emitiendo criterio legal sobre el texto del proyecto "LEY PARA LA SANCIÓN DEL DELITO DE LAS FALSEDADES PROFUNDAS: ADICIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 237 AL CÓDIGO PENAL, LEY N° 4373, DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 1970 Y SUS REFORMAS", Expediente N.° 24.589. Se indica que el citado proyecto no transgrede las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por cuanto su contenido no regula ni interfiere en el funcionamiento interno, la organización, la administración, ni la gestión de los recursos de las universidades públicas,

que son los elementos esenciales protegidos por el principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica.

Tema a cargo de la Presidencia. Se incorpora en el expediente del respectivo proyecto de ley.

29. **AL-308-2025** Memorando con fecha de recibido 23 de abril de 2025, suscrito por la Licda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de la Asesoría Legal, y la máster Xinia Guerrero Araya, asesora legal, dirigido a la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual se emite criterio jurídico en atención al oficio SCI-227-2025 emitiendo criterio legal sobre el texto del proyecto "LEY PARA LA REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EN CASA (HOMESCHOOLING) EN COSTA RICA", Expediente N.° 24.648. Se indica que el citado proyecto si bien no transgrede directamente las competencias propias de la Institución, sí podría presentar roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica y las Universidades Públicas al interferir en la regulación de la educación a distancia y sus controles.

Tema a cargo de la Presidencia. Se incorpora en el expediente del respectivo proyecto de ley.

30. **AL-309-2025** Memorando con fecha de recibido 23 de abril de 2025, suscrito por la Licda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de la Asesoría Legal, y la máster Xinia Guerrero Araya, asesora legal, dirigido a la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual se brinda respuesta al oficio SCI-227-2025 emitiendo criterio legal sobre el texto del proyecto "LEY SELLO VIOLETA", Expediente N.° 24.728. Se indica que el citado proyecto no transgrede las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por cuanto su contenido no regula ni interfiere en el funcionamiento interno, la organización, la administración, ni la gestión de los recursos de las universidades públicas, que son los elementos esenciales protegidos por el principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica.

Tema a cargo de la Presidencia. Se incorpora en el expediente del respectivo proyecto de ley.

31. **AL-310-2025** Memorando con fecha de recibido 23 de abril de 2025, suscrito por la Licda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de la Asesoría Legal, y la máster Xinia Guerrero Araya, asesora legal, dirigido a la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual se brinda respuesta al oficio SCI-227-2025 emitiendo criterio legal sobre el texto del proyecto "LEY PARA LA GESTIÓN POSCONSUMO DE RESIDUOS FARMACÉUTICOS Y COSMÉTICOS", Expediente N.° 24.819. Se indica que el citado proyecto no transgrede las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por cuanto su contenido no regula ni interfiere en el

funcionamiento interno, la organización, la administración, ni la gestión de los recursos de las universidades públicas, que son los elementos esenciales protegidos por el principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica. Sin embargo, se debe analizar el tema de los residuos peligrosos y farmacéuticos que se producen en la institución.

Tema a cargo de la Presidencia. Se incorpora en el expediente del respectivo proyecto de ley.

32. **AL-311-2025** Memorando con fecha de recibido 24 de abril de 2025, suscrito por la Licda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de la Asesoría Legal, y la máster Xinia Guerrero Araya, asesora legal, dirigido a la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual se brinda respuesta al oficio SCI-227-2025 emitiendo criterio legal sobre el texto del proyecto de ley "REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY 2, CÓDIGO DE TRABAJO, DE 27 DE AGOSTO DE 1943, Y DE LA LEY 7983, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR, DE 16 DE FEBRERO DE 2000. LEY DE DERECHOS LABORALES DEL SIGLO XXI", Expediente N.° 017-2025 del Tribunal Supremo de Elecciones. Se indica que el citado proyecto no transgrede las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por cuanto su contenido no regula ni interfiere en el funcionamiento interno, la organización, la administración, ni la gestión de los recursos de las universidades públicas, que son los elementos esenciales protegidos por el principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica.

Tema a cargo de la Presidencia. Se incorpora en el expediente del respectivo proyecto de ley.

33. **AL-312-2025** Memorando con fecha de recibido 24 de abril de 2025, suscrito por la Licda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de la Asesoría Legal, y la máster Xinia Guerrero Araya, asesora legal, dirigido a la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual se brinda respuesta al oficio SCI-227-2025 emitiendo criterio legal sobre el texto del proyecto "LEY PARA EL CUMPLIMIENTO, CONTROL Y PENALIZACIÓN DE LAS QUEMAS EN TERRENOS DE APTITUD AGRÍCOLA Y PECUARIA. REFORMA AL ARTÍCULO 24 DE LA LEY N.º 7779, LEY DE USO, MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS; ASÍ COMO REFORMA AL ARTÍCULO 229 Y ADICIÓN DEL ARTÍCULO 253 TER A LA LEY N.º 4573, CÓDIGO PENAL", Expediente N.° 23.485. Se indica que el citado proyecto no transgrede directamente las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, ya que su contenido no regula ni interfiere en el funcionamiento interno, la organización, la administración, ni la gestión de los recursos de las universidades públicas, que son los elementos esenciales protegidos por el principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica.

Tema a cargo de la Presidencia. Se incorpora en el expediente del respectivo proyecto de ley.

34. **AL-313-2025** Memorando con fecha de recibido 24 de abril de 2025, suscrito por la Licda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de la Asesoría Legal, y la máster Xinia Guerrero Araya, asesora legal, dirigido a la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual se brinda respuesta al oficio SCI-194-2025 emitiendo criterio legal sobre el texto del proyecto "LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA DE LOS CUIDADOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CUIDADO, ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y APOYOS PARA LA AUTONOMÍA PERSONA", Expediente N.° 23.719. Se indica que el citado proyecto no transgrede directamente las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por cuanto su contenido no regula ni interfiere en el funcionamiento interno, la organización, la administración, ni la gestión de los recursos de las universidades públicas, que son los elementos esenciales protegidos por el principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica. Sin embargo, sí podría implicar la participación de las Universidades, según sea si se cuenta con programas de atención de adultos mayores, o atención de personas menores de edad que cuenten con beneficio de dicha ley.

Tema a cargo de la Presidencia. Se incorpora en el expediente del respectivo proyecto de ley.

35. **AL-314-2025** Memorando con fecha de recibido 24 de abril de 2025, suscrito por la Licda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de la Asesoría Legal, y la máster Xinia Guerrero Araya, asesora legal, dirigido a la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual se brinda respuesta al oficio SCI-194-2025 emitiendo criterio legal sobre el texto del proyecto "LEY PARA LA PROMOCIÓN RESPONSABLE DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN COSTA RICA", Expediente N.° 23.919. Se indica que el citado proyecto si bien no transgrede directamente las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por cuanto su contenido no regula ni interfiere en el funcionamiento interno, la organización, la administración, ni la gestión de los recursos de las universidades públicas, que son los elementos esenciales protegidos por el principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica; Sin embargo, sí implicaría participación de las Universidad y de CONARE según se solicite por el MICITT, relacionado con IA en temas de docencia e investigación, por lo que se deben valorar estas normas específicamente, pues se debe tener claro que la injerencia del Estado no debería entenderse como un sometimiento a las universidades a restricciones en cuanto al uso de IA en sus proyectos de investigación.

Tema a cargo de la Presidencia. Se incorpora en el expediente del respectivo proyecto de ley.

36. **AL-315-2025** Memorando con fecha de recibido 24 de abril de 2025, suscrito por la Licda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de la Asesoría Legal, y la máster Xinia Guerrero Araya, asesora legal, dirigido a la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual se brinda respuesta al oficio SCI-194-2025 emitiendo criterio legal sobre el texto del proyecto de ley "REFORMA DE VARIAS LEYES PARA FORTALECER LAS ORGANIZACIONES DE BIENESTAR SOCIAL, EN BENEFICIO DE LA PERSONA ADULTA MAYOR", Expediente N.° 24.024. Se indica que el citado proyecto no transgrede directamente las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por cuanto su contenido no regula ni interfiere en el funcionamiento interno, la organización, la administración, ni la gestión de los recursos de las universidades públicas, que son los elementos esenciales protegidos por el principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica. Sin embargo, sí podría implicar la participación de las universidades y CONARE, según sea si se cuenta con programas de atención de adultos mayores.

Tema a cargo de la Presidencia. Se incorpora en el expediente del respectivo proyecto de ley.

37. **ViDa-283-2025** Memorando con fecha de recibido 24 de abril de 2025, suscrito por el MGA. Ricardo Coy Herrera, presidencia del Consejo de Docencia, dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., presidencia del Consejo Institucional, con copia al Consejo de Docencia y al Dr. Ronald Alvarado Cordero, director de la Escuela de Administración de Empresas, en el cual comunica el acuerdo del Consejo de Docencia de la Sesión N.° 05-2025, Artículo 3, inciso 3.3, referido al aval para que el programa de Licenciatura en Administración de Empresas en todos sus énfasis se registre formalmente en el Campus Tecnológico Local San José y en el Campus Tecnológico Local San Carlos. La medida pretende mantener coherencia con el proceso de acreditación otorgado por SINAES y su reacreditación reciente, alineándose además con las políticas institucionales y las necesidades de acceso académico regionalizado.

Se ha trasladado para análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles. La dirección de la Secretaría del Consejo Institucional indica que en la búsqueda de antecedentes de este tema se ubica que el Consejo Institucional ratificó la apertura de la Licenciatura en Administración de Empresas en acuerdo de la Sesión N.° 1248 del 10 de mayo de 1984.

38. **AL-316-2025** Memorando con fecha de recibido 24 de abril de 2025, suscrito por la Licda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de la Asesoría Legal, y la máster Xinia Guerrero Araya, asesora legal, dirigido a la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual se brinda respuesta al oficio SCI-194-2025 emitiendo criterio legal sobre el texto del proyecto "REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 105, 153, 156 Y 158 DEL CÓDIGO DE TRABAJO, LEY N.° 2 DEL 27 DE AGOSTO DE 1943, LEY PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS VACACIONES REMUNERADAS AL AÑO",

Expediente N.° 24.610. Se indica que el citado proyecto no transgrede las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por cuanto su contenido no regula ni interfiere en el funcionamiento interno, la organización, la administración, ni la gestión de los recursos de las universidades públicas, que son los elementos esenciales protegidos por el principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica.

Tema a cargo de la Presidencia. Se incorpora en el expediente del respectivo proyecto de ley.

39. **AL-317-2025** Memorando con fecha de recibido 24 de abril de 2025, suscrito por la Licda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de la Asesoría Legal, y la máster Xinia Guerrero Araya, asesora legal, dirigido a la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual se brinda respuesta al oficio SCI-194-2025 emitiendo criterio legal sobre el texto del proyecto "REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 11 Y 18 Y ADICIÓN DE UN TRANSITORIO A LA LEY DE FUNDACIONES, N.° 5338 DEL 28 DE AGOSTO DE 1973 Y SUS REFORMAS", Expediente N.° 24.472. Se indica que el citado proyecto no transgrede directamente las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por cuanto su contenido no regula ni interfiere en el funcionamiento interno, la organización, la administración, ni la gestión de los recursos de las universidades públicas, que son los elementos esenciales protegidos por el principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica; sin embargo, sí podría implicar efectos en la Fundación de la Universidad y su funcionamiento con el manejo de fondos públicos.

Tema a cargo de la Presidencia. Se incorpora en el expediente del respectivo proyecto de ley.

40. **AL-318-2025** Memorando con fecha de recibido 24 de abril de 2025, suscrito por la Licda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de la Asesoría Legal, y la máster Xinia Guerrero Araya, asesora legal, dirigido a la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual se brinda respuesta al oficio SCI-194-2025 emitiendo criterio legal sobre el texto del proyecto "LEY PARA LA RECUPERACIÓN SOSTENIBLE DE CRUCITAS Y LA CREACIÓN DEL POLO DE DESARROLLO DE LA REGIÓN HUETAR NORTE DE COSTA RICA", Expediente N.° 24.675. Se indica que el citado proyecto no transgrede directamente las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por cuanto su contenido no regula ni interfiere en el funcionamiento interno, la organización, la administración, ni la gestión de los recursos de las universidades públicas, que son los elementos esenciales protegidos por el principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica. Sin embargo, sí implicaría participación en temas de investigación y docencia que se autorizan realizar en la zona.

Tema a cargo de la Presidencia. Se incorpora en el expediente del respectivo proyecto de ley.

41. **AL-319-2025** Memorando con fecha de recibido 24 de abril de 2025, suscrito por la Licda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de la Asesoría Legal, y la máster Xinia Guerrero Araya, asesora legal, dirigido a la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual se brinda respuesta al oficio SCI-270-2025 emitiendo criterio legal sobre el texto del proyecto "LEY PARA EL REGISTRO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS FORMULADOS PARA USO AGRÍCOLA", Expediente N.° 24.876. Se indica que el citado proyecto no transgrede las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica. No obstante, es importante resaltar que el proyecto ley si bien no presenta roces con la autonomía constitucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica, sí podría implicar su implementación en los programas y proyectos de investigación, capacitación y transferencia tecnológica de productos agropecuarios, relacionados con el tema de plagas y según las nuevas regulaciones en materia de plagas que afecten la producción agropecuaria, para regular el uso y manejo de sustancias químicas, biológicas o afines y equipos para aplicarlos en la agricultura.

Tema a cargo de la Presidencia. Se incorpora en el expediente del respectivo proyecto de ley.

42. **AUDI-070-2025** Memorando con fecha 24 de abril de 2025, suscrito por el Lic. José Mauricio Pérez Rosales, M.Sc., auditor interno, dirigido a la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual se solicita colaboración para completar la encuesta de percepción sobre la labor desempeñada por la Auditoría Interna durante el año 2024, como parte del Programa de Aseguramiento de la Calidad. Se indica que las respuestas se requieren antes del 30 de abril de 2025.

La dirección de la Secretaría del Consejo Institucional estará atendiendo el requerimiento.

43. **AUDI-071-2025** Memorando con fecha 24 de abril de 2025, suscrito por el Lic. José Mauricio Pérez Rosales, M.Sc., auditor interno, dirigido a las personas integrantes del Consejo Institucional, en el cual se solicita colaboración para completar la encuesta de percepción sobre la labor desempeñada por la Auditoría Interna durante el año 2024, como parte del Programa de Aseguramiento de la Calidad. Se indica que las respuestas se requieren antes del 08 de mayo de 2025, serán anónimas y serán tratadas de forma confidencial.

La Secretaría del Consejo Institucional hizo llegar al Pleno la información mediante correo electrónico del mismo día.

44. **AUDI-AL-012-2025** Memorando con fecha de recibido 25 de abril de 2025, suscrito por el Lic. José Mauricio Rosales Pérez, M.Sc., auditor interno, dirigido a la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual remite el Libro de Actas del Consejo Institucional Núm.

186, [actas del mes marzo de 2025], firmado y registrado como corresponde, haciendo constar la razón de apertura y cierre con base en lo dispuesto en el "Subproceso autorización de Libros, Actas y Reportes mediante la razón de apertura y de cierre". Se indica que el documento se encuentra íntegro, sin alteraciones, con la correcta estampa de tiempo y motivo de firma, con el nombre del Instituto Tecnológico de Costa Rica y los márgenes superiores e inferiores se presentan razonablemente y sin observaciones.

La dirección de la Secretaría del Consejo Institucional ha supervisado la remisión de los Libros de Actas al repositorio administrado por el DATIC, según dispone el numeral 64 del Reglamento del Consejo Institucional.

45. **ET-149-2025** Memorando con fecha de recibido 25 de abril de 2025, suscrito por el Dr. José Luis León Salazar, director a.i. de la Editorial Tecnológica de Costa Rica, dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., presidencia del Consejo Institucional, en el cual solicita la designación de una persona integrante del Consejo Institucional para participar en la comisión *ad hoc* que seleccionará a la nueva representación de la Vicerrectoría de Docencia ante el Consejo Editorial, debido a la renuncia presentada por la Dra. Xinia Varela Sojo, efectiva desde el 26 de marzo de 2025.

Tema a cargo de la Presidencia.

46. **VAD-200-2025** Memorando con fecha de recibido 25 de abril de 2025, suscrito por la MAE. Silvia Watson Araya, vicerrectora de Administración, dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., en calidad de rectora y en calidad de presidencia del Consejo Institucional, con copia a la Comisión de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), en el cual presenta una propuesta de modificación de las "Disposiciones sobre la definición de los niveles de autoridad y responsabilidad en el proceso de normalización contable basado en las NICSP en el Instituto Tecnológico de Costa Rica".

Se ha trasladado para análisis y dictamen a la Comisión de Planificación y Administración.

47. **VAD-201-2025** Memorando con fecha de recibido 25 de abril de 2025, suscrito por la MAE. Silvia Watson Araya, vicerrectora de Administración, dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., rectora y presidenta del Consejo Institucional, con copia a la Comisión de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), en el cual remite propuesta de adición al acuerdo de la Sesión N.° 3208, Artículo 9, del 10 de marzo de 2021, referido a las Políticas Contables Específicas sustentadas en las Políticas Contables Generales de Contabilidad Nacional y las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público.

Se ha trasladado para análisis y dictamen a la Comisión de Planificación y Administración.

48. **DAR-171-2025** Memorando con fecha de recibido 28 de abril de 2025, suscrito por el Bach. Reyner González Solano, encargado de graduaciones en el Departamento de Admisión y Registro, dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez,

M.Sc., presidencia del Consejo Institucional, en el cual se solicita la representación del Consejo Institucional para integrar la mesa principal en los actos de la graduación extraordinaria N.° 345, que se realizarán el viernes 20 de junio de 2025 en el Centro de las Artes del Campus Tecnológico Central Cartago. Se indica que, debido al número de personas graduandas, se realizarán dos actos: uno a las 10:00 a.m. y otro a las 2:00 p.m.

Tema a cargo de la Presidencia. La Secretaría del Consejo Institucional se encuentra coordinando para que se reciban todas las solicitudes de representación que se requerirán para graduaciones en el mes de junio, con el fin de abordarlas en un único futuro punto de agenda.

49. **Correo electrónico** con fecha de recibido 28 de abril de 2025, suscrito por el profesor Francisco Céspedes Obando, profesor de la Escuela de Idiomas y Turismo, dirigido a la dirección electrónica de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual remite observaciones en el marco de la consulta a la comunidad institucional de la propuesta de modificación de los artículos 108, 109 y 110 del Estatuto Orgánico del ITCR, en relación con el financiamiento de la Institución a la Federación de Estudiantes del ITCR (FEITEC)", que fue dispuesta en Sesión Ordinaria N.° 3405, Artículo 09, del 23 de marzo de 2025.

Se ha trasladado para conocimiento a la Comisión de Estatuto Orgánico. El plazo de la consulta vence el 28 de mayo de 2025.

50. **Correo electrónico**, con fecha de recibido 28 de abril de 2025, suscrito por la MGP. Ericka Quirós Agüero, asesora de la Rectoría, dirigido a la dirección electrónica de la Secretaría del Consejo Institucional, con copia a la dirección electrónica de la señora Cindy Picado Montero, técnica de apoyo de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual adjunta el oficio VAD-171-2025 que contiene los informes finales de Auditoría Externa periodo 2024. Lo anterior en atención al oficio SCI-330-2025, referido al recordatorio del cumplimiento del artículo 9 del Reglamento para la atención de informes de auditoría y presuntos hechos irregulares en el Instituto Tecnológico de Costa Rica.

Se dejó consignado dentro de la documentación recibida por la Comisión de Planificación y Administración, quien fue copiada en el correo electrónico.

51. **DEVESA-161-2025** Memorando con fecha de recibido 28 de abril de 2025, suscrito por la M.Sc. Andrea Pacheco Araya, en calidad de directora del Departamento del Departamento de Vida Estudiantil y Servicios Académicos y en calidad de presidencia del Consejo de DEVESA, dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., presidencia del Consejo Institucional, con copia al Dr. Oscar López Villegas, director del Campus Tecnológico Local San Carlos, en el remite el comunicado aprobado por el Consejo de Departamento de Vida Estudiantil y Servicios Académicos, de la sesión extraordinaria 06-2025, artículo 3, del 28 de abril 2025, referido a las preocupaciones ante la falta de claridad en el proceso de elaboración de las directrices institucionales para el uso de instalaciones deportivas y culturales, en el marco del Reglamento de uso y control de la Infraestructura y Áreas Abiertas de los Campus Tecnológicos y Centros Académicos del Instituto Tecnológico de Costa Rica.

Se ha trasladado a la Comisión de Planificación y Administración para atención de las consultas sobre directrices, haciendo saber la dirección de la Secretaría del Consejo Institucional que, en atención al Transitorio VII (ambos párrafos), la dirección del Campus Tecnológico Local San Carlos fue incluida en las partes destinatarias del acuerdo comunicado en oficio SCI-331-2024 del 03 de abril de 2024, al igual que las otras direcciones de campus y centros, sin menoscabo de la respectiva publicación en Gaceta N.° 1193.

Se ha trasladado a la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles para seguimiento en lo que respecta a la solicitud de revisión de la adscripción administrativa del área deportiva en San Carlos.

52. **VIESA-195-2025** Memorando con fecha de recibido 28 de abril de 2025, suscrito por la MP.SC. Camila Delgado Agüero, vicerrectora de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios académicos, dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., presidencia del Consejo Institucional, con copia al MGA. Ricardo Coy Herrera, vicerrector de la Vicerrectoría de Docencia, al Mag. Randall Blanco Benamburg, coordinador de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles y a la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual en atención al oficio SCI-323-2025, remite la propuesta Directrices y Lineamientos para el proceso de Admisión 2025-2026. Señala que algunas observaciones ya fueron incorporadas y otras se mantuvieron según el texto original, por tratarse de procedimientos propios de programas y servicios. Además adjunta el oficio VIESA-140-2025 que incluye el detalle de inclusión de observaciones.

Se dejó consignado dentro de la documentación recibida por la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles, quien fue copiada en el oficio y quien remitió el oficio que se responde.

53. **VAD-209-2025** Memorando con fecha de recibido 28 de abril de 2025, suscrito por la MAE. Silvia Watson Araya, vicerrectora de Administración, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador de la Comisión de Planificación y Administración y a la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, con copia a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., rectora y a la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual en atención al acuerdo de la Sesión N.° 3383, Artículo 8, del 09 de octubre del 2024, remite los procedimientos solicitados en el Transitorio I del Reglamento de Uso y Control de Infraestructura y Áreas Abiertas de los Campus Tecnológicos y Centros Académicos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Informa que para la elaboración de los citados procedimientos se ha considerado la descentralización de los campus locales y centros académicos, las particularidades de cada campus y el criterio de los entes técnicos como la Unidad Institucional de Gestión Ambiental y Seguridad Laboral (GASEL), la Clínica de Atención Integral en Salud (CASI) y la Unidad de Seguridad y Vigilancia (USEVI), entre otros que participan en las actividades en los campus y centros académicos del ITCR.

Se toma nota.

54. **AL-348-2025** Memorando con fecha de recibido 28 de abril de 2024 [*sic*], suscrito por la Licda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de la Asesoría Legal y el Lic. Danilo May Cantillano, asesor legal, dirigido a la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual se brinda respuesta al oficio SCI-1144-2024, emitiendo criterio legal sobre el proyecto "LEY GENERAL DE ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y EXPROPIACIONES", Expediente N.° 24.669. Se indica que el citado proyecto no transgrede las competencias propias de la Institución ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por cuanto su contenido no regula ni interfiere en el funcionamiento interno, la organización, la administración, ni la gestión de los recursos de las universidades públicas, que son los elementos esenciales protegidos por el principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica.

Tema a cargo de la Presidencia. Se incorpora en el expediente del respectivo proyecto de ley.

55. **AL-336-2025** Memorando con fecha de recibido 28 de abril de 2025, suscrito por la Licda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de la Asesoría Legal y la máster Xinia Guerrero Araya, asesora legal, dirigido a la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual se brinda respuesta al oficio SCI-181-2025 emitiendo criterio legal sobre el proyecto de ley "CONSERVACIÓN Y FOMENTO DE ARBORETOS PARA LA BIODIVERSIDAD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL", Expediente N.° 24.804. Se indica que el citado proyecto no transgrede las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica. Sin embargo, el proyecto establece que se fomentará la colaboración con universidades y centros de investigación para promover investigaciones científicas sobre especies nativas, programas de reforestación y el desarrollo de técnicas sostenibles de gestión forestal.

Tema a cargo de la Presidencia. Se incorpora en el expediente del respectivo proyecto de ley.

56. **AL-338-2025** Memorando con fecha de recibido 28 de abril de 2025, suscrito por la Licda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de la Asesoría Legal y la máster Xinia Guerrero Araya, asesora legal, dirigido a la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual se brinda respuesta al oficio SCI-270-2025 emitiendo criterio legal sobre el proyecto "LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES", Expediente N.° 23.097. Se indica que el citado proyecto transgrede las competencias propias de la Institución y presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, al incluir las universidades públicas en el Régimen aplicable a determinadas categorías de Responsables o Encargados del tratamiento y al tener un impacto en las funciones y responsabilidades de funcionarios encargados del tratamiento de datos actualmente, así como las nuevas ordenanzas y responsabilidades del encargado.

Tema a cargo de la Presidencia. Se incorpora en el expediente del respectivo proyecto de ley.

57. **AL-339-2025** Memorando con fecha de recibido 28 de abril de 2025, suscrito por la Licda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de la Asesoría Legal y la máster Xinia Guerrero Araya, asesora legal, dirigido a la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual se brinda respuesta al oficio SCI-270-2025 emitiendo criterio legal sobre el proyecto de ley "LUCHANDO POR LA JUSTICIA DEL SISTEMA DE PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO", Expediente N.° 24.786. Se indica que el citado proyecto transgrede las competencias propias de la Institución y presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, al pretender imponer una limitación al monto de las pensiones del régimen de pensiones aplicable a los funcionarios de la institución.

Tema a cargo de la Presidencia. Se incorpora en el expediente del respectivo proyecto de ley.

58. **AL-340-2025** Memorando con fecha de recibido 28 de abril de 2025, suscrito por la Licda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de la Asesoría Legal y la máster Xinia Guerrero Araya, asesora legal, dirigido a la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual se brinda respuesta al oficio SCI-270-2025 emitiendo criterio legal sobre el texto del proyecto de ley "REFORMA DE LA LEY N.° 9914, DEFINICIÓN DE LA CANASTA BÁSICA POR EL BIENESTAR INTEGRAL DE LAS FAMILIAS", Expediente N.° 24.848. Se indica que el citado proyecto no transgrede las competencias propias de la Institución y ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por cuanto su contenido interfiere en la gestión de los recursos de las universidades públicas, uno de los elementos esenciales protegidos por el principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica.

Tema a cargo de la Presidencia. Se incorpora en el expediente del respectivo proyecto de ley.

59. **AL-341-2025** Memorando con fecha de recibido 28 de abril de 2025, suscrito por la Licda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de la Asesoría Legal y la máster Xinia Guerrero Araya, asesora legal, dirigido a la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual se brinda respuesta al oficio SCI-270-2025 emitiendo criterio legal sobre el proyecto de ley "ACTUALIZACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE MANEJO DE ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LOS PARQUES NATURALES URBANOS", Expediente N.° 24.850. Se indica que el citado proyecto transgrede las competencias propias de la Institución, y presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, porque la reforma sobre la gobernanza sobre áreas silvestres protegidas (ASP), lo cual podría incluir terrenos universitarios o afectar

competencias de gestión ambiental propias de instituciones como las universidades públicas.

Tema a cargo de la Presidencia. Se incorpora en el expediente del respectivo proyecto de ley.

60. **AL-342-2025** Memorando con fecha de recibido 28 de abril de 2025, suscrito por la Licda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de la Asesoría Legal y la máster Xinia Guerrero Araya, asesora legal, dirigido a la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual se brinda respuesta al oficio SCI-291-2025 emitiendo criterio legal sobre el proyecto de ley "REFORMA DEL ARTÍCULO 616 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LEY N.º 3284, DE 30 DE ABRIL DE 1964 Y SUS REFORMAS", Expediente N.° 24.868. Se indica que el citado proyecto no transgrede las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por cuanto su contenido no regula ni interfiere en el funcionamiento interno, la organización, la administración, ni la gestión de los recursos de las universidades públicas, que son los elementos esenciales protegidos por el principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica.

Tema a cargo de la Presidencia. Se incorpora en el expediente del respectivo proyecto de ley.

61. **AL-344-2025** Memorando con fecha de recibido 28 de abril de 2025, suscrito por la Licda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de la Asesoría Legal, y la máster Xinia Guerrero Araya, asesora legal de Estudio y Redacción, dirigido a la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual se emite criterio legal sobre los proyectos de ley contenidos en Expediente N.° 24.018, N.° 24.556, N.° 24.577 y N.° 24.894. Se indica que los citados proyectos no transgreden las competencias propias de la Institución, ni presentan roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por cuanto su contenido no regula ni interfiere en el funcionamiento interno, la organización, la administración, ni la gestión de los recursos de las universidades públicas, que son los elementos esenciales protegidos por el principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica.

Tema a cargo de la Presidencia. Se incorpora en los expedientes de los respectivos proyectos de ley.

62. **AL-345-2025** Memorando con fecha de recibido 28 de abril de 2025, suscrito por la Licda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de la Asesoría Legal, y la máster Xinia Guerrero Araya, asesora legal de Estudio y Redacción, dirigido a la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual se brinda respuesta al oficio SCI-310-2025 emitiendo criterio legal sobre el proyecto de ley "REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 146 Y 265 DEL CÓDIGO ELECTORAL, LEY N.° 8765, DEL 19 DE AGOSTO DE 2009 Y DEL ARTÍCULO 22 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LEY N.° 7428, DEL 7 DE SETIEMBRE DE 1994.

LEY PARA FORTALECER LA BELIGERANCIA POLÍTICA Y RESGUARDAR EL PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD POLÍTICA", Expediente N.° 24.891. Se indica que el citado proyecto no transgrede las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por cuanto su contenido no regula ni interfiere en el funcionamiento interno, la organización, la administración, ni la gestión de los recursos de las universidades públicas, que son los elementos esenciales protegidos por el principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica.

Tema a cargo de la Presidencia. Se incorpora en el expediente del respectivo proyecto de ley.

63. **AL-349-2025** Memorando con fecha de recibido 28 de abril de 2025, suscrito por la Licda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de la Asesoría Legal, dirigido a la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual se emite criterio legal sobre los proyectos de ley contenidos en Expediente N.° 23.964, N.° 24.111, N.° 24.121, N.° 24.215 y N.° 24.348. Destaca que los mismos fueron remitidos por la Secretaría del Consejo Institucional en el primer semestre de 2024 y que estaban pendientes de respuesta por parte de la Asesoría Legal, e indica que los mismos no transgreden las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por cuanto su contenido no regula ni interfiere en el funcionamiento interno, la organización, la administración, ni la gestión de los recursos de las universidades públicas, que son los elementos esenciales protegidos por el principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica.

Tema a cargo de la Presidencia. Se incorpora en los expedientes de los respectivos proyectos de ley.

64. **VAD-210-2025** Memorando con fecha de recibido 30 de abril de 2025, suscrito por la MAE. Silvia Watson Araya, vicerrectora de Administración, dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., rectora y a la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, con copia a la M.B.A. Evelyn Hernández Solís, directora de la Oficina de Planificación Institucional y al MAE. Roy D'Avanzo Navarro, director del Departamento Financiero Contable, en el cual en atención al acuerdo de la Sesión N.° 3402, Artículo 08, del 26 de marzo de 2025, referido a la consulta institucional sobre la propuesta de "Políticas Específicas para la Formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto 2026", adjunta el documento DFC-273-2025 con las observaciones y propuestas complementarias generadas con base en el análisis efectuado en conjunto con el Departamento Financiero Contable.

Se ha trasladado para conocimiento a la Comisión de Planificación y Administración; no obstante, el plazo de la consulta venció el 21 de abril de 2025.

65. **OPI-166-2025** Memorando con fecha de recibido 30 de abril de 2025, suscrito por la M.B.A. Evelyn Hernández Solís, directora de la Oficina de Planificación Institucional, dirigido a la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, con copia a la MBA. Andrea Contreras Alvarado, coordinadora de la Unidad Especializada de Control Interno (UECI) y a la MBA. Laura Granados Rivera, funcionaria de la UECI, en el cual le comunica que en las fechas del 05 al 16 de mayo del 2025 se estará realizando el proceso de Autoevaluación del Sistema de Control Interno.

Asunto a cargo de la dirección de la Secretaría del Consejo Institucional.

66. **RVAD-007-2025** Resolución con fecha de recibida 30 de abril de 2025, suscrita por la MAE. Silvia Watson Araya, vicerrectora de la Vicerrectoría de Administración, dirigida a la M.Sc. Jessica Venegas Gamboa, profesional en administración del Consejo Institucional, al MAE. Roy D'Avanzo Navarro, director del Departamento Financiero Contable y a la MBA. Sofía Brenes Meza, directora a. i. del Departamento de Gestión del Talento Humano, y copiada a varias direcciones electrónicas, entre ellas a la de la Secretaría del Consejo Institucional, en la que se acoge la propuesta de conciliación presentada por la señora Jessica Venegas Gamboa, destacada en el puesto de Profesional en Administración del Consejo Institucional, para la reposición del activo N.° 67431.

La presidencia del Consejo Institucional toma nota de lo anunciado.

67. **Correo electrónico** con fecha de recibido 30 de abril de 2025, suscrito por la señora Ana Grettel Vargas Zúñiga, secretaria de la Vicerrectoría de Docencia, dirigido a varias direcciones electrónicas, entre ellas a la de la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., presidencia del Consejo Institucional y rectora, a la de la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional y a la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual remite invitación a la ceremonia con motivo de la entrega del Certificado Internacional de Acreditación de Calidad de la Agencia Centroamericana de Acreditación de Programas de Arquitectura y de Ingeniería (ACAAI) y el Tecnológico de Costa Rica a los programas de Licenciatura en Ingeniería en Diseño Industrial, a realizarse el jueves 15 de mayo del 2025 a las 2:00 p.m. en el Auditorio D3 de la escuela indicada.

La invitación fue trasladada al Pleno, mediante correo electrónico del 05 de mayo de 2025, solicitando confirmar asistencia a la Secretaría del Consejo Institucional a más tardar el miércoles 07 de mayo.

CORRESPONDENCIA DIRIGIDA CON COPIA AL CONSEJO INSTITUCIONAL

68. **AL-CPEMUJ-0111-2025** Nota con fecha de recibida 21 de abril de 2025, remitida por la Comisión Permanente Especial de la Mujer de la Asamblea Legislativa, dirigida a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., rectora, con copia a la dirección electrónica de la Secretaría del Consejo Institucional, en la cual remite consulta sobre el texto sustitutivo del proyecto "LEY "EDUCAR PARA LA IGUALDAD Y EQUIDAD": FORTALECIMIENTO DE PREVENCIÓN DE TODAS LAS FORMAS

DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES POR RAZÓN DE GÉNERO", Expediente N.º 24.326.

La dirección de la Secretaría del Consejo Institucional ha procedido con las consultas a la Oficina de Asesoría Legal (SCI-327-2025) y a la comunidad institucional, según dispone el procedimiento respectivo.

69. **AL-CPEAMB314-2025** Nota con fecha de recibida 21 de abril de 2025, remitida por la Comisión Permanente Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa, dirigida a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., rectora, con copia a la dirección electrónica de la Secretaría del Consejo Institucional, en la cual remite consulta sobre el texto del proyecto "LEY PARA LA PROHIBICIÓN DE LA MINERÍA MARINA EN COSTA RICA", Expediente N.º 24.739.

La dirección de la Secretaría del Consejo Institucional ha procedido con las consultas a la Oficina de Asesoría Legal (SCI-327-2025) y a la comunidad institucional, según dispone el procedimiento respectivo.

70. **SCI-311-2025** Memorando con fecha de recibido 21 de abril de 2025, suscrito por la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, dirigido al Lic. José Mauricio Pérez Rosales, M.Sc., auditor interno, con copia al Consejo Institucional, en el cual solicita consignar la razón de cierre para el Libro de Actas digitales N.º 186 del Consejo Institucional, que contiene las actas del mes de marzo de 2025.

Se incorpora en el repositorio del libro de actas correspondiente.

71. **AL-CPEMUJ-0118-2025** Nota con fecha de recibida 21 de abril de 2025, remitida por la Comisión Permanente Especial de la Mujer de la Asamblea Legislativa, dirigida a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., rectora, con copia a la dirección electrónica de la Secretaría del Consejo Institucional, en la cual remite consulta sobre el texto del proyecto "LEY PARA FOMENTAR LA INCLUSIÓN Y EDUCACIÓN FINANCIERAS DE LAS MUJERES", Expediente N.º 24.846.

La dirección de la Secretaría del Consejo Institucional ha procedido con las consultas a la Oficina de Asesoría Legal (SCI-327-2025) y a la comunidad institucional, según dispone el procedimiento respectivo.

72. **AL-CPEAMB375-2025** Nota con fecha de recibida 21 de abril de 2025, remitida por la Comisión Permanente Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa, dirigida a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., rectora, con copia a la dirección electrónica de la Secretaría del Consejo Institucional, en la cual remite consulta sobre el texto del proyecto "LEY PARA LA GESTIÓN POSCONSUMO DE RESIDUOS FARMACÉUTICOS Y COSMÉTICOS", Expediente N.º 24.819.

La dirección de la Secretaría del Consejo Institucional ha procedido con las consultas a la Oficina de Asesoría Legal (SCI-327-2025) y a la comunidad institucional, según dispone el procedimiento respectivo.

73. **AL-CPEAMB362-2025** Nota con fecha de recibida 21 de abril de 2025, remitida por la Comisión Permanente Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa, dirigida a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., rectora, con copia a la dirección

electrónica de la Secretaría del Consejo Institucional, en la cual remite consulta sobre el texto dictaminado del proyecto “LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LAS ABEJA”, Expediente N.º 24.127.

La dirección de la Secretaría del Consejo Institucional ha procedido con las consultas a la Oficina de Asesoría Legal (SCI-327-2025) y a la comunidad institucional, según dispone el procedimiento respectivo.

74. **AUDI-SIR-033-2025** Memorando con fecha de recibido 22 de abril de 2025, suscrito por el Lic. José Mauricio Pérez Rosales, M.Sc., auditor interno, dirigido a la MAE. Silvia Watson Araya, vicerrectora de la Vicerrectoría de Administración, con copia a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., presidencia del Consejo Institucional y a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., rectora, en el cual remite seguimiento al Informe de auditoría AUDI-CI-002-2024, denominado “Evaluación de la implementación de la Balanza de Apertura y Plan General Contable - NICSP” el cual contiene cuatro recomendaciones en total. Se indica que se concluye que existen acciones pendientes para atender el plan de acciones establecido para la recomendación 4.1 por lo que, se mantiene en el SIR su estado de “Vigente. Las recomendaciones 4.2 y 4.3 se atienden por lo que su registro en el SIR es “Implementada”.

Se ha trasladado para conocimiento a la Comisión de Planificación y Administración.

75. **AL-CPEMUJ-0117-2025** Nota con fecha de recibida 22 de abril de 2025, remitida por la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa, dirigida a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., rectora, con copia a la dirección electrónica de la Secretaría del Consejo Institucional, en la cual remite consulta sobre el texto base del proyecto “LEY PARA LA PROMOCIÓN DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EL CÁNCER DE CÉRVIX Y DE MAMA EN COSTA RICA”, Expediente N.º 24.884.

La dirección de la Secretaría del Consejo Institucional ha procedido con las consultas a la Oficina de Asesoría Legal (SCI-327-2025) y a la comunidad institucional, según dispone el procedimiento respectivo.

76. **AL-CPEMUN-0402-2025** Nota con fecha de recibida 22 de abril de 2025, remitida por la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa, dirigida a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., rectora, con copia a la dirección electrónica de la Secretaría del Consejo Institucional, en la cual remite consulta sobre el texto dictaminado del proyecto “LEY DE ARBOLADO URBANO”, Expediente N.º 24.489.

La dirección de la Secretaría del Consejo Institucional ha procedido con las consultas a la Oficina de Asesoría Legal (SCI-327-2025) y a la comunidad institucional, según dispone el procedimiento respectivo.

77. **AL-CPEAMB387-2025** Nota con fecha de 22 de abril de 2025, remitida por la Comisión Permanente Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa, dirigida a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., rectora, con copia a la dirección

electrónica de la Secretaría del Consejo Institucional, en la cual remite consulta sobre el texto dictaminado del proyecto "LEY DE ALFABETIZACIÓN MARINO-COSTERA", Expediente N.º 24.041.

La dirección de la Secretaría del Consejo Institucional ha procedido con las consultas a la Oficina de Asesoría Legal (SCI-327-2025) y a la comunidad institucional, según dispone el procedimiento respectivo.

78. **GTH-233-2025** Memorando con fecha de recibido 23 de abril de 2025, suscrito por la MBA. Sofía Brenes Meza, directora a. i. del Departamento de Gestión del Talento Humano, dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., rectora, con copia a la MAE. Silvia Watson Araya, vicerrectora de la Vicerrectoría de Administración, a la MAE. Maritza Agüero Gonzalez, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, a la máster Ana Catalina Jara Vega, coordinadora de la Unidad de Desarrollo de Personal y a la Lcda. Francinny Fernández Castillo, coordinadora a. i. de la Unidad de Estudios y Remuneraciones, en el cual solicita presentar ante el Consejo Institucional la propuesta para la designación de una de las personas representantes institucionales y su respectiva persona suplente ante la Comisión Institucional de Salud Ocupacional (CISO), aportando para ello la sugerencia de personas destacadas en el Departamento de Gestión de Talento Humano.

La dirección de la Secretaría del Consejo Institucional está dando seguimiento al tema.

79. **SCI-319-2025** Memorando con fecha de recibido 23 de abril de 2025, suscrito por la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, coordinadora de la Comisión Estatuto Orgánico del Consejo Institucional, dirigido a la Licda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de Asesoría Legal, con copia al Consejo Institucional, en el cual solicita criterio legal sobre los posibles efectos de legalidad que implicaría modificar los requisitos que deben cumplir las personas postulantes como investigadoras o extensionistas para integrar el Consejo de Investigación y Extensión, establecidos en el acuerdo del Consejo Institucional tomado en la Sesión Ordinaria N.° 3398, artículo 12, del 26 de febrero de 2025.

Se toma nota.

80. **AL-CPOECO-1230-2025** Nota con fecha de recibido 23 de abril de 2025, remitida por la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, dirigida a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., rectora, con copia a la dirección electrónica de la Secretaría del Consejo Institucional, en la cual remite consulta sobre el texto sustitutivo del proyecto "LEY DE FOMENTO A LA BIOECONOMÍA", Expediente N.º 23.868.

La dirección de la Secretaría del Consejo Institucional ha procedido con las consultas a la Oficina de Asesoría Legal (SCI-327-2025) y a la comunidad institucional, según dispone el procedimiento respectivo.

81. **AL-CPOECO-1245-2025** Nota con fecha de recibido 23 de abril de 2025, remitida por la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, dirigida a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., rectora y

a la Escuela de Agronomía del Instituto Tecnológico de Costa Rica, con copia a la dirección electrónica de la Secretaría del Consejo Institucional, en la cual remite consulta sobre el texto sustitutivo del proyecto "LEY DE FOMENTO A LA BIOECONOMÍA", Expediente N.º 23.868.

La Secretaría del Consejo Institucional ha procedido a trasladar la consulta, mediante correo electrónico del 23 de abril del 2025, a la Escuela de Agronomía para su atención El Consejo Institucional estará dando respuesta a la consulta de este proyecto de ley atendiendo el oficio AL-CPOECO-1230-2025.

82. **AL-DSDI-OFI-0066-2025** Nota con fecha de recibido 23 de abril de 2025, remitida por el Departamento de Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa, dirigida a varias instituciones, entre ellas a las Universidades Públicas, en la cual se remite consulta sobre el texto actualizado del proyecto "LEY DE EJECUCIÓN DE LA PENA Y DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD CURATIVAS", Expediente N.º 24.019.

La dirección de la Secretaría del Consejo Institucional ha procedido con las consultas a la Oficina de Asesoría Legal (SCI-327-2025) y a la comunidad institucional, según dispone el procedimiento respectivo.

83. **AL-CPAJUR-1955-2025** Nota con fecha de recibido 23 de abril de 2025, remitida por la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, dirigida a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., rectora, con copia a la dirección electrónica de la Secretaría del Consejo Institucional, en la cual se remite consulta sobre el texto dictaminado del proyecto "REFORMA A LA LEY N.º 9960, CREACIÓN AGENCIA ESPACIAL COSTARRICENSE", Expediente N.º 24.383.

La dirección de la Secretaría del Consejo Institucional ha procedido con las consultas a la Oficina de Asesoría Legal (SCI-327-2025) y a la comunidad institucional, según dispone el procedimiento respectivo.

84. **AL-CPAJUR-2001-2025** Nota con fecha de recibido 23 de abril de 2025, remitida por la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, dirigida a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., rectora, con copia a la dirección electrónica de la Secretaría del Consejo Institucional, en la cual se remite consulta sobre el texto del proyecto "LEY DE LABORES DE NATURALEZA PELIGROSA. REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 87, 141, 152, 294, ADICIÓN DE UN INCISO D) AL ARTÍCULO 95, Y UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 136, ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 153 BIS Y 294 BIS AL CÓDIGO DE TRABAJO, LEY N°2 DEL 29 DE AGOSTO DE 1943 Y SUS REFORMAS. REFORMA DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR, LEY N°7983 DEL 18 DE FEBRERO DE 2000", Expediente N.º 24.879.

La dirección de la Secretaría del Consejo Institucional ha procedido con las consultas a la Oficina de Asesoría Legal (SCI-327-2025) y a la comunidad institucional, según dispone el procedimiento respectivo.

85. **SCI-322-2025** Memorando con fecha 24 de abril de 2025, suscrito por el Mag. Randall Blanco Benamburg, coordinador de la Comisión de Asuntos Académicos

y Estudiantiles, dirigido al MGA. Ricardo Coy Herrera, vicerrector de la Vicerrectoría de Docencia, al Dr. José Luis León Salazar, vicerrector de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, a la MBA. Sofía Brenes Meza, directora a.i. del Departamento de Gestión del Talento Humano, a la M.B.A. Evelyn Hernández Solís, directora de la Oficina de Planificación Institucional y a la Lcda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de Asesoría Legal, con copia a la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual informa que en atención al oficio OPI-088-2025 la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles dictaminó procedente la propuesta del Reglamento para la contratación especial de personas profesoras o profesionales en el Instituto Tecnológico de Costa Rica; por cuanto, dispuso integrar una comisión *ad hoc* para que la dictamine. Solicita designar un representante de las instancias que ellos dirigen e informa que se declara al Departamento de Gestión de Talento Humano, a la Vicerrectoría de Docencia y a la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, como entes técnicos para dictaminar la propuesta y la persona representante del Departamento de Gestión de Talento Humano será quien coordine la comisión en mención.

Se toma nota.

86. **SCI-323-2025** Memorando con fecha 24 de abril de 2025, suscrito por el Mag. Randall Blanco Benamburg, coordinador de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles, dirigido a la MPsc. Camila Delgado Agüero, vicerrectora de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos y al MGA. Ricardo Coy Herrera, vicerrector de la Vicerrectoría de Docencia, con copia a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., rectora y a la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual en atención al oficio VIESA-140-2025, se remiten observaciones a la propuesta “Directrices y Lineamientos para el Proceso de Admisión 2025-2026”, en aras de aclarar lo mejor posible lo referente al proceso de admisión y así minimizar posibles confusiones e incluso apelaciones ante acuerdos que se tomen en el transcurso de su implementación.

Se toma nota.

87. **SCI-324-2025** Memorando con fecha 24 de abril de 2025, suscrito por el Mag. Randall Blanco Benamburg, coordinador de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles, dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., rectora y al Ing. Luis Diego Noguera Mena, director del Centro Académico Limón, con copia a la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual en atención a una audiencia con personal del Centro Académico Limón, coordinaciones de carrera, así como una representante de la FEITEC, se mantuvo conversaciones relacionadas con el tema del trabajo que se desarrolla y las necesidades del Centro. Se indica el espacio reflejó una preocupación generalizada por la inequidad de condiciones tanto del Centro Académico de Limón y de otros campus del TEC. Con el objetivo de conocer la perspectiva de la Administración al respecto y si se tienen identificadas posibles formas de atender los planteamientos, así como las medidas que se podrían implementar a corto y mediano plazo, les invita a audiencia en la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles del martes 6 de mayo de 2025, a las 10:00 a.m.

Se toma nota.

88. **SCI-326-2025** Memorando con fecha 24 de abril de 2025, suscrito por el Mag. Randall Blanco Benamburg, coordinador de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles, dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., rectora, con copia a la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual se recuerda que, según acuerdo del Consejo Institucional correspondiente a la Sesión N.º 2838 del 18 de setiembre de 2013, corresponde al Consejo de Rectoría actualizar cada dos años la definición de zonas de influencia de sedes y centros académicos. Se advierte que no se registra dicha actualización, programada para el año 2024, de acuerdo con lo anterior se solicita a la Rectoría atender el compromiso institucional, ya que constituye un insumo relevante para la propuesta de Directrices y lineamientos para el Proceso de Admisión 2025–2026.

Se toma nota.

89. **SCI-327-2025** Memorando con fecha de recibido 24 de abril de 2025, suscrito por la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, dirigido a la Lcda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de Asesoría Legal, con copia al Consejo Institucional, en el cual procede a trasladar las consultas de los proyectos de ley siguientes: Expedientes N.° 24.326 (texto sustitutivo), N.° 24.739, N.° 24.846, N.° 24.819, N.° 24.127, (texto dictaminado), N.° 24.884, N.° 24.489 (texto dictaminado), N.° 24.041 (texto dictaminado), N.° 23.868, N.° 24.019 (texto actualizado), N.° 24.383 (texto dictaminado) y N.° 24.879.

Se incorpora en los expedientes de los proyectos de ley respectivos.

90. **AL-CPAAGROP-707-2025** Nota con fecha de recibido 24 de abril de 2025, remitida por la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa, dirigida a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., rectora, con copia a la dirección electrónica de la Secretaría del Consejo Institucional, en la cual se remite consulta sobre el texto dictaminado del proyecto “LEY PARA LA REACTIVACIÓN, INNOVACIÓN, FOMENTO DEL SECTOR AGROEMPRESARIAL”, Expediente N.º 24.142.

La dirección de la Secretaría del Consejo Institucional ha procedido con las consultas a la Oficina de Asesoría Legal (SCI-334-2025) y a la comunidad institucional, según dispone el procedimiento respectivo.

91. **AL-CPAAGROP-745-2025** Nota con fecha de recibido 24 de abril de 2025, remitida por la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa, dirigida a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., rectora, con copia a la dirección electrónica de la Secretaría del Consejo Institucional, en la cual se remite consulta sobre el texto dictaminado del proyecto “LEY PARA POTENCIAR EL AGROTURISMO”, Expediente N.º 24.349.

La dirección de la Secretaría del Consejo Institucional ha procedido con las consultas a la Oficina de Asesoría Legal (SCI-334-2025) y a la comunidad institucional, según dispone el procedimiento respectivo.

92. AL-CE23949-098-2025 Nota con fecha de recibido 24 de abril de 2025, remitida por la Comisión Especial de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa, dirigida a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., rectora, con copia a la dirección electrónica de la Secretaría del Consejo Institucional, en la cual se remite consulta sobre el texto dictaminado del proyecto "REFORMA DEL ARTÍCULO 96 DEL CÓDIGO ELECTORAL, LEY N.º 8765 DE 19 DE AGOSTO DE 2009, PARA LA CREACIÓN DE LAS FRANJAS ELECTORALES", Expediente N.º 24.346.

La dirección de la Secretaría del Consejo Institucional ha procedido con las consultas a la Oficina de Asesoría Legal (SCI-334-2025) y a la comunidad institucional, según dispone el procedimiento respectivo.

93. SCI-331-2025 Memorando con fecha de recibido 25 de abril de 2025, suscrito por la M.A.E. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, dirigido al MAE. Roy D'Avanzo Navarro, director del Departamento Financiero Contable, con copia al Consejo Institucional y al Bach. Edgar Castellón Marín, coordinador de la Unidad de Tesorería, en el cual remite solicitud de pago de dietas del Consejo Institucional correspondientes al mes de abril de 2025.

Se toma nota.

94. SCI-332-2025 Memorando con fecha de recibido 25 de abril de 2025, suscrito por el Mag. Randall Blanco Benamburg, coordinador de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles, dirigido al Ing. Juan José Rojas Hernández, coordinador del Laboratorio Delta de la Escuela de Ingeniería Electromecánica, con copia a la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual en atención a la solicitud de audiencia referida a los avances en la creación de la Licenciatura en Ingeniería Electromecánica, informa que la propuesta debe seguir los procedimientos institucionales y pasar por el análisis del Consejo de Docencia antes de proceder con la audiencia. Espera que el proceso de rediseño curricular sea exitoso y quedan pendientes para coordinar oportunamente el espacio en que se realice para la presentación.

Se toma nota.

95. SCI-328-2025 Memorando con fecha de recibido 28 de abril de 2025, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador de la Comisión de Planificación y Administración del Consejo Institucional, dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., rectora, a la MAE. Silvia Watson Araya, vicerrectora de la Vicerrectoría de Administración y a la MAE. Sofía Brenes Meza, directora a. i. del Departamento de Gestión de Talento Humano, con copia a la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual en atención al oficio GTH-204-2025, mismo que da respuesta al oficio AFITEC-045-2025, referido a la ausencia de un reglamento de evaluación del desempeño del personal administrativo, indicando que dicho reglamento se encuentra en proceso de elaboración, con fecha de entrega prevista para el 30 de junio de 2025; la comisión reitera la disposición al diálogo y el compromiso con la mejora continua, así como la importancia de contar con esta normativa.

Se toma nota.

96. **SCI-329-2025** Memorando con fecha de recibido 28 de abril de 2025, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., rectora, con copia a la Secretaría del Consejo Institucional, al Lic. José Mauricio Pérez Rosales, M.Sc., auditor interno, a la MAE. Silvia Watson Araya, vicerrectora de la Vicerrectoría de Administración, al MAE. Roy D'Avanzo Navarro, director del Departamento Financiero Contable y al MAE. Johnny Masís Siles, coordinador de la Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto, en el cual se da seguimiento al oficio AUDI-062-2025, referido a la solicitud para incorporar en el Presupuesto Extraordinario del 2025, ¢2.500.000,00 para la adquisición de mobiliario y equipo de oficina (acuerdo Sesión N.° 3380, Artículo 13, del 18 de setiembre de 2024), derivado de la aprobación de dos plazas de Auditor(a), cuya gestión está en proceso. Se solicita a la Rectoría mantener informado al Consejo Institucional sobre las gestiones realizadas para el cumplimiento del acuerdo.

Se toma nota.

97. **SCI-330-2025** Memorando con fecha de recibido 28 de abril de 2025, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., rectora y a la MAE. Silvia Watson Araya, vicerrectora de la Vicerrectoría de Administración, con copia a la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual en atención al oficio VAD-171-2025 referido a la remisión de los informes finales de Auditoría Externa periodo 2024, le recuerda que según el artículo 9 del Reglamento para la atención de informes de auditoría y presuntos hechos irregulares en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, todos los informes finales de Auditoría Externa contratados por el Instituto deben ser remitidos a la presidencia del Consejo Institucional.

Se toma nota.

98. **DSC-078-2025** Nota con fecha de recibido 28 de abril de 2025, suscrita por el Dr. Óscar López Villegas, director del Campus Tecnológico Local San Carlos, dirigido a la Comisión Especial N.º 23167 de Modernización y Reforma del Estado de la Asamblea Legislativa, con copia a la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional y a la MAP. Lady Fernández Mora, gestora de vinculación del Campus Tecnológico Local San Carlos**,** en el cual remite observaciones sobre el proyecto de ley "CIERRE DEL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA PROMOTORA DE COMERCIO AGROPECUARIO DE COSTA RICA", Expediente N.° 24.776.

Se incorpora en el expediente del proyecto de ley respectivo. Se ha compartido con la Oficina de Asesoría Legal para que se tome como insumo en el criterio que se solicitó.

99. **AL-CPGOB-0269-2025** Nota con fecha de recibido 28 de abril de 2025, remitida por la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración de la

Asamblea Legislativa, dirigida a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., rectora, con copia a la dirección electrónica de la Secretaría del Consejo Institucional, en la cual se remite consulta sobre el texto dictaminado del proyecto "LEY DE SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS MASIVOS Y NO MASIVOS", Expediente N.º 24.866.

La dirección de la Secretaría del Consejo Institucional ha procedido con las consultas a la Oficina de Asesoría Legal (SCI-334-2025) y a la comunidad institucional, según dispone el procedimiento respectivo.

100. **SCI-335-2025** Memorando con fecha de recibido 28 de abril de 2025, suscrito por el Mag. Randall Blanco Benamburg, coordinador de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles, dirigido a la Lcda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de Asesoría Legal, con copia a la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual aporta insumos adicionales a los contenidos en el oficio SCI-307-2025 referido a la solicitud de ampliación del criterio legal sobre la autorización del uso del Fondo de Apoyo a la Vinculación para la adquisición del inmueble (nave #18) ubicado en el Parque Industrial de Cartago para el Proyecto 05-0305-01 CTTM Centro de Transferencia y Transformación de Materia.

Se toma nota.

101. **SCI-334-2025** Memorando con fecha de recibido 29 de abril de 2025, suscrito por la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, dirigido a la Lcda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de Asesoría Legal, con copia al Consejo Institucional, en el cual procede a trasladar las consultas de los proyectos de ley siguientes: Expedientes N.° 24.142 (texto dictaminado), N.° 24.349 (texto dictaminado), N.° 24.346 (texto dictaminado) y N.º 24.866.

Se incorpora en los expedientes de los proyectos de ley respectivos.

102. **AUDI-SIR-034-2025** Memorando con fecha de recibido 29 de abril de 2025, suscrito por el Lic. José Mauricio Pérez Rosales, M.Sc., auditor interno, dirigido a la MAE. Silvia Watson Araya, vicerrectora de la Vicerrectoría de Administración, con copia a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., presidencia del Consejo Institucional y a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., rectora, en el cual remite seguimiento al Informe de auditoría AUDI-AD-002-2025, denominado "Advertencia sobre la necesidad de que se establezcan los mecanismos de control que permitan verificar que el registro de los bienes y servicios que se adquieran se realice de conformidad con su uso y naturaleza". Al respecto se indica que, verificada la evidencia, esta no constituye un mecanismo de control que permita determinar que la advertencia está atendida, debido a que lo que se detalla son las actividades que se llevan a cabo para atender el proceso y no el mecanismo de control requerido debidamente aprobado. Se solicita a la Vicerrectoría de Administración presentar en un plazo no mayor a cinco días, un plan de acciones para incluir en el Sistema de Implementación de Recomendaciones.

Se ha trasladado para conocimiento a la Comisión de Planificación y Administración.

103. **AL-CE23120-0411-2025** Nota con fecha de recibido 29 de abril de 2025, remitida por la Comisión Especial de la Provincia de Puntarenas de la Asamblea Legislativa, dirigida a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., rectora, con copia a la dirección electrónica de la Secretaría del Consejo Institucional, en la cual se remite consulta sobre el texto sustitutivo del proyecto "LEY PARA EL FOMENTO DE LA PESCA RESPONSABLE EN COSTA RICA. REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY N.° 8436, LEY DE PESCA Y ACUICULTURA, DE 1 DE MARZO DE 2005", Expediente N.º 24.263.

La dirección de la Secretaría del Consejo Institucional ha procedido con las consultas a la Oficina de Asesoría Legal (SCI-342-2025) y a la comunidad institucional, según dispone el procedimiento respectivo.

104. **AL-CE23949-460-2025** Nota con fecha de recibido 29 de abril de 2025, remitida por la Comisión Especial N° 23949 de Reformas al Sistema Político y Electoral del Estado de la Asamblea Legislativa, dirigida a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., rectora, con copia a la dirección electrónica de la Secretaría del Consejo Institucional, en la cual se remite consulta sobre el proyecto "LEY PARA REGULAR EL USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LOS PROCESOS ELECTORALES", Expediente N.º 24.875.

La dirección de la Secretaría del Consejo Institucional ha procedido con las consultas a la Oficina de Asesoría Legal (SCI-342-2025) y a la comunidad institucional, según dispone el procedimiento respectivo.

105. **AL-CPEAMB498-2025** Nota con fecha de recibido 29 de abril de 2025, remitida por la Comisión Permanente Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa, dirigida a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., rectora, con copia a la dirección electrónica de la Secretaría del Consejo Institucional, en la cual se remite consulta sobre el proyecto "LEY PARA LA DECLARATORIA DE LAS BOTELLAS DE PLÁSTICO DE UN SOLO USO COMO RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL", Expediente N.º 24.509.

La dirección de la Secretaría del Consejo Institucional ha procedido con las consultas a la Oficina de Asesoría Legal (SCI-342-2025) y a la comunidad institucional, según dispone el procedimiento respectivo.

106. **AL-CPEAMB519-2025** Nota con fecha de recibido 29 de abril de 2025, remitida por la Comisión Permanente Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa, dirigida a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., rectora, con copia a la dirección electrónica de la Secretaría del Consejo Institucional, en la cual se remite consulta sobre el proyecto "MEJORA DE LAS CAPACIDADES TÉCNICO CIENTÍFICAS DE INCOPESCA", Expediente N.º 24.863.

La dirección de la Secretaría del Consejo Institucional ha procedido con las consultas a la Oficina de Asesoría Legal (SCI-342-2025) y a la comunidad institucional, según dispone el procedimiento respectivo.

107. **SCI-339-2025** Memorando con fecha 30 de abril de 2025, suscrito por el Mag. Randall Blanco Benamburg, coordinador de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles, dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., rectora y a la

MPsc. Camila Delgado Agüero, vicerrectora de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos, con copia a la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual expone la problemática relacionada con la sobrecarga laboral que enfrentan las personas integrantes de comisiones especiales, lo que ha dificultado cumplir con los plazos para la entrega de estudios y diagnósticos solicitados por el Consejo Institucional. Con el propósito de conocer la posición de la Administración y las posibles acciones a implementar las convoca a una audiencia en la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles para el martes 6 de mayo a las 9:30 a.m.

Se toma nota.

108. **AL-CPEAMB-534-2025** Nota con fecha de recibido 30 de abril de 2025, remitida por la Comisión Permanente Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa, dirigida a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., rectora, con copia a la dirección electrónica de la Secretaría del Consejo Institucional, en la cual se remite consulta sobre el texto dictaminado del proyecto de ley "REGULACIÓN DE PLAGUICIDAS ALTAMENTE PELIGROSOS PARA LA SALUD Y EL AMBIENTE", Expediente N.º 23.783.

La dirección de la Secretaría del Consejo Institucional ha procedido con las consultas a la Oficina de Asesoría Legal (SCI-346-2025) y a la comunidad institucional, según dispone el procedimiento respectivo.

109. **AFITEC-058-2025** Nota con fecha de recibida 30 de abril de 2025, suscrita por la Ing. Kendy Chacón Víquez, Secretaría General de la Asociación de Funcionarios del ITCR, dirigido a la Asamblea Legislativa, con copia a la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, en la cual remite observaciones sobre el proyecto "LEY DE LABORES DE NATURALEZA PELIGROSA. REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 87, 141, 152, 294, ADICIÓN DE UN INCISO D) AL ARTÍCULO 95, Y UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 136, ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 153 BIS Y 294 BIS AL CÓDIGO DE TRABAJO, LEY N°2 DEL 29 DE AGOSTO DE 1943 Y SUS REFORMAS. REFORMA DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR, LEY N°7983 DEL 18 DE FEBRERO DE 2000", Expediente N.º 24.879.

Se incorpora en el expediente del proyecto de ley respectivo. Se ha compartido con la Oficina de Asesoría Legal para que se tome como insumo en el criterio que se solicitó.

110. **SCI-342-2025** Memorando con fecha de recibido 02 de mayo de 2025, suscrito por la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, dirigido a la Lcda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de Asesoría Legal, con copia al Consejo Institucional, en el cual procede a trasladar las consultas de los proyectos de ley siguientes: Expedientes N.° 24.263 (texto sustitutivo), N.° 24.875, N.° 24.509 y N.° 24.863.

Se incorpora en los expedientes de los proyectos de ley respectivos.

111. **SCI-343-2025** Memorando con fecha de recibido 02 de mayo de 2025, suscrito por la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, coordinadora de la Comisión Estatuto Orgánico del Consejo Institucional, dirigido a la M.B.A. Evelyn Hernández Solís, directora de la Oficina de Planificación Institucional, con copia al Consejo Institucional, en el cual en atención a los oficios OPI-069-2025 y OPI-142-2025, referidos a la presentación del informe de avance del análisis de la normativa institucional vigente para la revisión de normativa relacionada con los requisitos éticos para ocupar altos cargos institucionales, se informa que con base en el informe recibido, la Comisión acuerda extender el plazo para la entrega del informe, al 30 de junio de 2025.

Se toma nota.

CORRESPONDENCIA DIRIGIDA A LAS COMISIONES PERMANENTES

Comisión de Estatuto Orgánico

112. **SCI-314-2025** Memorando con fecha de recibido 22 de abril de 2025, suscrito por la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, coordinadora de la Comisión de Estatuto Orgánico, con copia al Consejo Institucional, en el cual remite el reporte de la correspondencia registrada para la Sesión Ordinaria N.º 3405 del 23 de abril de 2025.

Se toma nota.

113. **DP-061-2025** Memorando con fecha de recibido 24 de abril de 2025, suscrito por el Dr. Luis Alexander Calvo Valverde, director de la Dirección de Posgrado, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, coordinadora de la Comisión de Estatuto Orgánico, en el cual en atención al oficio SCI-298-2025, remite observaciones a la propuesta de modificación de los artículos 50-BIS, 50-bis1 y 50-bis2 del Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica.

Se toma nota.

114. **AL-357-2025** Memorando con fecha de recibido 30 de abril de 2025, suscrito por la Licda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de la Asesoría Legal, Licdo. Jonathan Gustavo Quesada Sojo, asesor legal, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, coordinadora de la Comisión de Estatuto Orgánico, con copia a la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual en atención al oficio SCI-319-2025 remite criterio legal sobre la modificación de requisitos en un proceso electoral en curso. Se indica que el Consejo Institucional puede modificar los requisitos, y en ese caso deberá reiniciar el proceso electoral, en caso de que no los modifique, se debe motivar la modificación para garantizar legalidad y transparencia.

Se toma nota.

115. **SCI-338-2025** Memorando con fecha de recibido 30 de abril de 2025, suscrito por la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, dirigido a la M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, coordinadora de la

Comisión de Estatuto Orgánico, con copia al Consejo Institucional, en el cual remite el reporte de la correspondencia registrada del 21 al 27 de abril del 2025 para la Sesión Ordinaria N.º 3406 del 07 de mayo de 2025.

Se toma nota.

Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles

116. **AL-277-2025** Memorando con fecha de recibido 22 de abril de 2025, suscrito por la Lcda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de Asesoría Legal y del Lic. Jonathan Gustavo Quesada Sojo, asesor legal, dirigido al Mag. Randall Blanco Benamburg, coordinador de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles, en el cual en atención al oficio SCI-095-2025, se emite ampliación de criterio legal remitido en oficio AL-251-2024 de fecha 17 de junio del 2024, referido al ausentismo y justificación en comisiones conformadas por la Asamblea Institucional Representativa.

Se toma nota.

117. **AL-280-2025** Memorando con fecha de recibido 22 de abril de 2025, suscrito por la Lcda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de Asesoría Legal y del Lic. Jonathan Gustavo Quesada Sojo, asesor legal, dirigido al Mag. Randall Blanco Benamburg, coordinador de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles, en el cual en atención al oficio SCI-183-2025, remite criterio referido a la interpretación del artículo 24 del "Reglamento de Carrera Profesional del ITCR y sus reformas".

Se toma nota.

118. **SCI-313-2025** Memorando con fecha de recibido 22 de abril de 2025, suscrito por la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, dirigido al Mag. Randall Blanco Benamburg, coordinador de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles, con copia al Consejo Institucional, en el cual remite el reporte de la correspondencia registrada para la Sesión Ordinaria N.º 3405 del 23 de abril de 2025.

Se toma nota.

119. **FUNDATEC-202-2025** Memorando con fecha de recibido 23 de abril de 2025, suscrito por la M.Sc. Damaris Cordero Castillo, delegada ejecutiva de la Fundación Tecnológica de Costa Rica (FUNDATEC), dirigido al Mag. Randall Blanco Benamburg, coordinador de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles, con copia al MGA. Ricardo Coy Herrera, presidente de la Junta Directiva FUNDATEC, en el cual en atención al oficio SCI-308-2025, adjunta criterio sobre lo consultado [implicaciones del proyecto de Ley N.º 24.422 Reforma de la ley de promoción desarrollo científico y tecnológico y creación del MICYT para potenciar el uso de los recursos en investigación y desarrollo (I+D)].

Se toma nota.

120. **ViDa-281-2025** Memorando con fecha de recibido 24 de abril de 2025, suscrito por el MGA. Ricardo Coy Herrera, presidencia del Consejo de Docencia, dirigido

al Consejo de Docencia, con copia al Mag. Randall Blanco Benamburg, coordinador de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles, en el cual comunica el acuerdo de la Sesión N.° 04-2025, Artículo 4, inciso 4.2, del Consejo de Docencia, referido a la aprobación de la moción para otorgar una prórroga a la Comisión de Trabajo Estudiantil Solidario para que presente el informe final en la sesión ordinaria del Consejo de Docencia correspondiente al mes de marzo de 2026. Se adjunta informe de avance.

Se toma nota.

121. **ViDa-294-2025** Memorando con fecha de recibido 24 de abril de 2025, suscrito por el MGA. Ricardo Coy Herrera, presidencia del Consejo de Docencia, dirigido al Consejo de Docencia, con copia al Mag. Randall Blanco Benamburg, coordinador de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles, en el cual comunica el acuerdo del Consejo de Docencia de la Sesión Extraordinaria N.° 06-2025, Artículo 3, inciso 3.6, referido a la conformación de una comisión para atender la consulta planteada mediante el oficio SCI-173-2024, referente a la solicitud de aclaración realizada por la Escuela de Matemática sobre el "Reglamento para la equiparación de asignaturas en el ITCR". La comisión está integrada por representantes de distintas escuelas y un representante estudiantil designado por la FEITEC, misma que deberá entregar un informe con recomendaciones sobre posibles modificaciones a los artículos 9.a y 9.c, así como la inclusión de la definición de "horas lectivas efectivas", a más tardar en la sesión del Consejo de Docencia del 18 de junio de 2025. En la remisión del correo se adjunta el oficio ViDa–295–2025.

Se toma nota.

122. **FEITEC-REPE-026-2025** Memorando con fecha de recibido 24 de abril de 2025, suscrito por el señor Randy Herrera Varela, Secretaría de Representación Estudiantil de la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica (FEITEC), dirigido al MGA. Ricardo Coy Herrera, vicerrector de la Vicerrectoría de Docencia, remitido copiando a varias direcciones electrónicas, entre ellas la del Mag. Randall Blanco Benamburg, coordinador de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles y la de la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual en atención a los oficios ViDa-294-2025 y ViDa-295-2025 comunica la designación del señor Erick Abarca Pérez, como representante de la FEITEC en la comisión para atender la consulta referente a la solicitud de aclaración realizada por la Escuela de Matemática sobre el "Reglamento para la equiparación de asignaturas en el ITCR". Informa que el nombramiento entra en vigor a partir de su comunicación hasta el 31 de julio del 2025; posteriormente se deberá seguir el procedimiento que indica el artículo 54 de Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica.

Se toma nota.

123. **ViDa-298-2025** Memorando con fecha de recibido 24 de abril de 2025, suscrito por el MGA. Ricardo Coy Herrera, presidencia del Consejo de Docencia, dirigido al Mag. Randall Blanco Benamburg, coordinador de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles, con copia al Consejo de Docencia y a la Secretaría

de la Asamblea Institucional Representativa, en el cual comunica el acuerdo de la Sesión N.° 06-2025, Artículo 3, inciso 3.7, del Consejo de Docencia, referido a la conformación de una Comisión para para atender la reglamentación del premio Innova Docente. La comisión está integrada por representantes de distintas escuelas y un representante del Centro de Desarrollo Académico, misma que deberá presentar un avance del reglamento y cronograma de implementación para el 18 de junio de 2025.

Se toma nota.

124. **ViDa-300-2025** Memorando con fecha de recibido 25 de abril de 2025, suscrito por el MGA Ricardo Coy Herrera, presidente del Consejo de Docencia, dirigido al Mag. Randall Blanco Benamburg, coordinador de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles, con copia al Consejo de Docencia y a la Secretaría de la Asamblea Institucional Representativa, en el cual comunica el acuerdo del Consejo de Docencia de la Sesión N. 07-2025, Artículo 3, inciso 3.2, referido a la respuesta del oficio SCI-063-2025, sobre la propuesta de modificación del artículo 11 del Reglamento del Régimen de Enseñanza-Aprendizaje del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Se sugiere a la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles que incorpore una definición sobre el proceso de prematricula en la normativa institucional, al menos, con la posibilidad adicional de que le soliciten a la Administración que incluya una programación para este proceso en el Calendario Institucional, además se le invita a la Comisión al Consejo de Docencia para realizar un foro y exponer la propuesta y la perspectiva de ese órgano.

Se toma nota.

125. **ViDa-299-2025** Memorando con fecha de recibido 25 de abril de 2025, suscrito por el MGA Ricardo Coy Herrera, presidencia del Consejo de Docencia, dirigido a la Licda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de Asesoría Legal, con copia al Consejo de Docencia, al Mag. Randall Blanco Benamburg, coordinador de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles y a la M.B.A. Evelyn Hernández Solís, directora de la Oficina de Planificación Institucional, en el cual comunica el acuerdo del Consejo de Docencia de la sesión extraordinaria 06-2025, Artículo 3, inciso 3.3, referido a la ratificación de la propuesta de actualización del “Reglamento para el diseño y rediseño curricular de los planes de estudio pregrado y grado en el ITCR”. Se solicita a la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles ajustar desde lo señalado a nivel de políticas del lenguaje inclusivo, el concepto de “titulo” en el Reglamento para el Reconocimiento y Equiparación de Grados y Títulos Tecnológico de Costa Rica.

Se toma nota.

126. **SCI-337-2025** Memorando con fecha de recibido 30 de abril de 2025, suscrito por la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, dirigido al Mag. Randall Blanco Benamburg, coordinador de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles, con copia al Consejo Institucional, en el cual remite el reporte de la correspondencia registrada del 21

al 27 de abril del 2025 para la Sesión Ordinaria N.º 3406 del 07 de mayo de 2025.

Se toma nota.

127. **DLIM-179-2025** Memorando con fecha de recibido 30 de abril de 2025, suscrito por el Ing. Luis Diego Noguera Mena, MGP., director del Centro Académico Limón, dirigido al Mag. Randall Blanco Benamburg, coordinador de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles, en el cual en atención al oficio SCI-324-2025, confirma la participación en la audiencia en la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles del martes 06 de mayo a las 10:00 a.m.

Se toma nota.

128. **VIE-279-2025** Memorando con fecha de recibido 02 de mayo de 2025, suscrito por el Dr. José Luis León Salazar, vicerrector de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, dirigido al Mag. Randall Blanco Benamburg, coordinador de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles, con copia al Dr. Luis Alexander Calvo Valverde, director de la Dirección de Posgrado y a la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual en atención al oficio SCI-322-2025, informa que el Dr. Luis Alexander Cavo Valverde, es la persona designada por la Vicerrectoría de Investigación y Extensión en la comisión *ad hoc*, que se encargará del estudio de la propuesta del Reglamento para la contratación especial de personas profesoras o profesionales en el Instituto Tecnológico de Costa Rica.

Se toma nota.

129. **GTH-253-2025** Memorando con fecha de recibido 03 de mayo de 2025, suscrito por el Dr. José Luis León Salazar, vicerrector de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, dirigido al Mag. Randall Blanco Benamburg, coordinador de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles, con copia a la máster Ana Catalina Jara Vega, coordinadora de la Unidad de Desarrollo de Personal y a la Lcda. Francinny Fernández Castillo, coordinadora a. i. de la Unidad de Estudios y Remuneraciones, en el cual en atención al oficio SCI-322-2025, informa que la máster Ana Catalina Jara Vega, es la persona designada por el Departamento de Gestión de Talento Humano en la comisión *ad hoc*, que se encargará del estudio de la propuesta del Reglamento para la contratación especial de personas profesoras o profesionales en el Instituto Tecnológico de Costa Rica.

Se toma nota.

Comisión de Planificación y Administración

130. **CD-094-2025** Memorando con fecha de recibido 21 de abril de 2025, suscrito por el Dr. Giancarlo Protti Ramírez, director de la Escuela de Cultura y Deporte, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual solicita la modificación del artículo 15 del Reglamento de Uso y Control de la Infraestructura y Áreas Abiertas de los Campus Tecnológicos y Centros Académicos del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), para agregar la figura de “convenios específicos”. La citada

modificación busca subsanar un vacío normativo identificado en relación con el uso de instalaciones por parte de personas usuarias externas, especialmente aquellas pertenecientes a instituciones gubernamentales, entidades públicas o de carácter social-comunitario, además permitiría usar la figura expresa para un convenio por medio de la Fundación Tecnológica de Costa Rica a la Administración, o bien permitiría gestionar convenios específicos que promuevan actividades para el bienestar, la educación o la salud de Cartago o a nivel nacional.

Se toma nota.

131. **AUDI-AS-005-2025** Memorando con fecha de recibido 21 de abril de 2025, suscrito por el Lic. José Mauricio Pérez Rosales, M.Sc., auditor interno, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual remite asesoría referida a la consulta a la comunidad institucional de la propuesta de "Políticas Específicas para la Formulación del Plan Anual Operativo 2026 y su Presupuesto".

Se toma nota.

132. **AL-278-2025** Memorando con fecha de recibido 22 de abril de 2025, suscrito por la Lcda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de Asesoría Legal y del Lic. Jonathan Gustavo Quesada Sojo, asesor legal, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual en atención al oficio SCI-258-2025, remite criterio referido a la modificación del artículo 12 del "Reglamento del Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica".

Se toma nota.

133. **SCI-312-2025** Memorando con fecha de recibido 22 de abril de 2025, suscrito por la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, dirigido a la Comisión de Planificación y Administración, con copia al Consejo Institucional, en el cual remite el reporte de la correspondencia registrada para la Sesión Ordinaria N.º 3405 del 23 de abril de 2025.

Se toma nota.

134. **SCI-321-2025** Memorando con fecha de recibido 23 de abril de 2025, suscrito por la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, dirigido a la Comisión de Planificación y Administración, con copia al Consejo Institucional, en el cual traslada los aportes recibidos, por medio del formulario en línea, en el marco de la consulta a la comunidad institucional de la propuesta de Políticas Específicas de Formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto 2026", en atención al acuerdo del Consejo Institucional correspondiente a la Sesión Ordinaria N.º 3402, artículo 08, del 26 de marzo de 2025. Además, informa que la Auditoría Interna remitió un informe de asesoría sobre el texto consultado para estas políticas, bajo el oficio AUDI-AS-005-2025 del 21 de abril de 2025, el cual se adjunta.

Se toma nota.

135. **SCI-325-2025** Memorando con fecha de recibido 24 de abril de 2025, suscrito por el Mag. Randall Blanco Benamburg, coordinador de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, con copia a la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual informa que la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles dictaminó la propuesta de modificación de los artículos 16, 17 (incisos e y f) y 65 del Reglamento de Carrera Profesional del Instituto Tecnológico de Costa Rica y sus reformas, cuyo objetivo es ampliar el reconocimiento institucional de la participación del personal profesional en comisiones o comités creados por los Consejos de Vicerrectoría, equiparando su valor con otras formas de participación reconocidas. Se sugiere que la Comisión de Planificación y Administración realice una reforma similar en el Reglamento de Carrera Administrativa y de Apoyo a la Academia para asegurar coherencia normativa.

Se toma nota.

136. **VAD-205-2025** Memorando con fecha de recibido 28 de abril de 2025, suscrito por la MAE. Silvia Watson Araya, vicerrectora de Administración, dirigido a la MBA. Sofía Brenes Meza, directora a. i. del Departamento de Gestión del Talento Humano, con copia al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual en atención al oficio SCI-328-2025 y considerando la importancia de contar con la normativa que facilite los procesos de evaluación del desempeño del personal de apoyo a la academia, solicita remitir el avance sobre la elaboración del Reglamento de Evaluación del Desempeño del Personal, cuya fecha de entrega está prevista para el 30 de junio de 2025.

Se toma nota.

137. **VAD-209-2025** Memorando con fecha de recibido 28 de abril de 2025, suscrito por la MAE. Silvia Watson Araya, vicerrectora de Administración, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador de la Comisión de Planificación y Administración y a la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, con copia a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., rectora y a la Secretaría del Consejo Institucional, en el cual en atención al acuerdo de la Sesión N.° 3383, Artículo 8, del 09 de octubre del 2024, remite los procedimientos solicitados en el Transitorio I del Reglamento de Uso y Control de Infraestructura y Áreas Abiertas de los Campus Tecnológicos y Centros Académicos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Informa que para la elaboración de los citados procedimientos se ha considerado la descentralización de los campus locales y centros académicos, las particularidades de cada campus y el criterio de los entes técnicos como la Unidad Institucional de Gestión Ambiental y Seguridad Laboral (GASEL), la Clínica de Atención Integral en Salud (CASI) y la Unidad de Seguridad y Vigilancia (USEVI), entre otros que participan en las actividades en los campus y centros académicos del ITCR.

Se toma nota.

138. **DFC-297-2025** Memorando con fecha de recibido 29 de abril de 2025, suscrito por el MAE. Roy D'Avanzo Navarro, director del Departamento Financiero Contable, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, con copia a la Secretaría del Consejo Institucional, a la Rectoría y a la Vicerrectoría de Administración, en el cual detalla las principales inversiones realizadas en el Campus Tecnológico Local San Carlos, según lo consignado en el Informe de Modificación N.°1-2025. Entre las inversiones más relevantes se incluyen renovación de licencias de software, adquisición e instalación de aire acondicionado, mobiliario, sistemas de alarma, mejoras en residencias estudiantiles y áreas deportivas, remodelaciones eléctricas y de infraestructura, así como la compra de un microbús, totalizando una inversión superior a los ₡1.400 millones.

Se toma nota.

139. **SCI-336-2025** Memorando con fecha de recibido 30 de abril de 2025, suscrito por la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, con copia al Consejo Institucional, en el cual remite el reporte de la correspondencia registrada del 21 al 27 de abril del 2025 para la Sesión Ordinaria N.º 3406 del 07 de mayo de 2025.

Se toma nota.

140. **SCI-341-2025** Memorando con fecha de recibido 30 de abril de 2025, suscrito por la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, con copia al Consejo Institucional y a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., rectora, en el cual pone en conocimiento de la Comisión de Planificación y Administración una situación administrativa y normativa que ha sido objeto de análisis reciente, relacionada con el funcionamiento de la Comisión Institucional de Salud Ocupacional (CISO). Traslada los hallazgos detectados y las limitaciones para emitir la convocatoria precisa y jurídicamente sólida para la designación de representantes institucionales ante la CISO.

Se toma nota.

ARTÍCULO 5. Informe de Rectoría

La señora María Estrada Sánchez procede a realizar un resumen de las últimas actividades:

- Informa que, en el marco del Día de la persona trabajadora, participó en la marcha con representación también de la Federación de Estudiantes del ITCR.

- Desde el viernes anterior, se da atención continua a temáticas del Conare y también en la coyuntura de lo que está sucediendo en la Universidad de Costa Rica.

- Informa que en el Consejo de Rectoría celebrado el lunes 05 de mayo de 2025 se abrió un espacio con el señor Jorge Azario Hernández, representante de la Vicepresidencia de Internacionalización del Tecnológico de Monterrey, como parte del seguimiento a la visita realizada en enero y a los acuerdos de cooperación establecidos. Asimismo, se indica que el día de hoy se realiza un segundo encuentro relacionado con el Centro de Investigaciones para el Futuro de la Educación, enfocado en la incorporación de inteligencia artificial generativa en las ingenierías. Aunque no le es posible asistir, dos representantes del Tecnológico participan en su lugar.

- Sostuvo una reunión con el señor Gerardo Muñoz Díaz, director ejecutivo de la Federación de Municipalidades de Cartago, para avanzar en un convenio marco que articule la relación con las municipalidades no cubiertas por convenios actuales.

- Mantuvo una reunión con la señora Ana Cristina Rivas Bustos, directora del Centro de Vinculación, con el objetivo de formalizar estrategias territoriales de desarrollo, replicando experiencias previas en Zona Norte y Cartago, ahora hacia el Caribe y Alajuela. Se pretende reactivar clústeres logísticos y agroindustriales en el Caribe, y articular esfuerzos hacia el desarrollo en la zona este del país.

- Se refiere a los proyectos de ley, indica que se reconoce el avance en la revisión de proyectos de ley, impulsado por el trabajo de la abogada Xinia Guerrero Araya y el equipo legal, mediante recargos y esfuerzos extraordinarios durante fines de semana. Aún quedan pendientes numerosos proyectos.

- Informa que el señor José Luis León Salazar la representó en la XXVI Reunión del Órgano de Coordinación Técnica (OCTA) del Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y Tecnología Nucleares en América Latina y el Caribe (ARCAL) y hoy se realiza una visita al Campus Tecnológico Central del TEC.

- Conare:

    - La sesión de la Fundación Centro de Alta Tecnología (FunCeNAT) no se pudo realizar porque quien preside es el rector de la Universidad de Costa Rica, el cual indicó que no podía llegar, pues habían llegado estudiantes y le era imposible salir de las instalaciones. Se acordó reprogramar dicha sesión.

    - Se realizaron dos audiencias, en ambas participaron los representantes estudiantiles de la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia. Se aborda el seguimiento a los indicadores del Planes 2021–2025 y posibles escenarios económicos para la negociación del FEES. Posteriormente, se realiza un espacio de diálogo con las representaciones estudiantiles sobre la situación actual en la

Universidad de Costa Rica, lo cual impide abordar asuntos operativos, por lo que se acuerda una sesión extraordinaria.

La señora María Estrada Sánchez informa que requiere retirarse de la sesión entre las 09:45 a.m. y 10:00 a.m. para atender un encuentro con el asesor internacional Salvatore Mele, en el marco de la Escuela Latinoamericana de Física de Altas Energías del Consejo Europeo para la Investigación Nuclear (CERN), el cual por primera vez será en Centroamérica: San Carlos. El encuentro se realiza en la Asamblea Legislativa para coordinar agendas antes del traslado del asesor.

ARTÍCULO 6. Propuestas de comisiones permanentes

No se presentan propuestas de comisiones permanentes del Consejo Institucional.

ARTÍCULO 7. Propuestas de integrantes del Consejo Institucional

No se presentan propuestas de integrantes del Consejo Institucional.

ARTÍCULO 8. Designación y habilitación de la representación del Consejo Institucional en comisiones *ad hoc* para la selección de personas representantes ante el Consejo Editorial *(A cargo de la Presidencia)*

La señora Maritza Agüero González presenta la propuesta denominada: “Designación y habilitación de la representación del Consejo Institucional en comisiones *ad hoc* para la selección de personas representantes ante el Consejo Editorial”, a cargo de la Presidencia (adjunta al acta de esta sesión).

Para efectos de esta propuesta el señor Randall Blanco Benamburg anuncia que estaría anuente a asumir la designación que se requiere.

La señora María Estrada Sánchez somete a votación la propuesta, considerando la postulación del señor Randall Blanco Benamburg, quedando aprobada con el siguiente resultado: 11 votos a favor, 0 votos en contra. Se somete a votación la firmeza del acuerdo y es aprobada con: 11 votos a favor, 0 votos en contra.

Por lo tanto, el Consejo Institucional:

RESULTANDO QUE:

1. El Reglamento de Organización de la Editorial Tecnológica, en sus artículos 7, 8 y 9, establece:

Articulo 7

…

a. *Un funcionario de cada una de las Vicerrectorías del Instituto, nombrado por la comisión ad hoc, de entre los candidatos incluidos en ternas que le propongan los Consejos de Vicerrectoría respectivos, conformadas con base en los nombres de funcionarios que presenten los departamentos.*

b. *Un estudiante del Instituto, nombrado por el mecanismo y para el período que defina el Estatuto de la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica.*

c. *Una persona de la Comunidad Nacional que no sea funcionario ni estudiante del Instituto, nombrada por la Comisión ad hoc, de entre los candidatos que se postulen, en un concurso externo. El Instituto reconocerá la dieta de ley por la participación de este miembro en las sesiones ordinarias del Consejo.*

d. *El Director de la Editorial fungirá como secretario del órgano.*

La Comisión ad hoc a que hace mención en los incisos a) y c) estará integrada por un miembro del Consejo Institucional, el Vicerrector de Investigación y Extensión y el Director de la Editorial.

Los miembros del Consejo elegirán de entre ellos mismos al Presidente.

Articulo 8

Con excepción del Director de la Editorial y el representante estudiantil, los miembros del Consejo Editorial serán nombrados para períodos de dos años y podrán ser reelectos.

Articulo 9

Los miembros del Consejo Editorial que se vean imposibilitados de participar en este órgano, podrán ser sustituidos mediante el mismo mecanismo por el que fueron electos para completar el período.

2. La Secretaría del Consejo Institucional recibió el oficio ET-149-2025, con fecha de 25 de abril de 2025, suscrito por el Dr. José Luis León Salazar, director a. i. de la Editorial Tecnológica de Costa Rica, dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, M.Sc., presidencia del Consejo Institucional, en el cual se solicita:

Le informo que, de acuerdo con el oficio DI-050-2025 (del 13 de marzo del 2025), la Dra. Xinia Varela Sojo presentó su renuncia al Consejo Editorial. Esta se hizo efectiva a partir del 26 de marzo del 2025.

Por lo tanto, y de conformidad con lo establecido en el artículo Nº 7 del Reglamento de Organización de la Editorial Tecnológica de Costa Rica, le solicito designar a un miembro del Consejo Institucional para participar en la comisión ad hoc que seleccionará a la nueva persona representante de la

Vicerrectoría de Docencia ante el Consejo Editorial, para el periodo que corresponda.
...

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 7 del Reglamento de Organización de la Editorial Tecnológica, se requiere la integración de una comisión *ad hoc* que seleccionará a la persona representante de la Vicerrectoría de Docencia ante el Consejo Editorial. Esta comisión *ad hoc* es conformada por una persona integrante del Consejo Institucional, la persona vicerrectora de Investigación y Extensión y la persona directora de la Editorial Tecnológica.

2. Dado que estos procesos de designación usualmente se realizan una o dos veces al año, según lo requiera el funcionamiento del Consejo Editorial y conforme a los vencimientos de nombramientos, resulta conveniente procurar agilidad en los procesos de selección para resguardar la continuidad del Consejo Editorial.

SE ACUERDA:

a. Designar al Mag. Randall Blanco Benamburg, en calidad de integrante del Consejo Institucional, para que participe en la Comisión *ad hoc* que seleccionará a la persona representante de la Vicerrectoría de Docencia ante el Consejo Editorial, conforme lo establece el artículo 7 del Reglamento de Organización de la Editorial Tecnológica y en atención a la renuncia comunicada en el oficio ET-149-2025.

b. Facultar a la persona designada en el punto anterior para que, en caso de surgir nuevas necesidades de conformación de comisiones *ad hoc* similares durante un plazo de hasta doce meses a partir del presente acuerdo, pueda integrarlas en representación del Consejo Institucional, sin necesidad de un nuevo acuerdo, siempre que mantenga el cargo de integrante del Consejo Institucional.

c. Indicar que contra el presente acuerdo se podrán interponer las gestiones de aclaración o adición, en el plazo de diez días hábiles posteriores a su notificación.

ACUERDO FIRME

La discusión de este punto consta en el archivo digital de la Sesión Ordinaria N.° 3406.

ASUNTOS DE FONDO

ARTÍCULO 9. Reglamento para la creación, modificación, traslado o eliminación de subdependencias en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Atención oficio EMT-095-2025)
(A cargo de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles)

El señor Wagner Segura Porras presenta la propuesta denominada: “Reglamento para la creación, modificación, traslado o eliminación de subdependencias en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Atención oficio EMT-095-2025)”, a cargo de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles (adjunta al acta de esta sesión).

La señora María Estrada Sánchez somete a votación la propuesta, quedando aprobada con el siguiente resultado: 11 votos a favor, 0 votos en contra. Se somete a votación la firmeza del acuerdo y es aprobada con: 11 votos a favor, 0 votos en contra.

Por lo tanto, el Consejo Institucional:

RESULTANDO QUE:

1. En atención al artículo 96 del Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica, las Políticas Generales aprobadas por la Asamblea Institucional Representativa constituyen la base para la toma de decisiones del Consejo Institucional; en lo conducente, interesan las que se indican a continuación:

> ***5. Gestión Institucional.*** *Se fomentarán las mejores prácticas de gestión para una efectiva operación de los procesos, bajo principios de innovación y excelencia, con la incorporación de plataformas eficientes de TIC, orientadas al cumplimiento de los fines y principios institucionales para lograr la satisfacción de las personas vinculadas con el instituto.*
>
> ***6. Calidad.*** *Se fomentará que todo el quehacer de la Institución se desarrolle con criterios de excelencia generando una cultura de mejora continua en todos los procesos institucionales, a través de la autoevaluación, certificación y acreditación, para el cumplimiento de los fines y principios institucionales y la satisfacción de todas personas vinculadas con el instituto.*
>
> ***7. Talento Humano.*** *Se fomentará la atracción, el aprendizaje y crecimiento de nuestro talento humano para responder a los cambios que requiere el quehacer institucional, impulsando la cualificación, bajo una cultura participativa y un clima organizacional que propicie la permanencia satisfactoria y el mejor desempeño.* (Aprobadas en Sesión AIR-99-2021 del 16 de noviembre 2021, publicadas en Gaceta N.° 851 del 21 de noviembre de 2021 y modificadas en AIR-107-2023 del 27 de setiembre de 2023, publicadas en Gaceta N.° 1143 del 03 de octubre de 2023)

2. El artículo 18 del Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica señala dentro de las funciones del Consejo Institucional, la siguiente:

> *Artículo 18*
>
> *Son funciones del Consejo Institucional:*
> *…*
> *f. Aprobar, promulgar y modificar los reglamentos generales necesarios para el funcionamiento del Instituto, así como los suyos propios, excepto aquellos que regulen el funcionamiento de la Asamblea Institucional Representativa y del Congreso Institucional.*
> *…*

3. El Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica en su artículo 49 define "Área Académica" de la siguiente manera:

> *Artículo 49 Áreas Académicas y sus tipos*
>
> *Un área académica es estructuralmente una subdependencia, en la cual se involucran dos o más escuelas, con el fin de desarrollar programas académicos de carácter multi, inter o transdisciplinario. Estará a cargo de una persona coordinadora.*
>
> *Las áreas académicas deberán ejecutar los programas para las que fueron creadas conforme a los lineamientos establecidos por mutuo acuerdo por los Consejos de las Escuelas involucradas.*
>
> *El área académica debe ser de uno de los siguientes tipos:*
>
> *a. Área Académica de Grado: tiene el fin de desarrollar programas académicos de pregrado o grado, y está adscrita a una de las Escuelas involucradas. Mediante acuerdo tomado por los Consejos de las Escuelas se definirá a cuál de ellas estará adscrita el Área Académica, ya sea de forma permanente o rotativa y en este último caso el acuerdo deberá incluir la especificación de los plazos.*
>
> *b. Área Académica de Postgrado: tiene el fin de desarrollar programas académicos de postgrado. Estará adscrita a la Dirección de Postgrado.*

4. Sobre los departamentos y sus tipos el artículo 51 del Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica, indica lo siguiente:

> *Artículo 51 El departamento y sus tipos*
>
> *Para el desempeño de sus actividades, el Instituto se organizará en dependencias y subdependencias.*
> *Para efectos de este Estatuto se entenderá de forma genérica como dependencia a las Vicerrectorías, los departamentos de apoyo académico, los departamentos académicos, las escuelas, las direcciones de oficinas*

asesoras y asistenciales, de los Campus Tecnológicos Locales y de Centros Académicos.

Se entenderá de forma genérica por subdependencias a las unidades de apoyo, unidades académicas y áreas académicas, *independientemente de su ubicación física.*

Los departamentos serán de dos tipos: Académicos y de apoyo académico, los cuales estarán a cargo de una persona directora. Los departamentos académicos son aquellos que tienen la responsabilidad de ofrecer enseñanza, investigación y extensión. Podrán desarrollar tanto proyectos como actividades productivas y otras afines a su campo de acción, según sus posibilidades.

Se denominan, genéricamente, escuelas a los departamentos académicos que, como parte de sus actividades, tienen a su cargo cursos de programas de grado o postgrado.

Los departamentos de apoyo académico son aquellos que coadyuvan para que la labor de los departamentos académicos se realice en forma óptima y se logre así el cumplimiento de los objetivos del Instituto. Podrán desarrollar sus actividades por medio de unidades internas o desconcentradas, en los términos que indique la reglamentación correspondiente.

Los departamentos podrán organizarse en subdependencias denominadas unidades o áreas académicas. Las subdependencias estarán a cargo de una persona coordinadora quien estará, de acuerdo con el tipo de subdependencia, en la línea jerárquica inmediata bajo la autoridad de la persona responsable de la dependencia a la que pertenece o está adscrita.

En el caso de los departamentos académicos, las subdependencias son creadas con el fin de desarrollar programas académicos de docencia o programas consolidados de investigación, extensión o acción social, de carácter inter, trans y/o multidisciplinario administrados de acuerdo con las disposiciones relativas a las unidades académicas y estarán bajo la línea jerárquica de la persona directora de departamento y de las personas que ejerzan la vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos, de Docencia y de Investigación y Extensión. Su personal académico puede estar compuesto por las propias personas profesoras del Departamento al que pertenece la subdependencia, de otras escuelas o universidades. (El resaltado no es del original)

5. Sobre el trámite de creación, modificación o derogatoria de un reglamento general, el artículo 12 del Reglamento de Normalización Institucional establece lo siguiente:

Artículo 12 Sobre la creación, modificación o derogatoria de un reglamento general

Cuando se trate de una solicitud de creación, modificación o derogatoria de un reglamento general, se procederá de la siguiente manera:

a. Cualquier miembro u Órgano Colegiado de la Comunidad, podrá proponer al Consejo Institucional la iniciativa de creación, modificación o derogatoria de un reglamento general. La iniciativa deberá ser acompañada de un texto base a considerar, así como de su respectiva motivación.

b. El Consejo Institucional designará entre sus comisiones permanentes, el estudio de su procedencia.

c. La Comisión Permanente valorará si considera la propuesta procedente.

c.1. De considerarla procedente:
c.1.1 En el caso de reformas parciales que no impliquen cambios sustanciales en dicha normativa, la Comisión Permanente respectiva podrá dar curso ella misma al trámite de análisis y dictamen.
c.1.2 En cualquier otro caso, la Comisión Permanente conformará una Comisión Ad-hoc y trasladará la propuesta para el análisis y dictamen respectivo.
c.2 De no considerarla procedente, lo comunicará al Consejo Institucional por medio de un oficio, el cual deberá indicar las justificaciones para su decisión.

d. Si la propuesta fue considerada procedente y el análisis lo realizó la misma Comisión Permanente, ésta deberá presentar la propuesta final al pleno del Consejo Institucional para su conocimiento y decisión final.

e. De requerirse una Comisión Ad-hoc, la Comisión Permanente a la que le fue asignado el estudio de la propuesta, deberá integrarla, indicando en el acto el ente técnico del proceso, quien asumirá la coordinación de la misma y su representación será designada por la persona que ejerza la dirección de la dependencia a cargo de liderar el proceso. En el caso de los representantes de las Oficinas de Asesoría Legal y Planificación Institucional, serán designados por las personas que ejerzan su dirección.

f. Recibido el dictamen de la Comisión Ad-hoc, la Comisión Permanente hará un análisis integral del mismo y presentará la propuesta final dictaminada al Pleno del Consejo Institucional, para su conocimiento y decisión final.

6. Sobre las funciones de las Comisiones *ad hoc*, en el marco de la creación, modificación o derogatoria de la normativa con alcance general, el artículo 11 del Reglamento de Normalización Institucional, establece lo siguiente:

Artículo 11 De la Comisión Ad-hoc para el análisis de reglamentos generales

Esta Comisión está integrada por la representación de los entes técnicos o líderes de los procesos que afecta la normativa a modificar, de la Oficina de Planificación Institucional y de la Oficina de Asesoría Legal. Tendrá las siguientes funciones:

a. Velar por el cumplimiento de lo establecido en materia de normalización.
b. Verificar que la propuesta cumpla con el bloque de legalidad vigente.
c. Asegurar el cumplimiento del objetivo que motiva la creación, modificación o derogatoria de la normativa.
d. Ajustar el texto propuesto, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de lo anterior.
e. Rendir dictamen en un plazo de 30 días hábiles a partir de que quede conformada y remitirlo a la Comisión Permanente del Consejo Institucional que la integró. La Comisión Permanente del Consejo Institucional que corresponda podrá ampliar el plazo señalado, cuando lo estime oportuno y conveniente.

7. En la sesión AIR-107-2023 realizada el 27 de setiembre de 2023, la Asamblea Institucional Representativa aprobó la propuesta base conciliada 3-1 referida a la estructura de gobierno de las Áreas Académicas, con lo cual se modificaron los artículos 33, 34, 49, 50, 50 BIS, 50-Bis 1, 50-bis 2, 51, 56 y 59 y se incluyó un artículo 51 bis y un transitorio 10 en el Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica. La parte resolutiva de este acuerdo también incluía los siguientes puntos 4 y 6:

…
4. Solicitar al Consejo de Docencia, al Consejo de Posgrado y al Consejo Institucional que, en el marco de sus competencias, ***realicen los cambios que correspondan a la normativa institucional para que armonice con los cambios aprobados en los artículos del punto número 2 de este acuerdo****.”*
…
6. Solicitar al Consejo Institucional normar los lineamientos mínimos que deben acordar las Escuelas que pretenden crear un Área Académica nueva, así como la forma de proceder cuando hay una manifestación de una Escuela de no continuar participando en un Área Académica o de involucrarse en un Área Académica existente y aquellos aspectos administrativos que faciliten la gobernanza*.* (El resaltado no es del original)

8. Mediante oficio DAIR-184-2023, fechado 29 de setiembre de 2023, la ingeniera Yarima Sandoval Sánchez, en ese entonces presidenta del Directorio de la Asamblea Institucional Representativa, comunicó a la máster María Estrada Sánchez, presidencia del Consejo Institucional, el acuerdo de ese Directorio sobre la propuesta 3-1, aprobada por la AIR-107-2023. El acuerdo mencionado indica:

...
POR TANTO, EL DIRECTORIO DE LA AIR ACUERDA:
Trasladar los puntos 1, 3, 4, 6 y 7 del acuerdo N°3-1, tomado por la Asamblea Institucional Representativa en la sesión ordinaria AIR-107-2023, al Consejo Institucional para la debida implementación de lo aprobado en el quehacer de ese órgano colegiado.
...

9. En la Sesión Ordinaria N.° 3337, artículo 8, del 01 de noviembre de 2023, el Consejo Institucional acordó la creación de una Comisión Especial para que elabore una propuesta que permita al Consejo Institucional atender lo señalado en el punto 6 de la propuesta 3-1, aprobada en la Sesión Ordinaria AIR-107-2023.

10. Mediante oficio EMT-259-2024, fechado el 18 de octubre de 2024, suscrito por la doctora Gabriela Ortíz León, coordinadora de la Comisión Especial encargada de elaborar una propuesta que permita al Consejo Institucional atender lo señalado en el punto 6 de la propuesta 3-1, aprobada en la Sesión Ordinaria AIR-107-2024, dirigido a la ingeniera María Estrada Sánchez, presidencia del Consejo Institucional, entregó el producto encomendado en el acuerdo del Consejo Institucional de la Sesión Ordinaria N.° 3337, artículo 8, del 1 de noviembre de 2023, en atención de los incisos 4 y 6 de la propuesta conciliada 3-1 referida a la estructura de gobierno de las Áreas Académicas.

11. A partir del análisis del producto entregado mediante el oficio EMT-259-2024, se conformó e instaló la Comisión *ad hoc* encargada del estudio de la propuesta de reforma integral del Reglamento para la creación, modificación, traslado o eliminación de unidades en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, lo cual fue comunicado mediante el oficio SCI-1049-2024 con fecha 13 de noviembre de 2024 y oficio SCI-1153-2024 con fecha 16 de diciembre de 2024.

12. Mediante oficio EMT-047-2025, fechado 19 de febrero de 2025, suscrito por la doctora Gabriela Ortíz León, coordinadora de la Comisión *ad hoc* encargada del estudio de la propuesta de reforma integral del Reglamento para la creación, modificación, traslado o eliminación de unidades en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, dirigido al máster Randall Blanco Benamburg, coordinador de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles, solicitó una prórroga al 4 de abril de 2025 para la entrega del producto final encomendado.

13. En el oficio SCI-153-2025 con fecha 26 de febrero de 2025, suscrito por el máster Randall Blanco Benamburg, coordinador de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles, en atención al oficio EMT-047-2025, se comunica el dictamen de la Comisión en el cual se otorga la prórroga solicitada.

14. La Comisión *ad hoc* encargada del estudio de la propuesta de reforma integral del Reglamento para la creación, modificación, traslado o eliminación de unidades en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, mediante oficio EMT-095-

2025 del 3 de abril de 2025 suscrito por la doctora Gabriela Ortíz León, coordinadora de la Comisión *ad hoc*, dirigido al máster Randall Blanco Benamburg, coordinador de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles, remite el dictamen final del producto encomendado.

15. La Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles, en su reunión N.° 891 del 8 de abril de 2025, dictaminó lo siguiente:

Resultando que:

1. *El inciso f del artículo 18 del Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica establece que una de las funciones del Consejo Institucional es aprobar, promulgar y modificar los reglamentos generales necesarios para el funcionamiento del Instituto.*

2. *Los puntos 4 y 6 de la propuesta 3-1, 1 referida a la estructura de gobierno de las Áreas Académicas, aprobada por la Asamblea Institucional Representativa en la Sesión Ordinaria AIR-107-2023, indican:*

   …
   4. *Solicitar al Consejo de Docencia, al Consejo de Posgrado y al Consejo Institucional que, en el marco de sus competencias,* ***realicen los cambios que correspondan a la normativa institucional para que armonice con los cambios aprobados en los artículos del punto número 2 de este acuerdo****.”*

   …
   6. *Solicitar al Consejo Institucional normar los lineamientos mínimos que deben acordar las Escuelas que pretenden crear un Área Académica nueva, así como la forma de proceder cuando hay una manifestación de una Escuela de no continuar participando en un Área Académica o de involucrarse en un Área Académica existente y aquellos aspectos administrativos que faciliten la gobernanza.*

3. *La Comisión Especial, conformada por acuerdo del Consejo Institucional en la Sesión Ordinaria N.º 3337, artículo 8, del 1 de noviembre de 2023 para atender los incisos 4 y 6 de la propuesta conciliada 3-1 referida a la estructura de gobierno de las Áreas Académicas, aprobada por la Asamblea Institucional Representativa en la Sesión Ordinaria AIR-107-2023 del 27 de setiembre de 2023, presentó el producto encomendado mediante el oficio EMT-259-2024. En este oficio se presenta la propuesta de modificar los artículos 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12 y 15, así como la inclusión de los artículos 12 bis y 13 bis, en el Reglamento para la creación, modificación, traslado o eliminación de unidades en el Instituto Tecnológico de Costa Rica.*

4. *A partir del análisis de esta propuesta la Comisión dictamina procedente y conforma la Comisión ad hoc encargada del estudio de la propuesta de reforma integral del Reglamento para la creación, modificación, traslado o eliminación de unidades en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la*

cual entregó su dictamen mediante oficio EMT-095-2025, fechado el 3 de abril de 2025.

Considerando que:

1. *La propuesta de reforma integral del Reglamento para la creación, modificación, traslado o eliminación de unidades en el Instituto Tecnológico de Costa Rica fue inicialmente analizada por esta Comisión y posteriormente ajustada en lo necesario por la Comisión ad hoc (dictamen EMT-095-2025).*

2. *A partir de la revisión del informe de la Comisión ad hoc se han ajustado algunos de los textos con el fin de aportar mayor precisión en los artículos y se han realizado cambios en el fondo del reglamento como los que se detallan a continuación:*

   a. *Cambio en el nombre del reglamento, pasando de "Reglamento para la creación, modificación, traslado o eliminación de unidades en el Instituto Tecnológico de Costa Rica" a "Reglamento para la creación, modificación, traslado o eliminación de subdependencias en el Instituto Tecnológico de Costa Rica", ajustado conforme a lo establecido en el artículo 51 del Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica.*
   b. *Traslado de algunos capítulos para cumplir con lo estipulado en el Reglamento de Normalización Institucional.*
   c. *En el artículo 4, relativo a las etapas para la creación, modificación, traslado, eliminación de una subdependencia, se agrega también la categorización.*
   d. *En las definiciones se agrega también la palabra subdependencia.*
   e. *En el texto normativo, se cambia la palabra "unidad", por "subdependencia" y "escuela" por "dependencia académica".*
   f. *Modificación de la normativa para incorporar el lenguaje inclusivo.*
   g. *Ajuste de las categorías descritas en el Capítulo III, relativo a los tipos de unidades y sus categorías, conforme a las categorías del Manual Descriptivo de Puestos por Competencias del ITCR.*
   h. *Eliminación del primer párrafo del artículo 9 vigente sobre la categorización de las unidades, debido a que las categorías están definidas en el artículo 8. Se destaca que, en caso de crearse una nueva categoría, deberá modificarse el artículo precitado, lo que requiere una revisión integral de esta normativa.*
   i. *Adición de un capítulo titulado: De la creación y modificación de unidades en una dependencia, a partir del artículo 11 del texto normativo.*
   j. *Traslado de los actuales artículos 12 bis y 13 bis a un nuevo capítulo específico sobre áreas académicas. En este nuevo Capítulo VI se incluyen los artículos denominados:*
      - *Artículo 16. De la creación de Áreas Académicas de grado*
      - *Artículo 17. De la creación de áreas académicas de posgrado.*
      - *Artículo 18. De la renuncia de Escuelas a un Área Académica.*
      - *Artículo 19. De la eliminación de un área académica.*

k. *Ubicación del capítulo relativo a las Coordinaciones de las subdependencias posterior al capítulo de áreas académicas.*
l. *Ajuste de la numeración de los artículos para mayor claridad del texto normativo.*
m. *Adición del capítulo de Disposiciones finales en concordancia con el Reglamento de Normalización Institucional.*

3. *Del dictamen de la Comisión ad hoc, es relevante destacar que recomiendan realizar una revisión de las etapas para la creación, modificación, traslado o eliminación de una unidad; las cuales se aplicarán de forma secuencial, según lo indicado en el artículo 4 vigente del Reglamento de creación, modificación, traslado y eliminación de unidades del Instituto Tecnológico de Costa Rica, considerando:*
    - *La clasificación de las subdependencias.*
    - *Adición de la Dirección de Posgrados en la Etapa 1.*
    - *Los cambios en la numeración de artículos con esta modificación de la reglamentación.*

    En la propuesta de reforma las etapas para la creación, modificación, traslado o eliminación de una unidad están referenciadas en el artículo 6.

4. *La presente propuesta de normativa ha superado todas las fases previstas en el Reglamento de Normalización Institucional para el trámite de creación de reglamentos generales.*

5. *La propuesta de Reglamento para la creación, modificación, traslado o eliminación de subdependencias en el Instituto Tecnológico de Costa Rica derogaría el reglamento vigente y daría por atendido a cabalidad, lo referido a:*

    - *Los puntos 4 y 6 del acuerdo de la Asamblea Institucional Representativa tomado en la sesión AIR-107-2023 realizada el 27 de setiembre de 2023, sobre la propuesta base conciliada 3-1 referida a la estructura de gobierno de las Áreas Académicas y comunicado mediante el oficio DAIR-184-2023, del 29 de setiembre de 2023.*

Se dictamina:

a. *Emitir dictamen positivo sobre la propuesta de reforma integral del Reglamento para la creación, modificación, traslado o eliminación de subdependencias en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (vigente), debido a que se ha seguido el proceso establecido institucionalmente para la creación de normativa con alcance general, recibiendo dictamen también favorable desde la Comisión ad hoc sobre aspectos técnicos y legales, y, además, se ajustaron elementos relevantes en el seno de la Comisión de Asuntos Académicos y estudiantiles.*

b. *Recomendar al pleno del Consejo del Consejo Institucional que:*

i. Apruebe el Reglamento para la creación, modificación, traslado o eliminación de subdependencias en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, con el articulado propuesto, el cual considera los aspectos relativos a las áreas académicas y será de acatamiento obligatorio para todas las dependencias institucionales.
ii. Solicite a la Oficina de Planificación Institucional tomar las medidas necesarias para actualizar el Glosario Institucional con las definiciones correspondientes según lo establecido en este reglamento, e informar al 4 de julio de 2025 de lo actuado a la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles.

CONSIDERANDO QUE:

1. Se ha recibido la propuesta de Reglamento para la creación, modificación, traslado o eliminación de subdependencias en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, dictaminada positivamente por la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles, quien además deja indicación en su dictamen que el documento ha seguido el proceso establecido institucionalmente para la creación de normativa con alcance general, recibiendo dictamen también favorable desde la Comisión *ad hoc* sobre aspectos técnicos y legales.

2. La propuesta de modificación integral del Reglamento para la creación, modificación, traslado o eliminación de subdependencias en el Instituto Tecnológico de Costa Rica tiene como objetivo incorporar los aspectos correspondientes a las Áreas Académicas, en atención al acuerdo de la Asamblea Institucional Representativa tomado en la sesión AIR-107-2023 del 27 de setiembre de 2023, sobre la propuesta base conciliada 3-1 referida a la estructura de gobierno de las Áreas Académicas.

3. Con esta propuesta de reforma integral se tendría por derogado el Reglamento para la creación, modificación, traslado o eliminación de unidades en el Instituto Tecnológico de Costa Rica.

4. El Consejo Institucional acoge el análisis realizado por la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles y la propuesta de reforma integral al Reglamento para la creación, modificación, traslado o eliminación de subdependencias en el Instituto Tecnológico de Costa Rica recomendada.

SE ACUERDA:

a. Aprobar el Reglamento para la creación, modificación, traslado o eliminación de subdependencias en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, bajo el contenido que se señala a continuación:

REGLAMENTO PARA LA CREACIÓN, MODIFICACIÓN, TRASLADO O ELIMINACIÓN DE SUBDEPENDENCIAS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.Tipo de reglamento
Este es un reglamento de carácter general.

Artículo 2. Objetivo general
Establecer los requisitos y los mecanismos para crear, modificar, eliminar, trasladar o categorizar subdependencias en la Institución en lo que no esté regulado en el “Reglamento de Centros de Investigación y Unidades Productivas en el Instituto Tecnológico de Costa Rica” o en el “Reglamento de Programas de Producción de Departamentos Académicos del ITCR” y establecer el porcentaje de remuneración que corresponda a quien ejerza la coordinación, según la clasificación de la subdependencia.

Artículo 3. Definiciones

Para efectos de este reglamento se tendrán las siguientes definiciones:

Ámbito de control: Se refiere a la cantidad de personal a cargo que tiene una persona directora de una dependencia o coordinadora de una subdependencia específica.

Categoría de la subdependencia: se refiere a la clasificación de las subdependencias en profesional (categorías 3 y 4), técnica (categoría 2) o auxiliar (categoría 1), a partir de sus características de grado de autoridad, complejidad de funciones, especialización del personal e importancia dentro de la estructura organizacional.

Escisión: Es la separación de una dependencia o subdependencia por poca afinidad o diferencia en sus funciones o actividades.

Especialización funcional: Característica que debe tener una subdependencia al especializarse en la realización de ciertas funciones con el fin de agilizar, ampliar o mejorar la realización de algún servicio o su objetivo.

Evaluación: Proceso de análisis sistemático de un conjunto de criterios o indicadores que permitan de manera objetiva, ser usados como insumos en la toma de decisiones en la creación, modificación, traslado, categorización o eliminación de subdependencias.

Fusión: Reducir o unificar a una sola dos o más subdependencias por afinidad, intereses o agrupaciones.

Gestor: Proponente de la iniciativa de creación, modificación, traslado, eliminación o categorización de una subdependencia: persona rectora, vicerrectora, directora de Campus Tecnológico Local o Centro Académico, de Departamento, Oficina Asesora o la Dirección dependiente de una Vicerrectoría.

Modificación: Corresponde a la fusión, escisión o cambios en la conformación o categorización de la subdependencia.

Nivel de autoridad: Se refiere el alcance para delegar y supervisar funciones y la toma de decisiones.

Nivel de autoridad alto: Grado de autoridad necesario de una subdependencia específica para la toma de decisiones en las funciones de planeación, organización, dirección y control de las actividades de la subdependencia de manera independiente.

Nivel de autoridad bajo: las decisiones dependen directamente de la Dirección de la dependencia a la que pertenece o está adscrita la subdependencia, quien decide y ejecuta el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar. Hace referencia a funciones auxiliares.

Nivel de autoridad intermedio: las decisiones dependen de la Dirección de la dependencia a la que pertenece o está adscrita la subdependencia, de características asistenciales y técnicas, quien decide y ejecuta el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar, por recomendación del encargado de la subdependencia quien ejecuta.

Proceso de evaluación de subdependencias: Se refiere al conjunto de elementos (actividades, objetivo, indicadores, naturaleza, otros), a medir, con base a la metodología definida por la Oficina de Planificación Institucional, para determinar si las condiciones que permitieron crear una subdependencia se mantienen.

Subdependencias: unidades o áreas académicas según lo señalado en el Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica.

Unidad: Forma de la estructura organizativa que concentra las funciones especializadas de: planeación, organización, dirección y control de las diversas actividades relacionados con la docencia, investigación y extensión y de apoyo a la academia.

Artículo 4. Alcance

El alcance de este reglamento es de tipo general y es de acatamiento obligatorio para todas las dependencias que requieran crear, modificar, trasladar, eliminar o categorizar una subdependencia.

CAPÍTULO II. DE LAS POTESTADES Y ETAPAS PARA LA CREACIÓN, MODIFICACIÓN, TRASLADO, ELIMINACIÓN O CATEGORIZACIÓN DE UNA SUBDEPENDENCIA

Artículo 5. Potestad para la aprobación, creación, modificación, traslado, eliminación o categorización de una subdependencia

La creación, modificación, traslado, eliminación o categorización de subdependencias es potestad exclusiva del Consejo Institucional. El acuerdo correspondiente se tomará a partir de una propuesta elaborada por una comisión permanente de ese órgano, que tome como insumo un estudio técnico elaborado por la Oficina de Planificación Institucional y la consulta previa al Consejo de Vicerrectoría, cuando corresponda.

Artículo 6. De las etapas para la creación, modificación, traslado, eliminación o categorización de una subdependencia

La creación, modificación, traslado, eliminación o categorización de una subdependencia se decidirá mediante la aplicación secuencial de las etapas establecidas por el Consejo Institucional, como anexo a este reglamento.

CAPÍTULO III. SOBRE LOS TIPOS DE UNIDADES Y SUS CATEGORÍAS

Artículo 7. De los tipos de unidades

En los departamentos académicos solo se podrán crear unidades según los tipos indicados en el Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En las otras dependencias institucionales se podrán crear unidades profesionales, técnicas o auxiliares, de acuerdo con las necesidades de la dependencia solicitante y la conveniencia institucional.

Artículo 8. De la adscripción

Una unidad podrá estar adscrita al Consejo Institucional, a la Rectoría, a una Vicerrectoría, a la Dirección de un Campus Tecnológico Local, a la Dirección de un Centro Académico, a una Oficina Asesora o Asistencial de la Rectoría, a las Direcciones de la Vicerrectoría de

Investigación o Extensión, a una Escuela, a un Departamento de apoyo académico o a la Auditoría Interna.

Artículo 9. Categorías de unidades

Las unidades serán clasificadas en cuatro categorías, atendiendo principalmente a su ámbito de acción, el nivel de complejidad de sus funciones y el grado de autoridad e importancia dentro de la estructura organizativa. Las categorías son las siguientes:

a. **Unidad de categoría 1:** es una unidad auxiliar, con un nivel de autoridad bajo, con funciones auxiliares y de complejidad laboral baja, muy dependiente de la Dirección, quien decide y ejecuta. Quien ejerza la coordinación tendrá funciones únicamente de supervisión. Se considera que más de la mitad del personal es de las categorías 112, 113, 114 y 115 descritas en el Manual Descriptivo de Puestos por Competencias del ITCR.

b. **Unidad de categoría 2:** es una unidad técnica con un nivel intermedio de autoridad, con funciones asistenciales y técnicas, cuyo poder de decisión sobre sus propias actividades está muy relacionado con la Dirección. Se considera que más de la mitad del personal se ubica en las categorías 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125 descritas en el Manual Descriptivo de Puestos por Competencias del ITCR. En esta categoría se ubicarán las Unidades Productivas y Programas Productivos de las Escuelas y otros Departamentos Académicos.

c. **Unidad de categoría 3:** es aquella unidad profesional con un nivel complejo cuyo ámbito de control profesional permite la toma de decisiones por parte de la persona que coordina. Se considera que más de la mitad del personal se ubica en las categorías 130 del Manual Descriptivo de Puestos por Competencias del ITCR. En esta categoría se ubican las unidades que desarrollan programas de Bachillerato, Licenciatura, Cursos de Servicio y los Centros de Investigación que no tengan la condición de Centros Consolidados.

d. **Unidad de categoría 4:** es una unidad profesional con un alto nivel de complejidad y acción estratégica hacia la academia. Esta categoría incluye a las unidades que desarrollan programas de posgrado y a los Centros de Investigación consolidados.

Artículo 10. De la modificación de la categoría de las unidades

La categoría de una unidad podrá ser modificada cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias:

a. Cambio en la naturaleza de las funciones realizadas por la unidad.

b. Cambio en el nivel de formación o especialización de los puestos de la unidad para el cumplimiento de los objetivos de ésta.

El estudio técnico para fundamentar el cambio de categoría de una unidad se realizará por solicitud del Consejo de Departamento o jefatura, cuando no exista el Consejo, o de la persona Rectora, en cualquier caso.

Artículo 11. Homologación de unidades académicas

En el caso de las unidades profesionales de departamentos académicos, su categoría (tres o cuatro) se establece con la creación de la unidad. De igual manera, en caso de que exista alguna unidad en un departamento académico creada con el mismo propósito que la unidad que se pretende categorizar, no será necesario el estudio técnico, sino que se asignará la categoría de la unidad existente por homologación.

CAPÍTULO IV. DE LA CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE UNIDADES EN UNA DEPENDENCIA

Artículo 12. Del Informe de creación o modificación de una unidad en una dependencia diferente a un Departamento Académico

Para la creación o modificación de una unidad en dependencias que no sean Departamentos Académicos, el gestor deberá aportar la siguiente información:

a. Justificación académica o administrativa, según corresponda, de la creación o modificación de la unidad que sustente la necesidad de una especialización funcional de las actividades de la dependencia.

b. Las variaciones presentadas en los servicios prestados durante un período de tres años.

c. Tipo de usuario, sus demandas (especialización del servicio: trámite, asesoramiento técnico o de estudios e investigación) y cobertura (población interna o externa).

d. Cantidad de plazas adscritas a la unidad y sus características, jornada y categoría del personal

e. Tendencia del presupuesto (operación, equipamiento, infraestructura y personal) según plazo definido.

f. Descripción de las actividades de la Unidad, de la coordinación y de la dirección.

En ningún caso se aceptará la total distribución de funciones del Departamento entre diferentes coordinaciones o unidades.

Artículo 13. Creación de unidades académicas

Para la creación de unidades en un departamento académico se debe cumplir con alguna de las siguientes condiciones:

a. Imparta más de una carrera, una de las cuales está a cargo de la persona directora.

b. Tenga a cargo uno o más programas de posgrado.

c. Existan diferentes énfasis o grados en la carrera, desconcentración geográfica (se impartan en Campus Tecnológicos o Centros Académicos diferentes) u horarios completamente diferenciados entre los énfasis o grados impartidos.

d. Haya al menos 40 estudiantes haciendo su Práctica de Especialidad al año y un promedio semestral de al menos 10 grupos en cursos de servicio.

e. Haya al menos 20 estudiantes al año haciendo su Práctica de Especialidad y un promedio semestral de al menos 40 grupos de servicio.

f. La dependencia académica imparta cursos de servicio y que imparta una carrera en la que, para impartir sus cursos, requiere al menos de cuatro tiempos completos.

g. La dependencia académica realice algunas de sus actividades separadamente, obedeciendo a un principio de especialización funcional según categorización.

h. Cumpla con los requisitos establecidos en el “Reglamento de centros de investigación y unidades productivas en el ITCR o Reglamento de programas de producción de departamentos académicos del ITCR” cuando se trate de este tipo de unidades.

Artículo 14. De la eliminación de la unidad

La eliminación de unidades procederá cuando se dejen de cumplir las condiciones que justificaron su creación, según conveniencia institucional y recomendación técnica por parte de la Oficina de Planificación Institucional. La iniciativa para la eliminación podrá ser del Consejo Institucional, de la Rectoría o de la persona superior jerárquica de quien coordina la Unidad, si no existe Consejo de la Dependencia, o del Consejo de la Dependencia según corresponda.

CAPÍTULO V. EVALUACIÓN DE TODAS LAS SUBDEPENDENCIAS EXISTENTES

Artículo15. Del responsable de la evaluación

La Oficina de Planificación Institucional podrá realizar una evaluación de la subdependencia para determinar si las condiciones que permitieron su creación se mantienen, según los procesos de planificación y de control interno.

Se excluye de esta evaluación los Centros de Investigación que serán evaluados de acuerdo con el mecanismo que defina el Reglamento de Creación de Centros de Investigación y Programas Productivos.

CAPÍTULO VI. DE LAS ÁREAS ACADÉMICAS

Artículo 16. De la creación de Áreas Académicas de grado

Para la creación de áreas académicas de grado, será necesario cumplir, al menos, con las siguientes condiciones, las cuales deberán quedar plasmadas en los lineamientos generales de creación y funcionamiento del área académica, y que deberán ser aprobadas por los Consejos de todas las Escuelas involucradas:

a. **Sobre la gestión del talento humano:**

i. Definir cuál dependencia administrará cada una de las plazas de apoyo a la academia.

ii. Definir cuántas plazas administrativas y docentes requiere el programa para iniciar su operación y la proyección a corto y mediano plazo y en qué escuelas estarán asignadas.

iii. Definir el mecanismo de conformación de las comisiones de selección de personal que requiera el área académica.

iv. Definir los mecanismos de coordinación, entre cada escuela y el área académica, para la asignación del personal requerido en cada periodo lectivo, que aseguren la buena operación del programa.

b. **Sobre la organización interna:**

i. Definir cuál va a ser el procedimiento de rotación para adscripción del área académica a una de las escuelas proponentes, considerando plazos, dinámica de rotación, plan anual de trabajo, entre otras.

ii. Definir el procedimiento de rotación de la coordinación del área académica.

iii. Definir las competencias y responsabilidades del Consejo de Área Académica y del Consejo de cada una de las Escuelas en cuanto a gestión académico-administrativa, considerando lo señalado en el Estatuto Orgánico del ITCR y las implicaciones de presupuesto, infraestructura y talento humano, entre otras.

iv. Definir el mecanismo de conformación de comisiones permanentes y no permanentes para asuntos específicos del área académica.

v. Establecer los criterios para garantizar el cuórum estructural cuando alguna de las personas representantes de las escuelas no pueda continuar en el consejo de área académica.

vi. Establecer los criterios de continuación o cierre del área en caso de que alguna de las escuelas participantes decida separarse del Área Académica.

vii. Establecer los criterios para inclusiones de nuevas escuelas en el Área Académica.

c. **Sobre la gestión académica:**

i. Definir cuáles escuelas serán responsables de cada curso en el plan de estudios ofrecido y el mecanismo para asignar la responsabilidad ante nuevos cursos que se generen como resultado de un rediseño curricular.

ii. Definir procedimientos internos de trámites para las diferentes tipologías de cambios curriculares.

d. **Sobre los recursos presupuestarios e infraestructura:**

i. Definir el presupuesto requerido por el área académica y el aporte de cada Escuela para atender necesidades del plan.

ii. Definir criterios para el uso de laboratorios y activos administrados por cada escuela por parte del área académica.

iii. Definir los mecanismos de coordinación entre cada escuela y el área académica, para la asignación de recursos, que aseguren la adecuada operación del programa.

iv. Cualquier otra condición por considerar en el área académica particular.

Artículo 17. De la creación de Áreas Académicas de posgrado

Para la creación de áreas académicas de posgrado, debe considerarse que todas las plazas administrativas y docentes, una vez aprobadas por el Consejo Institucional, estarán adscritas a la Dirección de Posgrados, la cual las administrará y asegurará al área dichas plazas para su funcionamiento.

Será necesario cumplir, al menos, con las siguientes condiciones, las cuales deberán quedar plasmados en los lineamientos generales de creación y funcionamiento del área académica, y deberán ser aprobadas por los Consejos de todas las Escuelas involucradas:

a. **Sobre la gestión del talento humano:**

i. Definir cuántas plazas administrativas y docentes requiere el programa por parte del TEC para iniciar su operación y la proyección a corto y mediano plazo.

ii. Definir los mecanismos de selección de personal que requiera el área académica.

iii. Establecer las políticas de uso de las plazas asignadas, en caso de que temporalmente no se utilicen, para lograr el máximo aprovechamiento en los posgrados.

b. **Sobre la organización interna:**

i. Definir el procedimiento de rotación de la coordinación del área entre las dependencias que participan en ella.

ii. Establecer las competencias y responsabilidades del Consejo de Área Académica, del Consejo de cada una de las Escuelas, y del Consejo de Posgrado en cuanto a gestión académico-administrativa, considerando lo señalado en el Estatuto Orgánico del ITCR y las implicaciones de presupuesto, infraestructura y talento humano, entre otras.

iii. Definir los criterios para la conformación de comisiones permanentes y no permanentes para asuntos específicos del área académica y la instancia que aprueba dicha conformación

iv. Establecer los criterios de continuación o cierre del área en caso de que alguna de las Escuelas involucradas decida separarse del Área Académica

v. Establecer los criterios para garantizar el cuórum estructural cuando alguna de las personas representantes de las escuelas no pueda continuar en el consejo de área académica.

vi. Establecer los criterios para inclusiones de nuevas escuelas en el Área Académica.

c. **Sobre la gestión académica:**

i. Se deben acatar las directrices emitidas por el Consejo de Posgrado con respecto a los procedimientos internos de trámites para las diferentes tipologías de cambios curriculares en los programas del área académica.

d. **Sobre los recursos presupuestarios e infraestructura:**

i. Definir el presupuesto requerido por el área académica y el aporte de cada escuela y la Dirección de Posgrado para atender necesidades del programa.

ii. Definir criterios para el uso de laboratorios y activos administrados por cada Escuela y Dirección de Posgrado en el área académica.

iii. Cualquier otra condición a considerar en el Área Académica en particular.

Artículo 18. De la renuncia de Escuelas a un Área Académica

En caso de que un Consejo de Escuela decida que ésta debe dejar de formar parte de un Área Académica, debe elevar la justificación de su decisión ante el Consejo de Docencia (en caso de Áreas Académicas de grado) o al Consejo de Posgrado (en caso de Áreas Académicas de posgrado), señalando los acuerdos tomados con las otras Escuelas de modo que se respete lo indicado al respecto en los lineamientos de creación. El Consejo de Docencia o de Posgrado, según corresponda, emitirá su criterio y lo elevará al Consejo Institucional junto con la solicitud de la Dependencia para el análisis respectivo.

En caso de que en el área participen solamente dos dependencias, cuando una presenta su solicitud de renuncia, el Consejo Institucional valorará la posibilidad de crear una unidad interna en la otra dependencia para que administre el plan de estudios correspondiente, la participación de una nueva dependencia en el área, la creación de una nueva dependencia, la eliminación del área u otra alternativa a conveniencia del Instituto.

Cuando participen tres o más dependencias en un área y una de ellas acuerde solicitar la renuncia, el Consejo Institucional podrá acordar que el área continúe funcionando con la participación de las demás dependencias u otra alternativa a conveniencia del Instituto.

En todo caso, el Consejo Institucional deberá definir un periodo de transición para la nueva conformación del área o de la unidad procurando la menor afectación posible para las personas involucradas.

Artículo 19. De la eliminación de un Área Académica

La eliminación de áreas académicas deberá acordarla el Consejo Institucional y procederá cuando se dejen de cumplir las condiciones que justificaron su creación, según conveniencia institucional y recomendación técnica por parte de la Oficina de Planificación Institucional. La iniciativa para la eliminación podrá ser del Consejo Institucional, de la Rectoría, del Consejo de Docencia o Consejo de Posgrado, según corresponda, o de los Consejos de las dependencias que participan en el Área.

CAPÍTULO VII. SOBRE LAS COORDINACIONES DE LAS SUBDEPENDENCIAS

Artículo 20. Sobre la elección de la persona coordinadora

Las subdependencias tendrán una coordinación cuya elección se realizará de acuerdo con los mecanismos establecidos en el Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica y según la reglamentación que apruebe el Consejo Institucional.

Artículo 21. Requisitos para la coordinación de una subdependencia

La persona electa para ejercer la coordinación de una subdependencia deberá reunir, de manera previa a su elección los siguientes requisitos:

a. Tener nombramiento a tiempo indefinido.

b. Laborar para la Institución con jornada de al menos medio tiempo.

c. Haber laborado, a medio tiempo o más, por lo menos dos años para el Instituto.

d. Contar con al menos dos años de experiencia comprobada, en labores relacionadas con la actividad de la subdependencia o con labores administrativas.

e. Contar con una formación académica de acuerdo con la categoría de la subdependencia, según se indica a continuación:

    i. Formación académica mínima para ser persona coordinadora de subdependencia de categoría 1: Haber obtenido el título de “Técnico Medio” reconocido por el Ministerio de Educación Pública, o de 40 a 60 créditos universitarios.

    ii. Formación académica mínima para ser persona coordinadora de subdependencia de categoría 2 (administrativa): Haber obtenido el grado asociado (Título de diplomado), o bien de 60 a 90 créditos, en una carrera universitaria, debidamente aprobada por el CONARE o por el CONESUP o reconocido por una universidad pública.

    iii. Formación académica mínima para ser persona coordinadora de subdependencia de categoría 2 (académica): Haber obtenido título universitario, con el grado mínimo de licenciatura, en una carrera universitaria, debidamente aprobada por el CONARE o por el CONESUP o reconocido por una universidad pública.

iv. Formación académica mínima para ser persona coordinadora de subdependencia de categoría 3 (administrativa): Haber obtenido título universitario, con el grado mínimo de bachiller, en una carrera universitaria, debidamente aprobada por el CONARE o por el CONESUP o reconocido por una universidad pública.

v. Formación académica mínima para ser persona coordinadora de subdependencia de categoría 3 (académica): Haber obtenido título universitario, con el grado mínimo de Licenciatura, en una carrera universitaria, debidamente aprobada por el CONARE o por el CONESUP o reconocido por una universidad pública.

vi. Formación académica mínima para ser persona coordinadora de subdependencia de categoría 4: Haber obtenido título universitario, con al menos el grado máximo que se ofrece en el programa académico correspondiente, en una carrera universitaria, debidamente aprobada por el CONARE o por el CONESUP o reconocido por una universidad pública, en el caso de las Subdependencias que imparten programas de posgrado y de doctorado en el caso de los Centros de Investigación consolidados.

f. No presentar sanciones en el expediente personal en los últimos 2 años.

g. Haber obtenido una evaluación del desempeño anual mayor o igual a la parte entera del promedio del departamento en que se realiza la elección menos 5 unidades, en escala de 0 a 100, según la información correspondiente a los últimos dos años, que oficialmente se tenga disponible.

h. No presentar sanciones en el expediente personal por acoso sexual, acoso laboral o discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género, ni haber cometido alguna falta en otro ámbito que le implicara una suspensión por más de veinte días hábiles, o sustitutiva del despido. En todos los casos en el periodo de los dos años previos a formalizar la postulación al cargo.

Artículo 22. Requisitos para la coordinación de un área académica

La persona electa para ejercer la coordinación de un área académica deberá reunir, de manera previa a su elección, los requisitos señalados en el Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa

Rica, el Manual Descriptivo de Puestos por Competencias del ITCR u otra normativa institucional.

Artículo 23. Compromiso de la persona electa como coordinadora

La persona que resulte electa como coordinadora de una subdependencia deberá aprobar, durante el primer año de su primera gestión, el plan de capacitación para coordinadores establecido por el Departamento de Gestión del Talento Humano.

Artículo 24. Asignación de plaza para la coordinación

La coordinación de unidades es un recargo que no implica necesariamente la creación de una plaza exclusiva para esas funciones. En caso de que se requiera de la creación de una plaza para la coordinación, se presentará la solicitud, debidamente justificada, al Consejo Institucional para su aprobación.

La coordinación de un área académica se realizará con dedicación de al menos medio tiempo completo según acuerdo del Consejo Institucional.

Artículo 25. Remuneración de la Coordinación

La persona coordinadora de una subdependencia tendrá una remuneración por el desempeño de ese cargo de un 15% a un 30%, calculado sobre la base de dirección.

En el caso de las unidades dependerá de la categoría que corresponda, según lo indicado en la siguiente tabla:

TIPO DE UNIDAD	PORCENTAJE SOBRE EL SALARIO BASE
1	15
2	20
3	25
4	30

Las personas coordinadoras de áreas académicas y de los Programas Productivos tendrán un reconocimiento salarial del 30% calculado sobre la base de dirección.

CAPÍTULO VIII. DISPOSICIONES FINALES

Artículo 26. De los casos no previstos

Los casos no previstos en este reglamento serán resueltos por el Consejo Institucional.

Artículo 27. De la revisión del reglamento

La Rectoría será responsable de realizar la revisión del presente reglamento cuando lo estime necesario y proponer al Consejo Institucional los argumentos razonados para la toma de acuerdos, en las fechas de calendarización definidas institucionalmente para ese objetivo.

Artículo 28. De la vigencia

Este reglamento rige a partir de su aprobación por parte del Consejo Institucional y su publicación en la Gaceta Institucional y se deroga a partir de esta misma fecha el Reglamento para la creación, modificación, traslado o eliminación de unidades en el Instituto Tecnológico de Costa Rica.

CAPÍTULO IX. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 29. Transitorio único

En un plazo de seis meses calendario, las áreas académicas de posgrado vigentes o en trámite, realizarán una actualización de los lineamientos o procedimientos para incluir escuelas nuevas o renuncia de alguna de las escuelas a las áreas para su respectiva aprobación por parte del Consejo Institucional.

b. Solicitar a la Oficina de Planificación Institucional tomar las medidas necesarias para actualizar el Glosario Institucional con las definiciones correspondientes según lo establecido en este reglamento, e informar al 4 de julio de 2025 de lo actuado a la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles.

c. Indicar, que contra este acuerdo este acuerdo podrá interponerse recurso de revocatoria ante este Consejo o de apelación ante la Asamblea Institucional Representativa, en el plazo máximo de cinco días hábiles, o los extraordinarios de aclaración o adición, en el plazo de diez días hábiles, ambos posteriores a la notificación del acuerdo. Por así haberlo establecido la Asamblea Institucional Representativa, es potestativo del recurrente interponer ambos recursos o uno solo de ellos, sin que puedan las autoridades recurridas desestimar o rechazar un recurso, porque el recurrente no haya interpuesto el recurso previo.

ACUERDO FIRME

La discusión de este punto consta en el archivo digital de la Sesión Ordinaria N.° 3406.

ARTÍCULO 10. Modificación del acuerdo de la Sesión Ordinaria N.° 3394, artículo 12, del 26 de enero de 2025, a fin de dejar sin efecto lo dispuesto en el inciso b, relacionado al cambio del título de "Máster en Computación con énfasis en Ciencias de la Computación" por "Máster en Ciencia de la Computación" (Atención oficio MC-052-2025) ***(A cargo de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles)***

El señor Randall Blanco Benamburg presenta la propuesta denominada: "Modificación del acuerdo de la Sesión Ordinaria N.° 3394, artículo 12, del 26 de enero de 2025, a fin de dejar sin efecto lo dispuesto en el inciso b, relacionado al cambio del título de "Máster en Computación con énfasis en Ciencias de la Computación" por "Máster en Ciencia de la Computación" (Atención oficio MC-052-2025)", a cargo de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles (adjunta al acta de esta sesión).

La señora María Estrada Sánchez somete a votación la propuesta, quedando aprobada con el siguiente resultado: 11 votos a favor, 0 votos en contra. Se somete a votación la firmeza del acuerdo y es aprobada con: 11 votos a favor, 0 votos en contra.

Por lo tanto, el Consejo Institucional:

RESULTANDO QUE:

1. En atención al artículo 96 del Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica, las Políticas Generales aprobadas por la Asamblea Institucional Representativa constituyen la base para la toma de decisiones del Consejo Institucional; en lo conducente, interesan las que se indican a continuación:

> ***1. Docencia.*** *Se desarrollarán programas académicos en las áreas de Ciencia y Tecnología desde una perspectiva humanística e integral, en concordancia con los fines, principios y ejes de conocimiento estratégicos que aporten al desarrollo sostenible e inclusivo en procura de mejorar la calidad de vida de las personas.*
>
> ***3. Investigación.*** *Se desarrollarán programas y proyectos de investigación y desarrollo con un enfoque científico-tecnológico, y de investigación educativa y sociocultural, conforme a los fines, principios, valores y ejes de conocimiento estratégicos, para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, la competitividad del país o la generación de conocimiento.*
>
> ***5. Gestión Institucional.*** *Se fomentarán las mejores prácticas de gestión para una efectiva operación de los procesos, bajo principios de*

innovación y excelencia, con la incorporación de plataformas eficientes de TIC, orientadas al cumplimiento de los fines y principios institucionales para lograr la satisfacción de los usuarios de la Institución. (Aprobadas en Sesión AIR-99-2021 del 16 de noviembre 2021, publicadas en Gaceta N.° 851 del 21 de noviembre de 2021 y modificadas en AIR-107-2023 del 27 de setiembre de 2023, publicadas en Gaceta N.° 1143 del 03 de octubre de 2023)

2. El Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica señala como funciones y potestades del Consejo Institucional, en lo que interesa, lo siguiente:

Artículo 18

Son funciones del Consejo Institucional:
…
d. Decidir, previa consulta al Consejo de Vicerrectoría respectivo, sobre la creación, modificación, traslado, o eliminación de carreras y programas del Instituto
…

3. Mediante oficio DP-133-2024, firmado el 22 de noviembre de 2024 por el doctor Luis Alexander Calvo Valverde, director de la Dirección de Posgrado, dirigido a la máster Raquel Lafuente Chryssopoulos, entonces coordinadora de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles, se comunicó el acuerdo del Consejo de Posgrado de la sesión DP-07-2024, artículo 8 del 22 de noviembre de 2024, referido a: “Aprobación cambio de nombre de la Maestría en Computación con énfasis en Ciencias de la Computación a Maestría en Ciencia de la Computación”, del cual se extrae lo siguiente:

…
RESULTANDO QUE:

1. *La Maestría en Computación con énfasis en Ciencias de la Computación y la Maestría en Computación con énfasis en Sistemas de Información, fueron acreditadas por primera vez por SINAES en Setiembre, 2017.*
2. *En el año 2018, como parte del proceso de autoevaluación y del compromiso de mejoras de acreditación, se decidió hacer un cambio de nombre en el énfasis en Sistemas de Información y después de un análisis riguroso que hicieron los compañeros en ese entonces, se solicitó ante CONARE el cambio de nombre de Maestría en Computación con énfasis en Sistemas de Información a Maestría en Gerencia en Tecnologías de Información (comunicado del Consejo Nacional de Rectores CNR-353-2018).*
3. *La comisión de gestión curricular de la Maestría en Computación con énfasis en Ciencias de la Computación, integrada por los profesores Dr. Saúl Calderón Ramírez, Dr. Mario Chacón Rivas y Dr. Esteban Meneses Rojas, analizó la situación del nombre de la maestría en Computación con énfasis en Ciencias de la Computación y elevó una propuesta de*

cambio de nombre al Consejo de Unidad de Posgrado de Computación para eliminar la palabra énfasis y ajustarlo para mayor claridad.

4. *En la Sesión Ordinaria N°07-2024 del Consejo de la Unidad de Posgrado en Computación, celebrada el miércoles 26 de junio del año en curso, Artículo N°6. Cambio de nombre de la maestría en Computación con énfasis en Ciencias de la Computación a "Maestría en Ciencia de la Computación", se acordó "Aprobar el cambio de nombre de la Maestría en Computación con Énfasis en Ciencias de la Computación a Maestría en Ciencia de la Computación". Acuerdo firme.*
5. *Adicionalmente, se hizo consulta a SINAES respecto a alguna eventual afectación del cambio de nombre en relación con la acreditación y con el proceso de reacreditación. De acuerdo con la respuesta via [sic] correo electrónico recibida de parte de la MSc. Juana Castro Tato, Gestora de Evaluación y Acreditación del SINAES, con fecha 22 de agosto del presente: "no es la primera vez que se presenta esta situación según la cual se modifica el cambio de nombre de alguna carrera acreditada y, en general, si está justificado como usted indica me parece que no habría problema. Sin embargo, se hace necesario una nota oficial …" (se adjunta copia de correo electrónico con respuesta del SINAES).*

CONSIDERANDO QUE:

Luego del cambio de nombre del énfasis en Sistemas de Información a Maestría en Gerencia en Tecnologías de la Información, la Maestría en Computación quedó con solamente un énfasis, el de Ciencias de la Computación, lo cual puede causar confusión, ya que el nombre con el calificativo "énfasis" da la idea de que existen otros énfasis.

a. *El cambio de nombre es importante para tener un nombre pertinente a la oferta.*
b. *El cambio de nombre no afecta el objeto de estudio.*
c. *El cambio de nombre no afecta el perfil.*
d. *El cambio de nombre es necesario para evitar la confusión con respecto a la idea de que la Maestría ofrece varios énfasis.*
e. *Como compromiso de la acreditación del año 2017, se llevó a cabo la reforma curricular de la Maestría en Computación con énfasis en Ciencias de la Computación, la cual entró en vigor a partir del II semestre, 2020. Desde esa aprobación en el 2020, solamente se han incorporado nuevos cursos en el bloque de electivas; como lo son: Aprendizaje Automático, Realidad Virtual, Optimización y Programación Numérica y Procesamiento de Lenguaje Natural. Se adjunta le malla curricular.*
f. *Es importante resaltar el papel de los cursos electivos, ya que ha sido un mecanismo positivo y valioso que facilita mantener el plan de estudios actualizado, ofreciendo nuevos cursos a la luz del dinamismo de los avances en el campo de la Computación. Además, permite a los estudiantes que así lo deseen, profundizar sus conocimientos en alguna subdisciplina de la Ciencia de la Computación (por ejemplo, en inteligencia artificial, al escoger cinco electivas de las que el Programa ofrece en esta subdisciplina).*

g. Se adjunta la respuesta por parte de SINAES, donde se sintetiza que, no tiene afectación si se modifica el nombre de alguna carrera acreditada y en general si está justifica.
h. El CEDA, mediante oficio CEDA-481-2024, comunica el Aval positivo en el dictamen con relación a la solicitud Cambio de nombre Maestría en Computación con énfasis en Ciencias de la Computación a Maestría en Ciencia de la Computación (se adjunta oficio).

Por lo anterior:

SE ACUERDA:

Aprobar el cambio de nombre de la Maestría en Computación con énfasis en Ciencias de la Computación a Maestría en Ciencia de la Computación
…

4. El Consejo Institucional aprobó en la Sesión Ordinaria N.° 3394, artículo 12 del 26 de enero de 2025, lo siguiente:

…
SE ACUERDA:

a. *Aprobar el cambio de nombre de la "Maestría en Computación con énfasis en Ciencias de la Computación" a "Maestría en Ciencia de la Computación".*

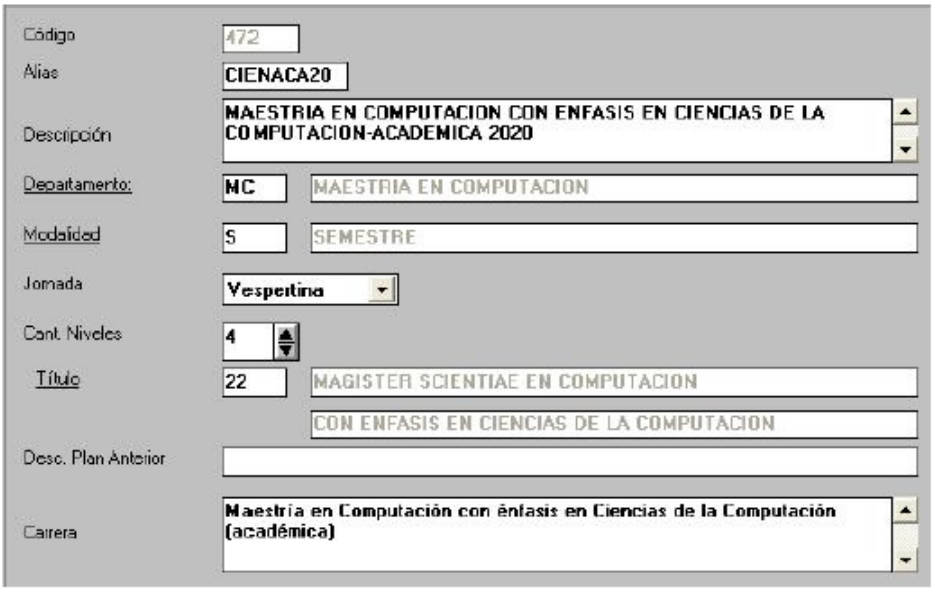
b. Aprobar el cambio del título de "Máster en Computación con énfasis en Ciencias de la Computación" por el título de "Máster en Ciencia de la Computación".
… (El resaltado no es del original)

5. El artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública establece que "en cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos".

6. Mediante oficio MC-052-2025 con fecha 21 de abril de 2025, suscrito por la doctora Lilliana Sancho Chavarría, coordinadora de la Unidad de Posgrado en Computación, dirigido a la máster María Estrada Sánchez, presidencia del Consejo Institucional, con copia al máster Randall Blanco Benamburg, coordinador de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles, se solicita la rectificación del acuerdo de la Sesión Ordinaria N.° 3394, artículo 12 del 26 de enero de 2025, respecto al título otorgado, a raíz del cambio de nombre de "Maestría en Computación con énfasis en Ciencias de la Computación" a "Maestría en Ciencia de la Computación". En el oficio mencionado, se señala lo siguiente:

…

El pasado 8 de abril, en conversación con la Mag. Liseth Montero Arroyo, del DAR, señaló que al parecer existía una inconsistencia en el acuerdo del CI, comunicado con el oficio SCI-040- 2025, debido a que el nombre señalado ***al posgrado en el título no corresponde a los registros del Departamento de Admisión y Registro****. Debo indicar que cuando conocí el acuerdo del CI me parecía lógico que se indicara el título de Master en Ciencia de la Computación, pues es coherente con el nuevo nombre. Sin embargo, según información del DAR,* ***el título que reciben actualmente los graduados de la Maestría en Computación con énfasis en Ciencias de la Computación es Magister Scientiae en Computación****, por ser una maestría académica, como se muestra en la siguiente figura del sistema del DAR:*



De acuerdo con el procedimiento establecido, mediante el oficio R-321-2025 "Solicitud de trámite de cambio de nombre de la Maestría en Computación", la Rectoría solicitó al Dr. William Delgado, director del CEDA, el trámite correspondiente ante la División Académica, OPES CONARE, esto dado que es un cambio tipificado como III. El Dr. Delgado observó que la ***aprobación del CI incluyó, además del cambio de nombre de la maestría, el nombre del título a otorgar; sin embargo, la aprobación del Consejo de Unidad de Posgrado, el acuerdo del Consejo de Posgrado, la solicitud al CEDA y el aval positivo en el dictamen del CEDA hacían referencia exclusivamente al cambio de nombre de la maestría****. Según indica el Dr. Delgado, corresponde primero hacer el trámite de cambio de nombre ante la División Académica OPES-CONARE, y posteriormente, con el aval respectivo de esa División, que se tramitaría a lo interno de la institución el respectivo cambio en el título en caso de que corresponda, considerando que es una maestría académica.* ***Es importante destacar que en el ITCR se otorga el título de Master Scientiae a las maestrías académicas.***

Por lo anterior, con toda consideración, me permito solicitar la rectificación del acuerdo… (El resaltado no es del original)

7. La Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles en su reunión N.º 893 del 29 de abril de 2025, dictaminó lo siguiente:

Resultando que:

1. *El acuerdo del Consejo de Posgrado comunicado mediante el oficio DP-133-2024 se refería al cambio de nombre de la "Maestría en Computación con énfasis en Ciencias de la Computación" a "Maestría en Ciencia de la Computación".*

2. *El acuerdo tomado por el Consejo Institucional en la Sesión Ordinaria N.º 3394, artículo 12, incluyó, además del cambio de nombre de la Maestría, el cambio del nombre del título otorgado.*

3. *Mediante oficio MC-052-2025, fechado 21 de abril de 2025, suscrito por la doctora Lilliana Sancho Chavarría, coordinadora de la Unidad de Posgrado en Computación, solicita la rectificación del acuerdo de la Sesión Ordinaria N.º 3394, artículo 12, específicamente en lo relativo al cambio del título de "Máster en Computación con énfasis en Ciencias de la Computación" por el título de "Máster en Ciencia de la Computación".*

4. *En el oficio mencionado se indica que, de acuerdo con el procedimiento establecido, el oficio R-321-2025 relativo a la "Solicitud de trámite de cambio de nombre de la Maestría en Computación", la aprobación del Consejo de Unidad de Posgrado, el acuerdo del Consejo de Posgrado, la solicitud al CEDA y el aval positivo en el dictamen del CEDA hacían referencia exclusivamente al cambio de nombre de la maestría y no al cambio del nombre del título otorgado.*

Considerando que:

1. *Actualmente las personas graduadas de la Maestría en Computación con énfasis en Ciencias de la Computación obtienen el título de Magister Scientiae en Computación, por ser una maestría académica.*

2. *En el acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N.º 3394, artículo 12, del 26 de enero de 2025, el Consejo Institucional aprobó el cambio del nombre de la "Maestría en Computación con énfasis en Ciencias de la Computación" a "Maestría en Ciencia de la Computación". Y adicionalmente, aprobó el cambio del título otorgado de "Máster en Computación con énfasis en Ciencias de la Computación" por "Máster en Ciencia de la Computación" a partir de una consulta realizada por la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles a la Coordinadora de la Unidad de Posgrado de la Escuela de Ingeniería en Computación; sin embargo, este último cambio no fue solicitado por dicha Unidad ni avalado por el Consejo de Posgrado, dado que no corresponde tramitarlo en esta etapa del proceso.*

3. *El trámite que corresponde realizar en primera instancia es el cambio de nombre ante la División Académica de OPES-CONARE. Una vez obtenido el aval correspondiente por parte de dicha División, podrá continuarse con el trámite interno en la institución para el cambio del título, en caso de que proceda.*

4. *El artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública establece que "en cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos".*

Se dictamina:

a. *Recomendar al pleno del Consejo Institucional, modificar el acuerdo de la Sesión Ordinaria N.º 3394, artículo 12, del 26 de enero de 2025, a fin de dejar sin efecto lo dispuesto en el inciso b. El resto del acuerdo se mantiene incólume.*

b. *Recomendar al pleno del Consejo Institucional que instruya a la Rectoría para que adjunte este acuerdo al acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N.º 3394, artículo 12, en el comunicado a la División Académica de OPES-CONARE para su conocimiento y registro*.

CONSIDERANDO QUE:

1. La Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles ha realizado un análisis detallado de la solicitud planteada por la doctora Lilliana Sancho Chavarría, coordinadora de la Unidad de Posgrado de la Escuela de Ingeniería en Computación y ha emitido dictamen sobre la solicitud dejar sin efecto lo estipulado en el inciso b del acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N.° 3394, artículo 12, del 26 de enero de 2025, relativo al cambio del título de "Máster en Computación con énfasis en Ciencias de la Computación" por el título de "Máster en Ciencia de la Computación", según lo indicado en el oficio MC-052-2025.

2. Este Consejo Institucional recibe positivamente la recomendación emanada por la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles, ya que ha verificado el entero cumplimiento de la normativa interna y externa en la rectificación del acuerdo. Por lo tanto, este órgano procede a resolver según lo dictaminado, conforme a las competencias conferidas en el Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica, y procede a resolver como se detalla en el apartado siguiente.

SE ACUERDA:

a. Dejar sin efecto el cambio del título de "Máster en Computación con énfasis en Ciencias de la Computación" por el título de "Máster en Ciencia de la Computación", dispuesto en el inciso b del acuerdo de la Sesión Ordinaria

N.°3394, artículo 12, del 26 de enero de 2025. El resto del acuerdo se mantiene incólume.

b. Instruir a la Rectoría para que adjunte este acuerdo al tomado en la Sesión Ordinaria N.° 3394, artículo 12, del 26 de enero de 2025, en el comunicado a la División Académica de OPES-CONARE para su conocimiento y registro.

c. Solicitar a la Dirección de la Secretaría del Consejo Institucional realizar las gestiones necesarias para la publicación del presente acuerdo en la Gaceta de la Institución, por ser de interés general.

d. Indicar, que contra este acuerdo podrán interponerse las gestiones de aclaración y adición, en el plazo de diez días hábiles posteriores a la notificación del acto.

ACUERDO FIRME

La discusión de este punto consta en el archivo digital de la Sesión Ordinaria N.° 3406.

ARTÍCULO 11. Modificación de los artículos 16, 17 y 65 del Reglamento de Carrera Profesional del Instituto Tecnológico de Costa Rica y sus Reformas, con el fin de incorporar nuevos atestados susceptibles de reconocimiento ***(A cargo de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles)***

La señora Ana Rosa Ruiz Fernández presenta la propuesta denominada: “Modificación de los artículos 16, 17 y 65 del Reglamento de Carrera Profesional del Instituto Tecnológico de Costa Rica y sus Reformas, con el fin de incorporar nuevos atestados susceptibles de reconocimiento”, a cargo de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles (adjunta al acta de esta sesión).

La señora María Estrada Sánchez somete a votación la propuesta, quedando aprobada con el siguiente resultado: 11 votos a favor, 0 votos en contra. Se somete a votación la firmeza del acuerdo y es aprobada con: 11 votos a favor, 0 votos en contra.

Por lo tanto, el Consejo Institucional:

RESULTANDO QUE:

1. En atención al artículo 96 del Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica, las Políticas Generales aprobadas por la Asamblea Institucional Representativa constituyen la base para la toma de decisiones del Consejo Institucional; en lo conducente, interesan las que se indican a continuación:

5. Gestión Institucional. *Se fomentarán las mejores prácticas de gestión para una efectiva operación de los procesos, bajo principios de innovación y excelencia, con la incorporación de plataformas eficientes de TIC, orientadas al cumplimiento de los fines y principios institucionales para lograr la satisfacción de las personas vinculadas con el Instituto.*

6. Calidad. *Se fomentará que todo el quehacer de la Institución se desarrolle con criterios de excelencia generando una cultura de mejora continua en todos los procesos institucionales, a través de la autoevaluación, certificación y acreditación, para el cumplimiento de los fines y principios institucionales y la satisfacción de todas personas vinculadas con el instituto.*

7. Talento Humano*. Se fomentará la atracción, el aprendizaje y crecimiento de nuestro talento humano para responder a los cambios que requiere el quehacer institucional, impulsando la cualificación, bajo una cultura participativa y un clima organizacional que propicie la permanencia satisfactoria y el mejor desempeño.* (Aprobadas en Sesión AIR-99-2021 del 16 de noviembre 2021, publicadas en Gaceta N.° 851 del 21 de noviembre de 2021 y modificadas en AIR-107-2023 del 27 de setiembre de 2023, publicadas en Gaceta N.° 1143 del 03 de octubre de 2023)

2. El Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica establece, entre las funciones y potestades del Consejo Institucional, las siguientes:

Artículo 18

Son funciones del Consejo Institucional:
…

f. Aprobar, promulgar y modificar los reglamentos generales necesarios para el funcionamiento del Instituto, así como los suyos propios, excepto aquellos que regulen el funcionamiento de la Asamblea Institucional Representativa y del Congreso Institucional.
…

k. Velar por el trato justo a todos los miembros de la comunidad del Instituto
…

3. El inciso g, del artículo 38 del Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica, fue agregado por acuerdo del Consejo Institucional en la Sesión Ordinaria N.° 3401, artículo 08, del 19 de marzo de 2025 -publicado en la Gaceta N.° 1280, del 27 de marzo de 2025-. El inciso mencionado establece, como una de las funciones generales de los Consejos de Vicerrectoría, lo siguiente:

Artículo 38

Los Consejos de Vicerrectoría tendrán las siguientes funciones generales:
…

g. Crear las comisiones y comités necesarios para el estudio de asuntos de su área, alineados con las políticas institucionales.

4. El artículo 12 del Reglamento de Normalización Institucional establece lo siguiente:

Artículo 12 Sobre la creación, modificación o derogatoria de un reglamento general
Cuando se trate de una solicitud de creación, modificación o derogatoria de un reglamento general, se procederá de la siguiente manera:

a. Cualquier miembro u Órgano Colegiado de la Comunidad, podrá proponer al Consejo Institucional la iniciativa de creación, modificación o derogatoria de un reglamento general. La iniciativa deberá ser acompañada de un texto base a considerar, así como de su respectiva motivación.

b. El Consejo Institucional designará entre sus comisiones permanentes, el estudio de su procedencia.

c. La Comisión Permanente valorará si considera la propuesta procedente.
c.1. De considerarla procedente:
c.1.1 En el caso de reformas parciales que no impliquen cambios sustanciales en dicha normativa, la Comisión Permanente respectiva podrá dar curso ella misma al trámite de análisis y dictamen.

…

5. Los artículos 16, 17 (incisos e y f), y 65 del Reglamento de Carrera Profesional del Instituto Tecnológico de Costa Rica y sus Reformas, establecen lo siguiente:

Artículo 16. Participación interna oficial

Por participación interna oficial se entiende la membresía en órganos institucionales y aquellos que se establezcan mediante convenios de cooperación mutua, el ocupar puesto de jefatura dentro de la Institución y el ser designado/a por el Consejo Institucional y AIR a asumir labores especiales.

Artículo 17. Rubros de participación interna oficial

Se considera como participación interna oficial lo siguiente:

…
e. Participación en Comisiones Institucionales: ***Participar en comisiones creadas por la Asamblea Institucional Representativa, por el Consejo Institucional*** *como representante de esos órganos o de la Institución*.

f. Designación para realizar labores especiales: El trabajo debidamente solicitado y reconocido por la ***Asamblea Institucional Representativa o por el Consejo Institucional***

…

Artículo 65. Participación en comisiones institucionales

La participación en cada comisión institucional o la designación para realizar labores especiales, que cumplan con los requisitos señalados en este Reglamento, otorga 0,5 punto.

El Directorio de la Asamblea Institucional Representativa, o la Secretaría del Consejo Institucional, *emitirá a la persona interesada la respectiva certificación, cuando se le otorgue el reconocimiento por participar en comisiones institucionales y por labores especiales.*

Para reconocer la participación destacada en comisiones institucionales, la persona interesada debe presentar copia de la certificación que le emitiera el ***Directorio de la Asamblea Institucional Representativa, o la Secretaría del Consejo Institucional.***
… (El resaltado no es del original)

6. La Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles del Consejo Institucional, en su reunión N.° 892 del martes 22 de abril de 2025, dictaminó lo siguiente:

Resultando que:

1. *El inciso f del artículo 18 del Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica establece que una de las funciones del Consejo Institucional es aprobar, promulgar y modificar los reglamentos generales necesarios para el funcionamiento del Instituto.*

2. *El Reglamento de Carrera Profesional del Instituto Tecnológico de Costa Rica y sus Reformas en sus artículos 16, 17 y 65 contempla el reconocimiento a través del puntaje a personas que hayan participado en comisiones creadas por la Asamblea Institucional Representativa y por el Consejo Institucional.*

3. *El inciso g del artículo 38 del Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica faculta a los Consejos de Vicerrectoría a crear comisiones necesarias para el estudio de asuntos de su área, alineadas con las políticas institucionales.*

Considerando que:

1. *La participación del sector profesional en comisiones creadas por la Asamblea Institucional Representativa (AIR) o por el Consejo Institucional tienen tanta relevancia como aquellas que puedan crearse en los Consejos de Vicerrectoría.*

2. *Los Consejos de Vicerrectoría asumen la responsabilidad de asesorar al Consejo Institucional en las áreas fundamentales del ITCR, en este sentido, fortalecer sus mecanismos de toma de decisiones contribuye a darle mayor apoyo a su accionar.*

3. *El personal profesional que hasta la fecha ha estado en tareas o labores establecidas por los Consejos de Vicerrectoría no ha recibido reconocimiento por ese aporte. Es de interés institucional valorar y reconocer los aportes del talento humano en áreas estratégicas.*

4. *Dado que los Consejos de Vicerrectoría no constituyen comisiones institucionales, los incisos e y f del artículo 17 del reglamento citado se aplican exclusivamente a comisiones creadas por la Asamblea Institucional Representativa (AIR) o el Consejo Institucional (CI), o bien a labores especiales encomendadas por estos órganos. Por ello, se considera oportuno y pertinente incluir un nuevo inciso que reconozca la labor de las personas que integran comisiones creadas por los Consejos de Vicerrectoría en temas propios de su competencia.*

5. *Según lo que señala el Reglamento de Normalización Institucional, le corresponde al Consejo Institucional la modificación del Reglamento de Carrera Profesional del Instituto Tecnológico de Costa Rica y sus Reformas por ser un reglamento general.*

6. *Por tratarse de una reforma parcial, la cual no implica cambios sustanciales en la normativa, esta Comisión procede a dictaminar al respecto.*

Se dictamina:

a. *Recomendar al Consejo Institucional aprobar la modificación de los artículos 16 y 65, así como la adición del inciso h, en el artículo 17 del Reglamento de Carrera Profesional del Instituto Tecnológico de Costa Rica y sus Reformas, como se muestra en la columna "Texto Propuesto":*

Texto Vigente	***Texto Propuesto***
Artículo 16. Participación interna oficial *Por participación interna oficial se entiende la membresía en órganos institucionales y aquellos que se establezcan mediante convenios de cooperación mutua, el ocupar puesto de jefatura dentro de la Institución y el ser designado/a por el Consejo Institucional y AIR a asumir labores especiales.*	***Artículo 16. Participación interna oficial*** *Por participación interna oficial se entiende la membresía en órganos institucionales y aquellos que se establezcan mediante convenios de cooperación mutua, el ocupar puesto de jefatura dentro de la Institución y* ***la designación*** *por el Consejo Institucional,* ***AIR o un Consejo de Vicerrectoría para*** *asumir labores especiales.*

Artículo 17. Rubros de participación interna oficial *Se considera como participación interna oficial lo siguiente:* *g. …*	***Artículo 17. Rubros de participación interna oficial*** *Se considera como participación interna oficial lo siguiente:* *g. …* ***h. Participación en comisiones o comités creados por un Consejo de Vicerrectoría para el estudio de asuntos de su área, alineados con las políticas institucionales.***
Artículo 65. Participación en comisiones institucionales. *La participación en cada comisión institucional o la designación para realizar labores especiales, que cumplan con los requisitos señalados en este Reglamento, otorga 0,5 punto.* *Directorio de la Asamblea Institucional Representativa, o la Secretaría del Consejo Institucional, emitirá a la persona interesada la respectiva certificación, cuando se le otorgue el reconocimiento por participar en comisiones institucionales y por labores especiales.* *Para reconocer la participación destacada en comisiones institucionales, la persona interesada debe presentar copia de la certificación que le emitiera el Directorio de la Asamblea Institucional Representativa, o la Secretaría del Consejo Institucional*	***Artículo 65. Participación en comisiones institucionales o creadas por un Consejo de Vicerrectoría*** *La participación en cada comisión institucional o la designación para realizar labores especiales, que cumplan con los requisitos señalados en este Reglamento, otorga 0,5 punto.* *El Directorio de la Asamblea Institucional Representativa, la Secretaría del Consejo Institucional* ***o persona Vicerrectora*** *emitirá a la persona interesada la respectiva certificación, cuando se le otorgue el reconocimiento por participar en comisiones institucionales y por labores especiales.* *Para reconocer la participación destacada en comisiones institucionales, la persona interesada debe presentar copia de la certificación que le emitiera el Directorio de la Asamblea Institucional Representativa, la Secretaría del Consejo Institucional* ***o la persona Vicerrectora****.*

b. Recomendar al pleno del Consejo Institucional que incorpore un Transitorio XXII al Reglamento de Carrera Profesional del Instituto Tecnológico de Costa Rica y sus Reformas, con el siguiente enunciado:

Transitorio XXII

Las reformas a los artículos 16 y 17, relativos al rubro de Participación interna oficial y al artículo 65, correspondiente al rubro de Participación en comisiones institucionales o de Vicerrectoría, serán aplicables a todos los casos que estén pendientes de

resolución a la fecha de entrada en vigor. No obstante, si su aplicación implica un perjuicio para las personas interesadas, dichos casos se resolverán conforme a las normas que estaban vigentes al momento de la recepción de los atestados.

CONSIDERANDO QUE:

1. Corresponde al Consejo Institucional aprobar las reformas del Reglamento de Carrera Profesional del Instituto Tecnológico de Costa Rica y sus Reformas que se consideren oportunas, pertinentes y razonables, en relación con el ascenso del personal en las categorías que establece ese cuerpo normativo.

2. Establecer un ligamen entre el Plan Estratégico Institucional y los criterios que estimulen el desarrollo del talento humano contribuye a fortalecer una cultura institucional orientada a la planificación. Esta acción pretende, además, consolidar la identificación del personal con los grandes retos que tiene la institución, en línea con uno de los objetivos del Modelo de Talento Humano.

3. Se comparte el análisis realizado por la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles que respalda el dictamen positivo presentado respecto a la modificación de los artículos 16 y 65, así como la adición del inciso h en el artículo 17 del Reglamento de Carrera Profesional del Instituto Tecnológico de Costa Rica y sus Reformas.

SE ACUERDA:

a. Modificar los artículos 16 y 65 del Reglamento de Carrera Profesional del Instituto Tecnológico de Costa Rica y sus Reformas, para que se lean de la siguiente manera:

Artículo 16. Participación interna oficial

Por participación interna oficial se entiende la membresía en órganos institucionales y aquellos que se establezcan mediante convenios de cooperación mutua, el ocupar puesto de jefatura dentro de la Institución y la designación por el Consejo Institucional, AIR o un Consejo de Vicerrectoría para asumir labores especiales.

Artículo 65. Participación en comisiones institucionales o creadas por un Consejo de Vicerrectoría

La participación en cada comisión institucional o la designación para realizar labores especiales, que cumplan con los requisitos señalados en este Reglamento, otorga 0,5 punto.

El Directorio de la Asamblea Institucional Representativa, la Secretaría del Consejo Institucional o persona Vicerrectora emitirá a

la persona interesada la respectiva certificación, cuando se le otorgue el reconocimiento por participar en comisiones institucionales y por labores especiales.

Para reconocer la participación destacada en comisiones institucionales, la persona interesada debe presentar copia de la certificación que le emitiera el Directorio de la Asamblea Institucional Representativa, la Secretaría del Consejo Institucional o la persona Vicerrectora.

b. Adicionar un inciso h, en el artículo 17 del Reglamento de Carrera Profesional del Instituto Tecnológico de Costa Rica y sus Reformas, que se lea de la siguiente manera:

Artículo 17. Rubros de participación interna oficial

Se considera como participación interna oficial lo siguiente:
…

h. Participación en comisiones o comités creados por un Consejo de Vicerrectoría para el estudio de asuntos de su área, alineados con las políticas institucionales.

c. Incorporar un Transitorio XXII al Reglamento de Carrera Profesional del Instituto Tecnológico de Costa Rica y sus Reformas, con el siguiente enunciado:

Transitorio XXII

Las reformas a los artículos 16 y 17, relativos al rubro de Participación interna oficial y al artículo 65, correspondiente al rubro de Participación en comisiones institucionales o de Vicerrectoría, serán aplicables a todos los casos que estén pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigor. No obstante, si su aplicación implica un perjuicio para las personas interesadas, dichos casos se resolverán conforme a las normas que estaban vigentes al momento de la recepción de los atestados.

d. Indicar, que contra este acuerdo este acuerdo podrá interponerse recurso de revocatoria ante este Consejo o de apelación ante la Asamblea Institucional Representativa, en el plazo máximo de cinco días hábiles, o los extraordinarios de aclaración o adición, en el plazo de diez días hábiles, ambos posteriores a la notificación del acuerdo. Por así haberlo establecido la Asamblea Institucional Representativa, es potestativo del recurrente interponer ambos recursos o uno solo de ellos, sin que puedan las autoridades recurridas desestimar o rechazar un recurso, porque el recurrente no haya interpuesto el recurso previo.

ACUERDO FIRME

La discusión de este punto consta en el archivo digital de la Sesión Ordinaria N.° 3406.

NOTA: Se realiza un receso a las 08:45 a.m. y hasta las 09:51 a.m. cuando se reanuda la sesión.

La señora María Estrada Sánchez procede a designar a la persona que presidirá la sesión en su ausencia. La señora María Estrada Sánchez postula al señor Teodolito Guillén Girón y, tras la votación, es elegido por unanimidad (11 votos a favor y 0 en contra).

A partir de este momento asume la presidencia interina el señor Teodolito Guillén Girón.

ARTÍCULO 12. Informe de Modificación Presupuestaria N.° 01-2025 (Atención a oficio R-314-2025) ***(A cargo de la Comisión de Planificación y Administración)***

El señor Nelson Ortega Jiménez presenta la propuesta denominada: “Informe de Modificación Presupuestaria N.° 01-2025 (Atención a oficio R-314-2025)”, a cargo de la Comisión de Planificación y Administración (adjunta al acta de esta sesión).

El señor Teodolito Guillén Girón somete a votación la propuesta, quedando aprobada con el siguiente resultado: 10 votos a favor y 0 votos en contra. Se somete a votación la firmeza del acuerdo y es aprobada con: 10 votos a favor y 0 votos en contra.

Por lo tanto, el Consejo Institucional:

RESULTANDO QUE:

1. En atención al artículo 96 del Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica, las Políticas Generales aprobadas por la Asamblea Institucional Representativa constituyen la base para la toma de decisiones del Consejo Institucional; en lo conducente, interesa la que se indica a continuación:

> ***10. Sostenibilidad.*** *Se desarrollarán acciones orientadas a la diversificación de sus fuentes de ingresos y el eficiente control de sus gastos, acorde a la planificación institucional, para alcanzar el equilibrio económico y ambiental de la Institución en el largo plazo, así como las sinergias que puedan lograrse con el sistema de educación costarricense y las alianzas con entes públicos, privados e internacionales.* (Aprobada en Sesión AIR-99-2021 del 16 de noviembre 2021, publicada en Gaceta N.° 851 del 21 de noviembre de 2021)

2. El Reglamento para la Aplicación de Modificaciones Presupuestarias en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, indica en los artículos 4, 5 y 6, lo siguiente:

Artículo 4
Toda modificación presupuestaria debe justificarse en función del Plan Estratégico, Planes Tácticos y Plan Anual Operativo vigentes, conforme a los procedimientos establecidos por la Administración.

Artículo 5
Las solicitudes de modificación al presupuesto que se requieran deben presentarse para su aplicación en el periodo comprendido entre el mes de enero y noviembre.
Vencido este plazo, vía excepción, éstas podrán ser aprobadas por el Rector, mediante acto debidamente razonado y presentar el informe respectivo al Consejo Institucional, antes de que finalice el período presupuestario.

Artículo 6
Los encargados de las unidades ejecutoras tramitarán las solicitudes de modificación al presupuesto, las cuales deben ser aprobadas por el encargado del programa, siempre que no impliquen variaciones al Plan Anual Operativo, a acuerdos del Consejo Institucional en los que se defina el objetivo de los fondos o se disminuya el contenido presupuestario de las partidas de Fondos Restringidos o de la partida cuentas especiales. En caso contrario dichas solicitudes deberán ser analizadas y aprobadas por el Consejo Institucional, con excepción de lo indicado en el Artículo 7 de este Reglamento.

3. Las Normas Técnicas 4.2.3, 4.3.8, 4.3.10, 4.3.11 y 4.3.13 sobre el Presupuesto Público indican, en cuanto a las modificaciones al presupuesto institucional, lo que sigue:

…
4.2.3 Aprobación interna. *El presupuesto inicial y sus variaciones serán aprobados a lo interno de la institución por el jerarca, mediante el acto administrativo establecido al efecto, otorgándoles validez jurídica a los citados documentos. En aquellos casos que conforme con el ordenamiento jurídico no requieran la aprobación presupuestaria externa, o que de acuerdo con el presente marco normativo esos documentos no deban ser sometidos a la aprobación de la Contraloría General de la República, la aprobación interna también les otorgará eficacia jurídica, posibilitando su ejecución para el periodo respectivo.*
…

4.3.8 Mecanismos de variación al presupuesto. *Los presupuestos extraordinarios y las modificaciones presupuestarias constituyen los mecanismos legales y técnicos para realizar las inclusiones, los aumentos, o las disminuciones de ingresos y gastos del presupuesto por parte de la instancia competente, acatando para ello el bloque de legalidad que les aplica.*
…

4.3.10 Modificación presupuestaria. *Es el acto administrativo por medio del cual se realizan ajustes en los gastos presupuestados y que tiene por objeto disminuir los montos de diferentes subpartidas aprobadas, para aumentar la asignación presupuestaria de otras subpartidas, ya sea dentro un mismo grupo y partida, o entre diferentes grupos, partidas o categorías programáticas. También, por medio de modificación presupuestaria se pueden incorporar nuevos gastos, tomando recursos de otras subpartidas, sin que se altere el monto global del presupuesto aprobado.*

4.3.11 Cantidad de variaciones presupuestarias y monto máximo a variar por modificación presupuestaria. *Durante el año, el presupuesto institucional sólo podrá ser variado por medio de tres presupuestos extraordinarios aprobados o aprobados parcialmente, y por la cantidad máxima de las modificaciones presupuestarias posibles de aprobar que defina el jerarca de la institución por medio de las regulaciones internas que emita, según lo dispuesto en la norma 4.3.13.*

El monto máximo de recursos que se redistribuya sumando todas las modificaciones presupuestarias, no podrá exceder el 25% *del monto total del presupuesto inicial más los presupuestos extraordinarios aprobados.*
…

4.3.13 Sobre las modificaciones presupuestarias. *El jerarca institucional, por medio de actos debidamente fundamentados, deberá regular con respecto a las modificaciones presupuestarias, lo siguiente:*

…
Como parte de dicho sistema, toda normativa interna que se emita deberá incluir la obligación del titular subordinado de mayor rango de brindar al Jerarca un informe trimestral sobre las modificaciones presupuestarias que hayan sido aprobadas en el trimestre respectivo por las instancias designadas, con amplia información sobre los principales ajustes efectuados por ese medio al presupuesto institucional y al plan anual, *salvo en situaciones en las que por indicación previa del jerarca se requiera una comunicación inmediata sobre el movimiento realizado.* ***El jerarca tomará un acuerdo sobre el informe suministrado y las acciones futuras que en razón de lo informado considere pertinente.***
… (El resaltado es proveído)

4. Mediante oficio R-314-2025, fechado 07 de abril de 2025, suscrito por la ingeniera María Estrada Sánchez, M.Sc., rectora, dirigido al máster Nelson Ortega Jiménez, coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, con copia a la máster Silvia Watson Araya, vicerrectora de la Vicerrectoría de Administración y a la máster Evelyn Hernández Solís, directora de la Oficina de Planificación Institucional, se remite el Informe de Modificación Presupuestaria N.° 01-2025, el cual indica:

Para el trámite correspondiente, me permito remitir el Informe de la Modificación Presupuestaria N.º 01-2025, según oficio VAD-183-2025 Asimismo, adjunto el dictamen de la Oficina de Planificación Institucional, según oficio OPI-146-2025.

Es importante indicar que este informe debe ser tramitado a la Contraloría General de la República, 15 días posterior al último día de cada mes del trimestre.

Dicho documento fue conocido en la sesión del Consejo de Rectoría N° 11-2025, Artículo 2, del 7 de abril del presente año.
…

Al oficio R-314-2025 se adjuntan los siguientes documentos:

a. Oficio VAD-183-2025 donde se adjunta el Informe de Modificación Presupuestaria N.° 1-2025, preparado por el Departamento de Financiero Contable.

b. Oficio OPI-146-2025 donde se remite el dictamen sobre el Informe de Modificación Presupuestaria N.° 1-2025.

c. Informe de Modificación Presupuestaria N.° 1-2025.

5. La Comisión de Planificación y Administración en su reunión N.° 1106, celebrada el 24 de abril de 2025, dictaminó:

Considerando que:

1. *El informe de modificaciones presupuestarias N.° 1-2025 incluye los 18 grupos de modificaciones realizadas de enero a marzo de 2025, lo que representa la aplicación de 443 solicitudes de modificación correspondiente a una variación de recursos por un monto de ¢8,556,797.96 miles.*

   Acorde con la Norma Técnica de Presupuesto Público 4.3.11 la suma de todas las modificaciones no excede el 25% del monto total del presupuesto inicial más los presupuestos extraordinarios aprobados, según se refleja en el siguiente detalle de aplicación de solicitudes de modificación presupuestaria, siendo que la aplicación acumulada de solicitudes representa el 10.43% del presupuesto total:

DETALLE DEL MONTO DE MODIFICACIONES DURANTE EL PERIODO 2025
Cuadro N°1

PRESUPUESTO 2025	
Presupuesto Ordinario ITCR	82,030,334.97
Total, presupuesto	**82,030,334.97**
25% permitido a modificar según norma 4.3.11	20,507,583.74
Total, Modificaciones Aplicadas	**8,556,797.96**
Total- MI-01-2025	**8,556,797.96**
% aplicado con respecto al Presupuesto Total	**10.43%**
% aplicado con respecto al 25%	**41.73%**

Generados por SIVAD, datos tomados de la base de datos MINISIF-SOIN

Fuente: Informe de modificación presupuestaria I-2025, página 4

El origen de los recursos (disminución) se compone, por mayoría de monto, de las partidas de: Materiales y Suministros, Activos Financieros y Transferencias Corrientes, la aplicación (aumento), por mayoría de monto, en las partidas: Servicios y Bienes duraderos.

La aplicación de la mayor cantidad de recursos en la partida de Bienes Duraderos obedece a construcciones, adiciones y mejoras, bienes duraderos diversos, bienes preexistentes, entre otros.

EL RESULTADO DEL ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
A NIVEL DE PARTIDA
(miles de colones)
Cuadro N°2

Descripción	Monto
ORIGEN DE RECURSOS	**-1,514,120.66**
Remuneraciones	0.00
Materiales y Suministros	-23,546.22
Activos Financieros	-1,379,479.99
Transferencias Corrientes	-111,094.45
APLICACIÓN DE RECURSOS	**1,514,120.66**
Remuneraciones	0.00
Servicios	124,227.17
Bienes Duraderos	1,389,893.49

Generados por SIVAD, datos tomados de la base de datos MINISIF-SOIN

Fuente: Informe de modificación presupuestaria I-2025, página 12

2. *El dictamen de la Oficina de Planificación Institucional, remitido mediante el oficio OPI-146-2025, sobre el Informe de Modificación Presupuestaria Nº. 1-2025 indica lo siguiente:*

…

Los movimientos presupuestarios redistribuyen los recursos entre 41 de las 109 metas que conforman el Plan Anual Operativo 2025, según se detalla:

DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	AUMENTO	DISMINUCIONES	PRESUPUESTO ACTUALIZADO
1.1.5.1 Desarrollar el 50% de la fase III (Implementación) del Sistema Institucional de Gestión de la Calidad.	47.862.806,28	5.900.000,00	0,00	53.762.806,28
1.1.5.8 Ejecutar los 11 procesos competencia de la Asamblea Institucional Representativa y su Directorio	163.485.604,79	11.500.000,00	661.000,00	174.324.604,79
1.1.5.9 Ejecutar los 6 procesos competencia de la Secretaría del Consejo Institucional	437.918.188,52	933.388,94		438.851.577,46
1.1.5.11 Gestionar los 14 procesos competencia de la Auditoría Interna.	483.775.038,84	2.479.796,32	12.941.700,00	473.313.135,16
1.1.5.12 Ejecutar 117 procesos administrativos de las dependencias adscritas a la Rectoría.	3.799.698.214,91	28.436.119,31	25.492.694,00	3.802.641.640,22
1.1.7.3 Gestionar al menos 4 procesos para adquisición de bienes duraderos de acuerdo con las necesidades institucionales y según el Plan Táctico de Inversión para la Dirección Superior.	10.450.000,00	973.051.892,55	0,00	983.501.892,55
1.1.5.16 Ejecutar 136 procesos administrativos de las dependencias adscritas a la Vicerrectoría de Administración.	11.815.317.150,27	562.680.835,78	2.482.169.072,41	9.895.828.913,64
1.1.7.4 Gestionar al menos 4 procesos para adquisición de bienes duraderos de acuerdo con las necesidades institucionales y según el Plan Táctico de Inversión para la 1.1.2 Vicerrectoría de Administración.	1.637.450.000,00	1.693.818.284,26	393.277.955,19	2.937.990.329,07
1.2.5.2 Ejecutar 15 procesos administrativos que coadyuvan con el CTLSC.	2.566.787.558,24	96.533.240,13	70.849.268,13	2.592.471.530,24
1.2.7.1 Gestionar al menos 4 procesos para adquisición de bienes duraderos de acuerdo con las necesidades institucionales y según el Plan Táctico de Inversión para el CTLSC.	40.000.000,00	882.268.956,01	0,00	922.268.956,01
1.3.5.2: Ejecutar 11 procesos académico-administrativos que coadyuvan con el CTLSJ.	745.568.448,04	5.037.482,00	3.718.000,00	746.887.930,04
1.3.7.1: Gestionar al menos 4 procesos para adquisición de bienes duraderos de acuerdo con las necesidades institucionales y según el Plan Táctico de Inversión para el CTLSJ.	25.000.000,00	292.963.432,86	25.000.000,00	292.963.432,86
1.4.5.1 Desarrollar 6 actividades orientadas a mejorar los servicios actuales y futuros que brinda el CAL.	27.830.906,35	226.800,00	226.800,00	27.830.906,35
1.4.5.2 Ejecutar 12 procesos administrativos que coadyuvan con el CAL.	538.477.991,72	4.006.578,00	4.006.578,00	538.477.991,72
1.4.7.1 Gestionar al menos 4 procesos para adquisición de bienes duraderos de acuerdo con las necesidades institucionales y según el Plan Táctico de Inversión para el CAL.	5.000.000,00	49.188.916,92	0,00	54.188.916,92
1.5.5.2: Ejecutar 10 procesos académico-administrativos que coadyuvan con el CAA.	201.163.939,58	4.516.569,00	4.125.000,00	201.555.508,58
1.5.7.1. Gestionar al menos 4 procesos para adquisición de bienes duraderos de acuerdo con las necesidades institucionales y según el Plan Táctico de Inversión para el CAA.	5.000.000,00	42.141.524,40	0,00	47.141.524,40
2.1.1.5 Gestionar la reacreditación de 13 programas de grado.	276.730.088,52	31.000.000,00	31.000.000,00	276.730.088,52
2.1.1.12 Impartir 3700 grupos de grado en los diferentes periodos.	24.917.574.796,08	15.588.900,00	42.407.142,00	24.890.756.554,08
2.1.5.3 Ejecutar 19 procesos académico-administrativos que coadyuvan con la docencia.	6.813.198.903,09	85.397.332,00	68.914.690,00	6.829.681.545,09
2.1.7.1 Gestionar al menos 4 procesos para adquisición de bienes duraderos, de acuerdo con las necesidades institucionales y según el Plan Táctico de Inversión para ViDa.	125.000.000,00	1.530.875.001,47	2.983.219.406,73	- 1.327.344.405,26

DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	AUMENTO	DISMINUCIONES	PRESUPUESTO ACTUALIZADO
2.1.8.1 Gestionar 5 iniciativas de fortalecimiento de los procesos docentes financiados con Fondo del Sistema.	514.880.066,62	1.699.834,00	1.525.834,00	515.054.066,62
3.1.1.1 Impartir 201 grupos de docencia culturales y deportivos en programas de grado.	1.817.036.853,01	2.394.351,00	0,00	1.819.431.204,01
3.1.4.1 Implementar el 25% del Plan de Mejora al Proceso Institucional de Atracción de Estudiantes de grado.	14.277.469,05	3.000.000,00	3.000.000,00	14.277.469,05
3.1.4.7 Desarrollar al menos 8 procesos que promuevan el respeto a los derechos humanos y la inclusión de toda la comunidad institucional.	254.877.839,51	0,00	50.000,00	254.827.839,51
3.1.4.8 Desarrollar al menos 43 procesos que fortalecen la permanencia y el éxito académico de la población estudiantil.	10.800.000,00	1.000.000,00	0,00	11.800.000,00
3.1.4.10 Apoyar 8 actividades de la FEITEC que contribuyan con la formación integral de los estudiantes del ITCR.	100.000.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	100.000.000,00
3.1.5.1 Desarrollar el 50% de la Estrategia de Socialización de la Propuesta de Fortalecimiento de la Estructura de Viesa en los Campus Tecnológicos y Centros Académicos	11.826.223,15	0,00	1.066.400,00	10.759.823,15
3.1.5.2 Desarrollar al menos 21 iniciativas con el Fondo del Sistema, CSUCA y Extensión.	443.695.985,21	15.613.000,00	3.038.000,00	456.270.985,21
3.1.5.3 Ejecutar 47 procesos que coadyuvan con los servicios estudiantiles-administrativos de la Viesa.	3.132.147.586,93	52.027.784,00	32.320.135,00	3.151.855.235,93
3.1.7.1 Gestionar al menos 4 procesos para adquisición de bienes duraderos de acuerdo con las necesidades institucionales y según el Plan Táctico de Inversión para Viesa.	1.163.550.000,00	854.601.852,87	638.000.000,00	1.380.151.852,87
4.1.2.4 Gestionar al menos 10 proyectos estudiantiles de investigación o extensión.	2.413.359,32	2.830.536,21	2.830.536,21	2.413.359,32
4.1.2.5 Gestionar al menos 130 proyectos vigentes de investigación	2.025.792.253,36	324.700.348,32	261.949.568,32	2.088.543.033,36
4.1.2.9 Realizar 3 publicaciones de divulgación de los resultados de los proyectos de investigación.	4.900.974,95	3.700.000,00	3.700.000,00	4.900.974,95
4.1.2.10 Publicar al menos 15 libros en el ámbito de la ciencia y la tecnología.	131.004.037,65	4.000.000,00	4.000.000,00	131.004.037,65
4.1.5.1 Ejecutar 42 procesos académico-administrativos que coadyuvan con la Investigación	3.819.395.195,39	47.982.238,00	24.361.238,00	3.843.016.195,39
4.1.7.1 Gestionar al menos 4 procesos para adquisición de bienes duraderos de acuerdo con las necesidades institucionales y según el Plan Táctico de Inversión para Investigación.	655.725.700,00	765.264.189,75	625.000.000,00	795.989.889,75
5.1.3.2 Gestionar al menos 40 proyectos vigentes de extensión	338.181.018,64	108.148.922,40	156.899.702,40	289.430.238,64
5.1.3.3 Desarrollar al menos 4 actividades de fortalecimiento de extensión	12.444.553,69	400.000,00	1.400.000,00	11.444.553,69
5.1.5.1 Ejecutar al menos 12 procesos académico-administrativos que coadyuvan con la Extensión	831.488.264,82	19.842.000,00	27.717.000,00	823.613.264,82
5.1.7.1 Gestionar al menos 4 procesos para adquisición de bienes duraderos de acuerdo con las necesidades institucionales y según el Plan Táctico de Inversión para Extensión.	610.000.000,00	16.547.849,89	607.000.000,00	19.547.849,89
TOTAL GENERAL	**82.030.334.734,77**	**8.556.797.956,39**	**8.556.397.956,39**	**82.030.734.734,77**

…es criterio de esta oficina indicar que los movimientos presupuestarios generan un impacto positivo ya que, al corresponder a redistribución de

recursos, se fortalece el quehacer de la acción sustantiva del TEC: docencia, vida estudiantil, investigación y extensión. Bajo una gestión transversal que apoya también el quehacer en los campus tecnológicos y centros académicos. Se rescata la importancia del seguimiento a los compromisos adquiridos del 2024.

3. *En la reunión N.° 1106, celebrada el 24 de abril de 2025 se ha brindado audiencia a la máster Silvia Watson Araya, vicerrectora de la Vicerrectoría de Administración, al máster Roy D'Avanzo Navarro, director del Departamento Financiero Contable, a la máster Evelyn Hernández Solís, directora de la Oficina de Planificación Institucional, a la máster Fabiola Arias Cordero, coordinadora de la Unidad de Formulación y Evaluación de Planes Institucionales, máster Sergio Picado Zúñiga, de la Oficina de Planificación Institucional, al máster Johnny Masís Siles, coordinador de la Unidad de Presupuesto y a la máster Kathya Piedra Mena, funcionaria de la Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto, para la exposición del Informe de Modificación Presupuestaria N.° 1-2025.*

   Durante la audiencia se consultó al Departamento Financiero Contable si visualizan algún riesgo en la ejecución de las próximas modificaciones presupuestarias dado el alto porcentaje utilizado (41.73%) en esta primera modificación respecto al 25% permitido por ley, a lo que el máster Johnny Masís Siles, coordinador de la Unidad de Presupuesto indica que, si existe riesgo, pero que el mismo se encuentra controlado y se está revisando el comportamiento de las modificaciones realizadas en los últimos 5 años con el fin de determinar la ruta que se está llevando y señala que históricamente no se ha llegado a modificar el 100% del monto que se puede modificar y que se están siguiendo los puntos de control establecidos.

   Además, comenta que del monto restante del 25% que se puede modificar, queda un monto aceptable para realizar los 3 restantes modificaciones presupuestarias.

   Así mismo se consultó sobre el detalle de los montos modificados, especialmente en lo relacionado al Campus Tecnológico Local San Carlos a lo que el máster Johnny Masís Siles, coordinador de la Unidad de Presupuesto explica que se debe a montos de revalidados y se va a generar un reporte con el detalle.

   La Oficina de Planificación, por su parte expuso el detalle de las justificaciones de las modificaciones y la relación con las metas del Plan Anual Operativo.

Se dictamina:

Recomendar al pleno del Consejo Institucional lo siguiente:

a. Dar por conocido el contenido del Informe de Modificación Presupuestaria N.° 1-2025, según documentos adjuntos al oficio R-314-2025.

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con las Normas Técnicas de Presupuesto Público, las modificaciones presupuestarias constituyen uno de los mecanismos legales y técnicos para realizar las inclusiones, los aumentos o las disminuciones de los gastos del presupuesto por parte de la instancia competente, acatando para ello el bloque de legalidad que les aplica.

2. Las Normas Técnicas sobre el Presupuesto Público establecen la obligatoriedad de que, el jerarca de mayor rango conozca un informe trimestral sobre las modificaciones presupuestarias, que hayan sido aprobadas en el trimestre respectivo, con amplia información sobre los principales ajustes efectuados por ese medio al Presupuesto Institucional y al Plan Anual Operativo.

3. La Rectoría aportó en el oficio R-314-2025, el informe de Modificación Presupuestaria correspondiente al primer trimestre del año en curso, con el dictamen de la Oficina de Planificación Institucional donde se analiza el impacto de las modificaciones presupuestarias en el Plan Anual Operativo 2025 (oficio OPI-146-2025), dicha información fue analizada por la Comisión de Planificación y Administración, según se desprende del dictamen brindado en la reunión N.° 1106, celebrada el 24 de abril de 2025.

4. Del detalle del monto de modificaciones presentado en el informe, se evidencia que la aplicación acumulada de solicitudes de modificación presupuestaria al primer trimestre de 2025 es por un monto total de ¢8,556,797.96 miles, que representa un 10.43% del total del presupuesto y 41.73% del porcentaje permitido (25%) en la Norma 4.3.11 de las Normas Técnicas del Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE.

5. Visto el dictamen de la Comisión de Planificación y Administración, junto a la indicación de la Norma Técnica 4.3.13 sobre el Presupuesto Público, este órgano acoge el análisis y recomendación emitida por dicha Comisión y procede a dejar constancia de que conoció el informe recibido en el oficio R-314-2025.

SE ACUERDA:

a. Dar por conocido el “Informe de Modificación Presupuestaria N.° 1-2025”, recibido mediante oficio R-314-2025, cuyos resultados se sintetizan en los siguientes cuadros:

EL RESULTADO DEL ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

A NIVEL DE PARTIDA

(miles de colones)

Cuadro N°2

Descripción	Monto
ORIGEN DE RECURSOS	**-1,514,120.66**
Remuneraciones	0.00
Materiales y Suministros	-23,546.22
Activos Financieros	-1,379,479.99
Transferencias Corrientes	-111,094.45
APLICACIÓN DE RECURSOS	**1,514,120.66**
Remuneraciones	0.00
Servicios	124,227.17
Bienes Duraderos	1,389,893.49

Generados por SIVAD, datos tomados de la base de datos MINISIF-SOIN

Fuente: Informe de modificación presupuestaria I-2025, página 12

Resumen de variaciones por partida y programa presupuestario

INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANALISIS FIANCIERO Y PRESUPUESTO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 1-2025
RESUMEN DE VARIACIONES POR PARTIDA
(en miles de colones)

Descripción	AUMENTO	DISMINUCION	1 -Programa Administración		2 -Programa Docencia		3 -Programa Vida Estudiantil		4 -Programa Investigación		5 -Programa Extensión	
			AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION
Remuneraciones	**186,219.57**	**-186,219.57**	46,134.06	-71701.06	71,774.10	-82,135.70	29,605.14	-19,439.54	36,364.28	-12,743.28	2342	-200.00
Servicios	**898,191.15**	**-773,963.97**	625,604.55	-557,978.43	23,296.51	-32,810.01	39,225.00	-15,210.00	105,779.57	-76,190.39	104,285.52	-91,775.14
Materiales y Suministros	**254,210.93**	**-277,757.16**	17,846.00	-58,899.18	27,885.00	-19,206.50	18,205.00	-21,025.00	118,331.15	-147,921.70	71,943.78	-30,704.78
Activos Financieros	**0.00**	**-1,379,479.99**	0.00	-1,379,479.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Duraderos	**7,104,251.90**	**-5,714,358.40**	3,813,970.35	-884,139.00	1,530,875.00	-2,980,219.41	955,594.51	-628000.00	765,264.19	- 620,000.00	38,547.85	-602,000.00
Transferencias Corrientes	**113,924.40**	**-225,018.86**	39,731.67	- 96,896.11	635.00	0.00	3,200.00	0.00	64,873.34	-127,622.75	5,484.40	- 500.00
TOTAL GENERAL	**8,556,797.96**	**-8,556,797.96**	**4,543,286.62**	**-3,049,093.76**	**1,654,465.61**	**-3,114,371.61**	**1,045,829.64**	**-683,674.54**	**1,090,612.53**	**-984,478.12**	**222,603.55**	**-725,179.92**

Fuente: Generados por SIVAD, datos tomados de la base de datos MINISIF-SOIN

Fuente: Informe de modificación presupuestaria I-2025, página 24

Redistribución de los recursos entre metas planteadas en el Plan Anual Operativo 2025 por los movimientos presupuestarios

DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	AUMENTO	DISMINUCIONES	PRESUPUESTO ACTUALIZADO
1.1.5.1 Desarrollar el 50% de la fase III (Implementación) del Sistema Institucional de Gestión de la Calidad.	47.862.806,28	5.900.000,00	0,00	53.762.806,28
1.1.5.8 Ejecutar los 11 procesos competencia de la Asamblea Institucional Representativa y su Directorio	163.485.604,79	11.500.000,00	661.000,00	174.324.604,79
1.1.5.9 Ejecutar los 6 procesos competencia de la Secretaría del Consejo Institucional	437.918.188,52	933.388,94		438.851.577,46
1.1.5.11 Gestionar los 14 procesos competencia de la Auditoría Interna.	483.775.038,84	2.479.796,32	12.941.700,00	473.313.135,16
1.1.5.12 Ejecutar 117 procesos administrativos de las dependencias adscritas a la Rectoría.	3.799.698.214,91	28.436.119,31	25.492.694,00	3.802.641.640,22
1.1.7.3 Gestionar al menos 4 procesos para adquisición de bienes duraderos de acuerdo con las necesidades institucionales y según el Plan Táctico de Inversión para la Dirección Superior.	10.450.000,00	973.051.892,55	0,00	983.501.892,55
1.1.5.16 Ejecutar 136 procesos administrativos de las dependencias adscritas a la Vicerrectoría de Administración.	11.815.317.150,27	562.680.835,78	2.482.169.072,41	9.895.828.913,64
1.1.7.4 Gestionar al menos 4 procesos para adquisición de bienes duraderos de acuerdo con las necesidades institucionales y según el Plan Táctico de Inversión para la 1.1.2 Vicerrectoría de Administración.	1.637.450.000,00	1.693.818.284,26	393.277.955,19	2.937.990.329,07
1.2.5.2 Ejecutar 15 procesos administrativos que coadyuvan con el CTLSC.	2.566.787.558,24	96.533.240,13	70.849.268,13	2.592.471.530,24
1.2.7.1 Gestionar al menos 4 procesos para adquisición de bienes duraderos de acuerdo con las necesidades institucionales y según el Plan Táctico de Inversión para el CTLSC.	40.000.000,00	882.268.956,01	0,00	922.268.956,01
1.3.5.2: Ejecutar 11 procesos académico-administrativos que coadyuvan con el CTLSJ.	745.568.448,04	5.037.482,00	3.718.000,00	746.887.930,04
1.3.7.1: Gestionar al menos 4 procesos para adquisición de bienes duraderos de acuerdo con las necesidades institucionales y según el Plan Táctico de Inversión para el CTLSJ.	25.000.000,00	292.963.432,86	25.000.000,00	292.963.432,86
1.4.5.1 Desarrollar 6 actividades orientadas a mejorar los servicios actuales y futuros que brinda el CAL.	27.830.906,35	226.800,00	226.800,00	27.830.906,35
1.4.5.2 Ejecutar 12 procesos administrativos que coadyuvan con el CAL.	538.477.991,72	4.006.578,00	4.006.578,00	538.477.991,72
1.4.7.1 Gestionar al menos 4 procesos para adquisición de bienes duraderos de acuerdo con las necesidades institucionales y según el Plan Táctico de Inversión para el CAL.	5.000.000,00	49.188.916,92	0,00	54.188.916,92
1.5.5.2: Ejecutar 10 procesos académico-administrativos que coadyuvan con el CAA.	201.163.939,58	4.516.569,00	4.125.000,00	201.555.508,58
1.5.7.1. Gestionar al menos 4 procesos para adquisición de bienes duraderos de acuerdo con las necesidades institucionales y según el Plan Táctico de Inversión para el CAA.	5.000.000,00	42.141.524,40	0,00	47.141.524,40
2.1.1.5 Gestionar la reacreditación de 13 programas de grado.	276.730.088,52	31.000.000,00	31.000.000,00	276.730.088,52
2.1.1.12 Impartir 3700 grupos de grado en los diferentes periodos.	24.917.574.796,08	15.588.900,00	42.407.142,00	24.890.756.554,08
2.1.5.3 Ejecutar 19 procesos académico-administrativos que coadyuvan con la docencia.	6.813.198.903,09	85.397.332,00	68.914.690,00	6.829.681.545,09
2.1.7.1 Gestionar al menos 4 procesos para adquisición de bienes duraderos, de acuerdo con las necesidades institucionales y según el Plan Táctico de Inversión para ViDa.	125.000.000,00	1.530.875.001,47	2.983.219.406,73	-1.327.344.405,26

DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	AUMENTO	DISMINUCIONES	PRESUPUESTO ACTUALIZADO
2.1.8.1 Gestionar 5 iniciativas de fortalecimiento de los procesos docentes financiados con Fondo del Sistema.	514.880.066,62	1.699.834,00	1.525.834,00	515.054.066,62
3.1.1.1 Impartir 201 grupos de docencia culturales y deportivos en programas de grado.	1.817.036.853,01	2.394.351,00	0,00	1.819.431.204,01
3.1.4.1 Implementar el 25% del Plan de Mejora al Proceso Institucional de Atracción de Estudiantes de grado.	14.277.469,05	3.000.000,00	3.000.000,00	14.277.469,05
3.1.4.7 Desarrollar al menos 8 procesos que promuevan el respeto a los derechos humanos y la inclusión de toda la comunidad institucional.	254.877.839,51	0,00	50.000,00	254.827.839,51
3.1.4.8 Desarrollar al menos 43 procesos que fortalecen la permanencia y el éxito académico de la población estudiantil.	10.800.000,00	1.000.000,00	0,00	11.800.000,00
3.1.4.10 Apoyar 8 actividades de la FEITEC que contribuyan con la formación integral de los estudiantes del ITCR.	100.000.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	100.000.000,00
3.1.5.1 Desarrollar el 50% de la Estrategia de Socialización de la Propuesta de Fortalecimiento de la Estructura de Viesa en los Campus Tecnológicos y Centros Académicos	11.826.223,15	0,00	1.066.400,00	10.759.823,15
3.1.5.2 Desarrollar al menos 21 iniciativas con el Fondo del Sistema, CSUCA y Extensión.	443.695.985,21	15.613.000,00	3.038.000,00	456.270.985,21
3.1.5.3 Ejecutar 47 procesos que coadyuvan con los servicios estudiantiles-administrativos de la Viesa.	3.132.147.586,93	52.027.784,00	32.320.135,00	3.151.855.235,93
3.1.7.1 Gestionar al menos 4 procesos para adquisición de bienes duraderos de acuerdo con las necesidades institucionales y según el Plan Táctico de Inversión para Viesa.	1.163.550.000,00	854.601.852,87	638.000.000,00	1.380.151.852,87
4.1.2.4 Gestionar al menos 10 proyectos estudiantiles de investigación o extensión.	2.413.359,32	2.830.536,21	2.830.536,21	2.413.359,32
4.1.2.5 Gestionar al menos 130 proyectos vigentes de investigación	2.025.792.253,36	324.700.348,32	261.949.568,32	2.088.543.033,36
4.1.2.9 Realizar 3 publicaciones de divulgación de los resultados de los proyectos de investigación.	4.900.974,95	3.700.000,00	3.700.000,00	4.900.974,95
4.1.2.10 Publicar al menos 15 libros en el ámbito de la ciencia y la tecnología.	131.004.037,65	4.000.000,00	4.000.000,00	131.004.037,65
4.1.5.1 Ejecutar 42 procesos académico-administrativos que coadyuvan con la Investigación	3.819.395.195,39	47.982.238,00	24.361.238,00	3.843.016.195,39
4.1.7.1 Gestionar al menos 4 procesos para adquisición de bienes duraderos de acuerdo con las necesidades institucionales y según el Plan Táctico de Inversión para Investigación.	655.725.700,00	765.264.189,75	625.000.000,00	795.989.889,75
5.1.3.2 Gestionar al menos 40 proyectos vigentes de extensión	338.181.018,64	108.148.922,40	156.899.702,40	289.430.238,64
5.1.3.3 Desarrollar al menos 4 actividades de fortalecimiento de extensión	12.444.553,69	400.000,00	1.400.000,00	11.444.553,69
5.1.5.1 Ejecutar al menos 12 procesos académico-administrativos que coadyuvan con la Extensión	831.488.264,82	19.842.000,00	27.717.000,00	823.613.264,82
5.1.7.1 Gestionar al menos 4 procesos para adquisición de bienes duraderos de acuerdo con las necesidades institucionales y según el Plan Táctico de Inversión para Extensión.	610.000.000,00	16.547.849,89	607.000.000,00	19.547.849,89
TOTAL GENERAL	**82.030.334.734,77**	**8.556.797.956,39**	**8.556.397.956,39**	**82.030.734.734,77**

Fuente: Oficio OPI-146-2025: Dictamen sobre Modificación Presupuestaria N°1-2025

b. Indicar que, el presente acuerdo no podrá ser impugnado, siendo un acto de mero trámite que no cuenta con efectos jurídicos propios, al versar el mismo sobre elementos de carácter informativo.

ACUERDO FIRME

La discusión de este punto consta en el archivo digital de la Sesión Ordinaria N.° 3406.

ARTÍCULO 13. Modificación del artículo 12 del Reglamento del Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica ***(A cargo de la Comisión de Planificación y Administración)***

El señor Randall Blanco Benamburg presenta la propuesta denominada: "Modificación del artículo 12 del Reglamento del Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica", a cargo de la Comisión de Planificación y Administración (adjunta al acta de esta sesión).

El señor Teodolito Guillén Girón somete a votación la propuesta, quedando aprobada con el siguiente resultado: 10 votos a favor y 0 votos en contra. Se somete a votación la firmeza del acuerdo y es aprobada con: 10 votos a favor y 0 votos en contra.

Por lo tanto, el Consejo Institucional:

RESULTANDO QUE:

1. En atención al artículo 96 del Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica, las Políticas Generales aprobadas por la Asamblea Institucional Representativa constituyen la base para la toma de decisiones del Consejo Institucional; en lo conducente, interesa la que se indica a continuación:

> ***5. Gestión Institucional.*** *Se fomentarán las mejores prácticas de gestión para una efectiva operación de los procesos, bajo principios de innovación y excelencia, con la incorporación de plataformas eficientes de TIC, orientadas al cumplimiento de los fines y principios institucionales para lograr la satisfacción de las personas vinculadas con el instituto.* (Aprobadas en Sesión AIR-99-2021 del 16 de noviembre 2021, publicadas en Gaceta N.° 851 del 21 de noviembre de 2021 y modificadas en AIR-107-2023 del 27 de setiembre de 2023, publicadas en Gaceta N.° 1143 del 03 de octubre de 2023)

2. El inciso f del artículo 18 del Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica, establecen que:

> *Son funciones del Consejo Institucional:*
> *…*

> *f. Aprobar, promulgar y modificar los reglamentos generales necesarios para el funcionamiento del Instituto, así como los suyos propios, excepto aquellos que regulen el funcionamiento de la Asamblea Institucional Representativa y del Congreso Institucional*
> *Los reglamentos que regulan la materia electoral deben ser consultados al Tribunal Institucional Electoral antes de su aprobación en firme. El Tribunal Institucional Electoral contará con diez días hábiles para pronunciarse.*
> *…*

3. El Reglamento de Normalización Institucional señala en el artículo 13, sobre el trámite de creación, modificación o derogatoria de un reglamento específico, lo siguiente:

> *Artículo 13 Tramitación de Reglamentos Específicos*
> *Cuando se trate de una iniciativa de creación, modificación o derogatoria de un reglamento específico se procederá de la siguiente manera:*
> *…*
> *c. El Consejo de Departamento o quien ejerza el cargo de Superior Jerárquico, presentará la propuesta para sus respectivos dictámenes a la Oficina de Planificación Institucional y Asesoría Legal, quienes tendrán un plazo de diez días hábiles para emitirlos, a partir de que se les solicite.*
> *d. Una vez recibidos los dictámenes correspondientes, el Consejo de Departamento o quien ejerza el cargo de Superior Jerárquico en ausencia del Consejo, procederá a la discusión y aprobación de dicho reglamento, si así lo considere.*
> *…*

4. El Reglamento del Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica, en su artículo 12, señala:

> ***Artículo 12***
>
> *El Consejo Institucional revisará el avance del plan estratégico institucional, en una sesión semestral y exclusiva para tratar este tema, en conjunto con el Consejo de Rectoría*

5. Mediante el oficio SCI-258-2025 con fecha de recibido 26 de marzo de 2025, suscrito por el máster Nelson Ortega Jiménez, coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, dirigido a la máster Evelyn Hernández Solís, directora de la Oficina de Planificación Institucional y a la máster Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de Asesoría Legal, con copia a la Secretaría del Consejo Institucional, se solicita dictamen, en el plazo de 10 días hábiles, sobre la propuesta de modificación del artículo 12 del Reglamento del Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica, consistente en eliminar que la revisión del Plan Estratégico Institucional deba hacerse en una sesión exclusiva para esa temática.

6. Mediante el oficio OPI-134-2025 con fecha de recibido 31 de marzo de 2025, suscrito por la máster Evelyn Hernandez Solís, directora de la Oficina de

Planificación Institucional, dirigido al máster Nelson Ortega Jiménez, coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, con copia a la máster Andrea Contreras Alvarado, coordinadora Unidad Especializa en Control Interno (UECI-OPI) y a la licenciada Jenny Zúñiga Valverde, funcionaria de la Unidad Especializada de Control Interno UECI-OPI, remite el siguiente dictamen para modificar el artículo 12 del Reglamento del Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica:

…

Resultando que:

1. *El Estatuto Orgánico en el artículo 94 bis 1, define el proceso de planificación institucional como el conjunto de acciones sucesivas de estudio, discusión y análisis de información relevante, sobre el ambiente interno y externo, y sobre el desempeño institucional, realizadas por los órganos de decisión del Instituto, para definir la dirección que debe seguir la Institución, y propiciar que éste responda adecuadamente a la solución de los problemas prioritarios del país en el campo de su competencia, y que cumpla en forma eficaz y eficiente, con la misión para la cual fue creado.*

Como resultado del proceso de planificación institucional se debe obtener la aprobación de los siguientes productos:
a…
g. Plan estratégico institucional: es elaborado por la Rectoría y aprobado por el Consejo Institucional.
h. Planes anuales operativos: son formulados por el Rector, Vicerrectores (as), la Oficina de Planificación Institucional; y aprobados por el Consejo Institucional.

Este proceso debe ser articulado y coordinado en forma integral por la Oficina de Planificación Institucional.

2. *El artículo 98 bis del Estatuto Orgánico establece que la OPI formulará cada cinco años, la propuesta de Plan Estratégico Institucional, así como los ajustes que se considere necesarios cada vez que detecte cambios importantes en el entorno, que puedan tener consecuencias significativas en el impacto del Instituto sobre la sociedad y deberá presentarla al Consejo Institucional para su análisis y aprobación.*

3. *El Artículo 10 del Reglamento del proceso de planificación institucional del ITCR, indica que el seguimiento y la evaluación del proceso consistirá en la verificación del cumplimiento de los siguientes aspectos:*

a. Plan Estratégico Institucional: se realizará la evaluación y seguimiento del Plan Estratégico al menos al finalizar el año calendario, a través de la evaluación final del Plan Anual Operativo por parte de la Oficina de Planificación Institucional. De considerarlo necesario, esta Oficina deberá formular en conjunto con el Rector,

Vicerrectores, Directores de Campus Tecnológicos Locales y Centros Académicos, las acciones correctivas para alcanzar los objetivos propuestos en el Plan Estratégico Institucional, las cuales serán presentadas por el Rector para aprobación ante el Consejo Institucional […].

b. *Planes Tácticos: El seguimiento de los planes tácticos deberá ser realizado de manera semestral por los responsables correspondientes, con el apoyo y direccionamiento técnico de la Oficina de Planificación Institucional. Estos deberán formular las acciones correctivas que se estimen necesarias para el cumplimiento de dichos planes, los cuales deberán ser presentadas al Rector, si estas no presentan cambios en el Plan Estratégico Institucional serán aprobadas por el Rector, caso contrario serán analizadas y aprobadas por el Consejo Institucional.*
c. *La evaluación de dichos planes deberá de presentarse al Consejo Institucional al menos una vez al año en el mes de marzo, por parte de los responsables correspondientes y la Oficina de Planificación, para verificar que la administración esté cumpliendo los mismos.*
Plan Anual Operativo: Los responsables del seguimiento y evaluación del Plan Anual Operativo serán los encargados de cada programa, subprograma y demás dependencias adscritas, de acuerdo con el ámbito de su competencia, con el apoyo técnico de la Oficina de Planificación Institucional. La evaluación se realizará trimestralmente y se presentará un resumen de la evaluación al Consejo de Rectoría para conocimiento y establecimiento de las posibles acciones correctivas. Se presentará semestralmente al Consejo Institucional el informe de evaluación para su conocimiento.

4. *El Reglamento del Consejo Institucional en el Artículo 12 estable que:*
El Consejo Institucional revisará el avance del plan estratégico institucional, en una sesión semestral y exclusiva para tratar este tema, en conjunto con el Consejo de Rectoría.

Considerando que:

1. *El Consejo Institucional entre sus comisiones permanentes asigna para estudio asuntos que debe resolver el órgano derivado de sus funciones establecidas en el Estatuto Orgánico recayendo en la Comisión de Planificación y Administración por tema afín, la evaluación del Plan Estratégico Institucional.*

2. *La Institución ha formulado y está vigente el Plan Estratégico Institucional para el periodo comprendido del 2022 al 2026.*

3. *La Comisión de Planificación y Administración tiene entre sus tareas la evaluación del avance del Plan Estratégico Institucional, la cual deberá llevarse a cabo en una sesión semestral y de manera exclusiva en conjunto con el Consejo de Rectoría, tal y como está dispuesto en el Reglamento del Consejo Institucional*

4. *La Comisión considera que la disposición del Artículo 12 del Reglamento del Consejo Institucional genera rigidez al proceso de revisión del plan estratégico al disponer que las sesiones del Consejo Institucional deban ser exclusivas para tratar el avance del PEI puede generar rigideces innecesarias en la planificación y gestión del Consejo Institucional y que el permitir la inclusión de otros temas dentro de esta sesión otorgará flexibilidad y responde a una gestión más dinámica y ajustada a las necesidades institucionales.*

5. *El documento "Plan Estratégico Institucional 2022-2026", en el apartado 14 "Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico", indica que la evaluación del PEI debe realizarse de forma semestral, de tal manera que puedan aplicarse acciones correctivas ante desviaciones identificadas respecto al plan original. Es de gran importancia monitorear el avance en el cumplimiento de las metas alineadas a los objetivos y si las estrategias definidas para lograr las mismas se realizan oportunamente, esto por medio de la evaluación de los Planes Anuales Operativos, con los encargados de cada eje: el Rector, los Vicerrectores, los Directores de Campus Tecnológicos y Centros Académicos. (PEI-ITCR. pág. 147)*

De la justificación para una sesión conjunta del Consejo Institucional y el Consejo de Rectoría en la evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI)

La evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) es un proceso clave en la gobernanza institucional ya que permite analizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y la alineación de la institución con su misión y visión. La revisión de esta evaluación en una sesión entre el Consejo Institucional y el Consejo de Rectoría se justifica por las siguientes razones:

a) Coherencia en la toma de decisiones estratégicas

El PEI establece las líneas estratégicas de desarrollo institucional, por lo que su evaluación requiere un análisis integral que involucre tanto al Consejo Institucional como máximo órgano directivo superior del Instituto Tecnológico de Costa Rica, como al ejecutivo, Consejo de Rectoría, por tanto, una sesión conjunta asegura que ambas instancias tengan la misma información y puedan generar consensos sobre ajustes estratégicos que resulten de la evaluación del Plan Estratégico.

b) Garantía de una visión alineada

El Consejo de Rectoría, como órgano ejecutivo, tiene un conocimiento detallado sobre la implementación del PEI y sus desafíos operativos, mientras que el Consejo Institucional tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento del mandato institucional, por tanto, una sesión conjunta permite que ambas perspectivas se complementen para lograr una evaluación más completa y realista.

c) Mayor eficiencia en la deliberación y toma de decisiones

La evaluación del PEI implica la consideración de múltiples variables, incluyendo el desempeño (indicadores de eficacia, eficiencia, calidad y economía), el cumplimiento de la estrategia y su vinculación con las metas tanto estratégicas como operativas. El análisis y discusión de estos aspectos en una sesión conjunta evita duplicidades y permite que las decisiones sobre ajustes estratégicos sean tomadas de manera más ágil y fundamentada.

d) Transparencia

Una sesión con participación de ambos órganos fortalece la transparencia en la toma de decisiones, al garantizar que los responsables de la formulación y ejecución del PEI participen activamente en su evaluación, reduciendo la fragmentación en la gobernanza y facilita la rendición de cuentas.

e) Facilitación del ajuste y mejora continua

La evaluación del PEI no solo mide el cumplimiento de metas, sino que también identifica áreas de mejora y oportunidades de ajuste. La presencia conjunta de los dos órganos permite tomar decisiones inmediatas sobre la necesidad de reformulación de la estrategia (metas) o redireccionamiento de recursos en caso de ser necesario.

f) Del principio de corresponsabilidad

El éxito del PEI depende de un trabajo articulado entre los diferentes niveles de la gobernanza institucional, por lo que el análisis de manera conjunta garantiza que la evaluación se realice bajo el principio de corresponsabilidad, asegurando que todos los actores clave asuman compromisos y responsabilidades en función de los resultados del análisis.

Del criterio de la Oficina de Planificación Institucional

Desde una perspectiva de planificación estratégica, es criterio de esta Oficina que lo más recomendable es mantener una sesión conjunta entre el Consejo Institucional y el Consejo de Rectoría para la evaluación del PEI, sin necesidad de que sea exclusiva. Considerando:

- *Las razones anteriormente expuestas en la justificación.*
- *La periodicidad de la evaluación del Plan Estratégico Institucional, según el Artículo 10 del Reglamento del proceso de planificación institucional del ITCR, que indica:*

“a. Plan Estratégico Institucional: Se realizará la evaluación y seguimiento del Plan Estratégico al menos al finalizar el año calendario, a través de la evaluación final del Plan Anual Operativo por parte de la Oficina de Planificación Institucional.
…La evaluación de dichos planes deberá de presentarse al Consejo Institucional al menos una vez al año en el mes de marzo, por parte de los

responsables correspondientes y la Oficina de Planificación, para verificar que la administración esté cumpliendo los mismos."

Por lo tanto, se sugiere la modificación del Artículo 12 del Reglamento del Consejo Institucional para que se lea de la siguiente manera:

"El Consejo Institucional revisará la evaluación del Plan Estratégico Institucional en conjunto con el Consejo de Rectoría, en una sesión durante el primer semestre del año tomando como insumo el informe de evaluación del Plan Estratégico Institucional elaborado por la Oficina de Planificación Institucional. Además, se dará seguimiento semestral a través de la evaluación del Plan Anual Operativo."

7. Mediante el oficio AL-278-2025 con fecha de recibido 22 de abril de 2025, suscrito por la máster Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de Asesoría Legal y el licenciado Jonathan Gustavo Quesada Sojo, asesor legal de estudio y redacción, dirigido al máster Nelson Ortega Jiménez, coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, con copia a la Secretaría del Consejo Institucional, se remite el siguiente criterio legal para modificar el artículo 12 del Reglamento del Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica:

…
ANTECEDENTE

1. *Se indica en la consulta, que la Comisión de Planificación y Administración del Consejo Institucional mantiene en trámite la evaluación del "Plan Estratégico Institucional" para el periodo 2022-2026, y que en cuanto a este trámite, se ha observado una disposición del "Reglamento del Proceso de Planificación Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica" que estiman oportuno y razonable modificar.*

2. *Asimismo, se indica que el "Reglamento del Proceso de Planificación Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica" define disposiciones relacionadas con la evaluación del Plan Institucional, las cuales se realizan al 30 de junio y al 31 de diciembre del año correspondiente, al momento de conocerse y discutirse la evaluación del Plan Anual Operativo.*

3. *Por otra parte, se menciona que la disposición del artículo 12 del "Reglamento del Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica" genera rigidez al proceso de revisión del plan estratégico al disponer que las sesiones del Consejo Institucional deban ser exclusivas para atender esta actividad. Se indica que dicha exigencia de que la sesión sea exclusiva para tratar el avance del "Plan Estratégico Institucional" puede generar rigideces innecesarias en la planificación y gestión del Consejo Institucional. Permitir la inclusión de otros temas dentro de la sesión, sin menoscabar la relevancia del plan*

estratégico, otorga mayor flexibilidad y responde a una gestión más dinámica y ajustada a las necesidades institucionales.

4. *Se indica además que la utilización óptima del tiempo y los recursos institucionales es un principio fundamental de la buena gobernanza. La obligatoriedad de una sesión exclusiva podría derivar en costos administrativos y operativos adicionales, especialmente si el análisis del plan estratégico no requiere la totalidad del tiempo disponible. Permitir la incorporación de otros asuntos en la misma sesión favorece una mejor distribución de los recursos. Asimismo, se menciona que la posibilidad de abordar otros temas dentro de la sesión semestral permite una respuesta más oportuna y coordinada a las necesidades institucionales. En entornos dinámicos, donde las decisiones deben adoptarse con prontitud, la flexibilización de la agenda del Consejo Institucional favorece una gestión más eficaz.*

5. *De igual manera, se menciona que en el entorno actual, donde las instituciones enfrentan cambios constantes, la planificación debe contar con mecanismos de actualización y revisión que sean ágiles. La exclusividad de la sesión puede rigidizar la respuesta del Consejo Institucional ante situaciones emergentes que requieran atención inmediata dentro del mismo espacio de deliberación. Por todo lo anterior, y según el "Reglamento de Normalización Institucional" específicamente en el Artículo 13, sobre el trámite de modificación de reglamentos específicos, que la presentación de la propuesta de modificación del artículo 12 del "Reglamento del Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica", debe acompañarse de los respectivos dictámenes de la Oficina de Planificación Institucional y de la Oficina de Asesoría Legal.*

CRITERIO JURÍDICO

Con base en el antecedente anterior, esta Asesoría Legal procede a emitir el dictamen sobre la propuesta de actualización del artículo 12 del "Reglamento del Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica". En la columna "Artículo vigente" se presenta la redacción tal como está actualmente en el reglamento, mientras que en la columna "Texto propuesto" se reflejan las modificaciones e inclusiones, destacadas mediante resaltado y tachaduras en color negro, que se detallan a continuación:

Texto vigente	***Texto propuesto***
Artículo 12	*Artículo 12*
El Consejo Institucional revisará el avance del plan estratégico institucional, en una sesión semestral y exclusiva para tratar este tema, en conjunto con el Consejo de Rectoría.	*El Consejo Institucional revisará el avance del plan estratégico institucional en una sesión semestral ~~y exclusiva para tratar este tema~~, en conjunto con el Consejo de Rectoría.* ***Esta revisión podrá realizarse en una***

	sesión ordinaria o extraordinaria.

El artículo 12 del "Reglamento del Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica" aborda la revisión que realiza dicho Consejo del "Plan Estratégico Institucional", entendiendo este plan como el instrumento orientador del desarrollo institucional. Este plan recoge, integra y estructura las decisiones desde una perspectiva estratégica (a largo plazo), es presentado por la Rectoría y aprobado por el Consejo Institucional. Asimismo, se pueden incorporar acciones correctivas para alcanzar los objetivos establecidos en el plan, las cuales son propuestas por la Rectoría y aprobadas por el Consejo Institucional. Todo esto conforme a lo dispuesto en el "Reglamento del Proceso de Planificación Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica", como se detalla a continuación:

Artículo 4 Definiciones
(…)
Plan Estratégico Institucional: Instrumento orientador del desarrollo institucional, que recoge, integra y estructura las decisiones desde una perspectiva estratégica.
(…)

Artículo 6 Tipos de Planes
La Institución contará con los siguientes tipos de planes, según el alcance relativo de los mismos:
a. Plan Estratégico Institucional (largo plazo).
b. Plan Táctico (mediano plazo)
c. Plan Anual Operativo (corto plazo)

Capítulo 3 Del Proceso de Planificación Institucional y sus Responsables
(…)

Artículo 9 Etapas del Proceso de Planificación Institucional
El Proceso de Planificación Institucional estará compuesto por las siguientes etapas y responsables:
1. Planificación Estratégica Institucional:
(…)
El producto final será el Plan Estratégico, este deberá ser presentado por el Rector y aprobado al Consejo Institucional.
(…)

Artículo 10 Seguimiento y evaluación
El seguimiento y la evaluación del proceso de Planificación Institucional, consistirá en la verificación del cumplimiento de los siguientes aspectos:
a. Plan Estratégico Institucional: se realizará la evaluación y seguimiento del Plan Estratégico al menos al finalizar el año calendario, a través de la evaluación final del Plan Anual Operativo por parte de la Oficina de Planificación Institucional. De considerarlo necesario, esta Oficina deberá formular en conjunto con el Rector, Vicerrectores, Directores de Campus Tecnológicos Locales y Centros Académicos, las acciones correctivas para alcanzar los objetivos propuestos en el Plan Estratégico Institucional, las

cuales serán presentadas por el Rector para aprobación ante el Consejo Institucional, el que notificará a la comunidad institucional los ajustes correspondientes a dicho plan.

La modificación propuesta al artículo 12 del "Reglamento del Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica" tiene como objetivo que el Consejo Institucional revise el avance del "Plan Estratégico Institucional" en una sesión semestral, sin que esta sesión sea exclusiva para tratar dicho tema, como se establece actualmente. La revisión se llevará a cabo en conjunto con el Consejo de Rectoría y podrá realizarse en una sesión ordinaria o extraordinaria, lo que elimina la incertidumbre sobre el tipo de sesión en la que debe tratarse este asunto.

Respecto a esta modificación, esta Asesoría Legal no encuentra inconveniente legal alguno. Es importante tener en cuenta que de acuerdo al artículo 18 del Estatuto Orgánico, el Consejo Institucional tiene como funciones tanto la aprobación del "Plan Estratégico Institucional", así como la aprobación, promulgación y modificación de los reglamentos generales necesarios para el funcionamiento del Instituto, y de los reglamentos propios, como es el caso del "Reglamento del Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica", tal como se detalla a continuación:

Artículo 18
Son funciones del Consejo Institucional:
(…)
b. Aprobar el Plan estratégico institucional y los Planes anuales operativos, el presupuesto del Instituto, y los indicadores de gestión, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Orgánico y en la reglamentación respectiva.
(…)
f. Aprobar, promulgar y modificar los reglamentos generales necesarios para el funcionamiento del Instituto, así como los suyos propios, excepto aquellos que regulen el funcionamiento de la Asamblea Institucional Representativa y del Congreso Institucional
Los reglamentos que regulan la materia electoral deben ser consultados al Tribunal Institucional Electoral antes de su aprobación en firme. El Tribunal Institucional Electoral contará con diez días hábiles para pronunciarse

Asimismo, es fundamental destacar que la función del Consejo Institucional de aprobar y modificar los reglamentos generales, así como sus propios reglamentos, está vinculada con la autonomía universitaria. Esta autonomía incluye el poder de auto reglamentarse, tal como lo señala la Sala Constitucional mediante la resolución Nº06935 – 2019 de fecha 24 de abril del 2019, donde se expresa lo siguiente:

V.- Sobre la autonomía universitaria. Desde sus inicios, la Sala se refirió a los alcances de la autonomía universitaria establecida en el artículo 84 de la Constitución Política, en el siguiente sentido:
"VI.- SIGNIFICACION DEL CONCEPTO DE AUTONOMIA .- (...) Conforme lo dispone el artículo 84 de la Constitución Política, las Universidades del Estado están dotadas de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer

obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Esa autonomía, que ha sido clasificada como especial, es completa y por ésto, distinta de la del resto de los entes descentralizados en nuestro ordenamiento jurídico (regulados principalmente en otra parte de la Carta Política: artículos 188 y 190), y significa, para empezar con una parte de sus aspectos más importantes, que aquéllas están fuera de la dirección del Poder Ejecutivo y de su jerarquía, que cuentan con todas las facultades y poderes administrativos necesarios para llevar adelante el fin especial que legítimamente se les ha encomendado; que pueden autodeterminarse, en el sentido de que están posibilitadas para establecer sus planes, programas, presupuestos, organización interna y estructurar su gobierno propio. Tienen poder reglamentario (autónomo y de ejecución); pueden autoestructurarse, repartir sus competencias dentro del ámbito interno del ente, desconcentrarse en lo jurídicamente posible y lícito, regular el servicio que prestan, y decidir libremente sobre su personal (como ya lo estableció esta Sala en la resolución No.495-92). Son estas las modalidades administrativa, política, organizativa y financiera de la autonomía que corresponde a las universidades públicas. La autonomía universitaria tiene como principal finalidad, procurar al ente todas las condiciones jurídicas necesarias para que lleve a cabo con independencia su misión de cultura y educación superiores. (...) la universidad, como centro de pensamiento libre, debe y tiene que estar exenta de presiones o medidas de cualquier naturaleza que tiendan a impedirle cumplir, o atenten contra ese, su gran cometido.-
(…)
"En realidad, el artículo 84 constitucional establece una reserva normativa en favor de las universidades, en el sentido de que su poder reglamentario es el único competente para normar la organización del servicio universitario; disposiciones que integran de esta manera un subsistema jurídico particular.

Por otro lado, esta Asesoría Legal coincide con el análisis planteado en la consulta, en el que se señala que la redacción actual del artículo 12 del "Reglamento del Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica" impone rigidez en la planificación y gestión del Consejo Institucional. Si bien es fundamental otorgar relevancia al análisis y aprobación del "Plan Estratégico Institucional", la obligatoriedad de dedicar toda una sesión exclusivamente a dicho plan podría generar costos administrativos y operativos adicionales. Esto se debe a que pueden surgir otros temas que también requieran atención durante la sesión, y en caso de que el análisis del plan no ocupe la totalidad del tiempo previsto, permitiría abordar otros asuntos de interés en la misma sesión. Lo anterior en apego al principio de eficiencia administrativa, consagrado en la Ley General de la Administración Pública, que obliga a utilizar racionalmente sus recursos, por lo que la modificación propuesta permitiría una gestión más flexible y optimizada del tiempo de las sesiones del Consejo Institucional.

Lo expuesto anteriormente, como se menciona en la consulta, permite ofrecer respuestas oportunas y coordinadas tanto al "Plan Estratégico Institucional" como a otras situaciones institucionales que demanden un análisis y resolución inmediata por parte del Consejo Institucional, favoreciendo una gestión más eficiente y eficaz en la agenda del Consejo.

Esto está relacionado con el deber de las Administraciones Públicas de garantizar el buen funcionamiento del servicio público que brindan, lo cual es analizado por la Sala Constitucional en la resolución Nº20109 – 2020, fechada el 20 de octubre de 2020, al indicar que:

Además, en materia de prestación de servicios, esta Sala ha señalado –v. gr. sentencia N° 2016-000427 de las 09:30 horas de 15 de enero de 2016- que el buen funcionamiento de estos corresponde a un derecho fundamental. Esto, a partir del contenido de los artículos 139, 140 y 191 de la Constitución Política. Esto se traduce en la obligación de las distintas Administraciones Públicas de prestar servicios de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente. Asimismo, de la parte orgánica de la Carta Fundamental, se erigen una serie de principios de la organización y función de la Administración, los cuales han sido desarrollados por normas infra constitucionales, tales como la Ley General de la Administración Pública, que en sus artículos 4, 225, párrafo 1 y 269, párrafo 1, impone el deber de los órganos del Estado, de orientar y nutrir la organización y la función administrativa. Así, el principio de eficacia supone que la organización administrativa está diseñada para la obtención de objetivos y fines asignados por el propio ordenamiento jurídico, lo que obliga la existencia de planificación y rendición de cuentas. Por su parte, la eficiencia implica la obtención de los mejores resultados con el uso racional de los recursos con los que cuentan las diferentes dependencias. Asimismo, se impone a la Administración el principio de simplicidad, el cual se debe entender como la obligación de que las estructuras administrativas y sus competencias sean de fácil comprensión, sin procedimientos complejos que retarden la satisfacción de los intereses públicos. El principio de celeridad, impone la obligación a las Administraciones Públicas a cumplir con sus objetivos y fines, de la forma más expedita, rápida y acertada posible, para evitar retardos indebidos e injustificados. Así, estos principios imponen una serie de exigencias, responsabilidades y deberes permanentes a todos los entes públicos.

Asimismo, el cambio propuesto fortalecería el principio de probidad al que deben adherirse todas las personas funcionarias públicas, en este caso, los miembros del Consejo Institucional. Este principio obliga a las personas funcionarias públicas a orientar su gestión hacia la satisfacción del interés público. En este sentido, la apertura para que, en la sesión del Consejo Institucional en la que se revise y apruebe el "Plan Estratégico Institucional", se puedan abordar otros asuntos de igual importancia e interés para la comunidad institucional, garantiza el cumplimiento de dicho interés público, promoviendo además el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos. El principio de probidad está regulado por el artículo 3 de la "Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública Nº8422", como se detalla a continuación:

Artículo 3º-Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo,

al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.

De igual manera, esta Asesoría Legal considera jurídicamente procedente que en la redacción propuesta del artículo 12 del "Reglamento del Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica" se incluya que la revisión del "Plan Estratégico Institucional" puede llevarse a cabo tanto en una sesión ordinaria como extraordinaria. Esto se fundamenta en que, según el artículo 16 del Estatuto Orgánico del ITCR, se establece que el Consejo Institucional sesionará de manera ordinaria una vez por semana y de forma extraordinaria cuando lo convoque el Rector, ya sea por iniciativa propia o a solicitud de al menos cuatro de sus miembros, tal como se detalla a continuación:

Artículo 16
El Consejo Institucional sesionará ordinariamente una vez por semana y, extraordinariamente cuando lo convoque el Rector por iniciativa propia o de al menos cuatro de sus miembros. El quórum estará constituido por más de la mitad de sus miembros.
Los acuerdos se tomarán mediante el voto afirmativo de más de la mitad de los miembros presentes, excepto cuando este Estatuto Orgánico disponga algo diferente. En caso de empate, se votará de nuevo en la sesión siguiente. De persistir este empate, el presidente podrá ejercer el doble voto.

El planteamiento expuesto anteriormente facilita que, en cualquiera de las modalidades de sesión del Consejo Institucional, se pueda conocer en detalle todo lo relacionado con el "Plan Estratégico Institucional". Este enfoque resulta altamente beneficioso, ya que permite que se atienda de manera más célere, eficaz y eficiente la revisión y aprobación del plan mencionado. Al contar con esta estructura, se optimiza el proceso, reduciendo tiempos y mejorando la calidad de las decisiones tomadas, lo que contribuye al cumplimiento ágil de los objetivos institucionales y al fortalecimiento de la gestión organizativa en su conjunto.
Es relevante mencionar que el artículo 12 del "Reglamento del Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica" no tiene un título asignado. Por tanto, se recomienda incluir uno que haga referencia al contenido que regula el artículo, con el fin de facilitar su identificación y mejorar la lectura del reglamento. Asimismo, sería conveniente incorporar títulos en aquellos artículos que no los tengan, para garantizar una estructura más clara y organizada. Esto si bien no es un requisito legal, mejora significativamente la claridad y uniformidad del Reglamento.

Es importante destacar que, una vez recibidos los dictámenes correspondientes de esta oficina y de la Oficina de Planificación Institucional, el Consejo procederá con la discusión y aprobación de la modificación del artículo. Posteriormente, solicitará a la Oficina de Asesoría Legal el registro y la publicación de dicho reglamento con las modificaciones pertinentes, en

conformidad con lo establecido en el artículo 13 del "Reglamento de Normalización Institucional", el cual dispone que:

Artículo 13 Tramitación de Reglamentos Específicos
Cuando se trate de una iniciativa de creación, modificación o derogatoria de un reglamento específico se procederá de la siguiente manera:

a. Cualquier integrante del Consejo de Departamento podrá proponer a quien ejerza la dirección o a quien asuma el cargo de Superior Jerárquico en ausencia del Consejo, la creación, modificación, o derogatoria de un reglamento específico.
b. Si el Consejo de Departamento o el Superior Jerárquico, considera procedente la solicitud, se abocará a su análisis.
c. El Consejo de Departamento o quien ejerza el cargo de Superior Jerárquico, presentará la propuesta para sus respectivos dictámenes a la Oficina de Planificación Institucional y Asesoría Legal, quienes tendrán un plazo de diez días hábiles para emitirlos, a partir de que se les solicite.
d. Una vez recibidos los dictámenes correspondientes, el Consejo de Departamento o quien ejerza el cargo de Superior Jerárquico en ausencia del Consejo, procederá a la discusión y aprobación de dicho reglamento, si así lo considere.
e. Una vez aprobado el Reglamento, le corresponderá a quien ejerza la Dirección de Departamento, o a quien desempeñe el cargo de Superior Jerárquico en ausencia de Consejo, solicitar a la Oficina de Asesoría Legal el registro y la publicación del mismo.

CONCLUSIÓN

Para esta Asesoría Legal, y acorde con lo indicado, luego de la revisión de la propuesta, se considera que, no existe impedimento legal para continuar con el trámite respectivo conforme al artículo 13 del "Reglamento de Normalización Institucional", de la propuesta de modificación del artículo 12 del "Reglamento del Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica", referente a la revisión del "Plan Estratégico Institucional" del ITCR, salvo la observación realizada referente al título de los artículos del reglamento antes citado, la cual, debe valorar la Administración bajo su responsabilidad.

Se recuerda que esta Asesoría Legal en su carácter consultivo emana criterios técnico-jurídicos, no vinculantes, siendo competencia exclusiva de los órganos jerárquicos correspondientes, la toma de decisiones para una adecuada gestión.
…

8. En la reunión N.° 1106 del 24 de abril de 2025, la Comisión de Planificación y Administración dictaminó lo siguiente:

Resultando que:

1. El Reglamento del Proceso de Planificación Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica, en los artículos 8 y 10 señala lo siguiente:

Artículo 8
El Cronograma del Proceso de Planificación Institucional es una proyección anual de las fechas en las que se realizarán las actividades del proceso de planificación, entendiéndose este proceso como las evaluaciones y controles del Plan Anual Operativo y del Presupuesto Ordinario aprobado para ser ejecutado el año siguiente, así como las actividades para formular el próximo Plan Anual Operativo y Presupuesto Ordinario.
…

Artículo 10 Seguimiento y evaluación
El seguimiento y la evaluación del proceso de Planificación Institucional, consistirá en la verificación del cumplimiento de los siguientes aspectos:

a. Plan Estratégico Institucional: ***se realizará la evaluación y seguimiento del Plan Estratégico al menos al finalizar el año calendario, a través de la evaluación final del Plan Anual Operativo por parte de la Oficina de Planificación Institucional.*** *De considerarlo necesario, esta Oficina deberá formular en conjunto con el Rector, Vicerrectores, Directores de Campus Tecnológicos Locales y Centros Académicos, las acciones correctivas para alcanzar los objetivos propuestos en el Plan Estratégico Institucional, las cuales serán presentadas por el Rector para aprobación ante el Consejo Institucional, el que notificará a la comunidad institucional los ajustes correspondientes a dicho plan.*
… (el resaltado es proveído)

2. *El Reglamento de Normalización Institucional señala en el artículo 13, sobre el trámite de creación, modificación o derogatoria de un reglamento específico, lo siguiente:*

Artículo 13 Tramitación de Reglamentos Específicos
Cuando se trate de una iniciativa de creación, modificación o derogatoria de un reglamento específico se procederá de la siguiente manera:
…
c. El Consejo de Departamento o quien ejerza el cargo de Superior Jerárquico, presentará la propuesta para sus respectivos dictámenes a la Oficina de Planificación Institucional y Asesoría Legal, quienes tendrán un plazo de diez días hábiles para emitirlos, a partir de que se les solicite.
d. Una vez recibidos los dictámenes correspondientes, el Consejo de Departamento o quien ejerza el cargo de Superior Jerárquico en ausencia del Consejo, procederá a la discusión y aprobación de dicho reglamento, si así lo considere.
…

Considerando que:

1. *El Reglamento del Proceso de Planificación Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica define disposiciones relacionadas con la evaluación del Plan Institucional, las cuales se realizan al 30 de junio y al*

31 de diciembre del año correspondiente, al momento de conocerse y discutirse la evaluación del Plan Anual Operativo.

2. *La disposición del Artículo 12 del Reglamento del Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica genera rigidez al proceso de revisión del plan estratégico al disponer que las sesiones del Consejo Institucional deban ser exclusivas para atender esta actividad.*

3. *La exigencia de que la sesión sea exclusiva para tratar el avance del Plan Estratégico Institucional puede generar rigideces innecesarias en la planificación y gestión del Consejo Institucional. Permitir la inclusión de otros temas dentro de la sesión, sin menoscabar la relevancia del plan estratégico, otorga mayor flexibilidad y responde a una gestión más dinámica y ajustada a las necesidades institucionales.*

4. *La utilización óptima del tiempo y los recursos institucionales es un principio fundamental de la buena gobernanza. La obligatoriedad de una sesión exclusiva podría derivar en costos administrativos y operativos adicionales, especialmente si el análisis del Plan Estratégico Institucional no requiere la totalidad del tiempo disponible. Permitir la incorporación de otros asuntos en la misma sesión favorece una mejor distribución de los recursos.*

5. *La posibilidad de abordar otros temas dentro de la sesión semestral permite una respuesta más oportuna y coordinada a las necesidades institucionales. En entornos dinámicos, donde las decisiones deben adoptarse con prontitud, la flexibilización de la agenda del Consejo Institucional favorece una gestión más eficaz.*

6. *En el entorno actual, donde las instituciones enfrentan cambios constantes, la planificación debe contar con mecanismos de actualización y revisión que sean ágiles. La exclusividad de la sesión puede rigidizar la respuesta del Consejo Institucional ante situaciones emergentes que requieran atención inmediata dentro del mismo espacio de deliberación.*

7. *Los dictámenes emitidos por la Oficina de Planificación Institucional y la Oficina de Asesoría Legal sobre la propuesta de modificación del artículo 12 realizada por la Comisión de Planificación y Administración, son positivos y no presentan elementos que indiquen la imposibilidad de realizar el cambio, como se muestra a continuación.*

Norma vigente	***Propuesta COPA***
Artículo 12	***Artículo 12***
El Consejo Institucional revisará el avance del plan estratégico institucional, en una sesión semestral y exclusiva para tratar este tema, en conjunto con el Consejo de Rectoría.	*El Consejo Institucional revisará el avance* ***de la implementación*** *del plan estratégico institucional en una sesión* ***en el primer semestre****, en conjunto con el Consejo de Rectoría.* ***Esta revisión podrá***

	realizarse en una sesión ordinaria o extraordinaria.

Se dictamina:

a. Recomendar al pleno del Consejo Institucional lo siguiente:

Modificar el artículo 12 del Reglamento del Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica, en los siguientes términos:

Artículo 12

El Consejo Institucional revisará el avance de la implementación del plan estratégico institucional en una sesión en el primer semestre, en conjunto con el Consejo de Rectoría. Esta revisión podrá realizarse en una sesión ordinaria o extraordinaria.

CONSIDERANDO QUE:

1. La Comisión de Planificación y Administración realizó el análisis sobre la oportunidad de modificar el artículo 12 del Reglamento de Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica y emitió dictamen en concordancia con los criterios de la Oficina de Planificación Institucional y la Oficina de Asesoría Legal.

2. Es de interés del Consejo Institucional hacer un uso eficiente del tiempo disponible para realizar las sesiones y atender la mayor cantidad de temas posibles en cada una de ellas, de forma que las decisiones que le competen sean tomadas de forma oportuna para no generar atrasos en la gestión de la institución.

3. Este Consejo comparte y acoge el análisis y dictamen emitido por la Comisión de Planificación y Administración, respecto a la modificación del artículo 12 del Reglamento del Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica con el fin de hacer un uso eficiente del tiempo designado para las sesiones del órgano.

SE ACUERDA:

a. Reformar el artículo 12 del Reglamento Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica, para que en adelante se lea de la siguiente forma:

Artículo 12

El Consejo Institucional revisará el avance de la implementación del plan estratégico institucional en una sesión en el primer semestre, en

conjunto con el Consejo de Rectoría. Esta revisión podrá realizarse en una sesión ordinaria o extraordinaria.

b. Indicar que contra este acuerdo podrá interponerse recurso de revocatoria ante este Consejo o de apelación ante la Asamblea Institucional Representativa, en el plazo máximo de cinco días hábiles, o los extraordinarios de aclaración o adición, en el plazo de diez días hábiles, ambos posteriores a la notificación del acuerdo. Por así haberlo establecido la Asamblea Institucional Representativa, es potestativo del recurrente interponer ambos recursos o uno solo de ellos, sin que puedan las autoridades recurridas desestimar o rechazar un recurso, porque el recurrente no haya interpuesto el recurso previo.

ACUERDO FIRME

La discusión de este punto consta en el archivo digital de la Sesión Ordinaria N.° 3406.

ARTÍCULO 14. **Resolución del Recurso de revocatoria en contra del acuerdo del Consejo Institucional, tomado en la Sesión Ordinaria N.° 3398, Artículo 12, del 26 de febrero de 2025, relativo a la modificación de los requisitos y productos que deben cumplir las personas postulantes como investigadoras o extensionistas para integrar el Consejo de Investigación y Extensión (Atención oficio EAU-134-2025) -Segunda sesión ordinaria** ***(A cargo de la Comisión de Estatuto Orgánico)***

El señor Randall Blanco Benamburg presenta la propuesta denominada: “Resolución del Recurso de revocatoria en contra del acuerdo del Consejo Institucional, tomado en la Sesión Ordinaria N.° 3398, Artículo 12, del 26 de febrero de 2025, relativo a la modificación de los requisitos y productos que deben cumplir las personas postulantes como investigadoras o extensionistas para integrar el Consejo de Investigación y Extensión (Atención oficio EAU-134-2025) -Segunda sesión ordinaria”, a cargo de la Comisión de Estatuto Orgánico (adjunta al acta de esta sesión).

El señor Teodolito Guillen Girón somete a votación la propuesta, quedando aprobada con el siguiente resultado: 10 votos a favor y 0 votos en contra. Se somete a votación la firmeza del acuerdo y es aprobada con: 10 votos a favor y 0 votos en contra.

Por lo tanto, el Consejo Institucional:

RESULTANDO QUE:

1. En atención al artículo 96 del Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica, las Políticas Generales aprobadas por la Asamblea Institucional

Representativa constituyen la base para la toma de decisiones del Consejo Institucional; en lo conducente, interesa la que se indica a continuación:

> ***3. Investigación.*** *Se desarrollarán programas y proyectos de investigación y desarrollo con un enfoque científico-tecnológico, y de investigación educativa y sociocultural, conforme a los fines, principios, valores y ejes de conocimiento estratégicos, para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, la competitividad del país o la generación de conocimiento.*
>
> ***4. Extensión y Acción Social.*** *Se desarrollarán programas, proyectos y actividades de extensión y acción social, conforme a los fines, principios, valores y ejes de conocimiento estratégicos, como una forma de vinculación con los actores del desarrollo, públicos y privados, proyectando la acción institucional en el ámbito sociocultural, educativo, productivo y organizativo, para contribuir en el desarrollo integral del país.*
>
> ***5. Gestión Institucional.*** *Se fomentarán las mejores prácticas de gestión para una efectiva operación de los procesos, bajo principios de innovación y excelencia, con la incorporación de plataformas eficientes de TIC, orientadas al cumplimiento de los fines y principios institucionales para lograr la satisfacción de las personas vinculadas con el instituto.*
>
> ***6. Calidad.*** *Se fomentará que todo el quehacer de la Institución se desarrolle con criterios de excelencia generando una cultura de mejora continua en todos los procesos institucionales, a través de la autoevaluación, certificación y acreditación, para el cumplimiento de los fines y principios institucionales y la satisfacción de todas las personas vinculadas con el instituto.*
>
> ***7. Talento Humano.*** *Se fomentará la atracción, el aprendizaje y crecimiento de nuestro talento humano para responder a los cambios que requiere el quehacer institucional, impulsando la cualificación, bajo una cultura participativa y un clima organizacional que propicie la permanencia satisfactoria y el mejor desempeño.* (Aprobadas en Sesión AIR-99-2021 del 16 de noviembre 2021, publicadas en Gaceta N.° 851 del 21 de noviembre de 2021 y modificadas en AIR-107-2023 del 27 de setiembre de 2023, publicadas en Gaceta N.° 1143 del 03 de octubre de 2023)

2. El Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica señala como funciones y potestades del Consejo Institucional, en lo que interesa, lo siguiente:

> ***Artículo 18***
> *Son funciones del Consejo Institucional:*
> *…*
> *u. Resolver sobre lo no previsto en este Estatuto Orgánico y ejercer otras funciones necesarias para la buena marcha de la Institución no atribuidas a ningún otro órgano.*

3. El artículo 136 del Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica, indica lo siguiente:

Artículo 136
Contra los actos y resoluciones de mero trámite, incidentales o finales de los órganos colegiados y autoridades institucionales que ejerzan funciones de dirección o administrativas, se podrán establecer los recursos ordinarios de revocatoria y de apelación y los extraordinarios de aclaración o adición, de reposición o reconsideración y de revisión; además de la gestión de queja.
Todo acto y resolución emitida por órganos colegiados o autoridades institucionales deberá indicar los tipos de recursos que admite y sus respectivos plazos de presentación.
Los actos o resoluciones que no indiquen lo anterior se considerarán nulos y no surtirán sus efectos hasta tanto no subsanen ese defecto.

Este artículo tiene, para su aplicación, una norma reglamentaria titulada: Norma Reglamentaria de los Artículos 136 y 137 del Estatuto Orgánico.

4. El Reglamento del Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica establece lo siguiente en los artículos 72 y 76:

Artículo 72

Contra los actos y resoluciones del Consejo Institucional podrán establecerse los recursos ordinarios de revocatoria y apelación, o los extraordinarios de adición y aclaración, por parte de quien se sienta personal y directamente afectado; según lo indicado en el Estatuto Orgánico, salvo los asuntos en materia de contratación administrativa que se regirá por lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento.
…

Artículo 76

El recurso interpuesto, sea ordinario o extraordinario, lo resolverá el Consejo Institucional en dos sesiones, dentro de un plazo máximo de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente en el cual el recurso sea conocido en el apartado de "Informe de correspondencia", en una sesión del Consejo Institucional.

Para el estudio de la impugnación, el Consejo Institucional asignará el recurso a una de sus Comisiones Permanentes o podrá conformar una Comisión Especial para el efecto, en cuyo caso, al menos un miembro del Consejo Institucional debe ser parte de la misma.

La Comisión Permanente o Especial conformada, según corresponda, emitirá dictamen recomendativo acerca de si el recurso cumple con los requisitos de admisibilidad para estudio y resolución; debiendo el Consejo Institucional resolver la fase de admisibilidad en la primera sesión.

En caso de ser admitido el recurso, la Comisión Permanente o Especial conformada, emitirá también dictamen sobre el fondo del asunto que es sometido a consideración del Consejo Institucional, el cual resolverá en definitiva en la segunda sesión.

5. En la Sesión Ordinaria N.° 3375, Artículo 10, del 07 de agosto de 2024, se aprobó -en segunda votación- la reforma de los artículos 34 y 41 (inciso c), e incorporación de un Transitorio 11 en el Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica, consistente en modificar las funciones de la persona vicerrectora de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, así como la integración del Consejo de Investigación y Extensión.

6. En la Sesión Ordinaria N.° 3398, artículo 12, del 26 de febrero de 2025, el Consejo Institucional acordó lo siguiente:

…

SE ACUERDA:

a. *Establecer los siguientes requisitos para optar por una candidatura para integrar el Consejo de Investigación y Extensión por el sector académico, conforme a lo indicado en el artículo 41, inciso c, del Estatuto Orgánico:*

Requisitos mínimos para postularse como persona integrante del Consejo de Investigación y Extensión en los puestos de representantes de investigación

a. Maestría académica.

b. Nombramiento en una clase de puesto académico, con una jornada de 50% a tiempo indefinido y con la categoría de asociado o superior, según el Reglamento de Carrera Profesional del ITCR y sus Reformas, o su equivalente.

c. Haber participado y concluido, en los últimos 8 años, al menos 3 proyectos de investigación vinculados con una línea de investigación del ITCR, formalmente establecida según la reglamentación vigente.

d. Contar con al menos 5 productos universitarios en uno o más de los siguientes rubros, en los últimos 8 años:

i. Artículos publicados en revistas indexadas en la categoría de mayor relevancia (índices de nivel A), establecidas por el Consejo de Investigación y Extensión.
ii. Libro o un capítulo de un libro con consejo editorial, producto de la investigación académica de su área afín.
iii. Un producto con propiedad intelectual otorgada.
iv. Sistemas y software desarrollados para comunidades prioritarias definidas por la VIE.

e. Participación en al menos 2 de los siguientes procesos:

i. Participación como persona evaluadora nacional o internacional de proyectos o revistas científicas indexadas nacionales o internacionales.

ii. *Participación con ponencia en congresos interuniversitarios, nacionales o internacionales.*
iii. *Participación en convenios, en redes o comités interinstitucionales, interuniversitarios nacionales o internacionales.*

f. *No tener informes finales pendientes al momento de inscribir la candidatura de proyectos de investigación o extensión ante la VIE, o ante organismos externos que financiaron el proyecto.*

g. *No haber recibido durante los tres años previos a la formalización de su postulación al cargo sanciones por acoso sexual, acoso laboral o discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género, ni haber cometido alguna falta en otro ámbito que le implicara una suspensión por más de veinte días hábiles, o sustitutiva del despido.*

Requisitos mínimos para postularse como persona integrante del Consejo de Investigación y Extensión en los puestos de representantes de extensión

a. *Maestría.*

b. *Nombramiento en una clase de puesto académico, con una jornada de 50% a tiempo indefinido y con la categoría de asociado o superior, según el Reglamento de Carrera Profesional del ITCR y sus Reformas, o su equivalente.*

c. *Haber participado y concluido, en los últimos 10 años, al menos 3 proyectos de extensión vinculados con una línea de extensión del ITCR, formalmente establecida según la reglamentación vigente.*

d. *Contar con al menos 5 productos universitarios en uno o más de los siguientes rubros, durante los últimos 10 años:*

i. *Artículos publicados en revistas indexadas en la categoría de mayor relevancia (índices de nivel A), establecidas por el Consejo de Investigación Extensión.*
ii. *Libro o un capítulo de un libro con consejo editorial, producto de la investigación académica de su área afín.*
iii. *Manuales, guías didácticas, diagnósticos participativos, sistematización de experiencias, catalogados para comunidades prioritarias definidas por la Institución.*
iv. *Sistemas y software desarrollados para comunidades prioritarias definidas por la VIE.*

e. *Participación en al menos 2 de los siguientes procesos:*

i. *Participación como persona evaluadora nacional o internacional de proyectos o revistas científicas indexadas nacionales o internacionales.*

ii. Participación con ponencia en congresos interuniversitarios, nacionales o internacionales
iii. Participación en convenios, en redes o comités interinstitucionales, interuniversitarios nacionales o internacionales.

f. No tener informes finales pendientes al momento de inscribir la candidatura de proyectos de investigación o extensión ante la VIE, o ante organismos externos que financiaron el proyecto.

g. No haber recibido durante los tres años previos a la formalización de su postulación al cargo sanciones por acoso sexual, acoso laboral o discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género, ni haber cometido alguna falta en otro ámbito que le implicara una suspensión por más de veinte días hábiles, o sustitutiva del despido.

7. El acuerdo de la Sesión Ordinaria N.° 3398, artículo 12, del 26 de febrero de 2025, fue comunicado mediante oficio SCI-162-2025, fechado 26 de febrero de 2025 y publicado en la Gaceta N.° 1277-2025, fechada 11 de marzo de 2025, y publicada por medios digitales el 11 de marzo de 2025.

8. El plazo para interponer recursos ordinarios de revocatoria y apelación en contra del acuerdo de la Sesión Ordinaria N.° 3398, artículo 12, del 26 de febrero de 2025, vencía el 18 de marzo de 2025.

9. Mediante el oficio EAU-134-2025, con fecha de recibido 14 de marzo de 2025, los docentes de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, Mtr. Arq. Jose Pablo Bulgarelli Bolaños, Mtr. Arq. Ileana Hernández Salazar y MDU. Arq. Mauricio Guevara Murillo, interpusieron un recurso de revocatoria en contra del acuerdo tomado por el Consejo Institucional en la Sesión Ordinaria N.° 3398, artículo 12, del 26 de febrero de 2025, en los siguientes términos:

…

CONSIDERANDO QUE

1. *El acuerdo del Consejo Institucional modifica los requisitos mínimos que deben cumplir las personas postulantes como investigadoras o extensionistas para integrar el Consejo de Investigación y Extensión estableciendo algunos estándares que, a juicio de los recurrentes, discrimina a parte de la comunidad de investigadores y extensionistas que actualmente trabajan en proyectos activos e inscritos ante la Vicerrectoría de Investigación y Extensión y que por lo tanto, limitarían su derecho a representar, así como al verse representados y representadas, ante el Consejo de Investigación y Extensión.*

2. *Sobre el requisito “a. Maestría académica”, como parte de los Requisitos mínimos para postularse como persona integrante del Consejo de*

Investigación y Extensión en los puestos de representantes de investigación, no se encuentra justificación debido a que:

a. *Según el séptimo considerando del Artículo 12, de la sesión ordinaria No. 3398, del Consejo Institucional, del 25 de febrero de 2025, el Análisis de la Comisión de Estatuto Orgánico indica:*

   La maestría académica tiene por su estructura curricular los requisitos mínimos indispensables para el desarrollo de las actividades de investigación. Por lo que esta comisión comprende que es un mínimo requerido y alcanzable para un perfil evaluador de proyectos y de apoyo en la gestión de la investigación universitaria.

b. *Se entiende el argumento de la Comisión de Estatuto Orgánico del Consejo Institucional, en cuanto a que el grado de maestría garantiza formación para el desarrollo de un pensamiento crítico y analítico. En el caso de la maestría académica, se fortalece la capacidad investigativa y la generación de nuevo conocimiento. Por su parte, en la maestría profesional, se potencia la aplicación de conocimientos a la resolución de problemas reales, para lo cual se deben desarrollar capacidades en investigación aplicada.*

   Si bien una maestría profesional tiene un enfoque en la aplicación de conocimiento en el ámbito laboral, la Comisión de Estatuto Orgánico del Consejo Institucional ignora la inversión hecha en los procesos establecidos por la institución para la formación de personas investigadoras por medio de las "actividades de fortalecimiento" y la incorporación de docentes con maestría académica y profesional en proyectos de investigación. Por ende, bajo el criterio de que únicamente la maestría académica garantiza lo mínimos requerimientos para el desarrollo de las actividades de investigación, la Comisión de Estatuto Orgánico del Consejo Institucional excluye a personas que cuentan con maestría profesional, que han participado activamente en proyectos de investigación y durante estos procesos han desarrollado las competencias necesarias para ser representantes académicos ante el CIE.

c. *La Comisión de Estatuto Orgánico del Consejo Institucional parece no haber considerado dentro de su argumento, datos concretos de la institución relacionados con la experiencia de las personas integrantes de los equipos de investigación, tales como:*

   i. *Cantidad de docentes con grado de maestría académica que forman parte de algún equipo de investigación con proyecto activo ante la VIE, que coordinan algún equipo de investigación con proyecto activo ante la VIE, que generan publicaciones académicas.*
   ii. *Cantidad de docentes con grado de maestría profesional que forman parte de algún equipo de investigación con proyecto*

activo ante la VIE, que coordinan algún equipo de investigación con proyecto activo ante la VIE, que generan publicaciones académicas.

iii. *Cantidad de docentes con grado de doctorado que forman parte de algún equipo de investigación con proyecto activo ante la VIE, que coordinan algún equipo de investigación con proyecto activo ante la VIE, que generan publicaciones académicas.*

Esta información le permitiría a dicha comisión no solo comparar la contribución de docentes en la investigación según su grado académico, sino también el nivel de representatividad según el grado y tipo de formación.

d. *La Comisión de Estatuto Orgánico indica que la maestría académica es un mínimo requerido y alcanzable para un perfil evaluador de proyectos y de apoyo en la gestión de la investigación universitaria; sin embargo:*

i. *Según el Artículo 42, del Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica:*

Son funciones específicas del Consejo de Investigación y Extensión:

a. Aprobar los proyectos de investigación y extensión del Instituto
b. Establecer las normas para la aprobación, elaboración, ejecución y evaluación de los programas de investigación y extensión y para la prestación de servicios
c. Recomendar al Consejo Institucional la ubicación de los programas de investigación y extensión
d. Pronunciarse sobre los convenios y contratos de prestación de servicios relacionados con proyectos de investigación y extensión, según el reglamento respectivo
e. Asesorar al Vicerrector para el desarrollo coordinado de los programas de investigación y extensión de todos los campus y centros académicos.
Inciso modificado por la Asamblea Institucional Representativa, Sesión Ordinaria 94-2018, del 25 de abril de 2018. Publicado en Gaceta 511, del 05 de junio de 2018
f. Servir de medio de coordinación de los aspectos que relacionen la investigación y la extensión con la docencia.
g. Asesorar al Consejo Institucional en la definición de políticas de investigación y extensión
h. Eliminado

Inciso eliminado por el Consejo Institucional, Sesión Ordinaria No. 3360, Artículo 11, del 24 de abril de 2024. Publicado en Gaceta No. 1216 del 28 de mayo de 2024.
Inciso incluido por el Consejo Institucional en la Sesión Ordinaria No. 2514, Artículo 15, del 31 de mayo del 2007 (Gaceta No. 225)

Incisos d y g modificados por la Asamblea Institucional Representativa en la Sesión AIR-001-88, del 5 de abril de 1988. (Gaceta 37)

ii. *El reglamento para el funcionamiento del Consejo de Investigación y Extensión, en el Artículo 6, define como funciones específicas del Consejo de Investigación y Extensión las siguientes:*

Son funciones del Consejo de Investigación y Extensión:

a. *Aprobar los proyectos de investigación y extensión del Instituto.*
b. *Establecer las normas para la aprobación, elaboración, ejecución y evaluación de los programas de investigación y extensión y para la prestación de servicios.*
c. *Recomendar al Consejo Institucional la ubicación de los programas de investigación y extensión.*
d. *Pronunciarse sobre los convenios y contratos de prestación de servicios relacionados con proyectos de investigación y extensión, según el reglamento respectivo.*
e. *Asesorar al Vicerrector para el desarrollo coordinado de los programas de investigación y extensión de todos los campus y centros académicos.*
f. *Servir de medio de coordinación de los aspectos que relacionen la investigación y la extensión con la docencia.*
g. *Asesorar al Consejo Institucional en la definición de políticas de investigación y extensión.*
h. *Resolver sobre el apoyo a las propuestas de creación, modificación o eliminación de áreas académicas dedicadas a desarrollar programas investigación y extensión consolidados de carácter inter, trans y/o multidisciplinario, para su trámite ante el Consejo Institucional por parte del Vicerrector de Investigación y Extensión, todo conforme a lo dispuesto por la reglamentación respectiva.*

iii. *Es competencia de los Comité Técnicos de las instancias académicas, según el Reglamento de Investigación y Extensión del Instituto Tecnológico de Costa Rica, lo detallado en el artículo 13:*

Artículo 13. De las funciones de los Comités Técnicos de Investigación y Extensión

Las funciones de los Comités Técnicos de Investigación y Extensión serán la siguientes:
a. Dictaminar las propuestas de investigación o extensión presentadas por la instancia académica.
b. Dictaminar sobre la participación de personas investigadoras o extensionistas de la instancia académica

en propuestas de investigación o extensión coordinadas por otras instancias.
(…)

iv. *Según la GACETA del Instituto Tecnológico de Costa Rica, No. 1222, del martes 18 de junio del 2024, en donde se comunicaron las disposiciones para la presentación de propuestas nuevas de Actividades de Fortalecimiento de Investigación y Proyectos de Investigación financiadas con fondos de la VIE, Convocatoria 2025, se indica:*

1. *En las "DISPOSICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS NUEVAS DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE INVESTIGACIÓN FINANCIADAS CON FONDOS DE LA VIE, CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN 2025"*

Disposiciones Generales
(…)
2.10. Las propuestas serán evaluadas por la instancia académica coordinadora y dictaminadas por la Dirección de Investigación; la instancia académica utilizará las rúbricas aprobadas por el CIE para la respectiva evaluación. La calificación asignada por la instancia académica corresponderá a un 100% de la nota total obtenida mientras que la Dirección de Investigación tendrá que emitir un dictamen sobre la propuesta respectiva.
(…)
2.13. Las actividades de fortalecimiento serán analizadas para su aprobación por el Consejo de Investigación y Extensión, tomando en cuenta la evaluación otorgada por la instancia académica coordinadora, y las observaciones brindadas por la Dirección de Investigación en el dictamen realizado. Se dará trámite únicamente a aquellas propuestas con requisitos completos y que correspondan a lo solicitado en la convocatoria.

2. *DISPOSICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS NUEVAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADAS CON FONDOS DE LA VIE, CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN 2025*

Disposiciones generales
(…)
2.24. Las propuestas de investigación serán evaluadas por la instancia académica coordinadora en su totalidad. Las rúbricas de evaluación serán diseñadas y aprobadas por el CIE. Las propuestas serán dictaminadas por la Dirección de Investigación y aprobadas o rechazadas por el CIE, considerando lo siguiente:

a. Por parte de la Instancia Académica:

i. Planteamiento de la propuesta: se considerará la claridad en la definición de la población meta, la problemática a atender, la estrategia de abordaje, la coherencia en el planteamiento metodológico, el plan de acción, así como la proporcionalidad en el uso de los recursos.

ii. Pertinencia: se tomará en cuenta la proyección de los productos académicos y su relación con las líneas de investigación de la instancia académica coordinadora, los ejes estratégicos de la Institución y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la vinculación con sectores externos al ITCR, la divulgación de resultados y la incidencia en las regiones.

iii. Grupo investigador: se tomará la pertinencia del grupo en su conjunto, la interdisciplinariedad, el trabajo colaborativo entre instancias académicas, campus y centros académicos, la participación estudiantil, la vinculación internacional, experiencia en investigación y la formación de recurso humano; asociado con el plan de acción y la distribución de las tareas según el cronograma y los productos esperados.

b. Por parte de la Dirección de Investigación:

i. Morosidad de las personas investigadoras: se verificará que ninguno de los investigadores participantes se encuentre morosos en la VIE.

ii. Plan de riesgo: se verificará que no haya riesgos que comprometan la ejecución total del proyecto. Asimismo, se verificará la identificación de un riesgo por cada actividad, según objetivo, así como acciones de mitigación coherentes.

iii. Participación estudiantil: Se verificará que haya participación estudiantil ya sea como estudiantes asistentes o en el desarrollo de TFG.

iv. Permisos: se verificará que se requiere de permisos para el desarrollo del proyecto, incluyendo acceso a recursos de la biodiversidad, estudios biomédicos, comité Bienestar Animal, territorios y pueblos indígenas. Todos los casos anteriores deben estar identificados en el plan de riegos con las respectivas medidas de mitigación.

v. Propiedad intelectual: Identificar posibilidades de protección de la propiedad intelectual, para ser canalizadas por el Centro de Vinculación.

vi. Documentación general.

c. Por parte del Consejo de Investigación y Extensión:

i. Análisis del proceso de evaluación y dictamen, en cumplimiento a las disposiciones y reglamentos del ITCR, y normativa nacional.

ii. Conveniencia institucional y disponibilidad de recursos.

Según lo anterior, la persona representante académico ante el Consejo de Investigación y Extensión no evalúa los proyectos de investigación, siendo esta una competencia otorgada a los Comité Técnicos de Investigación y Extensión de las Instancias Académicas. Además, las competencias para el apoyo a la gestión de la investigación universitaria, así como para el cumplimiento de las funciones como persona representante académico ante el Consejo de Investigación y Extensión, no son exclusivas de una persona docente con maestría académica, sino que pueden ser desarrolladas por una persona con maestría profesional y experiencia comprobable en investigación.

e. *Se podría considerar como requisito: "maestría académica o maestría profesional con experiencia en investigación". Dicha experiencia en investigación puede ser verificable a partir de los requisitos de participación en proyectos de investigación y producción académica.*

3. *Sobre el requisito "b. Nombramiento en una clase de puesto académico, con una jornada de 50% a tiempo indefinido y con la categoría de asociado, según el Reglamento de Carrera Profesional del ITCR y sus Reformas, o su equivalente", parte de los Requisitos mínimos para postularse como persona integrante del Consejo de Investigación y Extensión en los puestos de representantes de investigación, se considera que:*

a. *Según el séptimo considerando del Artículo 12, de la sesión ordinaria No. 3398, del Consejo Institucional, del 25 de febrero de 2025, el Análisis de la Comisión de Estatuto Orgánico indica que:*

   La categoría de asociado, según el Reglamento de Carrera Profesional del ITCR y sus Reformas, o su equivalente contiene los mínimos aportados en las respuestas a la consulta, tales como años de permanencia en la institución, trabajo académico con productos en todas las actividades sustantivas y evaluación alta en el desempeño.

b. *Si bien la categoría de asociado contiene los requerimientos deseables para que una persona docente sea representante ante el Consejo de Investigación y Extensión, tales como años de permanencia en la institución, trabajo académico con productos en todas las actividades sustantivas y evaluación alta en el desempeño, estas condiciones ya se cumplen con los demás requisitos estipulados. Además, no considera los plazos en las aprobaciones de ascenso en las categorías del régimen de carrera profesional.*

c. *La participación en órganos institucionales como el Consejo de Investigación y Extensión otorga, según el reglamento de Carrera Profesional del ITCR, puntos para el ascenso en las categorías docentes. Sin embargo, este tipo de requisitos restringe la participación a funcionarios que ya han logrado ascender, aun cuando la experiencia en investigación pueda ser similar.*

d. *Se podría considerar como requisito: "Nombramiento en una clase de puesto académico, con una jornada de 50% a tiempo indefinido".*

4. *Sobre el requisito "b. Nombramiento en una clase de puesto académico, con una jornada de 50% a tiempo indefinido y con la categoría de asociado, según el Reglamento de Carrera Profesional del ITCR y sus Reformas, o su equivalente", parte de los Requisitos mínimos para postularse como persona integrante del Consejo de Investigación y Extensión en los puestos de representantes de extensión, se considera que:*

a. *Según el séptimo considerando del Artículo 12, de la sesión ordinaria No. 3398, del Consejo Institucional, del 25 de febrero de 2025, el Análisis de la Comisión de Estatuto Orgánico indica que:*

   La categoría de asociado, según el Reglamento de Carrera Profesional del ITCR y sus Reformas, o su equivalente contiene los mínimos aportados en las respuestas a la consulta, tales como años de permanencia en la institución, trabajo académico con productos en todas las actividades sustantivas y evaluación alta en el desempeño.

b. *Si bien la categoría de asociado contiene los requerimientos deseables para que una persona docente sea representante ante el Consejo de Investigación y Extensión, tales como años de permanencia en la institución, trabajo académico con productos en todas las actividades sustantivas y evaluación alta en el desempeño, estas condiciones ya se cumplen con los demás requisitos estipulados. Y no considera los plazos en las aprobaciones de ascenso en las categorías del régimen de carrera profesional.*

c. *La participación en órganos institucionales como el Consejo de Investigación y Extensión otorga, según el reglamento de Carrera Profesional del ITCR, puntos para el ascenso en las categorías docentes. Sin embargo, este tipo de requisitos restringe la participación a funcionarios que ya han logrado ascender, aun cuando la experiencia en extensión pueda ser similar.*

d. *Se podría considerar como requisito: "Nombramiento en una clase de puesto académico, con una jornada de 50% a tiempo indefinido".*

POR TANTO, SE SOLICITA al CI:

Reconsiderar el acuerdo tomado en la sesión ordinaria No. 3398, Artículo 12, del 26 de febrero de 2025, Modificación de los requisitos y productos que deben cumplir las personas postulantes como investigadoras o extensionistas para integrar el Consejo de Investigación y Extensión, según los argumentos expuestos en los considerandos, para modificar los incisos "a" y "b" establecidos para los representantes de investigación; y el inciso "b" establecido para los representantes de extensión.

En lo concerniente al recurso de revocatoria, toda comunicación podrá ser remitida a los recurrentes a los correos electrónicos jpbulgarelli@itcr.ac.cr ; ihernandez@itcr.ac.cr ; y mauguevara@itcr.ac.cr

…

10. El recurso interpuesto por los docentes de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, Mtr. Arq. Jose Pablo Bulgarelli Bolaños, Mtr. Arq. Ileana Hernández Salazar y MDU. Arq. Mauricio Guevara Murillo, fue conocido por el pleno del Consejo Institucional en la sección de "Informe de Correspondencia" de la Sesión Ordinaria N.° 3401, efectuada el miércoles 19 de marzo de 2025, disponiéndose su traslado a la Comisión de Estatuto Orgánico, para su estudio y recomendación de resolución a este Órgano, de conformidad con lo que establece el artículo 76 del Reglamento del Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica.

11. En la Sesión Ordinaria N.° 3402, artículo 13, realizada el 26 de marzo de 2025, acogiendo el dictamen de la Comisión de Estatuto Orgánico en cuanto a la admisibilidad del recurso presentado por el máster Jose Pablo Bulgarelli Bolaños, máster Ileana Hernández Salazar y máster Mauricio Guevara Murillo, el Consejo Institucional acordó lo siguiente:

…
Se acuerda:

a. *Admitir para el estudio correspondiente, el recurso de revocatoria presentado por el máster Jose Pablo Bulgarelli Bolaños, máster Ileana Hernández Salazar y máster Mauricio Guevara Murillo, en contra del acuerdo de la Sesión Ordinaria N.° 3398, artículo 12, del 26 de febrero de 2025 del Consejo Institucional, con miras a establecer una resolución por el fondo.*

…

12. La Comisión de Estatuto Orgánico en su reunión extraordinaria N.° 425 realizada el 25 de abril de 2025, emitió dictamen recomendativo por el fondo del recurso presentado por el máster José Pablo Bulgarelli Bolaños, máster Ileana Hernández Salazar y máster Mauricio Guevara Murillo, en los siguientes términos:

Resultando que:

1. *En la Sesión Ordinaria N.º 3398, artículo 12, del 26 de febrero de 2025, el Consejo Institucional aprobó la modificación de los requisitos y productos que deben cumplir las personas postulantes como investigadoras o extensionistas para integrar el Consejo de Investigación y Extensión (en adelante se hará referencia a este como el acuerdo recurrido). En lo que interesa para el presente dictamen resolvió lo siguiente:*

   SE ACUERDA:

   a. *Establecer los siguientes requisitos para optar por una candidatura para integrar el Consejo de Investigación y Extensión por el sector académico, conforme a lo indicado en el artículo 41, inciso c, del Estatuto Orgánico:*

   Requisitos mínimos para postularse como persona integrante del Consejo de Investigación y Extensión en los puestos de representantes de investigación

   a. *Maestría académica.*
   b. *Nombramiento en una clase de puesto académico, con una jornada de 50% a tiempo indefinido y con la categoría de asociado o superior, según el Reglamento de Carrera Profesional del ITCR y sus Reformas, o su equivalente.*

   …

   Requisitos mínimos para postularse como persona integrante del Consejo de Investigación y Extensión en los puestos de representantes de extensión

   a. *Maestría.*
   b. *Nombramiento en una clase de puesto académico, con una jornada de 50% a tiempo indefinido y con la categoría de asociado o superior, según el Reglamento de Carrera Profesional del ITCR y sus Reformas, o su equivalente.*

   …

2. *Se recibe por traslado del Consejo Institucional el oficio EAU-134-2025, mediante el cual los docentes de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, máster Jose Pablo Bulgarelli Bolaños, máster Ileana Hernández Salazar y máster Mauricio Guevara Murillo, recurren el acuerdo de la Sesión Ordinaria N.º 3398, artículo 12, del Consejo Institucional, indicado en el resultando anterior, relativo a la modificación de los requisitos y productos que deben cumplir las personas postulantes como investigadoras o extensionistas para integrar el Consejo de Investigación y Extensión.*

3. *El Consejo Institucional, en la Sesión Ordinaria N.º 3402 artículo 13, del 26 de marzo de 2025, acoge el dictamen de la Comisión de Estatuto*

Orgánico de la reunión N.º 423 del 21 de marzo de 2025 y admitió para resolver por el fondo el recurso de revocatoria presentado en contra del acuerdo adoptado por el Consejo Institucional en la Sesión Ordinaria N.º 3398, artículo 12, del 26 de febrero de 2025.

4. *Del oficio EAU-134-2025, se tiene como petitoria al Consejo Institucional: "Reconsiderar el acuerdo tomado en la sesión ordinaria No. 3398, Artículo 12, del 25 de febrero de 2025, Modificación de los requisitos y productos que deben cumplir las personas postulantes como investigadoras o extensionistas para integrar el Consejo de Investigación y Extensión, según los argumentos expuestos en los considerandos, para modificar los incisos "a" y "b" establecidos para los representantes de investigación; y el inciso "b" establecido para los representantes de extensión".*

5. *Los argumentos que sustentan la petición indicada en el inciso anterior son los siguientes:*

…
CONSIDERANDO QUE:

1. *El acuerdo del Consejo Institucional modifica los requisitos mínimos que deben cumplir las personas postulantes como investigadoras o extensionistas para integrar el Consejo de Investigación y Extensión estableciendo algunos estándares que, a juicio de los recurrentes, discrimina a parte de la comunidad de investigadores y extensionistas que actualmente trabajan en proyectos activos e inscritos ante la Vicerrectoría de Investigación y Extensión y que por lo tanto, limitarían su derecho a representar, así como al verse representados y representadas, ante el Consejo de Investigación y Extensión.*

2. *Sobre el requisito "a. Maestría académica", como parte de los Requisitos mínimos para postularse como persona integrante del Consejo de Investigación y Extensión en los puestos de representantes de investigación, no se encuentra justificación debido a que:*

a. Según el séptimo considerando del Artículo 12, de la sesión ordinaria No. 3398, del Consejo Institucional, del 25 de febrero de 2025, el Análisis de la Comisión de Estatuto Orgánico indica:

> *La maestría académica tiene por su estructura curricular los requisitos mínimos indispensables para el desarrollo de las actividades de investigación. Por lo que esta comisión comprende que es un mínimo requerido y alcanzable para un perfil evaluador de proyectos y de apoyo en la gestión de la investigación universitaria.*

b. Se entiende el argumento de la Comisión de Estatuto Orgánico del Consejo Institucional, en cuanto a que el

grado de maestría garantiza formación para el desarrollo de un pensamiento crítico y analítico. En el caso de la maestría académica, se fortalece la capacidad investigativa y la generación de nuevo conocimiento. Por su parte, en la maestría profesional, se potencia la aplicación de conocimientos a la resolución de problemas reales, para lo cual se deben desarrollar capacidades en investigación aplicada.
Si bien una maestría profesional tiene un enfoque en la aplicación de conocimiento en el ámbito laboral, la Comisión de Estatuto Orgánico del Consejo Institucional ignora la inversión hecha en los procesos establecidos por la institución para la formación de personas investigadoras por medio de las "actividades de fortalecimiento" y la incorporación de docentes con maestría académica y profesional en proyectos de investigación. Por ende, bajo el criterio de que únicamente la maestría académica garantiza lo mínimos requerimientos para el desarrollo de las actividades de investigación, la Comisión de Estatuto Orgánico del Consejo Institucional excluye a personas que cuentan con maestría profesional, que han participado activamente en proyectos de investigación y durante estos procesos han desarrollado las competencias necesarias para ser representantes académicos ante el CIE.

c. La Comisión de Estatuto Orgánico del Consejo Institucional parece no haber considerado dentro de su argumento, datos concretos de la institución relacionados con la experiencia de las personas integrantes de los equipos de investigación, tales como:

i. Cantidad de docentes con grado de maestría académica que forman parte de algún equipo de investigación con proyecto activo ante la VIE, que coordinan algún equipo de investigación con proyecto activo ante la VIE, que generan publicaciones académicas.
ii. Cantidad de docentes con grado de maestría profesional que forman parte de algún equipo de investigación con proyecto activo ante la VIE, que coordinan algún equipo de investigación con proyecto activo ante la VIE, que generan publicaciones académicas.
iii. Cantidad de docentes con grado de doctorado que forman parte de algún equipo de investigación con proyecto activo ante la VIE, que coordinan algún equipo de investigación con proyecto activo ante la VIE, que generan publicaciones académicas.

Esta información le permitiría a dicha comisión no solo comparar la contribución de docentes en la investigación

según su grado académico, sino también el nivel de representatividad según el grado y tipo de formación.

d. *La Comisión de Estatuto Orgánico indica que la maestría académica es un mínimo requerido y alcanzable para un perfil evaluador de proyectos y de apoyo en la gestión de la investigación universitaria; sin embargo:*

i. *Según el Artículo 42, del Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica:*

Son funciones específicas del Consejo de Investigación y Extensión:

a. *Aprobar los proyectos de investigación y extensión del Instituto*
b. *Establecer las normas para la aprobación, elaboración, ejecución y evaluación de los programas de investigación y extensión y para la prestación de servicios*
c. *Recomendar al Consejo Institucional la ubicación de los programas de investigación y extensión*
d. *Pronunciarse sobre los convenios y contratos de prestación de servicios relacionados con proyectos de investigación y extensión, según el reglamento respectivo*
e. *Asesorar al Vicerrector para el desarrollo coordinado de los programas de investigación y extensión de todos los campus y centros académicos.*
Inciso modificado por la Asamblea Institucional Representativa, Sesión Ordinaria 94-2018, del 25 de abril de 2018. Publicado en Gaceta 511, del 05 de junio de 2018
f. *Servir de medio de coordinación de los aspectos que relacionen la investigación y la extensión con la docencia.*
g. *Asesorar al Consejo Institucional en la definición de políticas de investigación y extensión*
h. *Eliminado*

Inciso eliminado por el Consejo Institucional, Sesión Ordinaria No. 3360, Artículo 11, del 24 de abril de 2024. Publicado en Gaceta No. 1216 del 28 de mayo de 2024.
Inciso incluido por el Consejo Institucional en la Sesión Ordinaria No. 2514, Artículo 15, del 31 de mayo del 2007 (Gaceta No. 225)
Incisos d y g modificados por la Asamblea Institucional Representativa en la Sesión AIR-001-88, del 5 de abril de 1988. (Gaceta 37)

ii. *El reglamento para el funcionamiento del Consejo de Investigación y Extensión, en el Artículo 6, define como*

funciones específicas del Consejo de Investigación y Extensión las siguientes:

Son funciones del Consejo de Investigación y Extensión:

a. *Aprobar los proyectos de investigación y extensión del Instituto.*
b. *Establecer las normas para la aprobación, elaboración, ejecución y evaluación de los programas de investigación y extensión y para la prestación de servicios.*
c. *Recomendar al Consejo Institucional la ubicación de los programas de investigación y extensión.*
d. *Pronunciarse sobre los convenios y contratos de prestación de servicios relacionados con proyectos de investigación y extensión, según el reglamento respectivo.*
e. *Asesorar al Vicerrector para el desarrollo coordinado de los programas de investigación y extensión de todos los campus y centros académicos.*
f. *Servir de medio de coordinación de los aspectos que relacionen la investigación y la extensión con la docencia.*
g. *Asesorar al Consejo Institucional en la definición de políticas de investigación y extensión.*
h. *Resolver sobre el apoyo a las propuestas de creación, modificación o eliminación de áreas académicas dedicadas a desarrollar programas investigación y extensión consolidados de carácter inter, trans y/o multidisciplinario, para su trámite ante el Consejo Institucional por parte del Vicerrector de Investigación y Extensión, todo conforme a lo dispuesto por la reglamentación respectiva.*

iii. *Es competencia de los Comité Técnicos de las instancias académicas, según el Reglamento de Investigación y Extensión del Instituto Tecnológico de Costa Rica, lo detallado en el artículo 13:*

Artículo 13. De las funciones de los Comités Técnicos de Investigación y Extensión

Las funciones de los Comités Técnicos de Investigación y Extensión serán la siguientes:
a. Dictaminar las propuestas de investigación o extensión presentadas por la instancia académica.
b. Dictaminar sobre la participación de personas investigadoras o extensionistas de la instancia académica en propuestas de investigación o extensión coordinadas por otras instancias.
(…)

iv. Según la GACETA del Instituto Tecnológico de Costa Rica, No. 1222, del martes 18 de junio del 2024, en donde se comunicaron las disposiciones para la presentación de propuestas nuevas de Actividades de Fortalecimiento de Investigación y Proyectos de Investigación financiadas con fondos de la VIE, Convocatoria 2025, se indica:

1. En las "DISPOSICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS NUEVAS DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE INVESTIGACIÓN FINANCIADAS CON FONDOS DE LA VIE, CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN 2025"

Disposiciones Generales
(…)
2.10. Las propuestas serán evaluadas por la instancia académica coordinadora y dictaminadas por la Dirección de Investigación; la instancia académica utilizará las rúbricas aprobadas por el CIE para la respectiva evaluación. La calificación asignada por la instancia académica corresponderá a un 100% de la nota total obtenida mientras que la Dirección de Investigación tendrá que emitir un dictamen sobre la propuesta respectiva.
(…)
2.13. Las actividades de fortalecimiento serán analizadas para su aprobación por el Consejo de Investigación y Extensión, tomando en cuenta la evaluación otorgada por la instancia académica coordinadora, y las observaciones brindadas por la Dirección de Investigación en el dictamen realizado. Se dará trámite únicamente a aquellas propuestas con requisitos completos y que correspondan a lo solicitado en la convocatoria.

2. DISPOSICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS NUEVAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADAS CON FONDOS DE LA VIE, CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN 2025

Disposiciones generales
(…)
2.24. Las propuestas de investigación serán evaluadas por la instancia académica coordinadora en su totalidad. Las rúbricas de evaluación serán diseñadas y aprobadas por el CIE. Las propuestas serán dictaminadas por la Dirección de Investigación y aprobadas o rechazadas por el CIE, considerando lo siguiente:

a. Por parte de la Instancia Académica:

i. Planteamiento de la propuesta: se considerará la claridad en la definición de la población meta, la problemática a atender, la estrategia de abordaje, la coherencia en el planteamiento metodológico, el plan de acción, así como la proporcionalidad en el uso de los recursos.
ii. Pertinencia: se tomará en cuenta la proyección de los productos académicos y su relación con las líneas de investigación de la instancia académica coordinadora, los ejes estratégicos de la Institución y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la vinculación con sectores externos al ITCR, la divulgación de resultados y la incidencia en las regiones.
iii. Grupo investigador: se tomará la pertinencia del grupo en su conjunto, la interdisciplinariedad, el trabajo colaborativo entre instancias académicas, campus y centros académicos, la participación estudiantil, la vinculación internacional, experiencia en investigación y la formación de recurso humano; asociado con el plan de acción y la distribución de las tareas según el cronograma y los productos esperados.

b. Por parte de la Dirección de Investigación:
i. Morosidad de las personas investigadoras: se verificará que ninguno de los investigadores participantes se encuentre morosos en la VIE.
ii. Plan de riesgo: se verificará que no haya riesgos que comprometan la ejecución total del proyecto. Asimismo, se verificará la identificación de un riesgo por cada actividad, según objetivo, así como acciones de mitigación coherentes.
iii. Participación estudiantil: Se verificará que haya participación estudiantil ya sea como estudiantes asistentes o en el desarrollo de TFG.
iv. Permisos: se verificará que se requiere de permisos para el desarrollo del proyecto, incluyendo acceso a recursos de la biodiversidad, estudios biomédicos, comité Bienestar Animal, territorios y pueblos indígenas. Todos los casos anteriores deben estar identificados en el plan de riegos con las respectivas medidas de mitigación.
v. Propiedad intelectual: Identificar posibilidades de protección de la propiedad intelectual, para ser canalizadas por el Centro de Vinculación.
vi. Documentación general.

c. Por parte del Consejo de Investigación y Extensión:
i. Análisis del proceso de evaluación y dictamen, en cumplimiento a las disposiciones y reglamentos del ITCR, y normativa nacional.

ii. Conveniencia institucional y disponibilidad de recursos.

Según lo anterior, la persona representante académico ante el Consejo de Investigación y Extensión no evalúa los proyectos de investigación, siendo esta una competencia otorgada a los Comité Técnicos de Investigación y Extensión de las Instancias Académicas. Además, las competencias para el apoyo a la gestión de la investigación universitaria, así como para el cumplimiento de las funciones como persona representante académico ante el Consejo de Investigación y Extensión, no son exclusivas de una persona docente con maestría académica, sino que pueden ser desarrolladas por una persona con maestría profesional y experiencia comprobable en investigación.

e. *Se podría considerar como requisito: "maestría académica o maestría profesional con experiencia en investigación". Dicha experiencia en investigación puede ser verificable a partir de los requisitos de participación en proyectos de investigación y producción académica.*

3. *Sobre el requisito "b. Nombramiento en una clase de puesto académico, con una jornada de 50% a tiempo indefinido y con la categoría de asociado, según el Reglamento de Carrera Profesional del ITCR y sus Reformas, o su equivalente", parte de los Requisitos mínimos para postularse como persona integrante del Consejo de Investigación y Extensión en los puestos de representantes de investigación, se considera que:*

a. *Según el séptimo considerando del Artículo 12, de la sesión ordinaria No. 3398, del Consejo Institucional, del 25 de febrero de 2025, el Análisis de la Comisión de Estatuto Orgánico indica que:*

   La categoría de asociado, según el Reglamento de Carrera Profesional del ITCR y sus Reformas, o su equivalente contiene los mínimos aportados en las respuestas a la consulta, tales como años de permanencia en la institución, trabajo académico con productos en todas las actividades sustantivas y evaluación alta en el desempeño.

b. *Si bien la categoría de asociado contiene los requerimientos deseables para que una persona docente sea representante ante el Consejo de Investigación y Extensión, tales como años de permanencia en la institución, trabajo académico con productos en todas las actividades sustantivas y evaluación alta en el desempeño, estas condiciones ya se cumplen con los demás requisitos estipulados. Además, no considera los plazos en las aprobaciones de ascenso en las categorías del régimen de carrera profesional.*

c. *La participación en órganos institucionales como el Consejo de Investigación y Extensión otorga, según el reglamento de Carrera Profesional del ITCR, puntos para el ascenso en las categorías docentes. Sin embargo, este tipo de requisitos restringe la participación a funcionarios que ya han logrado ascender, aun cuando la experiencia en investigación pueda ser similar.*

d. *Se podría considerar como requisito: "Nombramiento en una clase de puesto académico, con una jornada de 50% a tiempo indefinido".*

4. *Sobre el requisito "b. Nombramiento en una clase de puesto académico, con una jornada de 50% a tiempo indefinido y con la categoría de asociado, según el Reglamento de Carrera Profesional del ITCR y sus Reformas, o su equivalente", parte de los Requisitos mínimos para postularse como persona integrante del Consejo de Investigación y Extensión en los puestos de representantes de extensión, se considera que:*

a. *Según el séptimo considerando del Artículo 12, de la sesión ordinaria No. 3398, del Consejo Institucional, del 25 de febrero de 2025, el Análisis de la Comisión de Estatuto Orgánico indica que:*

   La categoría de asociado, según el Reglamento de Carrera Profesional del ITCR y sus Reformas, o su equivalente contiene los mínimos aportados en las respuestas a la consulta, tales como años de permanencia en la institución, trabajo académico con productos en todas las actividades sustantivas y evaluación-alta en el desempeño.

b. *Si bien la categoría de asociado contiene los requerimientos deseables para que una persona docente sea representante ante el Consejo de Investigación y Extensión, tales como años de permanencia en la institución, trabajo académico con productos en todas las actividades sustantivas y evaluación alta en el desempeño, estas condiciones ya se cumplen con los demás requisitos estipulados. Y no considera los plazos en las aprobaciones de ascenso en las categorías del régimen de carrera profesional.*

c. *La participación en órganos institucionales como el Consejo de Investigación y Extensión otorga, según el reglamento de Carrera Profesional del ITCR, puntos para el ascenso en las categorías docentes. Sin embargo, este tipo de requisitos restringe la participación a funcionarios que ya han logrado ascender, aun cuando la experiencia en extensión pueda ser similar.*

d. Se podría considerar como requisito: "Nombramiento en una clase de puesto académico, con una jornada de 50% a tiempo indefinido".

…

6. *Mediante el oficio SCI-319-2025 fechado 23 de abril de 2025, suscrito por la máster Ana Rosa Ruiz Fernández, coordinadora de la Comisión Estatuto Orgánico , dirigido a la Licda. Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de Asesoría Legal, con copia al Consejo Institucional, se solicita criterio legal sobre los posibles efectos de legalidad que implicaría modificar los requisitos establecidos en el acuerdo adoptado por el Consejo Institucional en la Sesión Ordinaria N.° 3398, artículo 12, del 26 de febrero de 2025.*

7. *La Comisión de Estatuto Orgánico en su reunión extraordinaria N.° 425 realizada el 25 de abril de 2025, recibió en audiencia a la licenciada Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de Asesoría Legal y al licenciado Jonathan Quesada Sojo, asesor legal, con el fin de aclarar dudas respecto a la consulta solicitada en el oficio SCI-319-2025.*

8. *Mediante oficio AL-357-2025, fechado el 30 de abril de 2025, la licenciada Yessica Mata Alvarado, directora de la Oficina de Asesoría Legal y el licenciado Jonathan Gustavo Quesada Sojo, asesor legal, remite la respuesta al oficio SCI-319-2025. El oficio mencionado indica lo siguiente:*

   ...
   CRITERIO JURÍDICO
   El proceso de elección de una persona profesora con experiencia en investigación y otra con experiencia en extensión del Campus Tecnológico Central Cartago, así como, una persona profesora con experiencia en investigación o extensión de algún campus tecnológico local o de un centro académico, y sus suplentes ante el Consejo de Investigación y Extensión, para el período comprendido entre el 1° de julio de 2025 y el 30 de junio de 2029, iniciado por el Tribunal Institucional Electoral (TIE), se fundamenta en los requisitos establecidos en el artículo 41 del Estatuto Orgánico. Estos fueron definidos por el Consejo Institucional mediante acuerdo en la sesión ordinaria N.º 3398, artículo 12, del 26 de febrero de 2025, referente a la "Modificación de los requisitos y productos que deben cumplir las personas postulantes como investigadoras o extensionistas para integrar el Consejo de Investigación y Extensión", comunicado por medio del oficio SCI-162-2025 del 26 de febrero de 2025. Dichos requisitos se detallan a continuación:

   ...

   En el acuerdo citado de la sesión ordinaria N°3398, en el apartado "Se acuerda", específicamente en el inciso d), se establece la posibilidad de interponer recursos de revocatoria ante el Consejo Institucional y

de apelación ante la Asamblea Institucional Representativa, como se detalla a continuación:

> *"d. Indicar, que contra este acuerdo podrá interponerse recurso de revocatoria ante este Consejo o de apelación ante la Asamblea Institucional Representativa, en el plazo de 5 días hábiles o los extraordinarios de aclaración o adición, en el plazo máximo de diez días hábiles, posteriores a la notificación del acuerdo. Por así haberlo establecido la Asamblea Institucional Representativa, es potestativo del recurrente interponer ambos recursos o uno solo de ellos, sin que puedan las autoridades recurridas desestimar o rechazar un recurso, porque el recurrente no haya interpuesto el recurso previo.*
> *ACUERDO FIRME"*

La posibilidad de presentar recursos contra un acuerdo del Consejo Institucional tiene su fundamento jurídico inicialmente en el "Reglamento del Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica", al indicar lo siguiente:

…

Asimismo, la "Norma reglamentaria de los artículos 136 y 137 del Estatuto Orgánico", reconoce el derecho a recurrir ordinariamente las decisiones o resoluciones de los órganos colegiados, como es el caso del Consejo Institucional. El recurso de revocatoria tiene como propósito que el mismo órgano revise su decisión, mientras que el de apelación busca que el órgano superior jerárquico lo haga, como se puede observar a continuación:

…

Conforme lo indicado, contra el acuerdo adoptado por el Consejo Institucional en la sesión ordinaria N.º 3398, artículo 12, del 26 de febrero de 2025, se presentó un recurso de revocatoria, al cual se dio admisibilidad en la sesión ordinaria N.º 3402, artículo 13, del 26 de marzo de 2025.

Los recurrentes de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo justifican su recurso argumentando que el acuerdo que modifica los requisitos mínimos para las personas postulantes al Consejo de Investigación y Extensión establece estándares que, a su juicio, discriminan a parte de la comunidad de investigadores y extensionistas que actualmente desarrollan proyectos activos inscritos ante la Vicerrectoría de Investigación y Extensión. Por lo tanto, consideran que se limita su derecho tanto a representar como a ser representados en dicho Consejo.

Respecto a los "Requisitos mínimos para postularse como persona integrante del Consejo de Investigación y Extensión en los puestos de representantes de investigación", en primer lugar, apelan el requisito

a), que exige una maestría académica. Señalan que la evaluación de proyectos corresponde a los Comités Técnicos de Investigación y Extensión de las instancias académicas, no al Consejo. Añaden que las competencias necesarias para representar ante el Consejo no son exclusivas de quienes posean una maestría académica, ya que una maestría profesional con experiencia comprobable en investigación también sería adecuada. Por lo tanto, proponen que el requisito se reformule así: "maestría académica o maestría profesional con experiencia en investigación", siendo esta última verificable mediante la participación en proyectos de investigación y la producción académica.

El segundo requisito impugnado para los puestos de representantes de investigación corresponde al inciso b), su redacción es la siguiente: "Nombramiento en una clase de puesto académico, con una jornada de 50% a tiempo indefinido y con la categoría de asociado, según el Reglamento de Carrera Profesional del ITCR y sus Reformas, o su equivalente". Los recurrentes argumentan que, si bien la categoría de asociado cumple con condiciones deseables como la permanencia institucional y una trayectoria académica consolidada, estas ya se ven reflejadas en otros requisitos. Además, se señala que el requisito no considera los plazos requeridos para los ascensos en la carrera profesional docente y que participar en órganos como el Consejo de Investigación y Extensión otorga puntos para ascender en la carrera profesional, lo cual hace contradictorio exigir como requisito una categoría que puede alcanzarse participando precisamente en este tipo de espacios. Por ello, proponen que el requisito sea: "Nombramiento en una clase de puesto académico, con una jornada de 50% a tiempo indefinido".

Respecto a los "Requisitos mínimos para postularse como persona integrante del Consejo de Investigación y Extensión en los puestos de representantes de extensión" apelan el requisito b), cuya redacción, fundamento de apelación y propuesta de redacción es idéntico al del requisito b) para los puestos de representantes de investigación antes mencionado.

En este contexto, la Asesoría Legal, a partir del análisis realizado, contempla dos posibles escenarios:

El primer escenario consiste en que el Consejo Institucional acoja el recurso de revocatoria y modifique los tres requisitos impugnados. En tal caso, el TIE, cuya función es desarrollar el proceso de elección con base en los requisitos definidos por el Consejo, deberá acatar dicha decisión y emitir una resolución que contemple las modificaciones.

Esto por cuanto, ***aunque el proceso electoral fue convocado el 20 de marzo de 2025, ello no impide su revisión ni invalida la posibilidad de retrotraerlo, dado que no se han consolidado derechos adquiridos irreversibles ni actos que consoliden***

situaciones jurídicas definitivas. Una modificación posterior de los requisitos afecta directamente la base jurídica de la convocatoria inicial, por lo que, para salvaguardar el principio de legalidad y evitar eventuales nulidades, corresponde retrotraer el proceso a su fase inicial*. Esto implica anular formalmente la convocatoria emitida, emitir una nueva con base en los requisitos reformados y ampliar los plazos de postulación para garantizar condiciones de equidad e igualdad entre potenciales postulantes. Desde una perspectiva institucional, esta medida resguarda el interés público y los principios que rigen los procesos electorales internos, los cuales deben desarrollarse con apego a reglas claras, legales y equitativas. Aunque implique reiniciar el procedimiento, es preferible aplicar las normas vigentes y subsanar las inconsistencias detectadas, antes que sostener una elección viciada de legalidad o sujeta a cuestionamientos por falta de transparencia.*

El segundo escenario se daría si el Consejo Institucional rechaza el recurso de revocatoria, manteniendo los requisitos tal como fueron aprobados en la sesión ordinaria N.º 3398, en cuyo caso el proceso de elección puede continuar sin ninguna implicación jurídica.

La aplicación de uno u otro escenario, así como la vía que adopte el TIE, dependerá de la decisión que adopte el Consejo Institucional, órgano que posee la competencia legal para resolver el recurso. En cualquier caso, tanto el Consejo como el TIE deberán motivar adecuadamente sus respectivos actos administrativos, conforme a los parámetros establecidos por el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI, en la resolución N.º 00142–2021, de fecha 29 de octubre de 2021.

> *“Así pues, la motivación debe determinar la aplicación de un concepto jurídico a las circunstancias de hecho singulares de que se trate (según desarrollo de la jurisprudencia española, propiamente en la sentencia del 18 de mayo de 1991, RA 4120, aceptando considerando de la apelada, que cita las SSTS de 23 de setiembre de 1969, RA 6078, y 7 de octubre de 1970, RA 4251, citado por el autor Marcos M. Fernando Pablo, en su obra La motivación del acto administrativo. (Editorial Tecnos, S. A. Madrid. 1993, página 190). Es decir, se trata de una explicación concreta que liga los hechos con el sustento normativo; de manera que cuando hay una breve alusión a normas generales y hechos inespecíficos, se puede concluir que no hay aporte suficiente de justificación, en la medida en que de ellos no es posible deducir los elementos valorados por la autoridad gubernativa para tomar la decisión, lo cual adquiere la mayor trascendencia cuando se trata de actos limitativos o restrictivos de derechos subjetivos o en los que se impone una sanción al administrado.”*

Considerando, además, la necesidad de garantizar la satisfacción del interés público, según lo establecido por el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección IV, en la resolución N.º 00033–2020 del 14 de

abril de 2020, al indicar que: "La Administración Pública tiene un cometido único, la satisfacción del interés público. Esa satisfacción del interés público se logra de diversas maneras, siendo una de ellas a través de la emisión de actos administrativos que actúan las competencias específicas asignadas al órgano u ente administrativo y que le han sido asignadas, precisamente para actuar y satisfacer el interés público incito en la competencia conferida. En principio se entiende que, todo acto administrativo, como resultado concreto de una competencia genérica, tiende a la satisfacción del interés común. Por ello se afirma, que el fin del acto administrativo en consecuencia será la satisfacción del interés público, que constituye el fin general de todo acto administrativo y a su vez, el fin específico será la satisfacción del interés público que está a cargo de esa competencia (artículo 131 LGAP)."

CONCLUSIÓN
Con base en lo expuesto, esta Asesoría Legal concluye que ***el Consejo Institucional tiene plena facultad para acoger un recurso de revocatoria y, en consecuencia, modificar los requisitos establecidos en el acuerdo impugnado, incluso cuando dicho acuerdo sirve como fundamento para un proceso electoral en curso,*** *como el proceso de selección para el nombramiento de los integrantes del Consejo de Investigación y Extensión.*

Por su parte, ***el Tribunal Institucional Electoral, deberá acatar la resolución adoptada por el Consejo Institucional y emitir un acto administrativo que contemple las modificaciones acordadas****, dada la etapa en que se encuentra el proceso electoral, en la cual no existen situaciones jurídicas consolidadas, lo que permite la modificación de los requisitos sin generar afectaciones a derechos adquiridos, en tanto no se haya producido una designación definitiva que consolide los derechos de los participantes.*

Es fundamental que toda decisión esté debidamente motivada, con el fin de garantizar la transparencia, legalidad y el resguardo del interés público, evitando posibles cuestionamientos respecto a la equidad y el derecho de los participantes en el proceso electoral.

… (El resaltado no pertenece al original)

Considerando que:

1. *La Comisión Permanente de Estatuto Orgánico ha sido asignada para el estudio del presente recurso, la cual ha emitido dictamen positivo para la admisibilidad de este, por lo que debe emitir un segundo dictamen sobre el fondo del asunto sometido a consideración del Consejo Institucional.*

   El objetivo del recurso de revocatoria es que el mismo órgano que dictó un acuerdo o resolución reconsidere su decisión a partir de los argumentos que presenta el recurrente, circunstancia que se cumple en el recurso presentado por el máster Jose Pablo Bulgarelli Bolaños, máster Ileana Hernández Salazar y máster Mauricio Guevara Murillo, en el que

solicitan la reconsideración del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N.° 3398, artículo 12, del 26 de febrero de 2025, relativo a la modificación de los requisitos y productos que deben cumplir las personas postulantes como investigadoras o extensionistas para integrar el Consejo de Investigación y Extensión. En su recurso, solicitan modificar los incisos "a" y "b" establecidos para las personas representantes de investigación; así como el inciso "b" establecido para las personas representantes de extensión, conforme a los argumentos expuestos en los considerandos del oficio EAU-134-2025.

2. *En relación con los alegatos presentados por las personas recurrentes, es pertinente detallar a continuación el razonamiento de esta comisión:*

   a. ***Sobre el alegato:*** *"El acuerdo del Consejo Institucional altera los requisitos mínimos que deben cumplir las personas que se postulen como investigadoras o extensionistas para formar parte del Consejo de Investigación y Extensión, estableciendo ciertos criterios que, según los recurrentes, excluyen a una parte de la comunidad de investigadores y extensionistas que actualmente participan en proyectos activos registrados ante la Vicerrectoría de Investigación y Extensión. Esto, según ellos, restringiría su derecho a ser representados y a representar ante dicho consejo."*

   Razonamiento de la Comisión:

   Es importante señalar que la fijación de requisitos para integrar el Consejo de Investigación y Extensión responde a las siguientes finalidades:

   - *Garantizar la idoneidad de quienes aspiran a formar parte del órgano, asegurando que cuenten con las competencias, conocimientos y experiencia necesarias para el adecuado desempeño de sus funciones.*
   - *Promover la igualdad de oportunidades, estableciendo criterios claros, objetivos y transparentes que permitan la participación equitativa de las personas interesadas y así evitar cualquier forma de arbitrariedad o discriminación.*
   - *Proteger el interés público, lo que implica definir restricciones que aseguren la integridad del proceso de selección, como la exigencia de no contar con pendientes o sanciones administrativas.*

   Es importante destacar que los requisitos establecidos en el acuerdo impugnado no impiden la participación de personas con proyectos activos inscritos en la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, excepto en los casos en los que les sean aplicables las restricciones expresamente contempladas en dichos requisitos, así como en aquellos en los que existan pendientes o sanciones vigentes.

   En consecuencia, del análisis de este primer argumento planteado en el recurso, no se advierten elementos que justifiquen la reconsideración o modificación del punto impugnado.

b. Sobre el punto: *Requisito de la maestría académica establecido para las personas investigadoras que aspiren a integrar el Consejo de Investigación y Extensión, las personas recurrentes argumentan lo siguiente:*

a. Que la CEO analizó las características de la estructura curricular de la maestría académica y que esta comprende que es un mínimo requerido y alcanzable para un perfil evaluador de proyectos y de apoyo en la gestión de la investigación universitaria.
b. Que el grado de maestría garantiza formación para el desarrollo de un pensamiento crítico y analítico. En el caso de la maestría académica, se fortalece la capacidad investigativa y la generación de nuevo conocimiento. Por su parte en la maestría profesional, se potencia la aplicación de conocimientos a la resolución de problemas, para lo cual se deben desarrollar capacidades en investigación aplicada.

Además, señalan las personas recurrentes que la Comisión de Estatuto Orgánico ignora la inversión hecha en los procesos establecidos por la Institución para la formación de personas investigadoras y la incorporación de docentes con maestría profesional en proyectos de investigación, por lo que el requisito de maestría académica excluye a personas con maestría profesional que han participado activamente en proyectos de investigación y desarrollado las competencias necesarias para ser representantes académicas ante el CIE. Y asimismo señalan que:

c. La CEO parece no haber considerado dentro de sus argumentos datos concretos de la Institución relacionados con la experiencia de las personas integrantes de los equipos de investigación.
d. La CEO indica que es un mínimo requerido y alcanzable para una persona que participa en un órgano que debe aprobar proyectos de investigación y aún algo de igual importancia, según las funciones del Consejo de Investigación y Extensión, establecer las normas para la aprobación, elaboración, ejecución y evaluación de proyectos de investigación.

Razonamiento de la Comisión:

Sobre estos argumentos, es correcto cuando se señala que el fundamento no se basó en los "datos concretos de la Institución relacionados con la experiencia de las personas que integran los equipos de investigación". Sin embargo, el análisis de la Comisión se fundamentó en una consulta abierta a toda la comunidad institucional, la cual recibió una respuesta muy significativa, no solo de los Consejos de Escuelas donde se lleva a cabo la investigación y la extensión, sino también de reconocidas figuras en el ámbito de la investigación y la extensión.

Se comparte lo señalado por las personas recurrentes sobre el hecho de que existe un grupo de personas con maestría profesional que han

participado activamente en proyectos de investigación y han logrado desarrollar competencias que les permitirían ser representantes académicas ante el CIE. Dado que el requisito c (acuerdo de la Sesión Ordinaria N.° 3398, artículo 12) garantiza que la persona candidata haya desarrollado al menos 3 proyectos de investigación en los últimos 8 años, lo que garantiza un mínimo de experiencia en investigación.

Por lo tanto, se considera oportuno variar el requisito a de los Requisitos mínimos para postularse como persona integrante del Consejo de Investigación y Extensión en los puestos de representantes de investigación (acuerdo del Consejo Institucional de la Sesión Ordinaria N. ° 3398, artículo 12, del 26 de febrero de 2025), para que se establezca de la siguiente forma:

a. Maestría.

***c. En cuanto al alegato:** Requisito "b. Nombramiento en una clase de puesto académico, con una jornada de 50% a tiempo indefinido y con la categoría de asociado, según el Reglamento de Carrera Profesional del ITCR y sus Reformas, o su equivalente", en los puestos representantes de investigación en el recurso se argumenta lo siguiente:*

a. La CEO indicó en su análisis, que la categoría de Asociado contempla los requisitos mínimos señalados en las respuestas a la consulta, tales como años de permanencia, trabajo académico con productos en todas las actividades sustantivas y evaluación de desempeño alta.
b. Aunque el trabajo académico requerido para alcanzar la tercera categoría del régimen de carrera profesional está estipulado en otros requisitos establecidos, no se han considerado los plazos asociados a los procesos de aprobación para el ascenso de categoría en dicho régimen.
c. Si bien la participación en órganos institucionales otorga puntajes conforme al Reglamento de Carrera Profesional, la exigencia de este requisito restringe la participación a quienes han logrado ascender en la carrera profesional, aun cuando su experiencia en investigación pueda ser equivalente a la de quienes ya han alcanzado dicha categoría.

Razonamiento de la Comisión:

Es conveniente considerar que la Comisión de Estatuto Orgánico, en su discusión y análisis de los requisitos y productos, estableció que las personas postulantes como investigadoras o extensionistas para integrar el Consejo de Investigación y Extensión deben cumplir con un perfil académico que consideró trayectoria y experiencia, experiencia en gestión de proyectos (desde la generación y hasta el informe final), experiencia en producción académica de alto impacto, perfil ético y perfil académico con potencial evaluador y orientador de las actividades de investigación y extensión.
En la definición de este perfil académico no se estableció explícitamente una cantidad mínima de años de experiencia por cada uno de los criterios evaluados.

Se reconoce el argumento planteado en el recurso en el sentido de que los requisitos de participación en proyectos y la producción académica exigida también forman parte de los requisitos para el ascenso en el Régimen de Carrera Profesional, según el artículo 77 del Reglamento de Carrera Profesional del Instituto Tecnológico de Costa Rica y sus Reformas. No obstante, es importante señalar que para ascender en dicho régimen no se exige exclusivamente la publicación de artículos en revistas indexadas de nivel A.

De acuerdo con el artículo 74 del Reglamento de Carrera Profesional del Instituto Tecnológico de Costa Rica y sus Reformas se requiere un tiempo de servicio acumulado necesario de 8 años para alcanzar el tercer paso del régimen.

No se identifican elementos que impidan que una persona, en un período menor a ocho años, haya participado en al menos tres proyectos con una línea de investigación definida, haya generado al menos cinco productos universitarios de los indicados y haya completado los dos procesos establecidos. Dichos requisitos resultan más rigurosos que los exigidos en el Régimen de Carrera Profesional. Por lo tanto, la exigencia de haber alcanzado el tercer nivel de la Carrera Profesional introduce, de manera implícita, un requisito adicional que no fue establecido por la Comisión de Estatuto Orgánico en el perfil académico previsto.

Es oportuno considerar que además del tiempo de servicio acumulado mínimo para optar por el tercer paso del régimen, debe considerarse el tiempo requerido por la Comisión de Evaluación Profesional para la evaluación de los atestados, por lo que es necesario suponer que el tiempo será mayor a 8 años, variable que en forma independiente solamente limita la participación de las personas interesadas que podrían cumplir con los demás requisitos establecidos.

Por lo anterior, se estima oportuno y conveniente variar el requisito b de los Requisitos mínimos para postularse como persona integrante del Consejo de Investigación y Extensión en los puestos de representantes de investigación, definidos en el acuerdo del Consejo Institucional de la Sesión Ordinaria N. ° 3398, artículo 12, del 26 de febrero de 2025, para que se establezca de la siguiente forma:

> *b. Nombramiento en una clase de puesto académico, con una jornada de 50% a tiempo indefinido.*

***d. En relación con el punto:** Requisito "b. Nombramiento en una clase de puesto académico, con una jornada de 50% a tiempo indefinido y con la categoría de asociado, según el Reglamento de Carrera Profesional del ITCR y sus Reformas, o su equivalente", en los puestos representantes de extensión en el recurso se argumenta lo mismo que para los puestos representantes de investigación.*

Razonamiento de la Comisión:

Por lo que en congruencia con el análisis realizado se estima oportuno y conveniente variar el requisito b de los Requisitos mínimos para postularse como persona integrante del Consejo de Investigación y Extensión en los puestos de representantes de investigación, definidos en el acuerdo del Consejo Institucional de la Sesión Ordinaria N. ° 3398, artículo 12, del 26 de febrero de 2025, para que se establezca de la siguiente forma:

> *b. Nombramiento en una clase de puesto académico, con una jornada de 50% a tiempo indefinido.*

Se dictamina:

a. *Se recomienda al pleno del Consejo Institucional acoger el recurso de revocatoria presentado por las personas recurrentes en los siguientes términos:*

i. En cuanto al argumento del recurso precitado relativo a que: "el acuerdo del Consejo Institucional que modifica los requisitos mínimos para la integración del Consejo de Investigación y Extensión (CIE), al establecer criterios que, según las personas recurrentes, generan discriminación hacia parte de la comunidad (personas con proyectos activos e inscritos ante la Vicerrectoría de Investigación y Extensión (VIE)), se alega que esta modificación restringiría su derecho a participar y ser representados en el CIE":

Del análisis del argumento planteado en el recurso indicado en los considerados del dictamen de la Comisión, no se advierten elementos que justifiquen la reconsideración o modificación del acuerdo impugnado, por lo tanto, no se acoge el punto recurrido.

ii. Con respecto al requisito de la maestría académica establecido para las personas investigadoras que aspiren a integrar el CIE:

Se comparte que existe un grupo de personas con maestría profesional que han participado activamente en proyectos de investigación y han logrado desarrollar competencias que les permitirían ser representantes académicas ante el CIE. Dado que el requisito c, del acuerdo de la Sesión Ordinaria N.° 3398, artículo 12, garantiza que la persona candidata haya desarrollado al menos 3 proyectos en los últimos 8 años, se establece un mínimo de experiencia en investigación, por lo que se sugiere cambiar el requisito por: "a. Maestría".

iii. Sobre el requisito "b. Nombramiento en una clase de puesto académico, con una jornada de 50% a tiempo indefinido y con la categoría de asociado, según el Reglamento de Carrera Profesional del ITCR y sus Reformas, o su equivalente", en los puestos representantes de investigación:

Se estima oportuno y conveniente variar el requisito del acuerdo del Consejo Institucional de la Sesión Ordinaria N. ° 3398, artículo 12, del 26 de febrero de 2025, para que se establezca de la siguiente forma: "b. Nombramiento en una clase de puesto académico, con una jornada de 50% a tiempo indefinido".

iv. *Sobre el requisito "b. Nombramiento en una clase de puesto académico, con una jornada de 50% a tiempo indefinido y con la categoría de asociado, según el Reglamento de Carrera Profesional del ITCR y sus Reformas, o su equivalente", en los puestos representantes de extensión:*

En congruencia con el análisis realizado se estima oportuno y conveniente variar el requisito b del acuerdo del Consejo Institucional de la Sesión Ordinaria N. ° 3398, Artículo 12, del 26 de febrero de 2025, para que se establezca de la siguiente forma: "b. Nombramiento en una clase de puesto académico, con una jornada de 50% a tiempo indefinido".

b. *Se recomienda al pleno del Consejo Institucional modificar los puntos a y b de los "Requisitos mínimos para postularse como persona integrante del Consejo de Investigación y Extensión en los puestos de representantes de investigación" del acuerdo del Consejo Institucional de la Sesión Ordinaria N.° 3398, artículo 12, del 26 de febrero de 2025, para que se lean de la siguiente manera:*

Requisitos mínimos para postularse como persona integrante del Consejo de Investigación y Extensión en los puestos de representantes de investigación

a. *Maestría*.

b. *Nombramiento en una clase de puesto académico, con una jornada de 50% a tiempo indefinido*.

c. *Se recomienda al pleno del Consejo Institucional modificar el punto b, de los "Requisitos mínimos para postularse como persona integrante del Consejo de Investigación y Extensión en los puestos de representantes de extensión" del acuerdo del Consejo Institucional de la Sesión Ordinaria N.° 3398, artículo 12, del 26 de febrero de 2025, para que se lea de la siguiente manera:*

Requisitos mínimos para postularse como persona integrante del Consejo de Investigación y Extensión en los puestos de representantes de extensión

…

b. *Nombramiento en una clase de puesto académico, con una jornada de 50% a tiempo indefinido*.

d. *Recomendar al pleno del Consejo Institucional comunicar al Tribunal Institucional Electoral el presente acuerdo, a fin de que adopte las medidas necesarias para el proceso de elección que se encuentra en ejecución, el cual fue convocado el 20 de marzo de 2025.*

CONSIDERANDO QUE:

1. La Comisión de Estatuto Orgánico ha analizado el recurso de revocatoria interpuesto por los docentes de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, máster Jose Pablo Bulgarelli Bolaños, máster Ileana Hernández Salazar y máster Mauricio Guevara Murillo, mediante oficio EAU-134-2025 con fecha de recibido 14 de marzo de 2025, en contra del acuerdo que este Órgano adoptó en la Sesión Ordinaria N.° 3398, artículo 12, del 26 de febrero de 2025; determinando que se trata de un recurso de revocatoria (petitoria del documento).

2. La Comisión de Estatuto Orgánico en su dictamen deja evidentes varios aspectos de relevancia:

a. Establecer requisitos no equivale a discriminar ni a imponer barreras para la participación libre de los docentes en los puestos de toma de decisiones. Al contrario, esta acción busca asegurar que quienes ocupen dichas posiciones cuenten con las competencias y la idoneidad necesarias para desempeñar las funciones establecidas para el Consejo de Investigación y Extensión en el Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica.

b. La Comisión comparte lo señalado por las personas recurrentes en cuanto a que existe un grupo de profesionales con maestría que han participado activamente en proyectos de investigación y han desarrollado competencias que les permitirían desempeñarse adecuadamente como representantes académicos ante el Consejo de Investigación y Extensión, y que el requisito c, establecido en el acuerdo de la Sesión Ordinaria N.º 3398, artículo 12, exige que la persona candidata haya participado en al menos tres proyectos de investigación en los últimos ocho años, lo cual garantiza un mínimo de experiencia en investigación.

c. La Comisión, en la discusión y análisis de los requisitos y productos, estableció que las personas postulantes como investigadoras o extensionistas para integrar el Consejo de Investigación y Extensión deben cumplir con un perfil académico que consideró trayectoria y experiencia: en gestión de proyectos (desde la generación y hasta el informe final), y en producción académica de alto impacto, perfil ético y perfil académico con potencial evaluador y orientador de las actividades de investigación y extensión. Al considerarse todos estos aspectos en los requisitos, estimó oportuno eliminar el requisito adicional de la categoría de asociado.

3. Se coincide con el análisis del fondo del recurso y recomendación que emana de la Comisión de Estatuto Orgánico, y se hace propio su razonamiento.

SE ACUERDA:

a. Acoger el recurso de revocatoria presentado por los docentes de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, máster Jose Pablo Bulgarelli Bolaños, máster Ileana Hernández Salazar y máster Mauricio Guevara Murillo, mediante oficio EAU-134-2025 en contra del acuerdo de la Sesión Ordinaria N.° 3398, artículo 12, del 26 de febrero de 2025 del Consejo Institucional, relacionado con la modificación de los requisitos y productos que deben cumplir las personas postulantes como investigadoras o extensionistas para integrar el Consejo de Investigación y Extensión, conforme al razonamiento y criterio emitido por la Comisión de Estatuto Orgánico.

b. Modificar los puntos a y b, de los "Requisitos mínimos para postularse como persona integrante del Consejo de Investigación y Extensión en los puestos de representantes de investigación", establecidos en el acuerdo del Consejo Institucional de la Sesión Ordinaria N.° 3398, artículo 12, del 26 de febrero de 2025, para que se lean de la siguiente manera:

Requisitos mínimos para postularse como persona integrante del Consejo de Investigación y Extensión en los puestos de representantes de investigación

a. Maestría.

b. Nombramiento en una clase de puesto académico, con una jornada de 50% a tiempo indefinido.

…

c. Modificar el punto b, de los "Requisitos mínimos para postularse como persona integrante del Consejo de Investigación y Extensión en los puestos de representantes de extensión", establecido en el acuerdo del Consejo Institucional de la Sesión Ordinaria N.° 3398, artículo 12, del 26 de febrero de 2025, para que se lea de la siguiente manera:

Requisitos mínimos para postularse como persona integrante del Consejo de Investigación y Extensión en los puestos de representantes de extensión

…

b. Nombramiento en una clase de puesto académico, con una jornada de 50% a tiempo indefinido.

…

d. Notificar este acuerdo al máster Jose Pablo Bulgarelli Bolaños, a la máster Ileana Hernández Salazar y al máster Mauricio Guevara Murillo, docentes de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo a las direcciones electrónicas jpbulgarelli@itcr.ac.cr, ihernández@itcr.ac.cr y mauguevara@itcr.ac.cr

e. Comunicar al Tribunal Institucional Electoral el presente acuerdo, a fin de que adopte las medidas necesarias para el proceso de elección que se encuentra en ejecución, el cual fue convocado el 20 de marzo de 2025.

f. Indicar que, contra los incisos b y c del presente acuerdo, podrá interponerse recurso de apelación ante la Asamblea Institucional Representativa, en el plazo máximo de cinco días hábiles.

ACUERDO FIRME

La discusión de este punto consta en el archivo digital de la Sesión Ordinaria N.° 3406.

ARTÍCULO 15. Pronunciamiento sobre el proyecto de ley Expediente N.° 24.648 "LEY PARA LA REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EN CASA (HOMESCHOOLING) EN COSTA RICA" ***(A cargo de la Presidencia)***

La señora Maritza Agüero González presenta la propuesta denominada: "Pronunciamiento sobre el proyecto de ley Expediente N.° 24.648 "LEY PARA LA REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EN CASA (HOMESCHOOLING) EN COSTA RICA", a cargo de la Presidencia (adjunta al acta de esta sesión).

El señor Teodolito Guillen Girón somete a votación la propuesta, quedando aprobada con el siguiente resultado: 10 votos a favor y 0 votos en contra. Se somete a votación la firmeza del acuerdo y es aprobada con: 10 votos a favor y 0 votos en contra.

Por lo tanto, el Consejo Institucional:

RESULTANDO QUE:

1. El artículo 84 de la Constitución Política de la República de Costa Rica establece:

> *La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Las demás instituciones de educación superior universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica.*

El Estado las dotará de patrimonio propio y colaborará en su financiación.

2. El artículo 88 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, establece:

> *Para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a las materias puestas bajo la competencia de la Universidad de Costa Rica y de las demás instituciones de educación superior universitaria, o relacionadas directamente con ellas, la Asamblea Legislativa deberá oír previamente al Consejo Universitario o el órgano director correspondiente de cada una de ellas.*

3. El artículo 18, inciso i) del Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica, señala:

> *Son funciones del Consejo Institucional:*
> *…*
> *i. Evacuar las consultas a que se refiere el Artículo 88 de la Constitución Política de la República.*
> *…*

4. En el "Procedimiento para la atención y emisión de criterio ante consultas de proyectos de ley enviados por la Asamblea Legislativa", se establece la metodología de atención y emisión de criterio a las consultas de los Proyectos de Ley sometidos a conocimiento del Consejo Institucional por la Asamblea Legislativa. En lo conducente se extrae lo siguiente:

> *1. Recibe el documento en consulta enviado por la Asamblea Legislativa.*
>
> *2. Traslada el documento a la Oficina de Asesoría Legal, de inmediato una vez recibido, para que emita dictamen en el plazo de 3 días hábiles…*
>
> […]
>
> *4. El documento es dado a conocer a la Comunidad Institucional mediante la cuenta oficial de correo electrónico, para consulta pública, indicando que las observaciones deberán ser enviadas directamente a la Asamblea Legislativa y señalando la dirección de correo pertinente.*
>
> *5. Recibido el dictamen de la Oficina de Asesoría Legal, la Presidencia confecciona la propuesta que conocerá el Consejo Institucional. El Consejo se pronunciará ordinariamente solo sobre si el proyecto afecta o no la autonomía universitaria. No obstante, cuando lo considere conveniente podrá pronunciarse sobre otros aspectos del proyecto*.
> *…*

5. La Secretaría del Consejo Institucional recibió en consulta por parte de la Comisión Especial de Educación de la Asamblea Legislativa, el proyecto "LEY PARA LA REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EN CASA

(HOMESCHOOLING) EN COSTA RICA" (AL-CE23169-0041-2025 del 18 de marzo de 2025), contenido en el Expediente N.º 24.648, mismo que fue consultado a la Oficina de Asesoría Legal en oficio SCI-227-2025, fechado 19 de marzo de 2025. De igual forma fue sometido a conocimiento y consideración de la comunidad institucional a través de mensaje de correo electrónico.

6. La Oficina de Asesoría Legal emitió criterio en oficio AL-308-2025 del 23 de abril del 2025, indicando lo siguiente:

…

I. SINOPSIS

Expediente	*24.648*
Nombre	*Ley para la Regulación de la Educación A Distancia y en Casa (Homeschooling) En Costa Rica*
Objeto	*Reformas en la Ley Fundamental de Educación, Ley N.° 2160 artículos 3, 6, 7 y 48, en el Código de la Niñez y la Adolescencia artículos 31, 56, 57, 58, 62, Ley N.° 7739, en la Ley de Creación del Consejo Superior de Educación Pública, Ley N.° 1362, artículo 8, y Se derogan los artículos 259, 260 y 261 del Código de Educación, Ley N.° 181, del 18 de agosto de 1944, para formalizar y regular la educación a distancia y en casa en Costa Rica, se busca ofrecer una alternativa educativa que equilibre la autonomía familiar con la supervisión del Estado, garantizando calidad y equidad en el acceso a la educación para todas las personas menores de edad.*
Incidencia	*El proyecto pretende propone formalizar y regular la educación a distancia y en casa en Costa Rica. Aprendiendo de la experiencia de la pandemia y considerando ejemplos internacionales, se busca ofrecer una alternativa educativa que equilibre la autonomía familiar con la supervisión del Estado, garantizando calidad y equidad en el acceso a la educación para todas las personas menores de edad Por ello desde el punto de vista jurídico se determina que el Proyecto de Ley si bien no transgrede directamente las competencias propias de la Institución, si podría presentar roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica y las Universidades Públicas al interferir en la regulación de la educación a distancia y sus controles.*
Recomendación	*Con base en lo expuesto se recomienda, para efectos de atender la audiencia conferida por la Asamblea Legislativa, presentar observaciones en razón de que, desde el punto de vista jurídico se determina que puede presentar roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica y las Universidades Públicas al interferir en las funciones de su regulación de la educación a distancia, por lo que se recomienda indicar expresamente*

	que lo dispuesto en este proyecto no se interpretará como una habilitación para que el Ministerio de Educación Pública interfiera, supervise, regule o condicione los programas, modalidades o niveles de educación a distancia impartidos por las universidades públicas.

II. CRITERIO JURÍDICO

La presente consulta se contrae fundamentalmente a la revisión y emisión del criterio en torno al Proyecto de Ley "Ley para la Regulación de la Educación A Distancia y en Casa (Homeschooling) En Costa Rica", tramitado bajo Expediente N.° 24.648, y al efecto se indica:

A) CONSIDERACIONES GENERALES

Objeto del Proyecto: *El objetivo del Proyecto de ley propone formalizar y regular la educación a distancia y en casa en Costa Rica. Aprendiendo de la experiencia de la pandemia y considerando ejemplos internacionales, se busca ofrecer una alternativa educativa que equilibre la autonomía familiar con la supervisión del Estado, garantizando calidad y equidad en el acceso a la educación para todas las personas menores de edad.*

Motivación: *Este proyecto se fundamenta en la Ley N.° 1362, que crea el Consejo Superior de Educación, para asegurar que esta nueva modalidad se ajuste a los objetivos generales del sistema educativo costarricense. Al reformar el marco regulatorio existente para la habilitación de la educación a distancia y en casa, Costa Rica no solo respondería a las necesidades actuales, sino que también innovaría y modernizaría su sistema educativo, permitiendo un enfoque más inclusivo y adaptable a las diversas realidades y capacidades de su población estudiantil.*

Contenido de la propuesta: *De la revisión efectuada del texto propuesto sobre la cual se nos confiere audiencia se determina que está conformada por 11 artículos y un transitorio, que implican reformas en la Ley Fundamental de Educación, Ley N.° 2160 artículos 3, 6, 7 y 48, en el Código de la Niñez y la Adolescencia artículos 31, 56, 57, 58, 62, Ley N.° 7739, en la ley de Creación del Consejo Superior de Educación Pública, Ley N.° 1362, artículo 8, y Se derogan los artículos 259, 260 y 261 del Código de Educación, Ley N.° 181, del 18 de agosto de 1944:*

Texto vigente	***Propuesta de reforma***	***Observaciones***
Ley Fundamental de Educación, Ley N.° 2160		
ARTÍCULO 1- Se reforma el ***inciso e) al artículo 3 de la Ley Fundamental de Educación****, Ley N.° 2160, del 25 de septiembre de 1957 y sus reformas, para que en adelante se lean de la siguiente manera:*		
ARTICULO 3º.-Para el cumplimiento de los fines expresados, la escuela costarricense procurará: ***(…)***	*(…)* *e) Desarrollar aptitudes, atendiendo adecuadamente las diferencias individuales,* ***a través de ofertas educativas tanto presenciales como no presenciales, entre ellas la educación en casa (conocida***	*Se agregan las ofertas educativas tanto presenciales como no presenciales, entre ellas la educación en casa (conocida como homeschooling) o a*

e) Desarrollar aptitudes, atendiendo adecuadamente las diferencias individuales; (…)	***como homeschooling) o a distancia, permitiendo la personalización del aprendizaje de acuerdo con las necesidades de las y los estudiantes.*** *(…).*	*distancia, permitiendo la personalización del aprendizaje de acuerdo con las necesidades de las y los estudiantes.*
ARTÍCULO 2- Se reforma el inciso a) al artículo 6 de la Ley Fundamental de Educación, Ley N.° 2160, del 25 de septiembre de 1957 y sus reformas, para que en adelante se lea de la siguiente manera:		
ARTICULO 6º.- El sistema educativo nacional comprenderá dos aspectos fundamentales: **a)La educación escolar, que se impartirá en los establecimientos educativos propiamente dichos;**	*(…)* *a) La educación escolar, que podrá impartirse en los establecimientos educativos* ***o mediante modalidades presenciales o no presenciales (de educación a distancia y el homeschooling), siempre bajo la supervisión del Ministerio de Educación Pública.*** *(…).*	
ARTÍCULO 3- Se reforma el artículo 7 de la Ley Fundamental de Educación, Ley N.° 2160, del 25 de setiembre de 1957 y sus reformas, para que en adelante se lea de la siguiente manera:		
ARTICULO 7º.- La educación escolar será graduada conforme al desarrollo psicobiológico de los educandos y comprenderá los siguientes niveles: *a) Educación Pre-escolar;* *b) Educación Primaria;* *c) Educación Media; y* *d) Educación Superior.* *En todos los niveles, el Estado, a través del Ministerio de Educación Pública (MEP), será corresponsable en el cuido integral del niño, la niña y el adolescente, una vez finalizado el programa docente y hasta el egreso del centro educativo al cual pertenece. Por ende, deberá definir programas educativos integrales y focalizados a la población inscrita en el sistema educativo, en los dos primeros niveles.*	*Artículo 7- La educación escolar será graduada conforme al desarrollo psicobiológico de* ***las personas menores de edad*** *y comprenderá los siguientes niveles:* *a) Educación Preescolar* *b) Educación Primaria* *c) Educación Media* *d) Educación Superior* *En todos los niveles, el Estado, a través del Ministerio de Educación Pública (MEP), será corresponsable en el cuido integral del niño, la niña y el adolescente, una vez finalizado el programa docente y hasta el egreso del centro educativo al cual pertenece. Por ende, deberá definir programas educativos integrales y focalizados a la población inscrita en el sistema educativo, en los dos primeros niveles.* ***En el caso de las modalidades de educación presencial y no presencial, el MEP será el responsable de supervisar la continuidad del proceso educativo para las personas estudiantes adscritas a esta oferta educativa, garantizando el derecho fundamental a la educación.***	***En el caso de las modalidades de educación presencial y no presencial, el MEP será el responsable de supervisar la continuidad del proceso educativo para las personas estudiantes adscritas a esta oferta educativa, garantizando el derecho fundamental a la educación.***
ARTÍCULO 4- Se reforma el inciso a) del artículo 48 de la Ley Fundamental de Educación, Ley N.° 2160, del 25 de setiembre de 1957 y sus reformas, para que en adelante se lea de la siguiente manera:		
ARTICULO 48.-Corresponderá al Ministerio de Educación:	*Artículo 48-* *(…)*	

a) Realizar programas adecuados para elevar el nivel cultural de las comunidades;	*a) Realizar programas adecuados para elevar el nivel cultural de las comunidades,* ***mediante la educación presencial o no presencial (a distancia o homeschooling****).* *(…).*	
Código de la Niñez y la Adolescencia		
ARTÍCULO 5- Se reforma el artículo 31 del ***Código de la Niñez y la Adolescencia,*** *Ley N.° 7739, del 06 de enero de 1988 y sus reformas, para que en adelante se lea de la siguiente manera:*		
Artículo 31°- Derecho a la educación en el hogar Las personas menores de edad tendrán derecho de crecer y ser educadas en el seno de una familia; siempre se les asegurarán la convivencia familiar y comunitaria. Cuando el cumplimiento de este derecho peligre por razones socioeconómicas, educativas y ambientales, las instituciones públicas competentes brindarán las oportunidades que se requieran para superar la problemática familiar, así como la capacitación y orientación laboral a los padres y madres, de acuerdo con los siguientes postulados: *a) El Instituto Mixto de Ayuda Social brindará la asistencia integral requeridas y las oportunidades para la promoción y el desarrollo de la familia, incorporándola en procesos de participación y capacitación para facilitar la inserción de los padres y madres en el mercado laboral, por medio de programas que coadyuven a la creación de microempresas u otros. Lo anterior siempre que se comprometan a respetar los derechos de sus hijos e hijas, en especial con su mantenimiento tanto en el sistema educativo formal como en los programas de salud y no registren casos de maltrato, abuso ni explotación sistemáticos.* *b) El Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social serán los encargados de*	*Artículo 31- Derecho a la educación en el hogar:* *Las personas menores de edad tendrán derecho de crecer y ser educadas en el seno de una familia, y podrán optar por recibir educación formal a través de diversas modalidades, presenciales y no presenciales, como la educación a distancia o el homeschooling, siempre bajo la supervisión del Ministerio de Educación Pública. En casos donde peligre el cumplimiento de este derecho por razones socioeconómicas, educativas o ambientales,* ***las instituciones públicas competentes*** *supervisarán, regularán y generarán las condiciones para superar la problemática.*	*Se agrega las modalidades presenciales o no presenciales, como la educación a distancia o el homeschooling, permitiendo la adaptación a las características individuales de cada estudiante.*

garantizar a las madres trabajadoras el acceso a programas de atención integral para el cuido de sus hijos durante la niñez. *c) El Instituto Nacional de Aprendizaje ofrecerá actividades de capacitación laboral y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social orientará a los padres y madres mencionados en este artículo, para su pronta inserción en el mercado laboral.*		
ARTÍCULO 6- Se reforma el artículo 56 del Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley N.° 7739, del 06 de enero de 1988 y sus reformas, para que en adelante se lea de la siguiente manera:		
Artículo 56°- Derecho al desarrollo de potencialidades. *Las personas menores de edad tendrán el derecho de recibir educación orientada hacia el desarrollo de sus potencialidades. La preparación que se le ofrezca se dirigirá al ejercicio pleno de la ciudadanía y le inculcará el respeto por los derechos humanos, los valores culturales propios y el cuidado del ambiente natural, en un marco de paz y solidaridad.*	*Artículo 56- Derecho al desarrollo de potencialidades:* *las personas menores de edad tendrán el derecho de recibir educación orientada hacia el desarrollo de sus potencialidades.* ***Esta educación*** *podrá* ***impartirse a través de modalidades presenciales o no presenciales, como la educación a distancia o el homeschooling, permitiendo la adaptación a las características individuales de cada estudiante.***	
ARTÍCULO 7- Se reforma el artículo 57 del ***Código de la Niñez y la Adolescencia****, Ley N.° 7739, del 06 de enero de 1988 y sus reformas, para que en adelante se lea de la siguiente manera:*		
Artículo 57°- Permanencia en el sistema educativo. *El Ministerio de Educación Pública deberá garantizar la permanencia de las personas menores de edad en el sistema educativo y brindarles el apoyo necesario para conseguirlo.*	*Artículo 57- Permanencia en el sistema educativo:* *el* [*sic*] *Ministerio de Educación Pública deberá garantizar la permanencia de las personas menores de edad en el sistema educativo,* ***ya sea a través de modalidades presenciales o no presenciales y brindarles el apoyo necesario para conseguirlo.***	
ARTÍCULO 8- Se reforma el inciso a) del artículo 58 del Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley N.° 7739, del 06 de enero de 1988 y sus reformas, para que en adelante se lea de la siguiente manera:		
Artículo 58°- Políticas nacionales *En el diseño de las políticas educativas nacionales, el Estado deberá:* *a) Garantizar educación de calidad e igualdad de oportunidades para las personas menores de edad.* *(…)*	*Artículo 58- Políticas nacionales* *En el diseño de las políticas educativas nacionales, el Estado deberá:* *a) Garantizar educación de calidad e igualdad de oportunidades para las personas menores de edad,* ***incluyendo la posibilidad de acceder a modalidades de educación no presencial, asegurando que todas las***	

	modalidades cumplan con los estándares de calidad establecidos. *(…).*	
ARTÍCULO 9- Se reforma el artículo 62 del Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley N.° 7739, del 06 de enero de 1988 y sus reformas, para que en adelante se lean de la siguiente manera:		
Artículo 62°- Derecho a la educación especial. *Las personas con un potencial intelectual superior al normal o con algún grado de discapacidad, tendrán el derecho de recibir atención especial en los centros educativos, para adecuar los métodos de enseñanza a sus necesidades particulares.*	*Artículo 62- Derecho a la educación especial:* *las* [*sic*] *personas con alta dotación demostrada en áreas intelectuales, artísticas, deportivas, creativas o de otras áreas de talento, con alguna condición de discapacidad,* ***tendrán derecho a recibir atención especial en los centros educativos o, en su defecto, optar por modalidades de educación no presencial que se adapten a sus necesidades particulares.***	
Ley de Creación del Consejo Superior de Educación Pública, Ley N.° 1362		
ARTÍCULO 10- Se reforman los incisos b) y c) del artículo 8 de la ***Ley de Creación del Consejo Superior de Educación Pública, Ley N.° 1362****, del 08 de octubre de 1951 y sus reformas, para que en adelante se lean de la siguiente manera:*		
Artículo 8.- El Consejo deberá aprobar: *b) Los proyectos para la creación, modificación o supresión de modalidades educativas, tipos de escuelas y colegios, y la puesta en marcha de proyectos innovadores experimentales, ya se trate de la educación formal o la no formal.* *c) Los reglamentos, planes de estudio y programas a que deban someterse los establecimientos educativos y resolver sobre los problemas de correlación e integración del sistema.*	*Artículo 8-* *(…)* *b) Los proyectos para la creación, modificación o supresión de modalidades educativas, tipos de escuelas y colegios, y la puesta en marcha de proyectos innovadores experimentales, ya se trate de la educación formal, no formal,* ***y que operen bajo modalidades presenciales y no presenciales (de educación a distancia o homeschooling).*** *c) Los reglamentos, planes de estudio y programas a que deban someterse los establecimientos educativos,* ***incluyendo aquellos que operen bajo modalidades presenciales y no presenciales, de educación a distancia o en casa (homeschooling), y resolver sobre los problemas de correlación e integración del sistema.*** *(…).*	
Código de Educación		
ARTÍCULO 11- Se derogan los artículos 259, 260 y 261 del Código de Educación, Ley N° 181, del 18 de agosto de 1944 y sus reformas.		
Artículo 259.- El padre, tutor o guardador que quiera instruir en el hogar a sus hijos o pupilos de edad de 7 a 14 años deberá		*Se derogan los artículos 259, 260 y 262 del Código de Educación, TITULO VII,*

comunicar su propósito a la Junta local de Educación dentro del lapso señalado en el artículo 217 para la matrícula escolar. *Artículo 260.- Los niños de la edad expresada en el artículo anterior, que reciban la instrucción en el hogar, desde el fin del segundo año de escuela deberán sufrir un examen, que versará sobre las materias correspondientes a su edad, en las escuelas públicas en la forma y según los programas de la enseñanza oficial.* *Artículo 261.- En el caso de que el resultado del examen no se presente, queda el padre, tutor o guardador, obligado a enviar sus niños a una escuela pública o privada del distrito dentro de ocho días del requerimiento, y dar aviso a la Junta local de educación de la escuela electa.*		*referente a la enseñanza en el hogar*
	TRANSITORIO ÚNICO- El Poder Ejecutivo reglamentará, en un plazo hasta de doce meses, la presente ley. Establecerá lo pertinente respecto a requisitos de ingreso, seguimiento, evaluación y promoción de las personas estudiantes que en el marco de esta ley opten por las modalidades educativas no presenciales.	

B) Incidencia del Proyecto para la Autonomía Universitaria

La autonomía universitaria sustentada en el artículo 84 de la Constitución[1] Política garantiza el derecho a organizarse, administrarse y regularse a sí misma, sin interferencias de grupos o sectores externos, así como a emplear sus recursos de acuerdo con sus propias decisiones. Todo esto dentro de los límites establecidos por la misma Carta Magna. Las universidades tienen independencia funcional. Tienen facultades y potestades suficientes para reglamentar autónomamente tanto el servicio público de docencia como el de investigación y de extensión, así como disponer y ejecutar las políticas que mejor considere convenientes en estas áreas. Sectores externos como gobierno, no deben interferir con la forma como las Universidades organizan su trabajo en la parte académica, de investigación y extensión.

[1] *ARTÍCULO 84.- La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Las demás instituciones de educación superior universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica.*
El Estado las dotará de patrimonio propio y colaborará en su financiación.

Se indica que el proyecto pretende asegurar que esta nueva modalidad se ajuste a los objetivos generales del sistema educativo costarricense. Al reformar el marco regulatorio existente para la habilitación de la educación a distancia y en casa, Costa Rica no solo respondería a las necesidades actuales, sino que también innovaría y modernizaría su sistema educativo, permitiendo un enfoque más inclusivo y adaptable a las diversas realidades y capacidades de su población estudiantil. No obstante, la regulación de la educación a distancia debe ser competencia exclusiva de las Universidades en el caso de la educación superior.

Por ello desde el punto de vista jurídico se determina que el Proyecto de Ley si bien no transgrede directamente las competencias propias de la Institución, si podría presentar roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica y las Universidades Públicas al interferir en la regulación de la educación a distancia y sus controles. Por ello es importante que se indique expresamente que lo dispuesto en este proyecto no se interpretará como una habilitación para que el Ministerio de Educación Pública interfiera, supervise, regule o condicione los programas, modalidades o niveles de educación a distancia impartidos por las universidades públicas.

III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

Con base en lo expuesto se recomienda, para efectos de atender la audiencia conferida por la Asamblea Legislativa: Sobre el Proyecto de Ley N°24.648 presentar observaciones en razón de que, desde el punto de vista jurídico se determina que puede presentar roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica y las Universidades Públicas, al interferir en la regulación de la educación a distancia.

Se recuerda que esta Asesoría Legal en su carácter consultivo emana criterios técnico-jurídicos por lo que este dictamen no es vinculante, dada las facultades de decisión que ostenta y ejerce el Consejo Institucional.

CONSIDERANDO QUE:

1. El Instituto Tecnológico de Costa Rica, por medio del Consejo Institucional, debe emitir criterio sobre los proyectos de ley que la Asamblea Legislativa le envía a consulta, en acatamiento del artículo 88 de la Constitución Política. De conformidad con la normativa establecida por este Consejo, el pronunciamiento que se efectúe ordinariamente versará sobre la transgresión de la autonomía universitaria; no obstante, cuando lo considere conveniente podrá pronunciarse sobre otros aspectos de los proyectos consultados.

2. El proyecto de ley N.° 24.648, denominado “LEY PARA LA REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EN CASA (HOMESCHOOLING) EN COSTA RICA”, propone una reforma integral al marco normativo de la educación costarricense para formalizar y regular la educación a distancia y en casa

(homeschooling), incorporando esta modalidad como parte del sistema educativo nacional bajo la supervisión del Ministerio de Educación Pública (MEP). El proyecto modifica artículos clave de la Ley Fundamental de Educación, el Código de la Niñez y la Adolescencia, y la Ley de Creación del Consejo Superior de Educación Pública, estableciendo que el MEP será responsable de supervisar todas las modalidades educativas, incluidas las no presenciales.

3. El criterio emitido por la Oficina de Asesoría Legal determina que, desde el punto de vista jurídico, el proyecto de ley si bien no transgrede directamente las competencias propias de la Institución, sí podría presentar roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica y las universidades públicas, al interferir en la regulación de la educación a distancia y sus controles. En particular, se advierte que el proyecto no excluye expresamente del ámbito de supervisión del Ministerio de Educación Pública a las universidades públicas, lo cual podría interpretarse como una habilitación para que dicho Ministerio supervise, regule o condicione los programas, modalidades o niveles de educación a distancia impartidos por estas instituciones, lo que sería contrario al principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 84 de la Constitución Política.

4. El Consejo Institucional, reconociendo el valor del objetivo que persigue el proyecto —la formalización de la educación a distancia y en casa como modalidad educativa válida dentro del sistema nacional—, considera que dicho propósito debe alcanzarse sin comprometer los principios constitucionales que rigen la educación superior pública. En particular, estima que la redacción del proyecto debe ser más precisa para evitar interpretaciones que puedan afectar la autonomía universitaria, especialmente en lo relativo a la regulación de modalidades educativas que son competencia exclusiva de las universidades públicas. Por ello, es necesario que el texto excluya de forma expresa a las universidades públicas del ámbito de supervisión del Ministerio de Educación Pública en lo que respecta a la educación a distancia.

5. Debe observarse que artículo 7 de la Ley Fundamental de Educación (Ley N.° 2160), clasifica los niveles de la educación escolar, incluyendo la Educación Superior; esto implica que, salvo que el proyecto de ley indique expresamente lo contrario, las disposiciones que regulan el sistema educativo nacional podrían interpretarse como aplicables también a las universidades públicas.

SE ACUERDA:

a. Indicar en respuesta a la consulta recibida de parte de la Asamblea Legislativa, a través de la instancia consultante que, el proyecto de ley citado a continuación podría presentar roces con la autonomía otorgada constitucionalmente a las universidades públicas, al no excluir expresamente del ámbito de supervisión del Ministerio de Educación Pública a las modalidades de educación a distancia impartidas por dichas instituciones:

Expediente	Nombre del proyecto	Comisión consultante
N.° 24.648	LEY PARA LA REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EN CASA (HOMESCHOOLING) EN COSTA RICA	Comisión Especial de Educación AL-CE23169-0041-2025

b. Solicitar a la Comisión Especial de Educación que se incorpore en el texto del proyecto una cláusula expresa que indique lo siguiente:

> Lo dispuesto en esta ley no se interpretará como una habilitación para que el Ministerio de Educación Pública interfiera, supervise, regule o condicione los programas, modalidades o niveles de educación a distancia impartidos por las universidades públicas, en virtud de su autonomía constitucional.

c. Indicar que el presente acuerdo no podrá ser impugnado por carecer de efectos jurídicos propios.

ACUERDO FIRME

La discusión de este punto consta en el archivo digital de la Sesión Ordinaria N.° 3406.

ARTÍCULO 16. Pronunciamiento sobre el proyecto de ley Expediente N.° 23.919 "LEY PARA LA PROMOCIÓN RESPONSABLE DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN COSTA RICA" (texto sustitutivo) ***(A cargo de la Presidencia)***

La señora Maritza Agüero González presenta la propuesta denominada: "Pronunciamiento sobre el proyecto de ley Expediente N.° 23.919 "LEY PARA LA PROMOCIÓN RESPONSABLE DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN COSTA RICA" (texto sustitutivo), a cargo de la Presidencia (adjunta al acta de esta sesión).

El señor Teodolito Guillen Girón somete a votación la propuesta, quedando aprobada con el siguiente resultado: 10 votos a favor y 0 votos en contra. Se somete a votación la firmeza del acuerdo y es aprobada con: 10 votos a favor y 0 votos en contra.

Por lo tanto, el Consejo Institucional:

RESULTANDO QUE:

1. El artículo 84 de la Constitución Política de la República de Costa Rica establece:

> *La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad*

jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Las demás instituciones de educación superior universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica.

El Estado las dotará de patrimonio propio y colaborará en su financiación.

2. El artículo 88 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, establece:

Para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a las materias puestas bajo la competencia de la Universidad de Costa Rica y de las demás instituciones de educación superior universitaria, o relacionadas directamente con ellas, la Asamblea Legislativa deberá oír previamente al Consejo Universitario o el órgano director correspondiente de cada una de ellas.

3. El artículo 18, inciso i) del Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica, señala:

Son funciones del Consejo Institucional:
…
i. Evacuar las consultas a que se refiere el Artículo 88 de la Constitución Política de la República.
…

4. En el “Procedimiento para la atención y emisión de criterio ante consultas de proyectos de ley enviados por la Asamblea Legislativa”, se establece la metodología de atención y emisión de criterio a las consultas de los Proyectos de Ley sometidos a conocimiento del Consejo Institucional por la Asamblea Legislativa. En lo conducente se extrae lo siguiente:

1. *Recibe el documento en consulta enviado por la Asamblea Legislativa.*

2. *Traslada el documento a la Oficina de Asesoría Legal, de inmediato una vez recibido, para que emita dictamen en el plazo de 3 días hábiles…*

[…]

3. *El documento es dado a conocer a la Comunidad Institucional mediante la cuenta oficial de correo electrónico, para consulta pública, indicando que las observaciones deberán ser enviadas directamente a la Asamblea Legislativa y señalando la dirección de correo pertinente.*

4. *Recibido el dictamen de la Oficina de Asesoría Legal, la Presidencia confecciona la propuesta que conocerá el Consejo Institucional. El Consejo se pronunciará ordinariamente solo sobre si el proyecto afecta o no la autonomía universitaria. No obstante, cuando lo considere conveniente podrá pronunciarse sobre otros aspectos del proyecto*.

…

5. La Secretaría del Consejo Institucional recibió en consulta por parte de la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa, el texto sustitutivo del proyecto "LEY PARA LA PROMOCIÓN RESPONSABLE DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN COSTA RICA" (AL-CPECTE-0561-2025 del 11 de marzo de 2025), contenido en el Expediente N.° 23.919, mismo que fue consultado a la Oficina de Asesoría Legal en oficio SCI-194-2025, fechado 11 de marzo de 2025. De igual forma fue sometido a conocimiento y consideración de la comunidad institucional a través de mensaje de correo electrónico.

6. La Oficina de Asesoría Legal emitió criterio en oficio AL-314-2025 del 22 de abril del 2025, indicando lo siguiente:

…

I. SINOPSIS

Expediente	*N.°23.919*
Nombre	*Ley para la Promoción Responsable de la Inteligencia Artificial en Costa Rica.*
Objeto	*El objeto de esta ley es la promoción del uso, investigación, diseño, desarrollo, despliegue, utilización, implementación y aplicación de la inteligencia artificial (en adelante IA), en Costa Rica, de conformidad con los principios de la ética, responsabilidad, dignidad humana, igualdad, equidad y la transparencia, a efectos de tutelar los derechos de las personas ante el nuevo cambio tecnológico y contribuir al mejoramiento de las condiciones, sociales, laborales, económicas, ambientales, productivas y humanas del país.*
Incidencia	*Desde el punto de vista jurídico se determina que el Proyecto de Ley si bien no transgrede directamente las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por cuanto su contenido no regula ni interfiere en el funcionamiento interno, la organización, la administración, ni la gestión de los recursos de las universidades públicas, que son los elementos esenciales protegidos por el principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica; Sin embargo, si implicaría participación de las Universidad y de CONARE según se solicite por el MICITT, relacionado con IA en temas de docencia e investigación, por lo que se deben valorar estas normas específicamente, pues se debe tener claro que la injerencia del Estado no debería entenderse como un sometimiento a las universidades a restricciones en cuanto al uso de IA en sus proyectos de investigación.*
Recomendación	*Con base en lo expuesto se recomienda, para efectos de atender la audiencia conferida por la Asamblea Legislativa, presentar observaciones para asegurar que no se*

	transgredan las competencias propias de la Institución, ni se presenten roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica.

II. CRITERIO JURÍDICO

La presente consulta se contrae fundamentalmente a la revisión y emisión del criterio en torno al Proyecto de Ley "Ley para la Promoción Responsable de la Inteligencia Artificial en Costa Rica", tramitado bajo Expediente N.° 23.919; y al efecto se indica:

A) CONSIDERACIONES GENERALES

Objeto del Proyecto: *La presente iniciativa de ley pretende la promoción del uso, investigación, diseño, desarrollo, despliegue, utilización, implementación y aplicación de la inteligencia artificial (en adelante IA), en Costa Rica, de conformidad con los principios de la ética, responsabilidad, dignidad humana, igualdad, equidad y la transparencia, a efectos de tutelar los derechos de las personas ante el nuevo cambio tecnológico y contribuir al mejoramiento de las condiciones, sociales, laborales, económicas, ambientales, productivas y humanas del país.*

Motivación: *En el presente proyecto se dispone que se declara de interés público, la inteligencia artificial como actividad al servicio del bienestar de la población, para el mejoramiento de los servicios públicos, el desarrollo empresarial, el desarrollo de las cadenas productivas, de las cooperativas, asociaciones de productores, centros de salud, centros educativos públicos y privados y de toda persona física o jurídica que emplee la inteligencia artificial para la eficiencia y eficacia de las actividades o servicios.*

Contenido de la propuesta: *De la revisión efectuada del texto propuesto sobre la cual se nos confiere audiencia se determina que está conformada por cuarenta y ocho artículos y un transitorio, de los cuales se detalle lo más relevante y con posibles implicaciones en docencia e investigación:*

ARTÍCULO	***PROPUESTA***
	Ley para la Promoción Responsable de la Inteligencia Artificial en Costa Rica
1	*Objeto. El objeto de esta ley es la promoción del uso, investigación, diseño, desarrollo, despliegue, utilización, implementación y aplicación de la inteligencia artificial (en adelante IA), en Costa Rica, de conformidad con los principios de la ética, responsabilidad, dignidad humana, igualdad, equidad y la transparencia, a efectos de tutelar los derechos de las personas ante el nuevo cambio tecnológico y contribuir al mejoramiento de las condiciones, sociales, laborales, económicas, ambientales, productivas y humanas del país.*

2	*ARTÍCULO 2- Declaratoria de interés público* *Se declara de interés público, la inteligencia artificial como actividad al servicio del bienestar de la población, para el mejoramiento de los servicios públicos, el desarrollo empresarial, el desarrollo de las cadenas productivas, de las cooperativas, asociaciones de productores, centros de salud, centros educativos públicos y privados y de toda persona física o jurídica que emplee la inteligencia artificial para la eficiencia y eficacia de las actividades o servicios.*
3	*ARTÍCULO 3- Ámbito de aplicación* *Esta ley de inteligencia artificial será aplicable a toda persona física y jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, que desarrolle, investigue, diseñe, use, despliegue y aplique los procesos de inteligencia artificial en el territorio nacional, así como a los proveedores que introduzcan en el mercado o pongan en servicio sistemas de esta naturaleza.*
6	*ARTÍCULO 6- Rectoría de los procesos de inteligencia artificial* ***El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones (Micitt), será el órgano rector de la inteligencia artificial** en Costa Rica y le corresponderá a su persona ministra, dictar la política pública en esta materia.*
7	*ARTÍCULO 7- Comisión Interinstitucional para el Desarrollo de la Inteligencia Artificial* *Se crea la Comisión Interinstitucional para el Desarrollo de la Inteligencia Artificial, en adelante CIDIA, con el propósito de promover, facilitar y desarrollar con la participación de diferentes entidades y organizaciones del sector público y privado, los procesos de inteligencia artificial en Costa Rica. Esta CIDIA estará adscrita al Ministerio de Ciencia Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y será el órgano competente para ejercer de forma exclusiva las funciones y atribuciones que le otorga esta ley.* ***La CIDIA brindará apoyo a entidades públicas y privadas en la adopción de tecnologías de inteligencia artificial,** contará con una unidad y apoyo y los recursos necesarios para su funcionamiento, tendrá su sede en el Micitt, y se regulará de acuerdo con el reglamento de esta ley.* *La CIDIA estará integrada por los siguientes miembros:* *1) El ministro (a) de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones o su representante, quien la presidirá.* *2) Una persona representante del Ministerio de Comercio Exterior (Comex).* *3) El ministro (a) de Educación Pública o su representante.* *4) El ministro (a) de Ambiente y Energía o su representante.* *5) El ministro (a) de Salud Pública o su representante.* *6) **Una persona representante del Consejo de Rectores**.* *7) Una persona representante de la comunidad científica.* *8) Una persona representante de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab).* *9) Un representante de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic).*

	10) Los representantes de entidades públicas que tengan relación la presente ley, podrán formar parte del consejo en calidad de oyentes
8	*ARTÍCULO 8- Competencias de la CIDIA* *1) Tramitar las propuestas de inteligencia artificial que sean sometidas a su conocimiento, valoración y evaluación declaradas de interés público.* *2) Formular planes, acciones, estrategias, proyectos e iniciativas relacionadas con el desarrollo, uso, diseño, investigación e implementación de la inteligencia artificial.* *3) Fomentar la investigación y el emprendimiento de proyectos en el marco del plan nacional de desarrollo, de los planes regionales y sectoriales, sobre inteligencia artificial.* *4) Celebrar convenios institucionales y con personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para la investigación, desarrollo, utilización y despliegue de la inteligencia artificial.* *5) Apoyar a las municipalidades, cooperativas, asociaciones, fundaciones y toda organización no gubernamental, en el proceso de adopción de mecanismos tecnológicos y la infraestructura digital requerida, en el ámbito de la inteligencia artificial.* *6) Analizar y recomendar los proyectos de alianzas público-privadas (APP) sobre inteligencia artificial, de conformidad con la normativa vigente o aquellos basados en figuras jurídicas contractuales donde coparticipen el sector público y el sector privado.* *7) Proponer los reglamentos requeridos para la regulación de la inteligencia artificial y someterlos a su aprobación al Poder Ejecutivo.* *8) Analizar las iniciativas de ley, relacionadas con la inteligencia artificial.* *9) Proponer iniciativas tecnológicas de inteligencia artificial para el desarrollo económico, social, laboral, ambiental, productivo y otras necesarias para el desarrollo del país.* *10) Recomendar y diseñar mecanismos de cooperación entre las entidades y organizaciones del sector público y privado, sobre temas relacionados con la IA, con el propósito de contribuir a resolver los problemas económicos, financieros, laborales, ambientales, productivos y sociales, y de prevenir las situaciones de riesgo, que puedan afectar la capacidad del país en el desarrollo de inteligencia artificial y sus alcances.* *11) Incentivar y apoyar el intercambio de conocimientos y experiencia con entidades públicas y organizaciones privadas, nacionales y extranjeras, así como organismos internacionales sobre inteligencia artificial.* *12) Promover una estrategia de comunicación, información y sensibilización, sobre la inteligencia artificial y sus implicaciones en el territorio nacional.*

	13) Llevar un registro nacional y dar seguimiento sobre los proyectos, obras, investigaciones y actividades de inteligencia artificial que sean declaradas de interés público. *14) Organizar y fomentar con el apoyo del comité, foros, congresos, ferias, eventos, y cualquier otra actividad relacionada a la inteligencia artificial en el país.*
	15) Evaluar y aprobar el certificado de alto riesgo de los proyectos, actividades invenciones u obras de inteligencia artificial declaradas de interés público, el cual será regulado en el reglamento de esta ley. *16) Apoyar y cooperar con las personas físicas y jurídicas que han venido desarrollando la inteligencia artificial en las actividades profesionales, organizacionales y empresariales.* *17) Elaborar y aprobar el Código de Ética para ser aplicado en los procesos y actividades de IA, en apoyo con el comité ético, técnico y científico.* *18) **Promover los procesos educativos relacionados con IA en coordinación con las instituciones competentes en esta materia**.* *19) Capacitar a la fuerza laboral y prevención del desplazamiento a través de los mecanismos administrativos y normativos.* *20) Iniciar procesos de formación y capacitación de los empleados públicos en los procesos de IA.* *21) Dictar medidas de prevención de desplazamientos laborales a causas de la IA.* *22) La CIDIA será la encargada de la ejecución, implementación, monitoreo y seguimiento de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.* *23) Creación o establecimiento de espacios de prueba y suspender los sistemas o procesos de IA, cuando se determine la imposibilidad de la mitigación de los daños.* *24) Definir prototipos de regulación, designar reguladores sectoriales o institución a cargo y establecer las regulaciones respectivas.* *25) Nombrar el comité ético, técnico y científico como órgano de apoyo para el cumplimiento de los propósitos de esta ley.* *26) Designar un organismo de certificación como apoyo en los procesos de inteligencia artificial.* *27) Elaborar informes anuales que contengan los alcances y acciones en materia de inteligencia artificial.* *28) Los representantes de entidades públicas en calidad de oyentes podrán brindar recomendaciones en su ámbito al consejo con el fin de que sea facultativo a fin de proteger los derechos de las personas del sector que representan y de incentivar los proyectos de IA en su sector.* *29) Velar por el cumplimiento de las disposiciones de esta ley.*

9	*ARTÍCULO 9- De las sesiones* *La CIDIA sesionará de forma ordinaria una vez al mes y, extraordinariamente, cuando el presidente de la CIDIA lo convoque, o cuando sea acordado por dos terceras parte de los miembros de la comisión.* ***La CIDIA podrá invitar a convocar a sus sesiones a representantes de otras entidades, instituciones y organizaciones públicas o privadas, así como expertos y académicos debidamente acreditados, cuyas actividades estén relacionadas con la IA**, para que en forma consultiva puedan contribuir a mejorar el desempeño de la CIDIA en beneficio del país. Las sesiones serán públicas y deberá ponerse las actas a disposición de toda persona, de manera pronta y oportuna por el medio que determine la CIDIA Las resoluciones, actas, acuerdos y toda información que sea requerida por una persona con interés legítimo, será en observancia a los principios de acceso a la información pública y transparencia.* *Para que la CIDIA pueda sesionar, debe contar con la mitad más uno o mayoría absoluta de los miembros que la componen.* *La CIDIA sobre IA deberá remitir un informe anual, en el mes de enero, a la CIDIA Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa, así como a la Contraloría General de la República, sobre los proyectos de IA declarados de interés público, conforme a los principios de rendición de cuentas y transparencia.* *El informe al menos deberá contener lo siguiente:* *a) El monto y detalle de los recursos utilizados.* *b) El detalle de las obras y proyectos realizados, con el contenido de los objetivos, metas y fines.* *c) El nombre del ejecutor, investigador o desarrollador de cada obra o proyecto de IA.*
10	*ARTÍCULO 10- **Del Comité ético, técnico y científico*** ***Se crea un Comité de asesoría ético, técnico y científico**, siendo el órgano que examinará y recomendará los programas, proyectos, planes o actividades, así como la normativa que proponga la CIDIA, para ser aplicada con en los procesos y actividades de IA.* *El criterio ético, técnico y científico de este Comité constituye una condición fundamental para desarrollar, diseñar, investigar, utilizar, desplegar, aplicar e implementar la actividad, obra o proyecto, que se haya solicitado o propuesto a la CIDIA sobre inteligencia artificial, por parte de la persona pública o privada, y que sea declarado de interés público, o que por el alto riesgo, sea valorado por el comité, para ser sometido a la CIDIA para su respectiva aprobación o desaprobación.* ***El Comité estará integrado por académicos y especialistas en IA de las universidades públicas, la comunidad científica, representantes del gobierno y del sector privado, mediante el procedimiento que se establezca en el reglamento de esta ley, así como el número de miembros que lo integrarán.*** *Será responsabilidad del Comité de asesoría ética, técnica y*

	científica someter, a la aprobación de la Comisión, diagnósticos, estudios y proyectos que considere técnica y científicamente necesarios para el desarrollo, uso, aplicación, investigación y despliegue de la IA, en razón del interés público.
11	*ARTÍCULO 11- Funciones del Comité ético, científico y técnico* *El Comité tendrá las siguientes funciones:* *a) Examinar y analizar las propuestas de inteligencia artificial declaradas de interés público, que se sometan a su conocimiento y trasladarlas a la CIDIA Interinstitucional para el Desarrollo de la Inteligencia que se señala en esta ley, para su respectiva valoración y aprobación.* *b) Elaborar los informes anuales y estándares técnicos que sean solicitados por la Comisión, sobre inteligencia artificial.* *c) Coordinar con la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab), la regulación de actividades y desarrollo sobre la inteligencia artificial que tengan un impacto en el derecho a la privacidad y protección de datos personales y la privacidad de las personas. El Comité podrá participar a la Prodhab en las sesiones que considere necesarias. El comité no podrá suplir ni interferir con las funciones de la Prodhab, en materia de protección de datos personales.* *d) Apoyar los proyectos de investigación de inteligencia artificial, para verificar el cumplimiento de la legislación vigente, a solicitud de la CIDIA Interinstitucional para el Desarrollo de la Inteligencia.* *e) Monitorear y velar que los principios éticos, técnicos y científicos, promulgados en esta ley, sean aplicados por los sujetos responsables del uso, desarrollo, e implementación de IA y elaborar certificaciones de IA responsables por parte de los sujetos que implementen, usen, desarrollen o apliquen inteligencia artificial.* *f) Velar por el cumplimiento de la inversión adecuada sobre los proyectos de investigación de inteligencia artificial declarados de interés público, que serán conforme a las regulaciones establecidas en la Constitución Política, los instrumentos de derechos humanos y convenios internacionales que rijan la materia y recomendarlos a la CIDIA para su conocimiento, valoración y aprobación.* *g) Cooperar y apoyar, a la CIDIA Interinstitucional para el Desarrollo de la Inteligencia, en la ejecución de fondos presupuestados.* *h) Diseñar y proponer a la CIDIA la aprobación de convenios de cooperación públicos o privados, con organismos de carácter científico, nacionales e internacionales, públicos o privados, y agencias internacionales de carácter bilateral o multilateral.* *i) Darle seguimiento a os programas, proyectos o actividades, sobre IA, e informar sobre los resultados a la comisión.* *j) Velar por el racional y efectivo uso de los fondos, así como el seguimiento y ejecución de los proyectos y convenios,*

	conforme a las disposiciones reglamentarias dictadas por el Poder Ejecutivo, y la normativa interna emitida por la Comisión. *k) Observar y aplicar los estándares internacionales y la interoperabilidad regulatoria a efectos de diseñar las metodologías de evaluación, criterios, requisitos, modalidades y categorías de proyectos, investigaciones o actividades, para ser aprobados por la Comisión. Además, recomendar mecanismos para el monitoreo de los impactos y la calidad de los servicios de IA a la Comisión.* *l)* ***Desarrollar investigaciones académicas sobre inteligencia artificial para contribuir al mejoramiento de las condiciones del país, en el ámbito público y privado****.* *m) Conservar y custodiar los archivos de los proyectos y asuntos sometidos a su conocimiento y toda documentación que respalde su accionar, de conformidad con los procedimientos y condiciones que establece el reglamento de esta ley, bajo los principios y normas que rigen la confidencialidad de esta documentación.* *n) Diseñar las metodologías de evaluación, criterios, requisitos modalidades y categorías de proyectos, investigaciones o actividades, para ser aprobados por la Comisión, que sean declarados de interés público. Además, recomendar mecanismos para el monitoreo de los impactos y la calidad de los servicios de IA.* *o) Recomendar la elaboración de normas conforme a los estándares y metodologías sobre riesgos, con base en criterios internacionales, que se deben implementar por parte de los sujetos responsables de operar o implementar inteligencia artificial.* *p) Recomendar otras acciones, procedimientos y propuestas, que se consideren necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de esta ley.*
12	*ARTÍCULO 12- Prohibición por discriminación de la inteligencia artificial* *Los procesos derivados de la inteligencia artificial no podrán discriminar a las personas y deberán respetar las disposiciones estipuladas en Ley de Protección de las Personas Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, N.° 8968, de 05 de siembre de 2011, y en los derechos consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, suscritos por Costa Rica.*
13	*ARTÍCULO 13-* ***El uso de datos en la inteligencia artificial y el consentimiento informado*** ***Se deberán proteger los datos de las personas, los cuales no pueden ser usados para el desarrollo de la implementación de la IA sin el consentimiento informado*** *de la persona titular o su representante, conforme a la Ley de Protección de las Personas Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, ley N.° 8968 del 7 de julio de 2011, para evitar daños a la integridad, intimidad y privacidad de las personas.* *Los datos personales en el marco de la inteligencia artificial, su uso, desarrollo, investigación e implementación, deben de ser*

	informados previamente a los usuarios sobre las actividades, proyectos o investigaciones, así como el tratamiento que se le esté dando a los mismos y los resultados obtenidos. ***Toda investigación o proyecto de inteligencia artificial, en la que participan seres humanos, el investigador debe obtener el consentimiento informado, individual, voluntario, expreso, específico, escrito*** *o en lenguaje de señas y firmado o con la huella digital del participante o de su representante legal. En el caso del representante legal; se debe incluir copia de documentación en donde se registre la representación legal.*
14	*ARTÍCULO 14- Uso de la información en inteligencia artificial sobre el derecho a la intimidad y la privacidad de los datos de las personas* *Los responsables del uso, desarrollo e implementación de inteligencia artificial deberán garantizar que no se vulnere el derecho a la intimidad y la privacidad de datos de las personas de conformidad con el artículo 24 de la Constitución Política y el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.*
15	*ARTÍCULO 15- Datos biométricos* *En el caso de los datos como la voz, las huellas dactilares, la estructura facial, los patrones de la retina, o el ácido desoxirribonucleico (ADN), y otros que están adscritos a la persona humana, que sean utilizados, aplicados o usados para la inteligencia artificial,* ***deberán contar con la autorización expresa de su titular o*** *de su representante, el cual será notificado de previo y este podrá remitir la respuesta correspondiente a la persona física o jurídica, que utilizará los datos respectivos con el incumplimiento que ello implica, excepto en los casos de delincuencia organizada o criminalidad organizada, que será autorizado por la autoridad judicial respectiva.* *En este caso, el uso de datos y su aplicación deberá regirse por el principio del consentimiento informado estipulado en la Ley de Protección de las Personas frente al Tratamiento de sus Datos Personales, N.°8968, de 07 de julio de 2011 y sus reformas; lo anterior, conforme al debido proceso y a las garantías y derechos constitucionales.*
17	*ARTÍCULO 17- Proceso de digitalización en las actividades productivas* *El Estado, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, fomentará el desarrollo de la inteligencia artificial en los programas de agricultura y otorgará incentivos para la digitalización de dichas actividades del sector agropecuario, siempre que sean necesarios para la producción, reducción y prevención de pérdidas de cosechas y actividad pesquera, aumento de la productividad y el combate a las plagas y efectos del cambio climático, como la desertificación, erosión del suelo, marea roja, entre otros, para mejorar la calidad de sus cosechas crianza y pesca de animales.* *Asimismo, en el ámbito de sus competencias, dará apoyo mediante capacitación a través de los programas institucionales,*

	a las organizaciones de productores del país, cuando estos lo requieran en las actividades de inteligencia artificial. Se autoriza al sistema bancario nacional a promover y fomentar créditos diferenciados, destinados al desarrollo de la inteligencia artificial, en beneficio de los productores y personas pescadoras del país, y estos podrán otorgar bienes adquiridos en el uso de inteligencia artificial, en dación de pago, cuando la entidad bancaria así lo requiera.
19	*ARTÍCULO 19-* ***Apoyo a personas u organizaciones de agricultores para la inteligencia artificial*** ***El Estado, por intermedio del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y con el apoyo de otras instituciones públicas competentes, así como de las organizaciones no gubernamentales y las universidades, que contribuyen y promueven la actividad agropecuaria, quedan habilitadas para disponer del recurso humano, a efectos de transmitir los conocimientos requeridos y especializados, en calidad de facilitadores*** *y capacitadores, en los procesos de participación y de investigación en la actividad agropecuaria, basados en métodos de inteligencia artificial.* *Las personas u organizaciones dedicadas a la actividad agropecuaria contarán con el apoyo del Estado para desarrollar investigación relacionada con la inteligencia artificial.* *Se dará prioridad a la investigación aplicada a la inteligencia artificial que resuelva los problemas en los procesos de planificación estratégica regional, desde la realidad de los sistemas de producción que manejan las personas u organizaciones agricultoras experimentadoras.*
21	*ARTÍCULO 21- Sobre el uso, investigación, aplicación, desarrollo e implementación de la inteligencia artificial, por parte del Estado* ***El Estado podrá dictar políticas, elaborar y ejecutar programas actividades o proyectos sobre el uso, investigación, desarrollo, aplicación e implementación de la inteligencia artificial, que sean declaradas de interés público****; asimismo, podrá suspender estas actividades por situaciones de alto riesgo o de emergencia nacional, que pongan en peligro la seguridad de las personas, de conformidad con las disposiciones establecidas en esta ley y su reglamento. Para ello, el Poder Ejecutivo deberá emitir el acto motivado que justifique dicha suspensión.*
22	*ARTÍCULO 22: Sobre el uso de la inteligencia artificial en la educación:* *El Estado a través del Ministerio de Educación Pública (Mep) brindará apoyo en el desarrollo de actividades, proyectos, obra o invención, de los sistemas de inteligencia artificial en centros educativos públicos y privados en resguardo de la protección de la privacidad y de los datos personales de los menores de edad procurando el bienestar de los niños en la educación atendiendo de manera integral a los desafíos que supone el uso de la IA, para ello deberá garantizar que los educadores estén preparados*

	para la adopción de nuevas tecnologías, los riegos del uso e implementación de la IA en los procesos educativo.
23	***ARTÍCULO 23- sobre el uso de la IA en las investigaciones académicas*** ***Las investigaciones académicas en materia de IA continuarán bajo el principio de libertad académica, deberán brindar informes periódicos al CIDIA, con el fin de supervisar que no atenten contra los derechos fundamentales de las personas.***
26	*ARTÍCULO 26- Autorización para suscribir convenios de cooperación interinstitucional y convenios con entidades no gubernamentales por parte de la Comisión* *Se autoriza a todas las instituciones de la Administración Pública central y descentralizada a celebrar convenios interinstitucionales y de cooperación con organizaciones no gubernamentales, personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, con el propósito de desarrollar, fomentar y realizar actividades de promoción, investigación y publicidad sobre inteligencia artificial, en cumplimiento con las disposiciones de esta ley.*
	ARTÍCULO 27- Alianzas público- privadas (APP *Se podrán celebrar contratos de alianzas público-privadas, para el intercambio de información, conocimiento, desarrollo de obras, actividades, infraestructura, y proyectos, en áreas estratégicas para el país, en ambiente, turismo, educación, salud, capacidad computacional, o las que determine las municipalidades o las instituciones públicas, sobre el desarrollo de los procesos de inteligencia artificial, de conformidad con la legislación o normativa vigente en esta materia*
31	*ARTÍCULO 31- Transparencia y explicabilidad en el uso de la información* ***Las instituciones públicas, así como las personas físicas y jurídicas que reciban fondos públicos, están en la obligación de comunicar, informar y rendir cuentas a ante la CIDIA, sobre el diseño, desarrollo, uso, implementación o funcionamiento de las tecnologías de la inteligencia artificial, además, del impacto y decisión que se adoptó en dicha actividad o proceso de IA, quienes a su vez remitirá anualmente en el mes de enero a la Contraloría General de la República, el informe respectivo para lo que corresponda.*** *Así mismo, los usuarios deberán estar informados del diseño y desarrollo de los sistemas de alto riesgo mediante los principios de transparencia y de publicación máxima, para que los usuarios usen e interpreten correctamente la información contenida en los proyectos de IA.* *La información que aporten los proveedores en cuanto a venta de bienes y servicios de IA, será suministrada mediante un formato digital, sonora, fotográfica, y dicha información deberá ser concisa, completa, correcta clara, pertinente, accesible y comprensible para los usuarios conforme al derecho a la información pública.*

	El Estado velará por la portabilidad de los datos y la interoperabilidad de los formatos, sistemas y aplicaciones, en los términos que prevea el ordenamiento jurídico vigente, conforme al principio de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas.
35	*ARTÍCULO 35-* ***Registro Nacional de Inteligencia Artificial*** ***Los desarrollos, investigaciones y diseño de inteligencia artificial, que sean declarados como proyectos de interés público, deberán ser registrados ante la CIDIA****, previo cumplimiento de los requisitos técnicos y jurídicos Con* [*sic*] *el fin de documentar los proyectos que se desarrollen en territorio nacional. Este registro estará a cargo de la CIDIA.*
37	*ARTÍCULO 37- Deberes y prohibiciones* *Se deberá respetar el derecho a decidir de las personas, en cuanto al uso de datos biométricos en tiempo real en espacios públicos. Las personas deberán ser informadas debidamente, a fin de que puedan decidir libremente sobre el derecho de abandonar los perfiles o prácticas que afecten su conducta o la toma de decisiones. Las excepciones a esta norma procederán en el caso de que las autoridades públicas lleven a cabo acciones motivadas y justificadas, sobre la seguridad pública, aplicando, implementando y usando técnicas y métodos de inteligencia artificial.* *Se prohíbe a toda persona el uso de inteligencia artificial sobre la aplicación de algoritmos, que excluyan o discriminen con dolo o culpa grave, en cuanto a la atención de un servicio de salud pública o privada en los centros de salud respectivos, sobre diagnósticos clínicos, exámenes, o tratamientos sobre padecimientos o enfermedades de las personas usuarias de los servicios de salud públicos y privados.*
39	*ARTÍCULO 39- Ciberseguridad de la inteligencia artificial* *Las personas físicas y jurídicas, indicadas en esta ley, deberán aplicar en el uso de procesos de IA mecanismos tecnológicos, para garantizar la confidencialidad de la información de las personas, así como en las plataformas de negocios sobre bienes y servicios, y todo activo digital, que ponga en riesgo la seguridad de los usuarios, el interés público y de las personas jurídicas, con lo cual se podrán detectar, prevenir, reconocer, identificar y detener amenazas y ataques, contra los sistemas digitales, con observancia en las disposiciones de esta ley y la legislación que le sea aplicable. El Estado, mediante el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones (Micitt), podrá emitir una declaratoria de emergencia nacional ante una crisis de seguridad que ponga en riesgo el interés público, de conformidad con legislación especializada en la materia.* *Conforme al ordenamiento jurídico, toda persona tiene derecho a que los sistemas digitales de información que utilice para su actividad personal, profesional o social, o que traten sus datos o le presten servicios, posean las medidas de seguridad adecuadas que permitan garantizar la integridad, confidencialidad, disponibilidad, resiliencia y autenticidad de la información tratada*

	y la disponibilidad de los servicios prestados.
40	*ARTÍCULO 40- Responsabilidad y resarcimiento por daño* ***Las personas que desarrollen, diseñen, apliquen, realicen e implementen inteligencia artificial están sometidas al régimen de responsabilidad objetiva y solidaria, frente a terceros, y deberán resarcir los daños y perjuicios en la vía judicial*** *correspondiente sobre las infracciones a las disposiciones de la presente ley.* *Las acciones correspondientes a la reparación del daño prescribirán en un plazo de tres años desde la existencia de este, por quien tenga un interés legítimo o un derecho subjetivo.* *La persona trabajadora que use, desarrolle, diseñe, aplique, utilice e implemente inteligencia artificial en nombre de una institución pública o privada, organización o empresa, conservará la titularidad del resultado de su trabajo, no podrá suprimirse su nombre en las publicaciones relacionadas con su trabajo.*
44	*ARTÍCULO 44- Derechos de las personas trabajadoras que desarrollan inteligencia artificial* ***Se garantizarán la dignidad y los derechos fundamentales de las personas trabajadoras en los entornos digitales, así como los derechos que tienen los trabajadores que realizan contratos de teletrabajo conforme a la legislación aplicable****.* *Asimismo, el Estado, debe asegurar las condiciones laborales idóneas, para garantizar los derechos de los trabajadores en los procesos de desarrollo de inteligencia artificial, velando por las garantías establecidas en los convenios internacionales y el cumplimiento fiel del bloque de legalidad aplicable, especialmente los consagrados en el Código de Trabajo, Ley N.º 2, de 27 de agosto de 1943 y sus reformas.*
	Las personas trabajadoras tienen derecho a una formación adecuada que permita su adaptación a las nuevas condiciones laborales cuando se adopten nuevas tecnologías. *Las personas trabajadoras tienen derecho a ser informadas, con la debida antelación, sobre los cambios tecnológicos que vayan a producirse, así como dirigir la participación de las personas trabajadoras en los procesos de transformación digital en la determinación de las consecuencias laborales que la misma pueda implicar. En aquellos centros de trabajo donde exista un sindicato o comité permanente de trabajadores, estos serán informados oportunamente para que de mutuo acuerdo, patrono y representantes de los trabajadores, adopten las medidas necesarias para la debida implementación.* *Sobre el desarrollo y uso de algoritmos y todo procedimiento de actividades de inteligencia artificial, en el ámbito laboral, la CIDIA exigirá una evaluación sobre la privacidad y protección de datos que incluirá en su análisis los riesgos relacionados con los principios éticos y los derechos relativos a la inteligencia artificial contenidos en los instrumentos de derechos humanos e instrumentos de derecho internacional, en particular la perspectiva de género y la proscripción de cualquier forma de discriminación tanto directa como indirecta. Se deberá respetar y aplicar en lo*

	pertinente los convenios firmados por nuestro país con la OIT, especialmente el Convenio 11, así como la regulación particular contenida en los artículo 404 al 410 del Código de Trabajo y los derechos irrenunciables a tenor de lo estipulado en el numeral 74 de la Constitución Política y el artículo 11 del Código de Trabajo, con especial atención a los derechos de conciliación (de conformidad con la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, (RAC) N.º 7727, de 09 de diciembre de 1997 y la literalidad de los artículos 456, 457 y 458 del Código de Trabajo.
	Se informará y formará debidamente a las personas trabajadoras respecto de las condiciones de uso de los entornos digitales destinados a la prestación laboral con particular atención a aquellas obligaciones ordenadas a garantizar la seguridad y la resiliencia de los sistemas en los procesos de inteligencia artificial.
45	*ARTÍCULO 45- Autorización* *Se autoriza a toda entidad pública, poderes del Estado, gobierno central y descentralizado el uso o aplicación de la inteligencia artificial, sobre la prevención de una amenaza inminente para la vida o la seguridad física de las personas o ante un atentado a la seguridad pública, lo cual deberá ser justificada mediante acto motivado, emitido por la autoridad judicial competente según corresponda.*
46	*ARTÍCULO 46- Procedimiento para reclamaciones* *Las reclamaciones originadas por infringir las conductas y violentar los derechos establecidos en esta ley podrán ser interpuesta por la persona presuntamente agraviada o por cualquier persona con interés legítimo ante el órgano correspondiente.* *La reclamación deberá presentarse ante la Dirección Jurídica del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).* *El procedimiento ordinario a seguir para determinar la verdad real de los hechos y dictar el acto final, por parte del Micitt, será el establecido en la Ley General de la Administración Pública, N.° 6227, de 02 de mayo de 1978 y sus reformas, y los artículos correspondientes de la Ley de Jurisdicción Contencioso-administrativa (completar cita)* *En caso de resolución negativa o insuficiente o la ausencia de resolución por parte del Micitt, el interesado podrá ampararse en las disposiciones señaladas anteriormente, para impugnar los actos correspondientes y recurrir a la vía judicial.* *En el caso de que se incumpla con las disposiciones de esta ley, se aplicarán las disposiciones administrativas por parte de los órganos y entes competentes, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales que correspondan.*

47	*ARTÍCULO 47- Sanciones administrativas* *Si se ha incurrido en algina de las faltas tipificadas en la presente ley, se deberá imponer alguna de las siguientes sanciones, sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas correspondientes:* *a) Será sancionado de cinco (5) a veinte (20) salarios base, de conformidad con la Ley N.° 7337, de 05 de mayo de 1993, quien no cuente con el certificado de alto riesgo indicado en el artículo 8 de esta ley y esté desarrollando, usando, implementando o aplicando inteligencia artificial.* *b) Será sancionado con cinco (5) a diez (10) salarios base, de conformidad con la Ley N.° 7337, de 05 de mayo de 1993, quien utilice la inteligencia artificial para desinformar mediante redes sociales, medios televisivos, radiales, digitales, electrónicos o tecnológicos de información, alterando o modificando ideas, frases, palabras o contenido lingüístico, creando falsa información para los usuarios o personas.* *c) Será sancionado con cinco (5) a diez (10) salarios base, de conformidad con la Ley N.° 7337, de 05 de mayo de 1993, quien, mediante archivos de video, imágenes o voz, haciendo uso, aplicando o implementando sistemas de inteligencia artificial, hagan que parezcan originales, auténticos o reales, a fin de engañar, manipular o inducir a error a cualquier persona.* *Lo recaudado producto de estas sanciones administrativas será destinado a la CIDIA para la investigación y desarrollo de la IA, el cual será administrado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones (Micitt), como órgano rector de la inteligencia artificial en Costa Rica.*
48	*ARTÍCULO 48- Reglamentación* *El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de doce meses, a partir de su publicación.*
	TRANSITORIO ÚNICO - ***Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que a la fecha estén utilizando, investigando, desarrollando y aplicando inteligencia artificial deberán, ajustarse a las disposiciones que se estipulan en la presente ley en un plazo de doce meses a partir de la entrada en vigencia.***

B) Incidencia del Proyecto para la Autonomía Universitaria

La autonomía universitaria sustentada en el artículo 84 de la Constitución[1] *Política garantiza el derecho a organizarse, administrarse y regularse a sí misma, sin interferencias de grupos o sectores externos, así como a emplear sus recursos de acuerdo con sus propias decisiones. Todo esto dentro de los límites establecidos por la misma Carta Magna. Las universidades tienen independencia funcional. Tienen facultades y potestades suficientes para*

[1] *ARTÍCULO 84.- La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Las demás instituciones de educación superior universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica.*
El Estado las dotará de patrimonio propio y colaborará en su financiación.

reglamentar autónomamente tanto el servicio público de docencia como el de investigación y de extensión, así como disponer y ejecutar las políticas que mejor considere convenientes en estas áreas.

En este caso el proyecto ley establece que la ley de inteligencia artificial será aplicable a toda persona física y jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, que desarrolle, investigue, diseñe, use, despliegue y aplique los procesos de inteligencia artificial en el territorio nacional.

A su vez, la Ley prevé que el Estado podrá dictar políticas, elaborar y ejecutar programas actividades o proyectos sobre el uso, investigación, desarrollo, aplicación e implementación de la inteligencia artificial, que sean declaradas de interés público.

Se crea la Comisión Interinstitucional para el Desarrollo de la Inteligencia Artificial (CIDIA), con el propósito de promover, facilitar y desarrollar con la participación de diferentes entidades y organizaciones del sector público y privado, los procesos de inteligencia artificial en Costa Rica. Se prevé que la integre además una persona representante del Consejo Nacional de Rectores.

Y se establece que las instituciones públicas, así como las personas físicas y jurídicas que reciban fondos públicos, están en la obligación de comunicar, informar y rendir cuentas a ante la CIDIA, sobre el diseño, desarrollo, uso, implementación o funcionamiento de las tecnologías de la inteligencia artificial, además, del impacto y decisión que se adoptó en dicha actividad o proceso de IA, quienes a su vez remitirá anualmente en el mes de enero a la Contraloría General de la República, el informe respectivo para lo que corresponda.

También se crea un Comité de asesoría ético, técnico y científico, siendo el órgano que examinará y recomendará los programas, proyectos, planes o actividades, así como la normativa que proponga la CIDIA, para ser aplicada con en los procesos y actividades de IA. Y el Comité estará integrado por académicos y especialistas en IA de las universidades públicas, la comunidad científica, representantes del gobierno y del sector privado, mediante el procedimiento que se establezca en el reglamento de esta ley, así como el número de miembros que lo integrarán. Será responsabilidad del Comité de asesoría ética, técnica y científica someter, a la aprobación de la Comisión, diagnósticos, estudios y proyectos que considere técnica y científicamente necesarios para el desarrollo, uso, aplicación, investigación y despliegue de la IA, en razón del interés público.

Se define además que toda investigación o proyecto de inteligencia artificial, en la que participan seres humanos, el investigador debe obtener el consentimiento informado, individual, voluntario, expreso, específico, escrito o en lenguaje de señas y firmado o con la huella digital del participante o de su representante legal

Las investigaciones académicas en materia de IA continuarán bajo el principio de libertad académica, deberán brindar informes periódicos al

CIDIA, con el fin de supervisar que no atenten contra los derechos fundamentales de las personas. Es decir, las Universidades y CONARE tendrán una gran participación según los objetivos del proyecto ley, en cuanto a que las Universidades deberán acatar los lineamientos según la ley y aplicarlo en los proyectos de investigación.

Por ello desde el punto de vista jurídico se determina que el Proyecto de Ley si bien no transgrede directamente las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por cuanto su contenido no regula ni interfiere en el funcionamiento interno, la organización, la administración, ni la gestión de los recursos de las universidades públicas, que son los elementos esenciales protegidos por el principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica; pero si podría implicar la participación activa de las Universidades y de CONARE, según lo solicite o recomiende el MICITT, la Comisión Interinstitucional para el Desarrollo de la Inteligencia Artificial (CIDIA) y el Comité de asesoría ético, técnico y científico, así como el uso e impacto que tendría en los proyectos de investigación. Y además según el Transitorio I de la Ley señala que las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que a la fecha estén utilizando, investigando, desarrollando y aplicando inteligencia artificial deberán, ajustarse a las disposiciones que se estipulan en la presente ley en un plazo de doce meses a partir de la entrada en vigencia.

Por lo que se deben valorar estas normas específicamente, pues se debe tener claro que la injerencia del Estado no debería entenderse como un sometimiento a las universidades a restricciones en cuanto al uso de IA en sus proyectos de investigación.

III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

Con base en lo expuesto se recomienda, para efectos de atender la audiencia conferida por la Asamblea Legislativa: Sobre el Proyecto de Ley N°23.919 presentar observaciones para asegurar que no se transgredan las competencias propias de la Institución, ni se presenten roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica.

... (La negrita y el subrayado corresponden al original)

CONSIDERANDO QUE:

1. El Instituto Tecnológico de Costa Rica, por medio del Consejo Institucional, debe emitir criterio sobre los proyectos de ley que la Asamblea Legislativa le envía a consulta, en acatamiento del artículo 88 de la Constitución Política. De conformidad con la normativa establecida por este Consejo, el pronunciamiento que se efectúe ordinariamente versará sobre la transgresión de la autonomía universitaria; no obstante, cuando lo considere conveniente podrá pronunciarse sobre otros aspectos de los proyectos consultados.

2. El proyecto de ley bajo expediente N.° 23.919, denominado “LEY PARA LA PROMOCIÓN RESPONSABLE DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN COSTA RICA”, pretende la promoción del uso, investigación, diseño, desarrollo, despliegue, utilización, implementación y aplicación de la inteligencia artificial (en adelante IA), en Costa Rica.

3. El criterio emitido por la Oficina de Asesoría Legal determina que, si bien desde el punto de vista jurídico, el proyecto de ley no transgrede directamente las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía, por cuanto su contenido no regula ni interfiere en el funcionamiento interno, la organización, la administración, ni la gestión de los recursos de las universidades públicas; es necesario presentar observaciones, en vista de que podría implicar la participación activa de las universidades en algunos órganos, además debe verse el uso e impacto que tendría en los proyectos de investigación.

4. Del análisis efectuado por este Consejo al texto del proyecto se desprende que:

a. Se prevé la participación de una persona representante del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) como integrante de la Comisión Interinstitucional para el Desarrollo de la Inteligencia Artificial (CIDIA). Además, en el Comité Ético, Técnico y Científico se incluye dentro de los integrantes a personas académicas y especialistas en IA de las universidades públicas.

b. En varios aspectos reviste un carácter imperativo. En particular:

i. El artículo 3 establece que la ley será aplicable a toda persona física o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, que desarrolle, investigue, diseñe, use, despliegue y aplique inteligencia artificial en el territorio nacional, lo cual incluye a las universidades públicas sin distinción.
ii. El artículo 23 impone a las investigaciones académicas en IA la obligación de brindar informes periódicos al CIDIA, con el fin de supervisar que no atenten contra los derechos fundamentales de las personas. Si bien esta disposición reconoce expresamente el principio de libertad académica, el carácter obligatorio del deber de informar y el propósito de supervisión externa podrían interpretarse como una forma de fiscalización sobre la actividad investigativa universitaria.
iii. El artículo 31 establece que las instituciones públicas y quienes reciban fondos públicos están en la obligación de rendir cuentas ante la CIDIA sobre sus actividades en IA, incluyendo el diseño, desarrollo, uso e implementación de estas tecnologías.
iv. El transitorio único obliga a todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que ya estén utilizando IA, a ajustarse a las disposiciones de la ley en un plazo de doce meses a partir de su entrada en vigor.

Estas disposiciones configuran un marco normativo de cumplimiento obligatorio para las universidades públicas, que podría condicionar su libertad de investigación, su capacidad de autorregulación y su independencia funcional.

SE ACUERDA:

a. Responder a la consulta recibida de parte de la Asamblea Legislativa, a través de la instancia consultante que, en el proyecto de ley indicado a continuación, es necesario que se introduzcan salvaguardas explícitas, a fin de garantizar que que no se transgredan las competencias propias de la Institución, ni se presenten roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, en particular en los aspectos siguientes:

i. La participación de las universidades en los órganos creados por la ley o en procesos de transmisión de conocimientos sea de carácter consultivo y no vinculante, sin dejar de lado que cualquier disposición de recurso humano deberá realizarse conforme a la normativa interna y los procedimientos institucionales de cada universidad pública.

ii. Las obligaciones impuestas no interfieran con el ejercicio pleno de la autonomía constitucional, especialmente en lo relativo a la libertad de investigación y docencia.

Expediente	Nombre del proyecto	Comisión consultante
N.° 23.919 (texto sustitutivo)	LEY PARA LA PROMOCIÓN RESPONSABLE DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN COSTA RICA	Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación AL-CPECTE-0561-2025

b. Indicar que el presente acuerdo no podrá ser impugnado por carecer de efectos jurídicos propios.

ACUERDO FIRME

La discusión de este punto consta en el archivo digital de la Sesión Ordinaria N.° 3406.

ARTÍCULO 17. **Pronunciamiento sobre el proyecto de ley Expediente N.° 24.038 “LEY DE INCENTIVO DEL USO DE LOS LABORATORIOS REMOTOS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN COSTA RICA” (texto sustitutivo)** ***(A cargo de la Presidencia)***

La señora Maritza Agüero González presenta la propuesta denominada: “Pronunciamiento sobre el proyecto de ley Expediente N.° 24.038 “LEY DE

INCENTIVO DEL USO DE LOS LABORATORIOS REMOTOS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN COSTA RICA" (texto sustitutivo), a cargo de la Presidencia (adjunta al acta de esta sesión).

El señor Teodolito Guillen Girón somete a votación la propuesta, quedando aprobada con el siguiente resultado: 10 votos a favor y 0 votos en contra. Se somete a votación la firmeza del acuerdo y es aprobada con: 10 votos a favor y 0 votos en contra.

Por lo tanto, el Consejo Institucional:

RESULTANDO QUE:

1. El artículo 84 de la Constitución Política de la República de Costa Rica establece:

> *La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Las demás instituciones de educación superior universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica.*
>
> *El Estado las dotará de patrimonio propio y colaborará en su financiación.*

2. El artículo 88 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, establece:

> *Para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a las materias puestas bajo la competencia de la Universidad de Costa Rica y de las demás instituciones de educación superior universitaria, o relacionadas directamente con ellas, la Asamblea Legislativa deberá oír previamente al Consejo Universitario o el órgano director correspondiente de cada una de ellas.*

3. El artículo 18, inciso i) del Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica, señala:

> *Son funciones del Consejo Institucional:*
> *…*
> *i. Evacuar las consultas a que se refiere el Artículo 88 de la Constitución Política de la República.*
> *…*

4. En el "Procedimiento para la atención y emisión de criterio ante consultas de proyectos de ley enviados por la Asamblea Legislativa", se establece la metodología de atención y emisión de criterio a las consultas de los Proyectos de Ley sometidos a conocimiento del Consejo Institucional por la Asamblea Legislativa. En lo conducente se extrae lo siguiente:

1. *Recibe el documento en consulta enviado por la Asamblea Legislativa.*

2. *Traslada el documento a la Oficina de Asesoría Legal, de inmediato una vez recibido, para que emita dictamen en el plazo de 3 días hábiles…*

[…]

4. *El documento es dado a conocer a la Comunidad Institucional mediante la cuenta oficial de correo electrónico, para consulta pública, indicando que las observaciones deberán ser enviadas directamente a la Asamblea Legislativa y señalando la dirección de correo pertinente.*

5. *Recibido el dictamen de la Oficina de Asesoría Legal, la Presidencia confecciona la propuesta que conocerá el Consejo Institucional. El Consejo se pronunciará ordinariamente solo sobre si el proyecto afecta o no la autonomía universitaria. No obstante, cuando lo considere conveniente podrá pronunciarse sobre otros aspectos del proyecto*.

…

5. La Secretaría del Consejo Institucional recibió en consulta por parte de la Comisión Especial de Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa, el texto sustitutivo del proyecto “LEY DE INCENTIVO DEL USO DE LOS LABORATORIOS REMOTOS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN COSTA RICA” (AL-CPECTE-0561-2025 del 18 de marzo de 2025), contenido en el Expediente N.° 24.038, mismo que fue consultado a la Oficina de Asesoría Legal en oficio SCI-227-2025, fechado 19 de marzo de 2025. De igual forma fue sometido a conocimiento y consideración de la comunidad institucional a través de mensaje de correo electrónico.

6. La Oficina de Asesoría Legal emitió criterio en oficio AL-302-2025 del 23 de abril del 2025, indicando lo siguiente:

…

I. SINOPSIS

Expediente	*24.038*
Nombre	*Ley de Incentivo del Uso de los Laboratorios Remotos de las Universidades Públicas para el Fortalecimiento de la Educación en Costa Rica*
Objeto	*Establecer el marco legal necesario para promover el acceso de los centros educativos de nivel medio, técnico y otras instituciones públicas de educación básica y superior a los laboratorios remotos de las Universidades Públicas que, en el marco de su autonomía, acuerden participar del programa, con el propósito de fortalecer las habilidades necesarias para que los estudiantes puedan completar con éxito su proceso educativo, e incentivar vocaciones científicas que, en el*

	futuro, mejoren las oportunidades educativas y laborales en Costa Rica.
Incidencia	*El proyecto pretende promover el acceso de los centros educativos a los laboratorios remotos de las Universidades Públicas que, en el marco de su autonomía, que acuerden participar del programa. Sin embargo, es importante destacar que si bien se destaca que las Universidades Públicas, podrán participar del programa y los fines de la ley únicamente en el marco de su autonomía y competencias, podría presentarse roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica y las Universidades Públicas, al interferir en las funciones realizadas en los laboratorios y sus condiciones de uso* [*sic*]
Recomendación	*Con base en lo expuesto se recomienda, para efectos de atender la audiencia conferida por la Asamblea Legislativa, presentar observaciones en razón de que, desde el punto de vista jurídico se determina que puede presentar roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica y las Universidades Públicas al interferir en las funciones realizadas por las Universidades en el tipo de laboratorios remotos y la falta de claridad en cuanto al uso y condiciones por lo que se debe aclarar expresamente que toda participación es voluntaria, ejercida en el marco de la autonomía constitucional, sin que ello implique imposición de condiciones técnicas, administrativas o presupuestarias.*

II. CRITERIO JURÍDICO

La presente consulta se contrae fundamentalmente a la revisión y emisión del criterio en torno al Proyecto de Ley "Ley de Incentivo del Uso de los Laboratorios Remotos de las Universidades Públicas para el Fortalecimiento de la Educación en Costa Rica, tramitado bajo Expediente N°24.038 con el Texto Sustitutivo; y al efecto se indica:

A) CONSIDERACIONES GENERALES

Objeto del Proyecto: *El objetivo del Proyecto de Ley es establecer el marco legal necesario para promover el acceso de los centros educativos de nivel medio, técnico y otras instituciones públicas de educación básica y superior a los laboratorios remotos de las Universidades Públicas que, en el marco de su autonomía, acuerden participar del programa, con el propósito de fortalecer las habilidades necesarias para que los estudiantes puedan completar con éxito su proceso educativo, e incentivar vocaciones científicas que, en el futuro, mejoren las oportunidades educativas y laborales en Costa Rica.*

Motivación: *La presente ley es de aplicación para el Ministerio de Educación Pública en todo el territorio nacional. Las Universidades Públicas,*

podrán participar del programa y los fines de la ley únicamente en el marco de su autonomía y competencias.

La finalidad de la Ley es establecer un programa que promueva las capacidades STEM (acrónimo en inglés para referirse a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y mitigue las repercusiones negativas del "apagón educativo" por medio del trabajo experimental remoto con las ventajas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en todo el sistema educativo costarricense.

Contenido de la propuesta: *De la revisión efectuada del texto propuesto sobre la cual se nos confiere audiencia se determina que está conformada por 10 artículos:*

ARTÍCULO	***PROPUESTA***
	Ley de Incentivo del Uso de los Laboratorios Remotos de las Universidades Públicas para el Fortalecimiento de la Educación en Costa Rica
1	*ARTÍCULO 1- Objeto de la Ley.* *Establecer el marco legal necesario para promover el acceso de los centros educativos de nivel medio, técnico y otras instituciones públicas de educación básica y superior a los laboratorios remotos de las Universidades Públicas que, en el marco de su autonomía, acuerden participar del programa, con el propósito de fortalecer las habilidades necesarias para que los estudiantes puedan completar con éxito su proceso educativo, e incentivar vocaciones científicas que, en el futuro, mejoren las oportunidades educativas y laborales en Costa Rica.*
2	*ARTÍCULO 2- Ámbito de Aplicación.* *La presente ley es de aplicación para el Ministerio de Educación Pública en todo el territorio nacional****. Las Universidades Públicas, podrán participar del programa y los fines de la ley únicamente en el marco de su autonomía y competencias.***
3	*ARTÍCULO 3- Finalidad.* *La finalidad de la Ley es establecer un programa que promueva las capacidades STEM (acrónimo en inglés para referirse a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y mitigue las repercusiones negativas del "apagón educativo" por medio del trabajo experimental remoto con las ventajas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en todo el sistema educativo costarricense.*
4	*ARTÍCULO 4- Definición de Laboratorios Remotos.* ***Se define como Laboratorios Remotos (LR) a los recursos educativos que integran software y hardware*** *para llevar a cabo actividades experimentales reales a través de Internet, permitiendo a estudiantes y profesores manipular equipos y realizar experimentos a distancia.*

5	*ARTÍCULO 5- Acceso a Laboratorios Remotos.* ***Las instituciones educativas de nivel medio, técnico y superior, públicas y privadas, podrán acceder a los Laboratorios Remotos de las Universidades Públicas, que participen del programa****, con el fin de enriquecer el aprendizaje y la enseñanza de las ciencias naturales y matemáticas.*
6	*ARTÍCULO 6- Uso de Laboratorios Remotos.* ***El uso de Laboratorios Remotos se promoverá como complemento a la enseñanza tradicional de las ciencias naturales****, enfatizando la importancia de la experimentación en edades tempranas.*
7	*ARTÍCULO 7- Capacitación y Recursos para Docentes.* *El Ministerio de Educación Pública, en colaboración con las Universidades Públicas que participen del programa, establecerá programas de capacitación y proporcionará recursos para los docentes con el fin de facilitar la implementación efectiva de Laboratorios Remotos en el currículo educativo.*
	TÍTULO III DE LOS BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN
8	*ARTÍCULO 8- Beneficios de los Laboratorios Remotos para la Educación.*
	Se reconoce que la ***implementación de Laboratorios Remotos*** *en el sistema educativo tiene múltiples beneficios, que incluyen:* *a) Incremento del acceso a herramientas científicas.* *b) Disponibilidad las veinticuatro horas de equipos de laboratorio.* *c) Fomento del trabajo autónomo de los estudiantes.* *d) Seguimiento y evaluación más efectiva de los progresos de los estudiantes.* *e) Ampliación de experiencias que los laboratorios tradicionales no pueden ofrecer.* *f) Atención de grupos masivos y heterogéneos.*
9	*ARTÍCULO 9- Fomento de las Vocaciones Científicas.* *El Ministerio de Educación Pública enfatizará la importancia de la experimentación temprana en la formación de vocaciones científicas y promoverá en las instituciones educativas, el uso y aprovechamiento de los Laboratorios Remotos como una herramienta para motivar a los estudiantes hacia carreras STEM.*
	TÍTULO IV *DISPOSICIONES FINALES*
10	*ARTÍCULO 10- Recursos para la Implementación.* *El Ministerio de Educación Pública destinará la asignación de recursos necesarios para la implementación efectiva de esta ley, incluyendo la adquisición de equipos y la formación de docentes****, para lo cual podrá establecer convenios y coordinación con las Universidades Públicas que participen del programa.***

B) Incidencia del Proyecto para la Autonomía Universitaria

La autonomía universitaria sustentada en el artículo 84 de la Constitución[1] Política garantiza el derecho a organizarse, administrarse y regularse a sí misma, sin interferencias de grupos o sectores externos, así como a emplear sus recursos de acuerdo con sus propias decisiones. Todo esto dentro de los límites establecidos por la misma Carta Magna. Las universidades tienen independencia funcional. Tienen facultades y potestades suficientes para reglamentar autónomamente tanto el servicio público de docencia como el de investigación y de extensión, así como disponer y ejecutar las políticas que mejor considere convenientes en estas áreas. Sectores externos como gobierno, no deben interferir con la forma como las Universidades organizan su trabajo en la parte académica, de investigación y extensión.

El proyecto pretende establecer el marco legal necesario para promover el acceso de los centros educativos de nivel medio, técnico y otras instituciones públicas de educación básica y superior a los laboratorios remotos de las Universidades Públicas que, en el marco de su autonomía, acuerden participar del programa, con el propósito de fortalecer las habilidades necesarias para que los estudiantes puedan completar con éxito su proceso educativo, e incentivar vocaciones científicas que, en el futuro, mejoren las oportunidades educativas y laborales en Costa Rica.

Por ello desde el punto de vista jurídico se determina que el Proyecto de Ley si bien no transgrede directamente las competencias propias de la Institución, si podría presentar roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica y las Universidades Públicas al interferir en las funciones y usos de los laboratorios.

Se propone que el Ministerio de Educación Pública destinará la asignación de recursos necesarios para la implementación efectiva de esta ley, incluyendo la adquisición de equipos y la formación de docentes, ***para lo cual podrá establecer convenios y coordinación con las Universidades Públicas que participen del programa.***

No queda claro en la redacción de las normas, el uso de los laboratorios remotos y la forma en que las Universidades acuerden participar del programa, lo cual si transgrede la autonomía universitaria y la forma y condiciones del acceso a los laboratorios, por lo que se debe aclarar expresamente que toda participación es voluntaria, ejercida en el marco de la autonomía constitucional, sin que ello implique imposición de condiciones técnicas, administrativas o presupuestarias.

III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

[1] *ARTÍCULO 84.- La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Las demás instituciones de educación superior universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica.*
El Estado las dotará de patrimonio propio y colaborará en su financiación.

> *Con base en lo expuesto se recomienda, para efectos de atender la audiencia conferida por la Asamblea Legislativa: Sobre el Proyecto de Ley N° 24.038 presentar observaciones en razón de que, desde el punto de vista jurídico se determina que puede presentar roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica y las Universidades Públicas, al interferir en las funciones realizadas en los laboratorios y sus condiciones de uso, por lo que se debe aclarar expresamente que toda participación es voluntaria, ejercida en el marco de la autonomía constitucional, sin que ello implique imposición de condiciones técnicas, administrativas o presupuestarias.*
>
> ... (La negrita y el subrayado corresponden al original)

CONSIDERANDO QUE:

1. El artículo 84 de la Constitución Política garantiza la autonomía funcional y administrativa de las universidades públicas, incluyendo la potestad de definir el uso de sus recursos, infraestructura y programas académicos. Por su parte el artículo 88 de la Constitución exige que la Asamblea Legislativa consulte a las universidades sobre proyectos de ley que afecten sus competencias.

2. El proyecto de ley bajo el expediente N.° 24.038, denominado “LEY DE INCENTIVO DEL USO DE LOS LABORATORIOS REMOTOS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN COSTA RICA”, tiene por objeto establecer el marco legal necesario para promover el acceso de los centros educativos de nivel medio, técnico y otras instituciones públicas de educación básica y superior a los laboratorios remotos de las universidades públicas que, en el marco de su autonomía, acuerden participar del programa, con el propósito de fortalecer las habilidades necesarias para que las personas estudiantes puedan completar con éxito su proceso educativo, e incentivar vocaciones científicas que, en el futuro, mejoren las oportunidades educativas y laborales en Costa Rica.

3. Este Consejo se pronunció sobre el texto base del proyecto de ley N.° 24.038, mediante acuerdo de la Sesión N.° 3354, Artículo 7, del 6 de marzo de 2024 (comunicado en oficio SCI-243-2024 de la misma fecha), en el cual manifestó su oposición. La iniciativa, aunque loable en su intención, no garantizaba que la participación de las universidades fuera voluntaria y sin imposiciones externas.

4. El texto sustitutivo, actualmente en consulta, incorpora la mención de que la participación de las universidades será “en el marco de su autonomía” y mediante convenios; no obstante, la Oficina de Asesoría Legal considera que la redacción aún es ambigua y podría prestarse a interpretaciones que afecten la autonomía, dado que no queda claro cómo se regulará el uso de los laboratorios ni qué condiciones podrían imponerse.

5. Este Consejo Institucional valora que el proyecto tiene un objetivo legítimo y socialmente valioso —el fortalecimiento de la educación científica mediante el

uso de laboratorios remotos—, y reconoce que el texto menciona que la participación de las universidades será voluntaria y mediante convenios; no obstante, comparte el análisis efectuado por la Oficina de Asesoría Legal, una ley puede generar expectativas, presiones o interpretaciones que condicionen la actuación de las universidades, incluso si no hay una obligación explícita.

6. La finalidad del proyecto podría alcanzarse mediante convenios interinstitucionales entre el Ministerio de Educación Pública y las universidades públicas, sin necesidad de una ley formal. Esto se debe a que las universidades, en ejercicio de su autonomía constitucional, ya cuentan con la capacidad legal para suscribir convenios de cooperación con otras entidades del Estado. En este sentido, la existencia de un marco legal específico no es indispensable para habilitar la colaboración propuesta; más aún, si ninguna universidad decide participar, el proyecto de ley quedaría sin aplicación práctica, lo que pone en duda su eficacia normativa y su necesidad como instrumento legislativo.

Además, la aprobación de una ley, que no impone obligaciones pero que establece un programa nacional, podría generar expectativas públicas o presiones institucionales que, aunque indirectas, afecten la autonomía universitaria. Por tanto, la pertinencia del proyecto como ley debe evaluarse no solo por su contenido, sino también por su necesidad jurídica y su impacto potencial en el equilibrio institucional entre el MEP y las universidades públicas.

SE ACUERDA:

a. Responder a la consulta recibida de parte de la Asamblea Legislativa, a través de la instancia consultante que, en el proyecto de ley indicado a continuación, desde el punto de vista jurídico, no se transgreden directamente las competencias propias de la Institución, mas sí presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente:

Expediente	Nombre del proyecto	Comisión consultante
N.° 24.038 (texto sustitutivo)	LEY DE INCENTIVO DEL USO DE LOS LABORATORIOS REMOTOS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN COSTA RICA,	Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación AL-CPECTE-0561-2025

b. Reiterar que cualquier participación del Instituto Tecnológico de Costa Rica en el programa propuesto en este proyecto de ley, debe ser completamente voluntaria, y ejercida exclusivamente en el marco de su autonomía constitucional, sin imposición de condiciones técnicas, administrativas o presupuestarias por parte del Ministerio de Educación Pública u otra entidad estatal:

c. Indicar a la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación que la viabilidad de implementar el programa objeto de este proyecto de ley es factible mediante convenios interinstitucionales, sin necesidad de una ley, lo cual permitiría mayor flexibilidad, adaptación a las capacidades institucionales y respeto a la autonomía universitaria.

d. Solicitar a la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación que, en caso de avanzar con esta iniciativa, se incorpore una cláusula expresa que garantice que:

> La participación de las universidades públicas en el programa será voluntaria, ejercida exclusivamente en el marco de su autonomía constitucional, sin que ello implique imposición directa o indirecta de condiciones técnicas, administrativas o presupuestarias por parte del Ministerio de Educación Pública u otra entidad estatal. Toda coordinación deberá realizarse mediante convenios específicos, respetando la independencia funcional y organizativa de cada universidad.

c. Indicar que el presente acuerdo no podrá ser impugnado por carecer de efectos jurídicos propios.

ACUERDO FIRME

La discusión de este punto consta en el archivo digital de la Sesión Ordinaria N.° 3406.

ARTÍCULO 18. Pronunciamiento sobre el proyecto de ley Expediente N.° 24.142 "LEY PARA LA REACTIVACIÓN, INNOVACIÓN, FOMENTO DEL SECTOR AGROEMPRESARIAL" ***(A cargo de la Presidencia)***

La señora Maritza Agüero González presenta la propuesta denominada: "Pronunciamiento sobre el proyecto de ley Expediente N.° 24.142 "LEY PARA LA REACTIVACIÓN, INNOVACIÓN, FOMENTO DEL SECTOR AGROEMPRESARIAL", a cargo de la Presidencia (adjunta al acta de esta sesión).

El señor Teodolito Guillen Girón somete a votación la propuesta, quedando aprobada con el siguiente resultado: 10 votos a favor y 0 votos en contra. Se somete a votación la firmeza del acuerdo y es aprobada con: 10 votos a favor y 0 votos en contra.

Por lo tanto, el Consejo Institucional:

RESULTANDO QUE:

1. El artículo 84 de la Constitución Política de la República de Costa Rica establece:

> *La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Las demás instituciones de educación superior universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica.*
>
> *El Estado las dotará de patrimonio propio y colaborará en su financiación.*

2. El artículo 88 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, establece:

> *Para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a las materias puestas bajo la competencia de la Universidad de Costa Rica y de las demás instituciones de educación superior universitaria, o relacionadas directamente con ellas, la Asamblea Legislativa deberá oír previamente al Consejo Universitario o el órgano director correspondiente de cada una de ellas.*

3. El artículo 18, inciso i) del Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica, señala:

> *Son funciones del Consejo Institucional:*
> *…*
> *i. Evacuar las consultas a que se refiere el Artículo 88 de la Constitución Política de la República.*
> *…*

4. En el “Procedimiento para la atención y emisión de criterio ante consultas de proyectos de ley enviados por la Asamblea Legislativa”, se establece la metodología de atención y emisión de criterio a las consultas de los Proyectos de Ley sometidos a conocimiento del Consejo Institucional por la Asamblea Legislativa. En lo conducente se extrae lo siguiente:

> *1. Recibe el documento en consulta enviado por la Asamblea Legislativa.*
>
> *2. Traslada el documento a la Oficina de Asesoría Legal, de inmediato una vez recibido, para que emita dictamen en el plazo de 3 días hábiles…*
>
> […]
>
> *4. El documento es dado a conocer a la Comunidad Institucional mediante la cuenta oficial de correo electrónico, para consulta pública, indicando que las observaciones deberán ser enviadas directamente a la Asamblea Legislativa y señalando la dirección de correo pertinente.*
>
> *5. Recibido el dictamen de la Oficina de Asesoría Legal, la Presidencia confecciona la propuesta que conocerá el Consejo Institucional. El Consejo se pronunciará ordinariamente solo sobre si el proyecto afecta*

o no la autonomía universitaria. No obstante, cuando lo considere conveniente podrá pronunciarse sobre otros aspectos del proyecto.

…

5. La Secretaría del Consejo Institucional recibió en consulta por parte de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa, el proyecto "LEY PARA LA REACTIVACIÓN, INNOVACIÓN, FOMENTO DEL SECTOR AGROEMPRESARIAL" (AL-CPAAGROP-531-2025 del 27 de marzo de 2025), contenido en el Expediente N.° 24.142, mismo que fue consultado a la Oficina de Asesoría Legal en oficio SCI-266-2025, fechado 31 de marzo de 2025. De igual forma fue sometido a conocimiento y consideración de la comunidad institucional a través de mensaje de correo electrónico.

6. La Oficina de Asesoría Legal emitió criterio en oficio AL-281-2025 del 21 de abril del 2025, indicando lo siguiente:

…

I. SINOPSIS

Expediente	*N°24.142*
Nombre	*Ley para la Reactivación, Innovación, Fomento del Sector Agroempresarial*
Objeto	*El proyecto ley tiene por objeto establecer un marco legal que promueva el uso de herramientas innovadoras por parte de los agricultores, agroindustriales, forestales, apicultores, avícultores, pescadores, acuicultores, y maricultores, que les permitan afrontar la constante evolución del sector productivo, así como la protección e innovación en cultivos.*
Incidencia	*Desde el punto de vista jurídico se determina que el Proyecto de Ley si transgrede las competencias propias de la Institución, y presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por cuanto ordena la participación institucional en la realización de un inventario de tecnologías inteligentes, de precisión y productivas y poner a disposición de los agroempresarios dichas tecnologías, así como buscar y poner a disposición las tecnologías de punta provenientes de centros de investigación.*
Recomendación	*Con base en lo expuesto se recomienda, para efectos de atender la audiencia conferida por la Asamblea Legislativa, presentar oposición en razón de que, desde el punto de vista jurídico se determina que puede presentar roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica y las Universidades Públicas*

II. CRITERIO JURÍDICO

La presente consulta se contrae fundamentalmente a la revisión y emisión del criterio en torno al Proyecto de Ley "Ley para la Reactivación, Innovación, Fomento del Sector Agroempresarial", tramitado bajo Expediente N°24.142; y al efecto se indica:

A) CONSIDERACIONES GENERALES

Objeto del Proyecto: *El presente proyecto de ley tiene por finalidad establecer un marco legal que promueva el uso de herramientas innovadoras por parte de los agricultores, agroindustriales, forestales, apicultores, avícultores, pescadores, acuicultores, y maricultores, que les permitan afrontar la constante evolución del sector productivo, así como la protección e innovación en cultivos, con el incremento de la eficiencia, la productividad, la rentabilidad y la sostenibilidad agropecuaria, pesquera, acuícola, maricultura y ambiental.*

Motivación: *El proyecto de ley se propone facilitar el acceso a tecnología avanzada para mejorar la producción y productividad agropecuaria, agroindustrial, forestal, apícola, avícola, pesquera, acuícola, y maricultura, promover el uso de técnicas sostenibles que mitiguen el impacto de la huella ambiental derivada de la actividad agropecuaria, agroindustria y el cambio climático; ampliar las posibilidades comerciales para los agricultores, agroindustriales, apicultores, avicultores, pescadores, acuicultores y de la maricultura con la apertura de mercados regionales y uso de plataformas digitales; mejorar las condiciones de acceso a créditos especiales, destinados a la producción, industrialización y protección de los cultivos, pesca, acuicultura, avicultura, apicultura, agroindustria, maricultura y del ambiente; y ofrecer seguros de cosecha a las actividades agropecuarias de especies mayores y menores, de granjas marinas y acuicultura, de agroindustria, de apicultura, de avicultura, para proteger la inversión y garantizar la permanencia en la actividad productiva, frente a fenómenos y desastres naturales, plagas, enfermedades, pandemias o cambio climático.*

Contenido de la propuesta: *De la revisión efectuada del texto propuesto sobre la cual se nos confiere audiencia se determina que está conformada por 24 artículos, que propone la Ley para la Reactivación, Innovación, Fomento del Sector Agroempresarial:*

ARTÍCULO	***PROPUESTA***
	Capítulo I. Generalidades
1	*ARTÍCULO 1 - Alcance de la presente ley* *Lo dispuesto en esta ley comprende las actividades agropecuarias, agroindustriales, forestales, apícolas, avícolas, pesqueras, acuícolas y maricultura, o cualquier otra especie pecuaria mayor o menor contemplada como actividad productiva, así como las que realizan las empresas de servicio en la agricultura mecanizada, tecnológica o del conocimiento en el sector.*
2	*ARTÍCULO 2 - Fin y objetivos*

	La presente ley tiene por finalidad establecer un marco legal que promueva el uso de herramientas innovadoras por parte de los agricultores, agroindustriales, forestales, apicultores, avícultores, pescadores, acuicultores, y maricultores, que les permitan afrontar la constante evolución del sector productivo, así como la protección e innovación en cultivos, con el incremento de la eficiencia, la productividad, la rentabilidad y la sostenibilidad agropecuaria, pesquera, acuícola, maricultura y ambiental. *a) Facilitar el acceso a tecnología avanzada para mejorar la producción y productividad agropecuaria, agroindustrial, forestal, apícola, avícola, pesquera, acuícola, y maricultura.* *b) Promover el uso de técnicas sostenibles que mitiguen el impacto de la huella ambiental derivada de la actividad agropecuaria, agroindustria y el cambio climático.* *c) Ampliar las posibilidades comerciales para los agricultores, agroindustriales, apicultores, avicultores, pescadores, acuicultores y de la maricultura con la apertura de mercados regionales y uso de plataformas digitales.* *d) Mejorar las condiciones de acceso a créditos especiales, destinados a la producción, industrialización y protección de los cultivos, pesca, acuicultura, avicultura, apicultura, agroindustria, maricultura y del ambiente.* *e) Ofrecer seguros de cosecha a las actividades agropecuarias de especies mayores y menores, de granjas marinas y acuicultura, de agroindustria, de apicultura, de avicultura, para proteger la inversión y garantizar la permanencia en la actividad productiva, frente a fenómenos y desastres naturales, plagas, enfermedades, pandemias o cambio climático.* *f) Brindar capacitación adecuada, acompañamiento, y asistencia técnica en cuanto a técnicas innovadoras para el desarrollo de la producción agropecuaria, forestal, pesca, acuícola, maricultura y agroindustrial; el marketing digital; y el manejo del ambiente; mejorando la rentabilidad del sector.* *g) Promover la atracción de capital al sector agropecuario, agroindustrial, forestal, apícola, avícola, pesquero, acuícola y maricultura para la transformación dirigida a un modelo agroindustrial que añada valor agregado a la producción y mejore las condiciones de vida de las personas ligadas al sector.*
	Capítulo II. Definiciones
3	*ARTÍCULO 3 – Definiciones* *a)* ***Agroindustria****: se considera agroindustria las* ***actividades que toman como base la materia prima proveniente del sector agrícola, integrando procesos agrícolas e industriales en la producción, transformación y comercialización de materias primas de origen agrícola****. El sector de la agroindustria abarca diversas etapas de la cadena productiva, desde la siembra y cosecha de cultivos hasta la elaboración y comercialización*

	de productos alimentarios y no alimentarios derivados de la agricultura. *b) Agroempresarios: se refiere a los empresarios o emprendedores que participan en la gestión y operación de negocios relacionados con el sector agropecuario, forestal, apícola, avícola, pesquero, acuícola, y maricultura agricultura y la agroindustria. Estas personas están involucradas en actividades que abarcan desde la producción hasta la comercialización de los productos y sus derivados.* *Bienes y servicios destinados al sector agroindustrial: comprenden todos los productos y actividades que están diseñados para satisfacer las necesidades específicas de la agroindustria para la producción, procesamiento y comercialización de productos agrícolas.* *d) Emergencia agropecuaria: situación extraordinaria que afecta a la actividad agropecuaria, impidiendo su desarrollo y causando daños significativos a la producción y sus recursos. Puede generarse por factores como desastres naturales, enfermedades, plagas, o condiciones del clima.* *e) Marketing digital: es el conjunto de estrategias y técnicas de mercadeo a través de medios digitales con el objetivo de promocionar productos, servicios o marcas y llegar a una audiencia específica a través de canales en línea.* *f) Mercados de carretera: infraestructura con parqueo, baterías sanitarias, centro de descanso, ventas de productos agropecuarios y artesanales, con restaurantes, y servicios varios, ubicados en la orilla de carreteras nacionales, con el fin colaborar con la comercialización y mercadeo de estos productos, de ordenar las ventas a la orilla de carretera, contribuyendo a la salud, bienestar y comodidad de los servicios.* *g) Mercados regionales: áreas geográficas específicas donde se lleva a cabo el intercambio de bienes, servicios y productos entre compradores y vendedores.* *h) Plataformas digitales: son sistemas en línea que facilitan la interacción, colaboración y transacción entre diferentes usuarios, ya sea a nivel individual o empresarial. Estas plataformas proporcionan un entorno virtual donde los usuarios pueden acceder a servicios, contenido o realizar actividades específicas de manera centralizadas.* *i) Precio ruinoso: precio por debajo del costo de producción por la inestabilidad del sector agropecuario ante las fluctuaciones extremas en los precios que se encuentran en el mercado.* *j) Sector agropecuario: se refiere a una parte específica de la economía que engloba las actividades relacionadas con agricultura, forestal, apícola, avícola, pesquero, acuícola, y maricultura y la agroindustria la cría de animales y aprovechamiento, trabaja en la producción de alimentos,*

	materias primas y otros productos derivados de la tierra, agua, los animales y las plantas. *k) Técnicas sostenibles de mitigación: son esas prácticas o enfoques que buscan reducir o contrarrestar los impactos negativos sobre el medio ambiente, la producción y el cambio climático de manera sostenible.* *l) Tecnología avanzada: es aquella que integra soluciones innovadoras, automatizadas e inteligentes para optimizar procesos, combinando lo más reciente en desarrollo tecnológico, sistemas de alta eficiencia y herramientas de vanguardia.* *m) Plan de inversión: es el documento que plantea el detalle de los recursos que requiere el proyecto asociado a los costos de ejecución y resultados de la empresa.*
	Capítulo III. Crédito
4	*ARTÍCULO 4 - Créditos para micro, pequeño y mediano productor.* *Corresponderá al Sistema de Banca para el Desarrollo, el Instituto de Desarrollo Rural y al Ministerio de Agricultura y Ganadería; priorizar el financiamiento de producción, tecnología inteligente de precisión-y productiva, insumos, maquinaria y equipo, agroindustria, valor agregado, comercialización y mercadeo, innovación, seguros de cosecha y técnicas de mitigación a efectos de fenómenos naturales y cambio climático.* *Se brindará el otorgamiento de avales y garantías, por medio del Fondo Nacional para el Desarrollo creado mediante la Ley N.º 9654, Ley Sistema Banca para el Desarrollo, a los micro, pequeños y medianos agroempresarios, que soliciten y califiquen al beneficio al amparo de la presente ley, se otorgará un monto máximo de hasta setenta y cinco por ciento (75%) de la operación del crédito productivo asignado.* *La actividad por financiar bajo crédito dirigido, deberá recibir seguimiento y acompañamiento por la institución competente, lo cual se definirá reglamentariamente según dicha actividad económica a desarrollar.*
	Capítulo IV. Tecnología e Investigación
6	*ARTÍCULO 6 - Tecnología inteligente, de precisión y productiva* *Se autoriza a las instituciones públicas,* ***universidades e institutos de investigación a realizar un inventario de tecnologías inteligentes, de precisión y productivas, para que, a través de convenios de cooperación entre entidades público y privadas, a nivel nacional e internacional, dichas tecnologías sean validadas en el país y puestas a disposición de los agroempresarios.***
7	*ARTÍCULO 7 – Tecnología de punta y alternativas productivas* *Se autoriza a las instituciones públicas,* ***universidades e institutos de investigación públicos para buscar, validar y poner a disposición de las agroempresas productivas***

	nacionales tecnologías de punta provenientes de centros de investigación a nivel mundial. *También podrán realizar estudios sobre alternativas productivas según agroclimas y perfiles agroecológicos, programas de capacitación e investigaciones para incorporar innovación tecnológica, mejorar prácticas ambientales, y aumentar la producción, productividad y eficiencia en el sector agroempresarial.*
8	*ARTÍCULO 8 – Autorización a la transformación de productos del sector agroempresarial.* *El Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, otorgará los permisos para la apertura de laboratorios especializados en la transformación de plantas medicinales, aromáticas, fluidos y partes animales; destinados a la medicina natural tanto humana como animal. Estos laboratorios permitirán adicionar valor agregado a la agroindustria, mediante la transformación de productos agropecuarios y derivados con el fin de mejorar la rentabilidad, eficiencia y sostenibilidad de la actividad productiva.*
	Capítulo V. Seguro Agropecuario y Fondo de apoyo
9	*ARTÍCULO 9 - Seguros* *El Seguro Agropecuario de Riesgos podrá ser comercializado por cualquier entidad aseguradora que cuente con la respectiva autorización administrativa en la categoría de seguros generales emitida por la Superintendencia General de Seguros (SUGESE), según lo dispuesto en la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, N.º 8653 del 22 de julio del 2008 y sus reformas.*
11	*ARTÍCULO 11 - Se crea el Fondo de Apoyo al Seguro Agropecuario de Riesgos, en adelante Fondo de Apoyo, con el objetivo fundamental de promover el uso del Seguro Agropecuario de Riesgos por medio de la subvención a las primas en las actividades primarias agrícolas, pecuarias, pesqueras, apícolas, avícolas, acuícolas, de maricultura y forestales.*
12	*ARTÍCULO 12 - Para efectos de conformar y fortalecer el Fondo de Apoyo se establecen las siguientes fuentes de recursos:* *a) La Reserva Técnica de Contingencias administrada por el Instituto Nacional de Seguros (INS) de conformidad con la Ley de Seguro Integral de Cosechas, N.º 4461 de 10 de noviembre de 1969 existente a la fecha de entrada en vigor de la presente ley, descontando el monto que requiera el INS para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones asociadas a sus contratos de seguros y reaseguros agrícolas vigentes, según corresponda.* *b) El MAG incluirá una partida del seis por ciento (6%) anual en su presupuesto ordinario para el Fondo de Apoyo.* *c) Autorícese a las instituciones de la Administración Pública Central, constituidas por el Poder Ejecutivo y sus*

	dependencias, a la Administración Pública Descentralizada, a las empresas públicas, así como a las entidades públicas no estatales, nacionales e internacionales, para que contribuyan con aportes, servicios y donaciones al fortalecimiento del Fondo de Apoyo, respetando en cada caso particular, la normativa aplicable. *d) Otros mecanismos financieros que se estimen necesarios, observando y respetando en cada caso particular, la normativa financiera aplicable.* *e) Se autoriza al INS y al MAG para la celebración de contratos y convenios con instituciones del sector público y privado para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley.* *f) Se autoriza al Instituto de Desarrollo Rural (INDER) para que traslade al Fondo de Apoyo hasta un uno por ciento (1%) del Presupuesto Anual aprobado para el siguiente año presupuestario, cuando las colocaciones anuales por medio de subvenciones sean superiores a los ingresos totales generados según las condiciones establecidas en el artículo 13 de la presente Ley.* *Los recursos anteriormente mencionados, serán utilizados única y exclusivamente para el desembolso de la subvención de la prima del seguro creado en esta Ley.*
13	*ARTÍCULO 13 - Creación de fondo por precio ruinoso y por emergencia agropecuaria.* *Créase un fondo de compensación por precio ruinoso y por emergencia para el sector agroempresarial a quienes estén inscritos en el Registro de Productor Agropecuario del Ministerio de Agricultura y Ganadería, financiado con un 2% adicional al valor agregado en la venta de productos agropecuarios y un 3% de las utilidades anuales del Sistema de Banca para el Desarrollo.* *Los recursos se administrarán a través del INS, y la compensación por precio ruinoso requerirá autorización del Comité Regional, que incluirá representantes de varias entidades del sector agroempresarial.* *Cada Comité Regional estará compuesto por un representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería, un representante del Consejo Nacional de la Producción, un representante de los agricultores nombrado por la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses (Upanacional) y un representante del Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA).* *En emergencias agropecuarias, la Comisión Nacional de Emergencias deberá asignar recursos adicionales al fondo para los afectados inscritos.*
	Capítulo VI. Responsabilidades
18	*ARTÍCULO 18 - Sostenibilidad* *El Ministerio de Agricultura y Ganadería, en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Economía Industria y Comercio, y Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y*

	Avenamiento, impulsarán la identificación y adopción de mejores prácticas agropecuarias sostenibles del sector agroempresarial. Estos ministerios mantendrán un repositorio de información actualizado a disposición del Ministerio de Agricultura y Ganadería, así como para las personas y empresas del sector para hacer posible, eficiente y rentable la actividad. *Se autoriza a las instituciones públicas, centros agrícolas cantonales, empresas y el sector privado a suscribir convenios y alianzas con dichas entidades públicas para la búsqueda de tecnología y la realización de los estudios mencionados en el párrafo anterior. Además, se autoriza la extensión agropecuaria, de modo presencial y virtual mediante plataformas digitales y programas informáticos.*
19	*ARTÍCULO 19 - Corresponderá al MAG, con apoyo del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y el IMN, elaborar los mapas de zonificación agropecuaria y emitir opinión especializada sobre las condiciones de producción, así como generar modelos de respuesta agroecológica y productiva que permitan hacer una mejor gestión de riesgos. Para estos efectos, se podrá consultar a los organismos institucionales y sectoriales responsables de alguna industria o sector en particular. Esta información estará disponible en el sistema de información digital del MAG.* *El MAG, a través de la Secretaría Ejecutiva de Plantificación del Sector Agropecuario (SEPSA), y con la obligada participación de la Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria (DNEA), la ONF, el MINAE, y el INCOPESCA, mantendrá los registros sobre los modelos de costos de los distintos sistemas de producción agrícola, agroindustrial, avícola, apícola, pecuaria, pesquera, acuícola, de maricultura y forestal, dependiendo de la zona geográfica en que se desenvuelven. Estos modelos de costos deberán ser actualizados anualmente.*
20	*ARTÍCULO 20 - Agrometeorología y climatología* *El Instituto Meteorológico Nacional, el Instituto Costarricense de Electricidad, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago, COOPEGUANACASTE, COOPEALFARO RUIZ, COOPESANTOS y COOPELESCA y la Dirección General de Aviación Civil podrán proveer todo tipo de información técnica y facilitar la asistencia en el campo de la agrometeorología y climatológica al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y a las empresas aseguradoras que comercialicen seguros agropecuarios. Para lo cual, quedan expresamente autorizados para cobrar por los datos y los servicios, debiendo brindarlo gratuitamente para el caso del MAG.*

21	ARTÍCULO 21 - Mercadeo y comercialización El Ministerio de Agricultura y Ganadería; el Ministerio de Economía, Industria y Comercio; la Promotora de Comercio Exterior; el Consejo Nacional de la Producción, el MICITT, el INCOPESCA; deberán diseñar e implementar un programa permanente de mercadeo y comercialización zonal y digital. Este incluirá el uso de plataformas para mercados nacionales e internacionales, la creación de centros de acopio regionales, mercados de carretera, y el fortalecimiento de ferias del agricultor y del Programa de Abastecimiento Institucional. Se promoverán convenios público-privados para ampliar los mercados de los agroempresarios, con la industria hotelera y supermercados.
22	ARTÍCULO 22 – Cumplimiento. Corresponderá al superior jerárquico del Ministerio de Agricultura y Ganadería velar por el adecuado funcionamiento de la presente ley, so pena de incurrir en el delito de incumplimiento de deberes.
	Capítulo VII. Reforma a otras leyes
	ARTÍCULO 23 - De las reformas a la normativa vigente Refórmese el artículo 3 de la Ley de Creación del Instituto Meteorológico Nacional, Ley N.º 5222, de 26 de junio de 1973 y sus reformas, para que se agregue un nuevo inciso r), el cual se leerá de la siguiente manera:
	"Artículo 3- El Instituto Meteorológico Nacional actuará como organismo técnico, especializado, encargado de brindar servicio meteorológico a todo el país, con base en los siguientes fines: […] r) Proveer todo tipo de información técnica y facilitar la asistencia en el campo de la agrometeorología y climatológica al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y a las empresas aseguradoras que comercialicen seguros agropecuarios. Para lo cual, queda expresamente autorizado para cobrar por los datos y los servicios, debiendo brindarlo gratuitamente para el caso del MAG."
	ARTÍCULO 24 - Refórmese el artículo 14 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, Ley N.º 8488, de 22 de noviembre de 2005 y sus reformas, para que se agregue un nuevo inciso n), el cual se leerá de la siguiente manera:
	"Artículo 14.-Competencias ordinarias de prevención de la comisión. La Comisión será la entidad rectora en lo que se refiera a la prevención de riesgos y a los preparativos para atender situaciones de emergencia. Deberá cumplir las siguientes competencias: […] n) Atender situaciones extraordinarias que afecten a la actividad agropecuaria, impidiendo su desarrollo y causando daños significativos a la producción y sus recursos. Daños

	generados por factores como desastres naturales, enfermedades, plagas, o condiciones del clima."

B) Incidencia del Proyecto para la Autonomía Universitaria

La autonomía universitaria sustentada en el artículo 84 de la Constitución[1] Política garantiza el derecho a organizarse, administrarse y regularse a sí misma, sin interferencias de grupos o sectores externos, así como a emplear sus recursos de acuerdo con sus propias decisiones. Todo esto dentro de los límites establecidos por la misma Carta Magna. Las universidades tienen independencia funcional. Tienen facultades y potestades suficientes para reglamentar autónomamente tanto el servicio público de docencia como el de investigación y de extensión, así como disponer y ejecutar las políticas que mejor considere convenientes en estas áreas.

En este caso el proyecto ley referente a la Ley para la Reactivación, Innovación, Fomento del Sector Agroempresarial propone el marco legal que promueva el uso de herramientas innovadoras por parte de los agricultores, agroindustriales, forestales, apicultores, avícultores, pescadores, acuicultores, y maricultores, que les permitan afrontar la constante evolución del sector productivo, así como la protección e innovación en cultivos, con el incremento de la eficiencia, la productividad, la rentabilidad y la sostenibilidad agropecuaria, pesquera, acuícola, maricultura y ambiental.

A su vez, se destacan dos elementos importantes de participación de las Universidades e institutos de investigación, por cuanto la ley indica que se autoriza a las instituciones públicas, universidades e institutos de investigación a realizar un inventario de tecnologías inteligentes, de precisión y productivas, para que, a través de convenios de cooperación entre entidades público y privadas, a nivel nacional e internacional, dichas tecnologías sean validadas en el país y puestas a disposición de los agroempresarios, y además, se autoriza a las instituciones públicas, universidades e institutos de investigación públicos para buscar, validar y poner a disposición de las agroempresas productivas nacionales tecnologías de punta provenientes de centros de investigación a nivel mundial. También podrán realizar estudios sobre alternativas productivas según agroclimas y perfiles agroecológicos, programas de capacitación e investigaciones para incorporar innovación tecnológica, mejorar prácticas ambientales, y aumentar la producción, productividad y eficiencia en el sector agroempresarial.

En este sentido el proyecto ley, si [*sic*] *podría presentar roces con la autonomía constitucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica, por cuanto ordena la participación institucional en la realización de un inventario de tecnologías inteligentes, de precisión y productivas y poner a disposición de*

[1] *ARTÍCULO 84.- La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Las demás instituciones de educación superior universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica.*
El Estado las dotará de patrimonio propio y colaborará en su financiación.

los agroempresarios dichas tecnologías, así como buscar y poner a disposición las tecnologías de punta provenientes de centros de investigación.

Por ello desde el punto de vista jurídico se determina que el Proyecto de Ley si [*sic*] *transgrede las competencias propias de la Institución, y puede presentar roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, al disponer de sus tecnologías inteligentes, de precisión y productivas y poner a disposición de los agroempresarios dichas tecnologías, así como de tecnologías de punta provenientes de centros de investigación a nivel mundial.*

III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

Con base en lo expuesto se recomienda, para efectos de atender la audiencia conferida por la Asamblea Legislativa: Sobre el Proyecto de Ley N°24.142 si [*sic*] *presentar oposición en razón de que, desde el punto de vista jurídico se determina que transgrede las competencias propias de la Institución, y presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica.*

En este sentido el proyecto ley, si [*sic*] *podría presentar roces con la autonomía constitucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica, por cuanto ordena la participación institucional en la realización de un inventario de tecnologías inteligentes, de precisión y productivas y poner a disposición de los agroempresarios dichas tecnologías, así como buscar y poner a disposición las tecnologías de punta provenientes de centros de investigación.*

… (La negrita y el subrayado corresponden al original)

CONSIDERANDO QUE:

1. El Instituto Tecnológico de Costa Rica, por medio del Consejo Institucional, debe emitir criterio sobre los proyectos de ley que la Asamblea Legislativa le envía a consulta, en acatamiento del artículo 88 de la Constitución Política. De conformidad con la normativa establecida por este Consejo, el pronunciamiento que se efectúe ordinariamente versará sobre la transgresión de la autonomía universitaria; no obstante, cuando lo considere conveniente podrá pronunciarse sobre otros aspectos de los proyectos consultados.

2. El proyecto de ley N.° 24.142, denominado “LEY PARA LA REACTIVACIÓN, INNOVACIÓN, FOMENTO DEL SECTOR AGROEMPRESARIAL”, tiene por objeto establecer un marco legal que promueva el uso de herramientas innovadoras por parte de los agricultores, agroindustriales, forestales, apicultores, avícultores, pescadores, acuicultores, y maricultores, que les permitan afrontar la constante evolución del sector productivo, así como la protección e innovación en cultivos.

3. El criterio emitido por la Oficina de Asesoría Legal determina que, desde el punto de vista jurídico, este proyecto de ley sí transgrede las competencias propias de la Institución y presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por cuanto ordena la participación institucional en la realización de un inventario de tecnologías inteligentes, de precisión y productivas y poner a disposición de los agroempresarios dichas tecnologías, así como buscar y poner a disposición las tecnologías de punta provenientes de centros de investigación.

4. De la revisión directa del texto legislativo, en particular de los artículos 6 y 7, se constata que estos no imponen obligaciones directas a las universidades, ya que utilizan en su lenguaje autorización ("se autoriza") y posibilidad ("podrán"), no de mandato. No obstante, la inclusión de las universidades como sujetos autorizados sin precisar su participación voluntaria y conforme a su autonomía, puede generar riesgos jurídicos indirectos de afectación a su independencia, dado el contexto de implementación y las expectativas legislativas o políticas que pudieran derivarse.

5. La jurisprudencia constitucional ha establecido que aún disposiciones facultativas pueden lesionar la autonomía universitaria si suponen una injerencia indirecta en sus decisiones sobre investigación, prioridades institucionales o transferencia tecnológica. Al respecto, la sentencia N.° 2013-010379 (1° de agosto de 2013) dice: "La sola habilitación legislativa de intervención en funciones universitarias esenciales, sin respetar su voluntad institucional autónoma, constituye una afectación indebida de la autonomía universitaria."

6. El respeto a la autonomía universitaria exige que toda participación de las universidades públicas en iniciativas legislativas o de política pública debe ser plenamente voluntaria, conforme a su planificación estratégica y sus competencias constitucionales.

SE ACUERDA:

a. Indicar en respuesta a la consulta recibida de parte de la Asamblea Legislativa, a través de la instancia consultante que, en cuanto al proyecto de ley citado a continuación, la redacción de los artículos 6 y 7 podría dar lugar a interpretaciones que afecten la autonomía universitaria, a pesar de no imponer obligaciones expresas:

Expediente	Nombre del proyecto	Comisión consultante
N.° 24.142	LEY PARA LA REACTIVACIÓN, INNOVACIÓN, FOMENTO DEL SECTOR AGROEMPRESARIA.	Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios AL-CPAAGROP-531-2025

b. Formular a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa las siguientes recomendaciones de mejora técnica al proyecto:

i. Añadir en los artículos 6 y 7 una cláusula de respeto expreso a la autonomía universitaria, en el siguiente sentido: "La participación de las universidades públicas en las actividades contempladas en este capítulo será voluntaria, de conformidad con su planificación institucional, sus prioridades estratégicas, y su régimen de autonomía garantizado en el artículo 84 de la Constitución Política."

ii. Señalar que cualquier colaboración deberá formalizarse mediante convenios voluntarios que respeten la independencia organizativa y académica de las universidades.

c. Indicar que el presente acuerdo no podrá ser impugnado por carecer de efectos jurídicos propios.

ACUERDO FIRME

La discusión de este punto consta en el archivo digital de la Sesión Ordinaria N.° 3406.

ARTÍCULO 19. Pronunciamiento sobre el proyecto de ley Expediente N.° 24.776 “CIERRE DEL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA PROMOTORA DE COMERCIO AGROPECUARIO DE COSTA RICA” *(A cargo de la Presidencia)*

La señora Maritza Agüero González presenta la propuesta denominada: “Pronunciamiento sobre el proyecto de ley Expediente N.° 24.776 “CIERRE DEL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA PROMOTORA DE COMERCIO AGROPECUARIO DE COSTA RICA”, a cargo de la Presidencia (adjunta al acta de esta sesión).

La señora Maritza Agüero González amplía que esta propuesta fue enriquecida con aportes de la señora Ana Rosa Ruiz Fernández, quien sugirió que en el apartado resolutivo se incorpore el llamado a mantener el espíritu de creación del CNP.

La señora Ana Rosa Ruíz Fernández agradece la oportunidad de ampliar su criterio y aprovecha para realizar una reflexión sobre la trascendencia histórica del CNP. Señala que, de aprobarse el proyecto actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa, se estaría cerrando un ciclo histórico en el país. Recuerda que el CNP fue una institución clave en la década de 1960, cuando se promovía un modelo de desarrollo productivo que buscaba integrar las distintas regiones del país mediante

el fortalecimiento del sector agropecuario. Destaca que, en ese contexto, la existencia del ferrocarril permitió la creación de mecanismos como los comisariatos, que recogían la producción agropecuaria y la distribuían por todo el país. Estos centros no solo facilitaron el comercio, sino que contribuyeron a la formación de pequeños pueblos, algunos de los cuales hoy son ciudades. Subraya que los comisariatos ofrecían precios sostenibles a los productores, lo cual les permitía mantener su actividad y, al mismo tiempo, garantizaban el acceso de las familias a productos esenciales para la canasta básica. Reconoce que, con el tiempo, la administración del CNP se debilitó y se desvió de sus objetivos originales. Sin embargo, expresa preocupación por el hecho de que su transformación en una sociedad anónima implique priorizar la rentabilidad y aplicar precios de mercado. Advierte que, si bien en la teoría económica se promueve la competencia, en la práctica esta tiende a eliminar a los pequeños productores, generando oligopolios dominados por unos pocos actores. Advierte sobre un cambio de paradigma: del interés público hacia la lógica del mercado. Considera que esta dinámica pone en riesgo los principios fundacionales del país, donde se priorizaba el bienestar de las personas y las familias. Concluye agradeciendo el espacio para expresar su posición.

La señora Laura Hernández Alpízar respalda plenamente las afirmaciones realizadas por la señora Ana Rosa Ruíz Fernández, señalando que su aporte es fundamental. Expresa su total apoyo a la inclusión de dicho planteamiento en la respuesta oficial, dado que considera que la soberanía alimentaria constituye un asunto de interés público que concierne a toda la población. Subraya que el CNP cumplía precisamente ese papel: garantizar una base alimentaria para el país, al margen de las fluctuaciones del mercado, este enfoque permitió visualizar un modelo en el que se priorizaba la seguridad alimentaria sobre los intereses comerciales, en contraposición al escenario actual, en el cual los oligopolios, como bien señaló la señora Ruíz, terminan por concentrar el poder y controlar los precios, dejando al país en una situación de mayor vulnerabilidad. Insiste en que este comentario no solo es válido, sino completamente pertinente, especialmente al analizar el impacto de estas decisiones en la autonomía del país.

El señor Teodolito Guillen Girón somete a votación la propuesta, quedando aprobada con el siguiente resultado: 10 votos a favor y 0 votos en contra. Se somete a votación la firmeza del acuerdo y es aprobada con: 10 votos a favor y 0 votos en contra.

Por lo tanto, el Consejo Institucional:

RESULTANDO QUE:

1. El artículo 84 de la Constitución Política de la República de Costa Rica establece:

> *La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse*

su organización y gobierno propios. Las demás instituciones de educación superior universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica.

El Estado las dotará de patrimonio propio y colaborará en su financiación.

2. El artículo 88 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, establece:

Para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a las materias puestas bajo la competencia de la Universidad de Costa Rica y de las demás instituciones de educación superior universitaria, o relacionadas directamente con ellas, la Asamblea Legislativa deberá oír previamente al Consejo Universitario o el órgano director correspondiente de cada una de ellas.

3. El artículo 18, inciso i) del Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica, señala:

Son funciones del Consejo Institucional:
…
i. Evacuar las consultas a que se refiere el Artículo 88 de la Constitución Política de la República.
…

4. En el “Procedimiento para la atención y emisión de criterio ante consultas de proyectos de ley enviados por la Asamblea Legislativa”, se establece la metodología de atención y emisión de criterio a las consultas de los Proyectos de Ley sometidos a conocimiento del Consejo Institucional por la Asamblea Legislativa. En lo conducente se extrae lo siguiente:

1. *Recibe el documento en consulta enviado por la Asamblea Legislativa.*

2. *Traslada el documento a la Oficina de Asesoría Legal, de inmediato una vez recibido, para que emita dictamen en el plazo de 3 días hábiles…*

[…]

4. *El documento es dado a conocer a la Comunidad Institucional mediante la cuenta oficial de correo electrónico, para consulta pública, indicando que las observaciones deberán ser enviadas directamente a la Asamblea Legislativa y señalando la dirección de correo pertinente.*

5. *Recibido el dictamen de la Oficina de Asesoría Legal, la Presidencia confecciona la propuesta que conocerá el Consejo Institucional. El Consejo se pronunciará ordinariamente solo sobre si el proyecto afecta o no la autonomía universitaria. No obstante, cuando lo considere conveniente podrá pronunciarse sobre otros aspectos del proyecto*.

…

5. La Secretaría del Consejo Institucional recibió en consulta por parte de la Comisión Especial N.° 23167 de Modernización y Reforma del Estado de la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley "CIERRE DEL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA PROMOTORA DE COMERCIO AGROPECUARIO DE COSTA RICA" (AL-CE23167-091-2025 del 27-03-2025), contenido en el Expediente N.° 24.776, mismo que fue consultado a la Oficina de Asesoría Legal en oficio SCI-266-2025, fechado 21 de marzo de 2025. De igual forma fue sometido a conocimiento y consideración de la comunidad institucional a través de mensaje de correo electrónico.

6. La Oficina de Asesoría Legal emitió criterio en oficio AL-283-2025 del 21 de abril del 2025, indicando lo siguiente:

…

I. SINOPSIS

Expediente	*N°24.776*
Nombre	*Cierre del Consejo Nacional de Producción y Transformación del Programa de Abastecimiento Institucional en La Promotora de Comercio Agropecuario de Costa Rica*
Objeto	*El proyecto ley tiene por objeto el cierre del Consejo Nacional de la Producción (CNP) y la reconversión del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) en la Promotora de Comercio Agropecuario (Proagro)*
Incidencia	*Desde el punto de vista jurídico se determina que el Proyecto de Ley si transgrede las competencias propias de la Institución, y presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por cuanto su contenido interfiere en la gestión de los recursos de las universidades públicas, uno de los elementos esenciales protegidos por el principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica.* *Esto en cuanto obliga a abastecerse a través de la Proagro sin que medie un procedimiento ordinario de contratación administrativa, dentro del cual se podrían realizar análisis técnicos, administrativos y financieros para determinar la idoneidad de los objetos contractuales en observancia del p* [*sic*] *por el artículo 20 iniciso a) obliga a abastecerse a través de la Proagro sin que medie un procedimiento ordinario de contratación administrativa, dentro del cual se podrían realizar análisis técnicos, administrativos y financieros para determinar la idoneidad de los objetos contractuales en observancia del principio de eficiencia, eficacia y valor por el dinero consagrados en el art. 8 de la Ley General de Contratación Pública, siendo que en la práctica ha sido*

	demostrado que la obligatoriedad de contratar con el CNP no ha sido de satisfacción para el interés público de las instituciones. Asimismo por el artículo 22 inciso g) impone la cancelación del 3% de los contratos comercializados, para financiar la gestión de Proagro lo cual afecta la gestión de los recursos.rincipio [*sic*] *de eficiencia, eficacia y valor por el dinero consagrados en el art. 8 de la Ley General de Contratación Pública. Asimismo impone la cancelación del 3% de los contratos comercializados, para financiar la gestión de Proagro lo cual afecta la gestión de los recursos.*
Recomendación	*Con base en lo expuesto se recomienda, para efectos de atender la audiencia conferida por la Asamblea Legislativa, presentar oposición por cuanto el Proyecto de Ley si transgrede las competencias propias de la Institución, y presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica y a las Universidades Públicas.*

II. CRITERIO JURÍDICO

La presente consulta se contrae fundamentalmente a la revisión y emisión del criterio en torno al Proyecto de Ley "Cierre del Consejo Nacional de Producción y Transformación del Programa de Abastecimiento Institucional en La Promotora de Comercio Agropecuario de Costa Rica", tramitado bajo Expediente N°24.776; y al efecto se indica:

A) CONSIDERACIONES GENERALES

Objeto del Proyecto: *El presente proyecto de ley plantea dos cuestiones centrales: el cierre del Consejo Nacional de la Producción (CNP) y la reconversión del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) en la Promotora de Comercio Agropecuario (Proagro).*

Motivación: *El proyecto de ley plantea el riesgo financiero del CNP, se indica que los datos y cifras muestran que el CNP tiene un desequilibrio financiero irreversible y una insuficiencia patrimonial que hace inviable su sostenibilidad operativa; no tiene la capacidad suficiente para atender sus obligaciones de pago y de cumplir eficazmente con los fines y actividades para los cuales se creó.*

El riesgo financiero de la Institución, probado en la auditoría de la Contraloría y en las deudas del Programa, son evidencias y motivos suficientes para justificar el cierre del Consejo y realizar las modificaciones necesarias para permitir una transformación completa del ente en una promotora que se encargue de mantener no solo un estricto control de un programa de abastecimiento institucional, sino que realmente involucre al pequeño y mediano productor nacional en su desarrollo, eliminando a los intermediarios.

Contenido de la propuesta: *De la revisión efectuada del texto propuesto sobre la cual se nos confiere audiencia se determina que está conformada*

por 32 artículos, que propone el Cierre del Consejo Nacional de Producción y Transformación del Programa de Abastecimiento Institucional en La Promotora de Comercio Agropecuario de Costa Rica, destacándose lo más relevante y que puede tener relación con la Institución:

ARTÍCULO	***PROPUESTA***
TÍTULO I Cierre del Consejo Nacional de Producción *CAPÍTULO I Disposiciones generales*	
1	*ARTÍCULO 1- Fines de aplicación de la ley* *Los fines de esta ley son los siguientes:* *1- Instruir el procedimiento legal para convertir el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), en adelante "el programa", perteneciente al Consejo Nacional de Producción (CNP), en la Promotora de Comercio Agropecuario de Costa Rica (Proagro), cuyos fines estarán detallados en el apartado correspondiente de esta ley.* *2- Autorizar y definir el procedimiento y los medios legales del proceso de cierre y liquidación del Consejo Nacional de Producción (CNP) creado por la Ley N.° 2035, Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción, del 17 de julio de 1956 y sus reformas, para su cierre ordenado y el fin de sus proyectos y actividades pendientes.* *3- Decretar la apertura del monopolio de la Fábrica Nacional de Licores, adelante la Fanal, y modificar la naturaleza jurídica de dicha fábrica para su adecuado funcionamiento.*
2	*ARTÍCULO 2- Derogatoria del Consejo Nacional de Producción* *Deróguese la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción, número 2035, del 17 de julio 1956 y sus reformas.*
CAPÍTULO II Proceso de liquidación del Consejo Nacional de Producción	
3	*ARTÍCULO 3- Presidencia Ejecutiva* *La liquidación del Consejo estará a cargo de su Presidencia Ejecutiva, quien mantendrá las potestades y competencias que la Ley N.° 2035, Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción, del 17 de julio de 1956, y sus reformas, le fijaron, así como las que expresamente se señalen en la presente ley, todo ello limitado al propósito exclusivo de cumplir con lo que determina el artículo uno (1) de esta ley.* *Dicha liquidación deberá realizarse en un plazo no mayor a seis (6) meses después de aprobada la presente ley.*
5	*ARTÍCULO 5- Informe final de la liquidación* *El presidente ejecutivo deberá presentar al menos dos (2) informes de avance y uno (1) final sobre la liquidación al Consejo de Gobierno y a la Contraloría General de la República (CGR), para su conocimiento. Los informes*

	deberán contener un detalle pormenorizado del cumplimiento del plan y presupuesto de liquidación aprobados por el Consejo de Gobierno, según lo dispuesto en el inciso b) del artículo 4 de esta ley. *Dicho informe consignará las operaciones, las actividades y los movimientos contables y financieros a la fecha de vencimiento del mandato de liquidación, conferido por esta ley a la Presidencia Ejecutiva. En las ausencias temporales del presidente ejecutivo, el ministro de Economía, Industria y Comercio (MEIC) tendrá las mismas potestades y deberes de aquel, según los términos establecidos en la presente ley.*
6	*ARTÍCULO 6- Inicio de la liquidación* *La Presidencia Ejecutiva del CNP deberá iniciar el proceso de liquidación según el plan y presupuesto aprobados, sobre la totalidad de los activos tangibles e intangibles, excepto por todos aquellos bienes inscritos a nombre de la Fábrica Nacional de Licores que deberán mantenerse para cumplir con lo establecido en el título segundo de esta ley.*
7	*ARTÍCULO 7- Término de la administración* *La Presidencia Ejecutiva y la Junta Directiva del Consejo concluirán sus funciones a más tardar en el plazo improrrogable de un año y medio, contado a partir de la aprobación del plan de cierre y presupuesto de la liquidación. Al cumplirse ese plazo, quedará extinguida, de pleno derecho, la personalidad jurídica del Consejo y sus órganos, así como los poderes legales de todos sus personeros, representantes y abogados. Esas circunstancias deberán anotarse en el Registro Público, al margen de los asientos respectivos.*
CAPÍTULO III Traslado de personal e insumos	
8	*ARTÍCULO 8- Traslado de personal esencial y liquidación del no esencial* *Una vez que la Presidencia Ejecutiva haya identificado a los trabajadores esenciales del Consejo, estos deberán ser trasladados a la Promotora de Comercio Agropecuario creada en esta ley, o en su defecto a los ministerios o instituciones donde resulte justificable y necesario trasladarlos, para atender diferentes actividades.* *El cierre del Consejo no afectará ni los derechos ni las obligaciones que este haya contraído con anterioridad a este hecho, ni los derechos de sus trabajadores.* *El personal no esencial del Consejo tendrá derecho a dar por terminada la relación laboral, por lo que se les reconocerán todos sus extremos laborales.* *Mediante resolución administrativa, el Ministerio de Hacienda procederá a realizar la liquidación y el pago de las prestaciones legales de los funcionarios del Consejo.*

TÍTULO II Transformación de la naturaleza jurídica de la Fábrica Nacional De Licores y apertura del monopolio de alcohol en Costa Rica CAPÍTULO IV Transformación	
10	*ARTÍCULO 10- Transformación de la Fanal en una sociedad anónima de capital mixto* *Conviértase la Fábrica Nacional de Licores, en adelante la Fanal, en una sociedad anónima de capital mixto. La constitución y su inscripción respectiva serán realizadas por el Estado. La escritura constitutiva será otorgada ante la Notaría del Estado, por el Procurador General de la República, en nombre del Estado. El proceso constitutivo estará libre del pago de derechos y tasas.*
11	*ARTÍCULO 11- Autorización para la venta parcial del capital accionario de la Fanal* *Autorícese la venta del cuarenta y nueve por ciento (49%) del capital accionario de la Fanal. La venta de dichas acciones será por medio de licitación pública. El precio mínimo de venta será proporcional, al menos, el que resultare del avalúo descrito en el artículo 4 de esta ley. El Ministerio de Economía, Industria y Comercio definirá las condiciones del cartel.* *En el caso del cincuenta y un por ciento (51%) de acciones pertenecientes al Estado, este quedará facultado para establecer un fondo de beneficios para los trabajadores, por un máximo del dos por ciento (2%) de sus acciones, que podrá ser administrado por la organización laboral que los trabajadores mediante acuerdo mayoritario determinen. Los beneficios otorgados por medio de este fondo no serán parte del salario del trabajador, ni se prolongarán más allá de la relación laboral.*
12	*ARTÍCULO 12- Avalúo por concurso público* *Una vez que entre en vigencia la presente ley, el Consejo de Gobierno, convertido en asamblea general de accionistas, estará autorizado y deberá iniciar un concurso público para practicar un avalúo de las acciones. Luego de definido el valor, se iniciará el proceso de venta del cuarenta y nueve por ciento (49%) del capital accionario. Este concurso ocupará un lugar prioritario en los pendientes de dicho Consejo y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio será instruido como su principal responsable.*
15	*ARTÍCULO 15- Responsabilidad patronal, liquidación y pago de extremos laborales* *Los trabajadores de la Fanal que así lo deseen, tendrán derecho a dar por terminada la relación laboral, por lo que se les reconocerán todos sus extremos laborales.* *Por su parte, la nueva administración de Fanal estará facultada a reorganizar el recurso humano en la forma que resultare más eficiente para su gestión, por lo que, basada en un estudio técnico para ello, procederá a*

	realizar la liquidación y el pago de las prestaciones legales de los funcionarios que deban ser cesados. *El pago de los extremos laborales deberá realizarse a más tardar 60 días después de la entrada en vigencia de la presente ley. Si se produce atraso en el pago de las liquidaciones a los trabajadores, por causas no imputables a ellos, el Estado deberá reconocerles el pago de los intereses correspondientes al período de atraso.* *El Consejo de Gobierno podrá instruir, previo estudio de la necesidad y conveniencia para la administración realizado con ayuda del Ministerio de Planificación (Mideplan), el traslado de los funcionarios a otras instituciones del Estado, preferiblemente a aquellas con oficinas en las cercanías de la comunidad de Grecia en la provincia de Alajuela y sus alrededores.* *En el caso de aquellos trabajadores a quienes les falten hasta cuatro (4) años para la jubilación, dicho traslado será obligatorio y de forma preferente.*
16	*ARTÍCULO 16- Derogatorias* *a) Deróguense los artículos 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466 y 467 del Código Fiscal, Ley N.º 8 del 31 de octubre de 1885 y sus reformas, y el monopolio estatal para la fabricación de alcohol.*
CAPÍTULO V Las situaciones jurídicas consolidadas y los procesos judiciales pendientes	
17	*ARTÍCULO 17- Trámite de acciones* *El ministro de Economía, Industria y Comercio, como representante del Poder Ejecutivo, en conjunto con el Procurador General de la República, estarán a cargo de hacer efectivo el traspaso de las acciones una vez comprobado que se hubieren cancelado en favor del Estado. El ministro de Economía asumirá la titularidad y representará los intereses del Estado en las asambleas de accionistas de la empresa, sin perjuicio de que el presidente de la República decida ejercer esta facultad.*
TÍTULO III Creación de la Promotora de Comercio Agropecuario de Costa Rica *CAPÍTULO VI De la Promotora de Comercio Agropecuario de Costa Rica*	
18	*ARTÍCULO 18- Creación* *Créase la Promotora de Comercio Agropecuario de Costa Rica, cuyo acrónimo será Proagro, como entidad pública de carácter no estatal.*
19	*ARTÍCULO 19- Domicilio* *Proagro tendrá su domicilio legal en la provincia de San José, pudiendo establecer oficinas y agencias en cualquier lugar de la República, a juicio de su Junta Directiva.*
20	*ARTÍCULO 20- Objetivos y funciones*

	Serán objetivos y funciones de la Promotora de Comercio Agropecuario de Costa Rica los siguientes: ***a) <u>Las instituciones públicas en general, deberán abastecerse institucionalmente por medio de Proagro de todo tipo de productos provenientes de las actividades de producción</u> e industrialización agropecuaria, pesquera y acuícola, bajo los precios de mercado.*** *b) Garantizar el abastecimiento y la distribución de todo tipo de suministros genéricos que sean requeridos por las entidades del sector público y que correspondan a los que están catalogados dentro de su tráfico ordinario, entendiéndose estos como los devenidos de la producción e industrialización de productos agropecuarios, pesqueros y acuícolas, dando prioridad a aquellos provenientes de los micro, pequeños y medianos productores agropecuarios y agroindustriales, pesqueros y acuícolas de Costa Rica.* *Tratándose de productos pesqueros y acuícolas, la Promotora deberá dar prioridad a los productos nacionales capturados o producidos por dichos sectores y salvo desabastecimiento de estos o disponibilidad de oferta podrá recurrir a la comercialización de productos importados.* *c) Para el cumplimiento de lo anterior, Proagro deberá fungir como facilitador en el acceso a este mercado, intermediando entre los micro, pequeños y medianos productores agropecuarios, agroindustriales, pesqueros y acuícolas, facilitando el intercambio y la comercialización respectiva, garantizando la consolidación de contratos comerciales. Los contratos de comercialización podrán ser tanto con instituciones públicas como para el sector privado.* *d) Proagro también podrá contratar con otro tipo de proveedor, cuando se carezca de oferta por parte de los micro, pequeños y medianos productores nacionales, o se presente desabastecimiento en el ámbito nacional, a fin de satisfacer oportunamente las necesidades de los entes públicos mencionados.* *e) La Promotora de Comercio Agropecuario establecerá un sistema de ventanilla única digital de comercio de la industria agropecuaria, que centralice y agilice los trámites de comercialización para el abastecimiento institucional. En dicha ventanilla tanto los productores como los compradores tendrán acceso a la información del mercado institucional, la atención para incorporarse y acceder a todos los servicios que proporcione Proagro, y donde se mantendrán, actualizarán y se renovarán los contratos de comercialización.* *Para ello, las instituciones públicas que intervengan en tales trámites estarán obligadas a prestar su*

	colaboración a Proagro y acreditar representantes con suficientes facultades de decisión. *Se faculta a la Proagro para que dé seguimiento a los contratos de comercialización.* *f) Dar seguimiento a las estadísticas del comercio agropecuario, en coordinación con las instituciones competentes e, igualmente, dar seguimiento a los contratos de comercialización con miras a evaluar la calidad, los pagos efectivos y el desempeño del programa.* *g) Administrar bienes en fideicomiso y, en general, celebrar todos los contratos permitidos por las leyes, necesarios para cumplir con los objetivos y funciones de Proagro.* *h) Diseñar y coordinar programas relativos a la comercialización e inversiones, con sujeción a las directrices que dicte el Poder Ejecutivo en materia agropecuaria.* *i) Proagro coordinará actividades y colaborará con todos los organismos de crédito, de extensión agrícola, de asistencia técnica y de cualquier otra índole cuyo esfuerzo aunado tienda a mejorar la comercialización que esta ley indica.*
21	*ARTÍCULO 21- Atribuciones de Proagro* *a) Coordinar sus actividades con organismos o instituciones estatales, que coadyuven al fomento de la comercialización para el sector agropecuario nacional.* *b) Realizar, en conjunto con las demás instituciones del sector agropecuario, programas de asistencia y cooperación interinstitucional vinculados a desarrollar y mejorar la comercialización de la actividad agropecuaria costarricense.* *c) Apoyar a los productores agropecuarios en los procesos de certificación de calidad de los productos agropecuarios y la metrología industrial, según las normas de calidad establecidas por los proveedores.* *d)* ***Establecer, por sí misma o en coordinación con diferentes instituciones, programas de investigación, capacitación y transferencia tecnológica de productos agropecuarios****, en el campo de la comercialización, directamente o por medio de contrataciones con personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras. Dichas investigaciones deberán beneficiar a los productores agropecuarios.*
CAPÍTULO VII De las finanzas de la Promotora de Comercio Agropecuario	
22	*ARTÍCULO 22- Financiamiento* *La Promotora de Comercio Agropecuario de Costa Rica financiará sus operaciones con los siguientes recursos:* *a) Un aporte inicial del Estado, consistente en el patrimonio final que resulte de la liquidación del Consejo*

	Nacional de Producción, incluyendo todos los superávits, que se convertirá en el fondo patrimonial de la promotora. *b) Además del capital inicial al que se refiere el inciso anterior, por los siguientes conceptos que se contabilizarán en cuentas separadas: nuevas aportaciones de capital, reservas patrimoniales que acuerde la Junta Directiva y utilidades netas provenientes de las liquidaciones anuales.* *c) Los superávits libres del Instituto de Desarrollo Rural (Inder).* *d) Todos los recursos otorgados que por ley eran dirigidos al Consejo Nacional de Producción (CNP) y al Programa de Abastecimiento Institucional (PAI).* *e) La Promotora deberá realizar el presupuesto correspondiente año tras año para atender todas sus actividades descritas en esta ley.* *f) El producto de créditos, donaciones o legados, previa autorización de la Junta Directiva de la Proagro.* ***g) El tres coma cinco por ciento (3,5%) de los ingresos por todos los contratos de comercialización efectuados, de los cuales un tres por ciento (3%) lo asumirá la institución partícipe en el contrato y un cero coma cinco por ciento (0,5%) restante el productor.***
23	*ARTÍCULO 23- Exención de impuestos* *La Promotora de Comercio Agropecuario estará exenta de la obligación de pagar toda clase de impuestos, ya sean nacionales o municipales, ordinarios o extraordinarios.*
CAPÍTULO VIII Junta Directiva de la Promotora de Comercio Agropecuario	
25	*ARTÍCULO 25- Junta Directiva* *La dirección de la Promotora del Comercio Agropecuario de Costa Rica corresponderá a una junta directiva, integrada por los siguientes siete (7) miembros:* *a) El ministro de Agricultura y Ganadería quien presidirá o, en su ausencia, el viceministro.* *b) El ministro de Comercio Exterior o, en su ausencia, el viceministro.* *c) El Gerente General de la Promotora de Comercio Agropecuario.* *d) Dos representantes de las instituciones que se abastezcan por medio de la ventanilla única de comercialización de Proagro.* *e) Dos representantes del sector agropecuario.* *f) No podrán designarse como miembros de la Junta Directiva:* *g) Los deudores morosos de la Institución.* *h) Los que hubieran sido declarados en estado de quiebra o insolvencia, condenados por delitos contra la propiedad o por peculado o malversación de fondos.*

	Los que estén ligados entre sí por parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, o que sean socios de una misma sociedad o miembros de su directorio. *El cargo de miembro de la Junta Directiva es incompatible con:* *i) El de miembro, funcionario o empleado administrativo a sueldo fijo o que devengue dietas de los supremos poderes o de otras instituciones autónomas.* *j) Personeros o empleados de la propia Promotora de Comercio Agropecuario.* *Los miembros de la Junta Directiva podrán ser removidos por el Consejo de Gobierno cuando:* *k) Dejaren de llenar los requisitos o incurran en alguna de las prohibiciones establecidas en este artículo.* *l) Fueren responsables por sentencia firme, de la infracción de alguna de las disposiciones contenidas en las leyes, decretos o reglamentos aplicables a la Promotora de Comercio Agropecuario.* *m) No hubieran podido desempeñar su cargo durante más de tres meses por incapacidad física.* *n) Se incapacitaren legalmente.* *En cualquiera de estos casos, la Junta Directiva levantará la información correspondiente y dará aviso al Consejo de Gobierno para que éste determine si procede declarar la separación o la vacante, designando sustituto. En tal caso, el nombramiento se hará dentro del término de quince (15) días hábiles y para el resto del período legal.* *La separación de cualquiera de los miembros de la Junta Directiva no le libra de las responsabilidades legales en que pudiera haber incurrido por incumplimiento de alguna de las disposiciones de esta ley.*
26	*ARTÍCULO 26- Atribuciones de la Junta Directiva* *Serán atribuciones de la Junta Directiva:* *a) Dictar las normas y los reglamentos relativos a la organización y el funcionamiento de la Promotora del Comercio Agropecuario de Costa Rica. Los reglamentos sobre contratación de la Proagro no estarán sujetos a los procedimientos de la Ley de Contratación Administrativa, N.° 7494, de 2 de mayo de 1995, ni a su reglamento; pero se subordinarán a los principios generales de contratación y a las prohibiciones contenidas en esa ley.* *b) Aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones, a los cuales deberán ajustarse los gastos de la institución.* *c) Nombrar y remover al auditor interno y al subgerente, por mayoría de, al menos, dos tercios de la totalidad de sus miembros. Para remover al auditor interno, la junta deberá recabar, previamente, la opinión de la Contraloría General de la República.*

	d) Delegar en comisiones integradas por sus miembros o por funcionarios de la Institución la adopción de decisiones relativas a las áreas de competencia de la Promotora de Comercio Agropecuario, conforme a las normas que la Junta dicte. *e) Aprobar la creación de plazas por mayoría de, al menos, dos tercios de la totalidad de sus miembros. La misma mayoría calificada se requerirá para aprobar la venta de activos de la institución. El nombramiento, la remoción y el régimen de empleo de la Proagro se regirán por las disposiciones del Código de Trabajo.* *f) Contratar una auditoría externa, para que audite en forma periódica los estados financieros de la Proagro. Al finalizar cada ejercicio económico, la auditoría presentará a la Junta Directiva un informe con una opinión razonada sobre el cierre contable-financiero del período y las recomendaciones que considere pertinente formular. Una copia de ese informe será enviada a la Contraloría General de la República para los fines legales correspondientes.* *g) Resolver las licitaciones.*
CAPÍTULO IX Gerencia General de la Promotora de Comercio Agropecuario	
CAPÍTULO X Consideraciones y responsabilidades adicionales de la Administración	
29	*ARTÍCULO 29- Otras responsabilidades de la Junta Directiva, gerente general, subgerente y auditor* *El gerente general, el subgerente y los miembros de la Junta Directiva, serán responsables de su gestión y, sin perjuicio de las sanciones que les correspondan, responderán personalmente con sus bienes de las pérdidas en que hagan incurrir a la Promotora de Comercio Agropecuario por la realización o autorización de operaciones prohibidas por la ley, quedando exentos de esta responsabilidad únicamente quienes hubieren hecho constar su voto negativo.* *Los miembros de la Junta Directiva, gerente, subgerente, auditor y subauditor, no podrán participar en actividades político-electorales, salvo la emisión de su voto o las que sean obligatorias por ley. Esta prohibición será aplicable a los otros funcionarios y empleados de la Proagro con poder de decisión, a partir de su inicio de funciones, según lo determine la Junta Directiva en un plazo no mayor de noventa (90) días.*
CAPÍTULO XI Contrataciones de la Proagro	
31	*ARTÍCULO 31- Contratación administrativa* *Se regirá por las disposiciones pertinentes de la Ley de la Administración Financiera de la República.* *Tratándose de la compraventa de artículos que constituyan actividad ordinaria, la Contraloría General de la República determinará, previos los estudios del caso,*

	los artículos que pueden ser comprados o vendidos sin sujeción a licitación pública o privada e indicará, asimismo, los trámites y procedimientos correspondientes. *Constatada la violación de lo anterior por parte de la Contraloría General de la República quien actuará de oficio o a petición de cualquier interesado, lo pondrá en conocimiento del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la República, en previsión de las responsabilidades penales o civiles que correspondieren.*
CAPÍTULO XII Disposiciones finales	
32	*ARTÍCULO 32- Reglamento* *El Poder Ejecutivo emitirá el reglamento requerido para garantizar la aplicación de la presente ley, dentro de los sesenta (60) días siguientes a su publicación.*

B) Incidencia del Proyecto para la Autonomía Universitaria

La autonomía universitaria sustentada en el artículo 84 de la Constitución[1] *Política garantiza el derecho a organizarse, administrarse y regularse a sí misma, sin interferencias de grupos o sectores externos, así como a emplear sus recursos de acuerdo con sus propias decisiones. Todo esto dentro de los límites establecidos por la misma Carta Magna. Las universidades tienen independencia funcional. Tienen facultades y potestades suficientes para reglamentar autónomamente tanto el servicio público de docencia como el de investigación y de extensión, así como disponer y ejecutar las políticas que mejor considere convenientes en estas áreas.*

En este caso el proyecto ley referente a la Ley para el cierre del Consejo Nacional de Producción y Transformación del Programa de Abastecimiento Institucional en La [*sic*] *Promotora de Comercio Agropecuario de Costa Rica, cuyo acrónimo será Proagro, como entidad pública de carácter no estatal, tendrá impacto sobre la institución y todas aquellas que son abastecidas por el conocido CNP.*

La Ley plantea como objetivos y funciones de la Promotora de Comercio Agropecuario de Costa Rica los siguientes:
a) Las instituciones públicas en general, deberán abastecerse institucionalmente por medio de Proagro de todo tipo de productos provenientes de las actividades de producción e industrialización agropecuaria, pesquera y acuícola, bajo los precios de mercado.

b) Garantizar el abastecimiento y la distribución de todo tipo de suministros genéricos que sean requeridos por las entidades del sector público y que correspondan a los que están catalogados dentro de su tráfico ordinario, entendiéndose estos como los devenidos de la producción e

[1] *ARTÍCULO 84.- La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Las demás instituciones de educación superior universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica.*
El Estado las dotará de patrimonio propio y colaborará en su financiación.

industrialización de productos agropecuarios, pesqueros y acuícolas, dando prioridad a aquellos provenientes de los micro, pequeños y medianos productores agropecuarios y agroindustriales, pesqueros y acuícolas de Costa Rica.
(…)

e) La Promotora de Comercio Agropecuario establecerá un sistema de ventanilla única digital de comercio de la industria agropecuaria, que centralice y agilice los trámites de comercialización para el abastecimiento institucional. En dicha ventanilla tanto los productores como los compradores tendrán acceso a la información del mercado institucional, la atención para incorporarse y acceder a todos los servicios que proporcione Proagro, y donde se mantendrán, actualizarán y se renovarán los contratos de comercialización.

Para ello, las instituciones públicas que intervengan en tales trámites estarán obligadas a prestar su colaboración a Proagro y acreditar representantes con suficientes facultades de decisión.

A su vez, Proagro tendrá la atribución de "Establecer, por sí misma o en coordinación con diferentes instituciones, programas de investigación, capacitación y transferencia tecnológica de productos agropecuarios, en el campo de la comercialización, directamente o por medio de contrataciones con personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras. Dichas investigaciones deberán beneficiar a los productores agropecuarios". Esto podría implicar participación institucional en tales programas de investigación, capacitación y transferencia tecnológica de productos agropecuarios.

Y se continuará con la obligación definida de abastecerse institucionalmente por medio de Proagro de todo tipo de productos provenientes de las actividades de producción e industrialización agropecuaria, pesquera y acuícola, bajo los precios de mercado. Aunado al porcentaje que se deberá cancelar en los contratos que se generen por estos conceptos.

Por ello desde el punto de vista jurídico se determina se determina que el Proyecto de Ley si [*sic*] *transgrede las competencias propias de la Institución, y presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por cuanto su contenido interfiere en la gestión de los recursos de las universidades públicas, uno de los elementos esenciales protegidos por el principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica.*

Esto en cuanto por el artículo 20 iniciso [*sic*] *a) obliga a abastecerse a través de la Proagro sin que medie un procedimiento ordinario de contratación administrativa, dentro del cual se podrían realizar análisis técnicos, administrativos y financieros para determinar la idoneidad de los objetos contractuales en observancia del principio de eficiencia, eficacia y valor por el dinero consagrados en el art. 8 de la Ley General de Contratación Pública, siendo que en la práctica ha sido demostrado que la obligatoriedad de contratar con el CNP no ha sido de satisfacción para el interés público de las*

instituciones. Asimismo por el artículo 22 inciso g) impone la cancelación del 3% de los contratos comercializados, para financiar la gestión de Proagro lo cual afecta la gestión de los recursos.

III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

Con base en lo expuesto se recomienda, para efectos de atender la audiencia conferida por la Asamblea Legislativa: Sobre el Proyecto de Ley N°24.776 presentar oposición en razón de que, desde el punto de vista jurídico se determina que transgrede las competencias propias de la Institución, y presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica y a las universidades públicas en general.

... (La negrita y el subrayado corresponden al original)

7. Se tuvo conocimiento de las observaciones emitidas por el Dr. Óscar López Villegas, director del Campus Tecnológico Local San Carlos, remitidas mediante oficio DSC-078-2025 del 28 de abril de 2025, dirigido a la Comisión Especial N.º 23167 de Modernización y Reforma del Estado de la Asamblea Legislativa, con copia a la MAE. Maritza Agüero González, directora de la Secretaría del Consejo Institucional y a la MAP. Lady Fernández Mora, gestora de vinculación del Campus Tecnológico Local San Carlos, en el cual indica:

…
Con ocasión del análisis solicitado sobre el Expediente 24.776, que plantea la transformación del Consejo Nacional de Producción (CNP) en la Promotora de Comercio Agropecuario de Costa Rica (PROAGRO), me permito remitirle una propuesta de observaciones de fondo, con base en los siguientes elementos:

1. ***Contexto General:***

   La iniciativa de ley responde a las críticas recurrentes sobre la situación financiera y la duplicidad de funciones del CNP, proponiendo su cierre y la creación de una nueva entidad con un enfoque más moderno, centrado en la articulación institucional y el fortalecimiento de los procesos de comercialización agropecuaria.

2. ***Funciones asignadas a PROAGRO:***

   Entre sus atribuciones, el proyecto prevé acciones de coordinación interinstitucional, programas de asistencia, apoyo a certificaciones de calidad, y el fomento de la investigación, capacitación y transferencia tecnológica, dirigidos a mejorar la competitividad del sector agropecuario.

3. ***Observación Especial - Proyecto Centro de Valor Agregado (CVA):***

*En el marco de este cambio institucional, surge preocupación respecto a una iniciativa en curso, de especial interés en la Región Huetar Norte, el **Centro de Valor Agregado (CVA**), recientemente reactivado mediante estudios de factibilidad, alianzas estratégicas (por ejemplo, con el TEC) y proyectos de infraestructura.*
El cierre del CNP podría poner en riesgo los avances y recursos ya comprometidos en este esfuerzo.

4. ***Propuesta de Inclusión de un Instrumento de Innovación:***

   *Se plantea, por tanto, la **incorporación expresa en el proyecto de ley** de un instrumento que permita rescatar y potenciar este tipo de iniciativas dentro de PROAGRO, mediante la creación del **Centro de Innovación Agropecuaria (CIA)**.*

Propuesta: Creación del Centro de Innovación Agropecuaria (CIA) como parte de PROAGRO

Fundamentación y Justificación:

*La transformación del CNP abre una oportunidad para modernizar el apoyo estatal al sector agropecuario. El **CIA** fortalecería la capacidad de PROAGRO para cumplir su mandato en materia de innovación, transferencia tecnológica y comercialización, mediante un enfoque técnico, colaborativo y territorial.*

Aspectos Clave:

- ***Naturaleza:** Unidad técnica adscrita a PROAGRO.*
- ***Rol:** Investigación aplicada, transferencia tecnológica, asistencia técnica y formación continua.*

- ***Objetivos Estratégicos:***

  - *Facilitar transferencia tecnológica.*
  - *Promover innovación colaborativa con academia, centros de investigación y sector privado.*
  - *Apoyar procesos de certificación de calidad.*
  - *Identificar oportunidades de valor agregado y nuevos mercados.*

- ***Funciones Específicas:***

  - *Impulsar proyectos de innovación con universidades y centros tecnológicos.*
  - *Desarrollar módulos de capacitación territorializados.*
  - *Operar laboratorios de validación tecnológica y observatorios de tendencias.*
  - *Crear plataformas digitales de conocimiento agropecuario.*

- ***Articulación Institucional:** Coordinación con MAG, INTA, INA, SENASA y otras instancias relevantes.*

- ***Financiamiento:*** *Presupuesto de PROAGRO, cooperación internacional, alianzas público-privadas, y esquemas de inversión social.*

Propuesta de Cláusula para el Proyecto de Ley:

"Créase el Centro de Innovación Agropecuaria (CIA) como una unidad técnica adscrita a la Promotora de Comercio Agropecuario de Costa Rica (PROAGRO), destinada a impulsar procesos de innovación, transferencia tecnológica, asistencia técnica y formación continua para los productores agropecuarios del país, en coordinación con las instituciones públicas, privadas, académicas y comunitarias vinculadas al sector. El CIA será un instrumento para el cumplimiento de las funciones establecidas en el artículo XX de la presente ley, operando bajo los principios de eficiencia, inclusión productiva, sostenibilidad ambiental y enfoque territorial."

Impacto Esperado:

La incorporación del CIA permitirá consolidar capacidades técnicas permanentes al servicio de los productores, asegurar la continuidad de proyectos estratégicos en curso, modernizar el sector agropecuario nacional y contribuir a una mayor competitividad, sostenibilidad y resiliencia del agro costarricense.
…

CONSIDERANDO QUE:

1. El Instituto Tecnológico de Costa Rica, por medio del Consejo Institucional, debe emitir criterio sobre los proyectos de ley que la Asamblea Legislativa le envía a consulta, en acatamiento del artículo 88 de la Constitución Política. De conformidad con la normativa establecida por este Consejo, el pronunciamiento que se efectúe ordinariamente versará sobre la transgresión de la autonomía universitaria; no obstante, cuando lo considere conveniente podrá pronunciarse sobre otros aspectos de los proyectos consultados.

2. El proyecto de ley N.° 24.776, denominado “CIERRE DEL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA PROMOTORA DE COMERCIO AGROPECUARIO DE COSTA RICA”, pretende el cierre del Consejo Nacional de la Producción (CNP) y la reconversión al Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) en la Promotora de Comercio Agropecuario (Proagro).

3. La Oficina de Asesoría Legal concluye que el proyecto de ley transgrede las competencias propias de la Institución y presenta roces con la autonomía universitaria, al imponer la obligación de abastecerse exclusivamente a través de Proagro, sin procedimiento ordinario de contratación administrativa —amplía que la práctica ha demostrado que la obligatoriedad de contratar con el CNP no ha sido de satisfacción para el interés público de las instituciones— y al

establecer una contribución obligatoria del 3% sobre los contratos, lo cual afecta la gestión de los recursos institucionales.

4. El Consejo Institucional valora que, si bien el proyecto persigue un objetivo de interés público —la reorganización del abastecimiento institucional y el apoyo a pequeños productores—, este no puede lograrse a costa de limitar la autonomía constitucional de las universidades públicas. El proyecto de ley, al imponer un canal único de abastecimiento a través de una entidad pública no estatal (Proagro), sin permitir a las universidades evaluar otras opciones conforme a criterios de eficiencia, calidad, oportunidad y valor por el dinero, restringe su capacidad de decisión y gestión. Además, la imposición de una contribución obligatoria del 3% sobre los contratos celebrados con Proagro representa una afectación directa al presupuesto institucional, sin que medie un proceso de consulta, negociación o rendición de cuentas.

SE ACUERDA:

a. Indicar en respuesta a la consulta recibida de parte de la Asamblea Legislativa, a través de la instancia consultante que, el Instituto Tecnológico de Costa Rica manifiesta su oposición al proyecto de ley indicado a continuación, dado que, desde el punto de vista jurídico, transgrede las competencias propias del Instituto Tecnológico de Costa Rica y presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente a las universidades públicas, al interferir en la gestión de sus recursos mediante disposiciones que obligan a abastecerse exclusivamente a través de Proagro y a financiar su operación mediante un porcentaje de los contratos:

Expediente	Nombre del proyecto	Comisión consultante
N.° 24.776	CIERRE DEL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA PROMOTORA DE COMERCIO AGROPECUARIO DE COSTA RICA	Comisión Especial N.° 23167 de Modernización y Reforma del Estado AL-CE23167-091-2025

b. Solicitar a la Comisión Especial N.° 23167 de Modernización y Reforma del Estado que se revise el contenido del proyecto para garantizar que las universidades públicas puedan decidir libremente sus mecanismos de abastecimiento, conforme a los principios de eficiencia, eficacia y valor por el dinero. En consecuencia, también excluirlas de la obligación de este compromiso: “las instituciones públicas que intervengan en tales trámites estarán obligadas a prestar su colaboración a Proagro y acreditar representantes con suficientes facultades de decisión”; ligado al artículo 20 del que se solicita exclusión.

c. Solicitar a la Comisión Especial N.° 23167 de Modernización y Reforma del Estado mantener el espíritu de creación del CNP, el cual fue proteger el sector agropecuario de la adversidad de la naturaleza y de las grandes amenazas de una lógica de mercado que busca el beneficio económico sin importar, las necesidades de la sostenibilidad del sector y consumo básico alimenticio de la población costarricense.

d. Indicar que el presente acuerdo no podrá ser impugnado por carecer de efectos jurídicos propios.

ACUERDO FIRME

La discusión de este punto consta en el archivo digital de la Sesión Ordinaria N.° 3406.

ARTÍCULO 20. Pronunciamiento sobre el proyecto de ley Expediente N.° 24.876 "LEY PARA EL REGISTRO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS FORMULADOS PARA USO AGRÍCOLA"
(A cargo de la Presidencia)

La señora Maritza Agüero González presenta la propuesta denominada: "Pronunciamiento sobre el proyecto de ley Expediente N.° 24.876 "LEY PARA EL REGISTRO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS FORMULADOS PARA USO AGRÍCOLA", a cargo de la Presidencia (adjunta al acta de esta sesión).

El señor Teodolito Guillen Girón somete a votación la propuesta, quedando aprobada con el siguiente resultado: 10 votos a favor y 0 votos en contra. Se somete a votación la firmeza del acuerdo y es aprobada con: 10 votos a favor y 0 votos en contra.

Por lo tanto, el Consejo Institucional:

RESULTANDO QUE:

1. El artículo 84 de la Constitución Política de la República de Costa Rica establece:

> *La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Las demás instituciones de educación superior universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica.*
>
> *El Estado las dotará de patrimonio propio y colaborará en su financiación.*

2. El artículo 88 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, establece:

> *Para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a las materias puestas bajo la competencia de la Universidad de Costa Rica y de las demás instituciones de educación superior universitaria, o relacionadas directamente con ellas, la Asamblea Legislativa deberá oír previamente al Consejo Universitario o el órgano director correspondiente de cada una de ellas.*

3. El artículo 18, inciso i) del Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica, señala:

> *Son funciones del Consejo Institucional:*
> *…*
> *i. Evacuar las consultas a que se refiere el Artículo 88 de la Constitución Política de la República.*
> *…*

4. En el "Procedimiento para la atención y emisión de criterio ante consultas de proyectos de ley enviados por la Asamblea Legislativa", se establece la metodología de atención y emisión de criterio a las consultas de los Proyectos de Ley sometidos a conocimiento del Consejo Institucional por la Asamblea Legislativa. En lo conducente se extrae lo siguiente:

> 1. *Recibe el documento en consulta enviado por la Asamblea Legislativa.*
>
> 2. *Traslada el documento a la Oficina de Asesoría Legal, de inmediato una vez recibido, para que emita dictamen en el plazo de 3 días hábiles…*
>
> […]
>
> 4. *El documento es dado a conocer a la Comunidad Institucional mediante la cuenta oficial de correo electrónico, para consulta pública, indicando que las observaciones deberán ser enviadas directamente a la Asamblea Legislativa y señalando la dirección de correo pertinente.*
>
> 5. *Recibido el dictamen de la Oficina de Asesoría Legal, la Presidencia confecciona la propuesta que conocerá el Consejo Institucional. El Consejo se pronunciará ordinariamente solo sobre si el proyecto afecta o no la autonomía universitaria. No obstante, cuando lo considere conveniente podrá pronunciarse sobre otros aspectos del proyecto*.
> *…*

5. La Secretaría del Consejo Institucional recibió en consulta por parte del Departamento Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa, el proyecto "LEY PARA EL REGISTRO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS FORMULADOS PARA USO AGRÍCOLA" (AL-CPAAGROP-585-2025 del 31-03-2025), contenido en el Expediente N.° 24.876, mismo que fue consultado a la Oficina de Asesoría Legal en los oficios SCI-270-2025 fechado 02 de abril de 2025. De igual forma fue sometido a conocimiento y consideración de la comunidad institucional a través de mensaje de correo electrónico.

6. La Oficina de Asesoría Legal emitió criterio en oficio AL-319-2025 del 23 de abril del 2025, indicando lo siguiente:

…

I. SINOPSIS

Expediente	*N.° 24.876*
Nombre	*Ley para el Registro de Productos Fitosanitarios Formulados para uso Agrícola*
Objeto	*El proyecto ley tiene por objeto fomentar el manejo integrado de plagas dentro del desarrollo sostenible, así como otras metodologías agrícolas productivas que permitan el control de plagas sin deterioro del ambiente*
Incidencia	*Desde el punto de vista jurídico se determina que el Proyecto de Ley no transgrede las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica* [sic] *No obstante, es importante resaltar que el proyecto ley si bien no presenta roces con la autonomía constitucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica, si podría implicar su implementación en los programas y proyectos de investigación, capacitación y transferencia tecnológica de productos agropecuarios, relacionados con el tema de plagas y según las nuevas regulaciones en materia de plagas que afecten la producción agropecuaria, para regular el uso y manejo de sustancias químicas, biológicas o afines y equipos para aplicarlos en la agricultura.*
Recomendación	*Con base en lo expuesto se recomienda, para efectos de atender la audiencia conferida por la Asamblea Legislativa, no presentar oposición, con la observación de que se establezca expresamente que en su implementación se debe garantizar el respecto de los principios de la autonomía universitaria.*

II. CRITERIO JURÍDICO

La presente consulta se contrae fundamentalmente a la revisión y emisión del criterio en torno al Proyecto de Ley "Ley para el Registro de Productos Fitosanitarios Formulados para uso Agrícola", tramitado bajo Expediente N°24.876; y al efecto se indica:

A) CONSIDERACIONES GENERALES

Objeto del Proyecto: *El presente proyecto de ley plantea como uno de los objetivos el fomentar el manejo integrado de plagas dentro del desarrollo sostenible, así como otras metodologías agrícolas productivas que permitan el control de plagas sin deterioro del ambiente, ambos objetivos los dispone expresamente el artículo 2 de la Ley de Protección Fitosanitaria.*

Y además, se indica que se requiere de normas legales que complementen la Ley de Protección Fitosanitaria para la inscripción y autorización de uso de registros de productos fitosanitarios formulados, a efectos de que los productores puedan contar con esos insumos de manera ágil, pero segura y eficaz, esto por cuanto una de las principales limitaciones que deben superar los agricultores y productores agrícolas es el manejo sostenible de plagas y enfermedades que causan pérdidas en los rendimientos y en la calidad de los productos, antes, durante y después de la cosecha y los mercados actuales y emergentes se han vuelto más exigentes en cuanto a trazabilidad de los productos, la cuantificación de la huella química y la reducción drástica de la carga química en la producción y comercialización de productos agrícolas.

Motivación: *El proyecto de ley plantea que la producción agropecuaria resulta fundamental para el desarrollo socioeconómico de nuestro país y para ello es necesario que los agricultores cuenten con los insumos necesarios a precios competitivos para el control de las plagas que afectan sus cultivos y uno de los objetivos de la Ley de Protección Fitosanitaria es regular el uso y manejo de sustancias químicas, biológicas o afines y equipos para aplicarlos en la agricultura; asimismo, su registro, importación, calidad y residuos, procurando al mismo tiempo proteger la salud humana y el ambiente.*

Contenido de la propuesta: *De la revisión efectuada del texto propuesto sobre la cual se nos confiere audiencia se determina que está conformada por 37 artículos y un transitorio, que propone la Ley para el Registro de Productos Fitosanitarios Formulados para uso Agrícola, destacándose lo más relevante y que puede tener relación con la Institución:*

ARTÍCULO	***PROPUESTA***
CAPÍTULO I COMPETENCIAS INSTITUCIONALES EN EL REGISTRO, USO Y CONTROL DE LOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS FORMULADOS DE USO AGRÍCOLA	
1	*ARTÍCULO 1- Competencia para el registro, control y fiscalización de los productos fitosanitarios formulados*
2	*ARTÍCULO 2- Verificación de requisitos y evaluación de la información*
3	*ARTÍCULO 3- Competencias de los ministerios de Salud y de Ambiente y Energía*
4	*ARTÍCULO 4- Fiscalización, verificación de la calidad*
5	*ARTÍCULO 5- Controles de calidad y de residuos*
6	*ARTÍCULO 6- Monitoreo y control en el uso de plaguicidas*
7	*ARTÍCULO 7- Control de los incumplimientos de los usos autorizados y de prácticas agrícolas que pongan en riesgo inaceptable la salud o el ambiente*
	CAPÍTULO II REGISTRO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS QUÍMICOS SINTÉTICOS FORMULADOS PARA USO AGRÍCOLA
11	*ARTÍCULO 11- Prohibición de registro de producto fitosanitario químico sintético formulado*

13	*ARTÍCULO 13- Base de datos de información toxicológica, ecotoxicológica y de destino ambiental de los ingredientes activos grado técnico*
	CAPÍTULO III SITUACIÓN JURÍDICA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO Y DE ACTUALIZACIÓN DE INGREDIENTE ACTIVO GRADO TÉCNICO Y DE PRODUCTO FITOSANITARIO FORMULADO QUÍMICO SINTÉTICO QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE RESOLVER
14	*ARTÍCULO 14- Solicitudes de registro y actualización al registro que se encuentran pendientes de resolver*
	CAPÍTULO IV RENOVACIÓN DE REGISTROS VIGENTES
16	*ARTÍCULO 16- Renovación de registros de ingrediente activo grado técnico con registro vigente*
20	*Prohibición de renovación*
21	*Cancelación de registros no renovados*
	CAPÍTULO V INCORPORACIÓN DE REGISTROS DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS FORMULADOS QUÍMICOS SINTÉTICOS, MICROBIOLÓGICOS Y BOTÁNICOS DE USO AGRÍCOLA
22	*ARTÍCULO 22- Incorporación de productos fitosanitarios formulados químicos sintéticos, microbiológicos y botánicos*
	CAPÍTULO VI
26	*ARTÍCULO 26- Autorizaciones especiales para la importación de productos fitosanitarios químicos sintéticos, de origen microbiológico o botánico no registrados*
	CAPÍTULO VII FINANCIAMIENTO
27	*ARTÍCULO 27- Cobro por servicios*
	CAPÍTULO VIII DISPOSICIONES FINALES
29	*ARTÍCULO 29- Producto fitosanitario formulado de origen microbiológico o botánico para uso propio*
30	*ARTÍCULO 30- Fiscalización y verificación de la calidad de los productos fitosanitarios para uso en la agricultura*
31	*ARTÍCULO 31- Monitoreo y control de los productos fitosanitarios en la agricultura*
32	*ARTÍCULO 32- Prohibición de uso y comercialización de productos fitosanitarios formulados de uso agrícola*
34	*ARTÍCULO 34- Principios que rigen la aplicación de esta ley*
36	*ARTÍCULO 36- Exoneración de requisitos*
37	*ARTÍCULO 37- Objetividad de la evaluación de la información y requisitos*
	DISPOSICIONES TRANSITORIAS
	TRANSITORIO ÚNICO- Reglamentación

B) Incidencia del Proyecto para la Autonomía Universitaria

La autonomía universitaria sustentada en el artículo 84 de la Constitución[1] *Política garantiza el derecho a organizarse, administrarse y regularse a sí misma, sin interferencias de grupos o sectores externos, así como a emplear sus recursos de acuerdo con sus propias decisiones. Todo esto dentro de los límites establecidos por la misma Carta Magna. Las universidades tienen independencia funcional. Tienen facultades y potestades suficientes para reglamentar autónomamente tanto el servicio público de docencia como el de investigación y de extensión, así como disponer y ejecutar las políticas que mejor considere convenientes en estas áreas.*

En este caso el proyecto ley referente a la Ley para el Registro de Productos Fitosanitarios Formulados para uso Agrícola, se destaca que los productos fitosanitarios formulados a base de agentes y entidades microbiológicas, que son microorganismos y sus derivados dotados de una organización biológica elemental, celular o no, capaz de reproducirse o de transferir material genético, utilizados en la producción de productos fitosanitarios formulados microbiológicos, lo que incluye bacterias, hongos, virus, protozoos, son una alternativa para el combate de plagas que afectan la producción agropecuaria y para la competitividad de los productores agrícolas.

A su vez, se destaca que existe un vacío normativo en cuanto a la incorporación de registros productos fitosanitarios formulados químicos sintéticos que se encuentren inscritos y autorizados para su uso agrícola en los países miembros de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y en el caso de los productos fitosanitarios formulados de origen microbiológico o botánico de uso agrícola, que se encuentren registrados en cualquiera de los Estados Parte de la Unión Aduanera Centroamericana (UACA), siempre y cuando hayan sido registrados o actualizados con los reglamentos técnicos centroamericanos para el registro de plaguicidas microbiológicos o botánicos.

Por lo anterior, si bien, el proyecto ley, no presenta roces con la autonomía constitucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica, si podría implicar participación institucional en los programas y proyectos de investigación, capacitación y transferencia tecnológica de productos agropecuarios relacionados con el tema y las nuevas regulaciones en materia de plagas que afecten la producción agropecuaria.

Por ello desde el punto de vista jurídico se determina que el Proyecto de Ley no transgrede directamente las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica.

---

[1] *ARTÍCULO 84.- La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Las demás instituciones de educación superior universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica.*
El Estado las dotará de patrimonio propio y colaborará en su financiación.

III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

Con base en lo expuesto se recomienda, para efectos de atender la audiencia conferida por la Asamblea Legislativa: Sobre el Proyecto de Ley N°24.876 no presentar oposición en razón de que, desde el punto de vista jurídico se determina que no transgrede las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica.

No obstante, es importante resaltar que el proyecto ley si bien no presenta roces con la autonomía constitucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica, si podría implicar su implementación en los programas y proyectos de investigación, capacitación y transferencia tecnológica de productos agropecuarios, relacionados con el tema de plagas y según las nuevas regulaciones en materia de plagas que afecten la producción agropecuaria, para regular el uso y manejo de sustancias químicas, biológicas o afines y equipos para aplicarlos en la agricultura. Por lo que se recomienda realizar la observación de que se establezca expresamente que en su implementación se debe garantizar el respecto de los principios de la autonomía universitaria.

Se recuerda que esta Asesoría Legal en su carácter consultivo emana criterios técnico-jurídicos por lo que este dictamen no es vinculante, dada las facultades de decisión que ostenta y ejerce el Consejo Institucional.

CONSIDERANDO QUE:

1. El Instituto Tecnológico de Costa Rica, por medio del Consejo Institucional, debe emitir criterio sobre los proyectos de ley que la Asamblea Legislativa le envía a consulta, en acatamiento del artículo 88 de la Constitución Política. De conformidad con la normativa establecida por este Consejo, el pronunciamiento que se efectúe ordinariamente versará sobre la transgresión de la autonomía universitaria; no obstante, cuando lo considere conveniente podrá pronunciarse sobre otros aspectos de los proyectos consultados.

2. El proyecto de ley N.° 24.876 “LEY PARA EL REGISTRO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS FORMULADOS PARA USO AGRÍCOLA”, tiene como finalidad establecer un marco normativo actualizado para el registro, control y fiscalización de productos fitosanitarios formulados para uso agrícola, con énfasis en el manejo integrado de plagas y la sostenibilidad ambiental. La propuesta regula aspectos técnicos, administrativos y sanitarios relacionados con el uso de sustancias químicas, biológicas y botánicas, y establece competencias específicas para los ministerios de Agricultura y Ganadería, de Salud y de Ambiente y Energía.

3. La Oficina de Asesoría Legal concluye que el proyecto de ley N.° 24.876 no transgrede directamente las competencias propias del Instituto Tecnológico de Costa Rica ni presenta roces con su autonomía constitucional. No obstante, advierte que su implementación podría incidir en los programas y proyectos de

investigación, capacitación y transferencia tecnológica relacionados con el uso de productos fitosanitarios, por lo que recomienda que se establezca expresamente que su aplicación deberá respetar los principios de la autonomía universitaria.

4. Desde el punto de vista de este Consejo, aunque el proyecto no impone obligaciones directas a las universidades, sí establece un marco regulatorio estricto y centralizado sobre el uso, registro, fiscalización y prohibición de productos fitosanitarios, con competencias exclusivas del Servicio Fitosanitario del Estado y los ministerios de Salud y Ambiente. En particular:

a. El artículo 32 permite a estas autoridades prohibir el uso de productos registrados, incluso si se utilizan conforme a su etiqueta, cuando se considere que causan daños a la salud o al ambiente.
b. El artículo 11 prohíbe el registro de productos cuyos ingredientes activos estén prohibidos o incluidos en convenios internacionales.
c. El artículo 26 regula las autorizaciones especiales para importación con fines de investigación, pero solo en el marco de emergencias fitosanitarias y a solicitud de productores, no de universidades.

Esto significa que, si la universidad pública requiere utilizar un producto fitosanitario prohibido para fines de investigación científica, podría verse impedida de hacerlo, incluso bajo condiciones controladas, si la ley no contempla una excepción o salvaguarda para usos académicos.

5. La autonomía universitaria no implica que las universidades estén exentas de cumplir con la legislación sanitaria o ambiental. Sin embargo, sí exige que las leyes reconozcan su capacidad para decidir, bajo criterios técnicos y éticos, sobre el uso de insumos en contextos académicos o científicos, especialmente cuando se trata de actividades no comerciales ni de producción agrícola. Por tanto, incluir una cláusula que garantice el respeto a la autonomía universitaria en la aplicación de esta ley sería una medida preventiva para evitar interpretaciones restrictivas que puedan afectar la libertad académica y científica.

SE ACUERDA:

a. Indicar en respuesta a la consulta recibida de parte de la Asamblea Legislativa, a través de la instancia consultante que, el proyecto de ley citado a continuación no transgrede las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica; no obstante, se recomienda incluir en el régimen de excepciones el uso con fines estrictamente académicos o científicos, bajo condiciones controladas y conforme a protocolos de bioseguridad:

Expediente	Nombre del proyecto	Comisión consultante
N.° 24.876	LEY PARA EL REGISTRO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS FORMULADOS PARA USO AGRÍCOLA	Permanente Especial de Ambiente AL-CPAAGROP-585-2025

b. Indicar que el presente acuerdo no podrá ser impugnado por carecer de efectos jurídicos propios.

ACUERDO FIRME

La discusión de este punto consta en el archivo digital de la Sesión Ordinaria N.° 3406.

ARTÍCULO 21. Pronunciamiento sobre el proyecto de ley Expediente N.° 017-2025 del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) "REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY 2, CÓDIGO DE TRABAJO, DE 27 DE AGOSTO DE 1943, Y DE LA LEY 7983, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR, DE 16 DE FEBRERO DE 2000. LEY DE DERECHOS LABORALES DEL SIGLO XXI" ***(A cargo de la Presidencia)***

La señora Maritza Agüero González presenta la propuesta denominada: "Pronunciamiento sobre el proyecto de ley Expediente N.° 017-2025 del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) "REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY 2, CÓDIGO DE TRABAJO, DE 27 DE AGOSTO DE 1943, Y DE LA LEY 7983, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR, DE 16 DE FEBRERO DE 2000. LEY DE DERECHOS LABORALES DEL SIGLO XXI", a cargo de la Presidencia (adjunta al acta de esta sesión).

El señor Teodolito Guillen Girón somete a votación la propuesta, quedando aprobada con el siguiente resultado: 10 votos a favor y 0 votos en contra. Se somete a votación la firmeza del acuerdo y es aprobada con: 10 votos a favor y 0 votos en contra.

Por lo tanto, el Consejo Institucional:

RESULTANDO QUE:

1. El artículo 84 de la Constitución Política de la República de Costa Rica establece:

> *La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Las demás instituciones de educación superior universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica.*

El Estado las dotará de patrimonio propio y colaborará en su financiación.

2. El artículo 88 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, establece:

> *Para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a las materias puestas bajo la competencia de la Universidad de Costa Rica y de las demás instituciones de educación superior universitaria, o relacionadas directamente con ellas, la Asamblea Legislativa deberá oír previamente al Consejo Universitario o el órgano director correspondiente de cada una de ellas.*

3. El artículo 18, inciso i) del Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica, señala:

> *Son funciones del Consejo Institucional:*
> *…*
> *i. Evacuar las consultas a que se refiere el Artículo 88 de la Constitución Política de la República.*
> *…*

4. En el "Procedimiento para la atención y emisión de criterio ante consultas de proyectos de ley enviados por la Asamblea Legislativa", se establece la metodología de atención y emisión de criterio a las consultas de los Proyectos de Ley sometidos a conocimiento del Consejo Institucional por la Asamblea Legislativa. En lo conducente se extrae lo siguiente:

> 1. *Recibe el documento en consulta enviado por la Asamblea Legislativa.*
>
> 2. *Traslada el documento a la Oficina de Asesoría Legal, de inmediato una vez recibido, para que emita dictamen en el plazo de 3 días hábiles…*
>
> […]
>
> 4. *El documento es dado a conocer a la Comunidad Institucional mediante la cuenta oficial de correo electrónico, para consulta pública, indicando que las observaciones deberán ser enviadas directamente a la Asamblea Legislativa y señalando la dirección de correo pertinente.*
>
> 5. *Recibido el dictamen de la Oficina de Asesoría Legal, la Presidencia confecciona la propuesta que conocerá el Consejo Institucional. El Consejo se pronunciará ordinariamente solo sobre si el proyecto afecta o no la autonomía universitaria. No obstante, cuando lo considere conveniente podrá pronunciarse sobre otros aspectos del proyecto*.
> *…*

5. La Secretaría del Consejo Institucional recibió en consulta por parte del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley "REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY 2, CÓDIGO DE

TRABAJO, DE 27 DE AGOSTO DE 1943, Y DE LA LEY 7983, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR, DE 16 DE FEBRERO DE 2000. LEY DE DERECHOS LABORALES DEL SIGO XXI" (AL-DEST-OFI-141-2025 del 05 de marzo de 2025), contenido en el Expediente N.° 017-2025 del Tribunal Supremo de Elecciones, mismo que fue consultado a la Oficina de Asesoría Legal en oficio SCI-194-2025, fechado 11 de marzo de 2025. De igual forma fue sometido a conocimiento y consideración de la comunidad institucional a través de mensaje de correo electrónico.

6. Al respecto, la Oficina de Asesoría Legal emitió criterio en oficio AL-311-2025 del 24 de abril del 2025, indicando lo siguiente:

…

I. SINOPSIS

Expediente	*Oficio AL-DEST-OFI-141-2025, N.° 017-2025 TSE*
Nombre	*Reforma de varios artículos de la Ley 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943, y de la ley 7983, Ley de Protección al Trabajador, de 16 de febrero de 2000. Ley de Derechos Laborales del Siglo XXI*
Objeto	*El objetivo del Proyecto es reformar varios artículos del Código de Trabajo referente al aumento de período de vacaciones a cuatro semanas y la disminución de las horas de las jornadas diurna y nocturna, así como agregar un artículo 18 bis al Código de Trabajo, con la definición de un tipo de contrato individual especial, para los trabajadores que realizan su labor a través de una plataforma digital perteneciente a un empresa nacional o transnacional. A su vez, se propone reformar el artículo 20 de la Ley de protección al trabajador, Ley No. 7983 del 16 de febrero del 200* [*sic*], *para adicionar un párrafo que contiene una excepción para el retiro del monto total del ROPI* [*sic*]
Incidencia	*Desde el punto de vista jurídico se determina que el Proyecto de Ley no transgrede las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por cuanto su contenido no regula ni interfiere en el funcionamiento interno, la organización, la administración, ni la gestión de los recursos de las universidades públicas, que son los elementos esenciales protegidos por el principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica* [*sic*]
Recomendación	*Con base en lo expuesto se recomienda, para efectos de atender la audiencia conferida por la Asamblea Legislativa, no presentar oposición, con la observación de que se recomienda que el proyecto de ley establezca excepciones o mecanismos de adaptación para instituciones con regímenes especiales, como las universidades públicas, y remitiendo las observaciones hechas por AFITEC.*

II. CRITERIO JURÍDICO

La presente consulta se contrae fundamentalmente a la revisión y emisión del criterio en torno al Proyecto de Ley denominado "REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY 2, CÓDIGO DE TRABAJO, DE 27 DE AGOSTO DE 1943, Y DE LA LEY 7983, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR, DE 16 DE FEBRERO DE 2000. LEY DE DERECHOS LABORALES DEL SIGLO XXI", tramitado bajo la numeración N.°017-2025 TSE, y al efecto se indica:

A) CONSIDERACIONES GENERALES

Objeto del Proyecto: *El objetivo del Proyecto es reformar varios artículos del Código de Trabajo Ley No. 2 del 27 de agosto de 1943 y de la Ley de Protección al Trabajador Ley No. 7983 del 16 de febrero del 2000. Ley de Derechos Laborales del Siglo XXI.*

Motivación: *El ciudadano Pablo Morales Rivera presentó la solicitud al Tribunal Supremo de Elecciones para que se le autorice para recolectar firmas con base en el artículo 6 de la Ley 8492. Adjuntó el texto para el trámite denominado Derechos Laborales del Siglo XXI para que se le de* [sic] *el trámite de ley. El Tribunal Supremo de Elecciones remitió la documentación recibida al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa para el trámite según la Ley sobre Regulación des referéndum y que se proceda a evaluar el proyecto desde el punto de vista formal.*

Contenido de la propuesta: *De la revisión efectuada del texto propuesto sobre la cual se nos confiere audiencia se determina que está conformada por tres artículos y dos transitorios.*

Texto Vigente Código Trabajo	***Propuesta de reforma con el Proyecto Ley Reforma a varios artículos del Código de Trabajo y Ley de Protección al Trabajador***	***Observaciones***
	Artículo 1- Establézcase u [sic] *artículo 18 bis a la Ley No. 2, de 27 de agosto de 1943, Código de Trabajo, para que se lean de la siguiente manera:*	
ARTICULO 18.- *Contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, es todo aquél en que una persona se obliga a prestar a otra sus servicios o a ejecutarle una obra, bajo la dependencia permanente y dirección inmediata o delegada en ésta, y por una remuneración de cualquier clase o forma.* *Se presume la existencia de este contrato entre el trabajador que*	***Articulo 18 bis-*** ***Se presumirá un contrato de trabajo individual en beneficio de cualquier persona que brinde un servicio a terceros a través de una plataforma digital a una empresa nacional o transnacional, ya sea que opere directamente o a través de una franquicia, donde quién represente a dicha plataforma digital será considerado como***	*Se adiciona un artículo 18 bis al Código de Trabajo, con un tipo de contrato especial*

presta sus servicios y la persona que los recibe	**patrono.**	
	Artículo 2- Refórmese los artículos 136, 152, 153 y 162 de la Ley No. 2, de 27 de agosto de 1943, Código de Trabajo, para que se lean de la siguiente manera:	
ARTICULO 136.- La jornada ordinaria de trabajo efectivo no podrá ser mayor de ocho horas en el día, de seis en la noche y de cuarenta y ocho horas por semana. Sin embargo, en los trabajos que por su propia condición no sean insalubres o peligrosos, podrá estipularse una jornada ordinaria diurna hasta de diez horas y una jornada mixta hasta de ocho horas, siempre que el trabajo semanal no exceda de las cuarenta y ocho horas. Las partes podrán contratar libremente las horas destinadas a descanso y comidas, atendiendo a la naturaleza del trabajo y a las disposiciones legales.	Artículo 136- La jornada ordinaria de trabajo efectivo no podrá ser mayor de ocho horas en el día, de **cinco** en la noche y de **cuarenta** horas por semana en jornada diurna y **35 horas por semana si fuere jornada nocturna**. Sin embargo, en los trabajos que por su propia condición no sean insalubres o peligrosos, podrá estipularse una jornada ordinaria diurna hasta de diez horas y una jornada mixta hasta de ocho horas, siempre que el trabajo semanal no exceda de las cuarenta y ocho horas. Las partes podrán contratar libremente las horas destinadas a descanso y comidas, atendiendo a la naturaleza del trabajo y a las disposiciones legales.	Disminución de horas en la jornada diurna y jornada nocturna
ARTICULO 152.- Todo trabajador tiene derecho a disfrutar de un día de descanso absoluto(*) (después de cada semana o de cada seis días de trabajo continuo), que sólo será con goce del salario correspondiente si se tratare de personas que prestan sus servicios en establecimientos comerciales o cuando, en los demás casos, así se hubiere estipulado. ((*) NOTA: Interpretada la frase escrita entre paréntesis por resolución de la Sala Constitucional No. 10.842-2001 de las 14:53 horas del 24 de octubre de 2001, en el sentido de que no contiene una alternativa u opción para el patrono, sino que se refiere a dos situaciones de hecho distintas). El patrono que no otorgue el día de descanso incurrirá en las sanciones legales y en la obligación de satisfacer a sus trabajadores, por esa jornada, el doble del salario que	Artículo 152- Todo trabajador tiene derecho a disfrutar de dos días de descanso absoluto(*) (después de cada semana cinco días de trabajo continuo), que sólo será con goce del salario correspondiente si se tratare de personas que prestan sus servicios en establecimientos comerciales o cuando, en los demás casos, así se hubiere estipulado. ((*) NOTA: Interpretada la frase escrita entre paréntesis por resolución de la Sala Constitucional No. 10.842-2001 de las 14:53 horas del 24 de octubre de 2001, en el sentido de que no contiene una alternativa u opción para el patrono, sino que se refiere a dos situaciones de hecho distintas). El patrono que no otorgue el día de descanso incurrirá en las sanciones legales y en la obligación de satisfacer a sus trabajadores, por esa jornada, el doble del salario que ordinariamente les pague.	

ordinariamente les pague. *No obstante, se permitirá trabajar, por convenio de las partes, durante el día de descanso semanal, si las labores no son pesadas, insalubres o peligrosas y se ejecutan al servicio de explotaciones agrícolas o ganaderas, de empresas industriales que exijan continuidad en el trabajo por la índole de las necesidades que satisfacen, o de actividades de* *evidente interés público o social. En el primer caso, la remuneración será la establecida para la jornada extraordinaria en el párrafo primero del artículo 139; en los demás casos, será la establecida en el aparte segundo del presente artículo.* *Cuando se trate de aquellas labores comprendidas en el último caso del párrafo anterior, y el trabajador no conviniere en prestar sus servicios durante los días de descanso, el patrono podrá gestionar ante el Ministerio de Trabajo autorización para otorgar los descansos en forma acumulativa mensual. El Ministerio, previa audiencia a los trabajadores interesados por un término que nunca será menor de tres días, en cada caso y en resolución razonada, concederá o denegará la autorización solicitada.*	*No obstante, se permitirá trabajar, por convenio de las partes, durante el día de descanso semanal, si las labores no son pesadas, insalubres o peligrosas y se ejecutan al servicio de explotaciones agrícolas o ganaderas, de empresas industriales que exijan continuidad en el trabajo por la índole de las necesidades que satisfacen, o de actividades de* *evidente interés público o social. En el primer caso, la remuneración será la establecida para la jornada extraordinaria en el párrafo primero del artículo 139; en los demás casos, será la establecida en el aparte segundo del presente artículo.* *Cuando se trate de aquellas labores comprendidas en el último caso del párrafo anterior, y el trabajador no conviniere en prestar sus servicios durante los días de descanso, el patrono podrá gestionar ante el Ministerio de Trabajo autorización para otorgar los descansos en forma acumulativa mensual. El Ministerio, previa audiencia a los trabajadores interesados por un término que nunca será menor de tres días, en cada caso y en resolución razonada, concederá o denegará la autorización solicitada.*	
ARTICULO 153.- *Todo trabajador tiene derecho a vacaciones anuales remuneradas, cuyo mínimo se fija en cuatro semanas por cada cuarenta y ocho semanas de labores continuas, al servicio de un mismo patrono.* *En caso de terminación del contrato antes de cumplir el período de las cuarenta y ocho semanas, el trabajador tendrá derecho, como mínimo, a dos de vacaciones por cada mes trabajado, que se le pagará en el momento del retiro de su trabajo.* *No interrumpirán la continuidad del trabajo, las licencias sin goce de salario, los descansos otorgados por el presente Código, sus reglamentos y sus leyes conexas, las enfermedades justificadas, la*	*ARTICULO 153.-* *Todo trabajador tiene derecho a vacaciones anuales remuneradas, cuyo mínimo se fija en* ***cuatro*** *semanas por cada* ***cuarenta y ocho*** *semanas de labores continuas, al servicio de un mismo patrono.* *En caso de terminación del contrato antes de cumplir el período de las* ***cuarenta y ocho*** *semanas, el trabajador tendrá derecho, como mínimo, a* ***dos*** *de vacaciones por cada mes trabajado, que se le pagará en el momento del retiro de su trabajo.* *No interrumpirán la continuidad del trabajo, las licencias sin goce de salario, los descansos otorgados por el presente Código, sus reglamentos y sus leyes conexas, las enfermedades justificadas, la*	*Se propone un aumento de vacaciones a 4 semanas*

prórroga o renovación inmediata del contrato de trabajo, ni ninguna otra causa análoga que no termine con éste.	*prórroga o renovación inmediata del contrato de trabajo, ni ninguna otra causa análoga que no termine con éste.*	
ARTICULO 162.- *Salario o sueldo es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del contrato de trabajo.*	*ARTICULO 162.-* *Salario o sueldo es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del contrato de trabajo.* ***El salario deberá mantener un valor real frente al aumento del costo de la vida.*** ***La persona trabajadora podrá reclamar que su salario mantenga dicho valor real y que los aumentos por costo de vida garanticen el mantenimiento de su poder adquisitivo.***	*Se agrega al salario el aumento del valor real frente al aumento del costo de vida*
Ley Protección al Trabajador No. 7983	*Artículo 3- Refórmese el artículo 20 de la Ley de protección al trabajador, Ley No. 7983 del 16 de febrero del 200* [*sic*], *para adicionar un párrafo que lo diga lo siguiente:*	
Artículo 20- *Condiciones para acceder a los beneficios del Régimen Obligatorio de Pensiones. Los beneficios del Régimen Obligatorio de Pensiones se obtendrán una vez que el afiliado presente a la operadora una certificación de que ha cumplido con los requisitos del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o del régimen público sustituto al que haya pertenecido.* *En caso de muerte del afiliado o pensionado, sus beneficiarios serán establecidos de conformidad con las siguientes reglas:*	***El trabajador podrá retirar el monto total del régimen obligatorio de pensiones (ROP), cuando supere los 55 años y se haya jubilado por el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte o por algún régimen de jubilaciones creado por ley de la República, que le proporcione un monto de jubilación mensual que supere los dos salarios mínimos.***	*Se adiciona un párrafo con una excepción para retirar el monto del ROP*
a) En primer lugar, los beneficiarios serán los establecidos por el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social o por el régimen público sustituto. *b) Si no existieran beneficiarios establecidos por el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte o por el régimen público sustituto, serán los que el afiliado o pensionado haya designado ante la operadora de pensiones que administra sus recursos.* *c) Si no existieran beneficiarios*		

establecidos por el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte o por el régimen público sustituto, ni tampoco beneficiarios designados como tales ante la operadora de pensiones, el saldo de la cuenta individual podrá ser reclamado ante la autoridad judicial de trabajo que corresponda, por cualquiera que tenga interés legítimo en ello, según lo establece el artículo 85 de la Ley 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943. Cuando un trabajador no se pensione bajo ningún régimen tendrá derecho a retirar los fondos de su cuenta individual al cumplir la edad establecida vía reglamento por la Junta Directiva de la CCSS. En este caso, el trabajador podrá optar por el retiro total de los recursos o alguna de las modalidades establecidas en el artículo 22 de esta ley. *Cada operadora tendrá un plazo máximo de sesenta días naturales para hacer efectivos* *los beneficios del afiliado. El incumplimiento de esta obligación se considerará como* *una infracción muy grave para efectos de imponer sanciones.*		
	Transitorio 1- La Reforma al artículo 20 de la Ley 7983 realizada por el artículo 4 de la presente ley, entrará en vigencia 36 meses después de su aprobación, con el objetivo de que las operadoras de pensiones se preparen para dicho cambio.	*Se agregan 2 transitorios.* *Hay un error al indicar artículo 4 de la presente ley, porque solo tiene 3 artículos.*
	Transitorio 2- Las empresas que previo a la publicación de esta ley, se encontrasen cubiertas por el Régimen de Zona Franca (Ley 7210) o la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas empresas (Ley 8262), tendrán hasta cuatro años para prepararse y cumplir con lo establecido en las reformas a* *los artículos 136, 152, 153 y 162 del Código de Trabajo.	

B) Incidencia del Proyecto para la Autonomía Universitaria

La autonomía universitaria sustentada en el artículo 84 de la Constitución[1] Política garantiza el derecho a organizarse, administrarse y regularse a sí misma, sin interferencias de grupos o sectores externos, así como a emplear sus recursos de acuerdo con sus propias decisiones. Todo esto dentro de los límites establecidos por la misma Carta Magna. Las universidades tienen independencia funcional. Tienen facultades y potestades suficientes para reglamentar autónomamente tanto el servicio público de docencia como el de investigación y de extensión, así como disponer y ejecutar las políticas que mejor considere convenientes en estas áreas.

En este caso, el proyecto ley presentado por un ciudadano, pretende la reforma de los artículos 136, 152, 153 y 162 de la Ley No. 2, de 27 de agosto de 1943, Código de Trabajo, referente al aumento de período de vacaciones a cuatro semanas y la disminución de las horas de las jornadas diurna y nocturna, así como agregar un artículo 18 bis al Código de Trabajo, con la definición de un tipo de contrato individual especial, para los trabajadores que realizan su labor a través de una plataforma digital perteneciente a un empresa nacional o transnacional. A su vez, se propone reformar el artículo 20 de la Ley de protección al trabajador, Ley No. 7983 del 16 de febrero del 200, para adicionar un párrafo que contiene una excepción para el retiro del monto total del ROP.

Tales propuestas resultan beneficiosas para los trabajadores y un tema especial de un contrato individual que podría ser necesario de atender en caso de detectarse la necesidad de regularlo, y que no esté contemplado en el artículo 18 de dicho Código de Trabajo.

En ese sentido este proyecto ley en trámite, no presenta roces con la autonomía universitaria, sino que, como institución pública, en estos temas le sería aplicable la normativa laboral especifica de la Segunda Convención Colectiva y el Régimen de Pensiones específico. Sería recomendable que el proyecto de ley establezca excepciones o mecanismos de adaptación para instituciones con regímenes especiales, como las universidades públicas.

Por ello desde el punto de vista jurídico se determina que el Proyecto de Ley no transgrede las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por cuanto su contenido no regula ni interfiere en el funcionamiento interno, la organización, la administración, ni la gestión de los recursos de las universidades públicas, que son los elementos esenciales protegidos por el principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica.

---

[1] *ARTÍCULO 84.- La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones,* ***así como para*** *darse su organización y gobierno propios. Las demás instituciones de educación superior universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica.*
El Estado las dotará de patrimonio propio y colaborará en su financiación.

C) **Observaciones remitidas por AFITEC**

Por oficio AFITEC-038-2025, la Asociación de Funcionarios del ITCR, presenta como observaciones lo siguiente:

"En atención a la consulta formulada el pasado miércoles 12 de marzo de 2025 vía correo electrónico a la Comunidad por el Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica, se remite criterio de AFITEC a efectos de atender la consulta con el objeto de que sirva de análisis del proyecto de ley 017-2025 TSE "Reforma de Varios Artículos de la Ley 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943, y de la Ley 7983, Ley de Protección al Trabajador, de 16 de febrero de 2000. Ley de Derechos Laborales del Siglo XXI", esta representación sindical manifiesta que, bajo el estudio del articulado propuesto, es de necesidad de que el presente proyecto sea estudiado por la visión de una mejora en los derechos de las personas trabajadoras en su aplicación.

Sobre el crecimiento responsable de los derechos laborales.

El derecho al trabajo es la base para la realización de otros derechos humanos y para una vida en dignidad. Incluye la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado.

En la realización progresiva de este derecho, el Estado está obligados a garantizar la disponibilidad de orientación técnica y profesional, y a tomar las medidas apropiadas para crear un entorno propicio para existan oportunidades de empleo productivo. El Estado debe garantizar la no discriminación en relación con todos los aspectos del trabajo.

La relación con el derecho al trabajo está el principio de las condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, y estos derechos se han dado por las luchas relacionadas con los sindicatos.

Desde los años veinte se emitieron normas nacionales que fijaban la jornada de 8 horas diarias como un fiel reflejo de la necesidad del respeto a las condiciones laborales de las personas trabajadoras, donde con la emisión de la vigente.

Constitución Política de 1871 y con la incorporación de las Garantías Sociales para año de 1943 se promulga el Código de Trabajo y nace la consolidación de los derechos en normativa.

El derecho del trabajo es un medio que ha evolucionado a través de los años, buscando limitar los poderes de la persona empleadora en lo necesario para deparar un nivel de protección suficiente a los trabajadores; hasta un derecho laboral más amplio y flexible. Y es en virtud de ello y de aceptar este desequilibrio que se buscó limitar esos poderes del empleador bajo unas normas nacionales, que garantizaran ciertas condiciones de trabajo (normas mínimas), reconocimiento de derechos colectivos (libertad sindical), irrenunciabilidad de derechos, obligación de información, consulta, negociación, institutos como el preaviso, inspección del trabajo, vías de reclamación, entre otras.

Con vista, en lo que menciona los artículos de la propuesta del texto del proyecto de ley, nace la disyuntiva de la responsabilidad, que ante esta situación es muy precipitado la línea exponencial de crecimiento,

lo que podría llegar a tomarse en consideración si los mismos puedan ser aplicados a la realidad socio económica del país, ya que esta Organización Sindical, aprobamos estamos el acuerdo del crecimiento de los derechos de las personas trabajadoras, pero los mismos deben de considerarse que si serán aplicados a la realidad laboral de nuestro país, por lo que podría llevar a una crisis de legalidad nacional, ante la imposibilidad de aplicación, lo que tendría como repercusión que lo propuesto podría ser desvirtuado y llegar a afectar a las personas trabajadoras.

EN RESUMEN

Con fundamento en los elementos anteriormente analizados, se emite el presente criterio señalando, considera esta Asociación Sindical que lo pertinente es que el Proyecto en cuestión no sea aprobado, y se proponga una línea exponencial de crecimiento responsable de los derechos de las personas trabajadoras."

III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

Con base en lo expuesto se recomienda, para efectos de atender la audiencia conferida por la Asamblea Legislativa, referente al Oficio AL-DEST-OFI-141-2025 y Expediente No. 017-2025 TSE, se recomienda no presentar oposición en razón de que, desde el punto de vista jurídico se determina que no transgrede directamente las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica. Sin embargo se recomienda realizar la observación de que el proyecto de ley establezca excepciones o mecanismos de adaptación para instituciones con regímenes especiales, como las universidades públicas, y remitir las observaciones hechas por AFITEC.

… (La negrita y subrayado corresponde al original)

CONSIDERANDO QUE:

1. El Instituto Tecnológico de Costa Rica, por medio del Consejo Institucional, debe emitir criterio sobre los proyectos de ley que la Asamblea Legislativa le envía a consulta, en acatamiento del artículo 88 de la Constitución Política. De conformidad con la normativa establecida por este Consejo, el pronunciamiento que se efectúe ordinariamente versará sobre la transgresión de la autonomía universitaria; no obstante, cuando lo considere conveniente podrá pronunciarse sobre otros aspectos de los proyectos consultados.

2. El proyecto de ley Expediente N.° 017-2025 del Tribunal Supremo de Elecciones, denominado "REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY 2, CÓDIGO DE TRABAJO, DE 27 DE AGOSTO DE 1943, Y DE LA LEY 7983, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR, DE 16 DE FEBRERO DE 2000. LEY DE DERECHOS LABORALES DEL SIGO XXI", propone reformas sustantivas al régimen laboral costarricense, incluyendo: la reducción de la jornada laboral ordinaria, el aumento del período mínimo de vacaciones, la incorporación de un

nuevo tipo de contrato individual para trabajadores de plataformas digitales, y la posibilidad de retiro total del ROP bajo condiciones específicas.

3. De conformidad con el dictamen de la Oficina de Asesoría Legal, el proyecto no transgrede las competencias propias del Instituto Tecnológico de Costa Rica ni afecta su régimen de autonomía universitaria, por lo que se recomienda no presentar oposición al mismo. No obstante, se considera jurídicamente pertinente que el proyecto contemple mecanismos de adaptación para instituciones con regímenes especiales, como las universidades públicas, a fin de garantizar una implementación armónica con sus marcos normativos internos, tales como convenciones colectivas y regímenes de pensiones propios.

4. Se comparten los razonamientos de la Oficina de Asesoría Legal, en cuanto a que las reformas del proyecto de este proyecto de ley tendrían un impacto directo en las condiciones laborales vigentes en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, muchas de las cuales están reguladas por la Convención Colectiva de Trabajo. Por tanto, resulta necesario prever mecanismos de adaptación que permitan a la Institución revisar y, en su caso, reformar su convención colectiva, en un marco de diálogo social y respeto a la autonomía universitaria, a fin de garantizar una implementación ordenada y coherente del nuevo marco normativo.

5. En el caso de los cambios en los regímenes de pensiones, se observa que el proyecto si consideró disposiciones transitorias a fin de garantizar una implementación armónica.

6. Fueron conocidas también las observaciones remitidas por la Asociación de Funcionarios del Instituto Tecnológico de Costa Rica (AFITEC), mediante oficio AFITEC-038-2025, donde se manifiesta su oposición al proyecto de ley, al considerar que, aunque la propuesta promueve el crecimiento de los derechos laborales, no considera la realidad socioeconómica del país. La organización reconoce la importancia de avanzar en esta materia, pero advierte que una implementación precipitada podría generar efectos negativos para las personas trabajadoras. Por ello, recomienda no aprobar el proyecto en su forma actual y aboga por una reforma más gradual y responsable.

SE ACUERDA:

a. Acoger el criterio emitido por la Oficina de Asesoría Legal (AL-302-2025) en el proyecto de ley citado a continuación, y, por ende, indicar en respuesta a la consulta recibida de parte de la Asamblea Legislativa, a través de la instancia consultante, que en el proyecto de ley indicado a continuación no se transgreden las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica:

Expediente	Nombre del proyecto	Comisión consultante
N.° 017-2025 TSE	REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY 2, CÓDIGO DE TRABAJO, DE 27 DE AGOSTO DE 1943, Y DE LA LEY 7983, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR, DE 16 DE FEBRERO DE 2000. LEY DE DERECHOS LABORALES DEL SIGLO XXI	Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa AL-DEST-OFI-141-2025

b. Indicar al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa que, resulta necesario que el proyecto prevea mecanismos de adaptación que permitan a la Institución revisar y, en su caso, reformar su convención colectiva, en un marco de diálogo social y respeto a la autonomía universitaria, a fin de garantizar una implementación ordenada y coherente del nuevo marco normativo.

c. Remitir al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa las observaciones efectuadas por la Asociación de Funcionarios del Instituto Tecnológico de Costa Rica (AFITEC), mediante oficio AFITEC-038-2025.

d. Indicar que el presente acuerdo no podrá ser impugnado por carecer de efectos jurídicos propios.

ACUERDO FIRME

La discusión de este punto consta en el archivo digital de la Sesión Ordinaria N.° 3406.

ARTÍCULO 22. Pronunciamiento sobre el proyecto de ley Expediente N.° 23.719 “LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA DE LOS CUIDADOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CUIDADO, ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y APOYOS PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL” (texto actualizado) ***(A cargo de la Presidencia)***

La señora Maritza Agüero González presenta la propuesta denominada: “Pronunciamiento sobre el proyecto de ley Expediente N.° 23.719 “LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA DE LOS CUIDADOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CUIDADO, ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y APOYOS PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL” (texto actualizado), a cargo de la Presidencia (adjunta al acta de esta sesión).

El señor Teodolito Guillen Girón somete a votación la propuesta, quedando aprobada con el siguiente resultado: 10 votos a favor y 0 votos en contra. Se somete a votación la firmeza del acuerdo y es aprobada con: 10 votos a favor y 0 votos en contra.

Por lo tanto, el Consejo Institucional:

RESULTANDO QUE:

1. El artículo 84 de la Constitución Política de la República de Costa Rica establece:

> *La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Las demás instituciones de educación superior universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica.*
>
> *El Estado las dotará de patrimonio propio y colaborará en su financiación.*

2. El artículo 88 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, establece:

> *Para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a las materias puestas bajo la competencia de la Universidad de Costa Rica y de las demás instituciones de educación superior universitaria, o relacionadas directamente con ellas, la Asamblea Legislativa deberá oír previamente al Consejo Universitario o el órgano director correspondiente de cada una de ellas.*

3. El artículo 18, inciso i) del Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica, señala:

> *Son funciones del Consejo Institucional:*
> *…*
> *i. Evacuar las consultas a que se refiere el Artículo 88 de la Constitución Política de la República.*
> *…*

4. En el “Procedimiento para la atención y emisión de criterio ante consultas de proyectos de ley enviados por la Asamblea Legislativa”, se establece la metodología de atención y emisión de criterio a las consultas de los Proyectos de Ley sometidos a conocimiento del Consejo Institucional por la Asamblea Legislativa. En lo conducente se extrae lo siguiente:

> *1. Recibe el documento en consulta enviado por la Asamblea Legislativa.*
>
> *2. Traslada el documento a la Oficina de Asesoría Legal, de inmediato una vez recibido, para que emita dictamen en el plazo de 3 días hábiles…*
>
> […]
>
> *4. El documento es dado a conocer a la Comunidad Institucional mediante la cuenta oficial de correo electrónico, para consulta pública, indicando*

que las observaciones deberán ser enviadas directamente a la Asamblea Legislativa y señalando la dirección de correo pertinente.

5. *Recibido el dictamen de la Oficina de Asesoría Legal, la Presidencia confecciona la propuesta que conocerá el Consejo Institucional. El Consejo se pronunciará ordinariamente solo sobre si el proyecto afecta o no la autonomía universitaria. No obstante, cuando lo considere conveniente podrá pronunciarse sobre otros aspectos del proyecto*.

…

5. La Secretaría del Consejo Institucional recibió en consulta por parte del Departamento Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa, el texto actualizado del proyecto "LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA DE LOS CUIDADOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CUIDADO, ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y APOYOS PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL" (AL-DSDI-OFI-0049-2025 del 11-03-2025), contenido en el Expediente N.° 23.719, mismo que fue consultado a la Oficina de Asesoría Legal en oficio SCI-194-2025, fechado 11 de marzo de 2025. De igual forma fue sometido a conocimiento y consideración de la comunidad institucional a través de mensaje de correo electrónico.

6. La Oficina de Asesoría Legal emitió criterio en oficio AL-313-2025 del 23 de abril del 2025, indicando lo siguiente:

…

I. SINOPSIS

Expediente	*N.° 23.719*
Nombre	*Ley para la Promoción de la Economía de los Cuidados y el Fortalecimiento de los servicios de cuidado, atención a la dependencia y apoyos para la autonomía personal*
Objeto	*Regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho de la ciudadanía al cuidado y desarrollo infantil, la promoción de la autonomía personal y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para Personas Adultas y Personas Adultas Mayores en situación de dependencia (SINCA)*
Incidencia	*Desde el punto de vista jurídico se determina que el Proyecto de Ley no transgrede directamente las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por cuanto su contenido no regula ni interfiere en el funcionamiento interno, la organización, la administración, ni la gestión de los recursos de las universidades públicas, que son los elementos esenciales protegidos por el principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica. Sin embargo, si* [*sic*] *podría implicar la participación de las Universidades, según sea si se cuenta con programas de atención de adultos*

	mayores, o atención de personas menores de edad que cuenten con beneficio de dicha ley
Recomendación	*Con base en lo expuesto se recomienda, para efectos de atender la audiencia conferida por la Asamblea Legislativa, no presentar oposición, con la observación de que el proyecto de ley aclare expresamente que sus disposiciones no se aplican a los programas y servicios administrados por las universidades públicas bajo su régimen de autonomía.*

II. CRITERIO JURÍDICO

La presente consulta se contrae fundamentalmente a la revisión y emisión del criterio en torno al Proyecto de Ley "LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA DE LOS CUIDADOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CUIDADO, ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y APOYOS PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL", tramitado bajo Expediente N.° 23.719 y al efecto se indica:

A) CONSIDERACIONES GENERALES

Objeto del Proyecto: *La presente iniciativa de ley tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho de la ciudadanía al cuidado y desarrollo infantil, la promoción de la autonomía personal y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para Personas Adultas y Personas Adultas Mayores en situación de dependencia (SINCA).*

Motivación: *En el presente proyecto se detalla que Mediante* [*sic*] *esta ley se definen regulaciones para los servicios públicos y las prestaciones de cuidado infantil, promoción de la autonomía personal, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para Personas Adultas y Personas Adultas Mayores en situación de dependencia (SINCA), así como para los servicios privados que operan con financiamiento estatal. Asimismo, se establecen incentivos económicos para la participación del sector privado en esta materia.*

Contenido de la propuesta: *De la revisión efectuada del texto propuesto sobre la cual se nos confiere audiencia se determina que cuenta con Dictamen Afirmativo de mayoría de la Comisión Especial de Derechos Humanos, Expediente N°23.719, "LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA DE LOS CUIDADOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CUIDADO, ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y APOYOS PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL" y está conformada por veinte artículos y cuatro transitorios, destacándose lo siguiente:*

ARTÍCULO	***PROPUESTA***
	LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA DE LOS CUIDADOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CUIDADO, ATENCIÓN A LA

	DEPENDENCIA Y APOYOS PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL
1	*TÍTULO I Disposiciones generales* *ARTÍCULO 1- Objeto* *Esta ley tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho de la ciudadanía al cuidado y desarrollo infantil, la promoción de la autonomía personal y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para Personas Adultas y Personas Adultas Mayores en situación de dependencia (SINCA).*
	ARTÍCULO 2- Ámbito de competencia *Mediante esta ley se definen regulaciones para los servicios públicos y las prestaciones de cuidado infantil, promoción de la autonomía personal, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para Personas Adultas y Personas Adultas Mayores en situación de dependencia (SINCA), así como para los servicios privados que operan con financiamiento estatal. Asimismo, se establecen incentivos económicos para la participación del sector privado en esta materia*.
	TÍTULO II Fomento de la economía de los cuidados
	ARTÍCULO 3- Incentivos para el sector privado *Las empresas y organizaciones de bienestar social dedicadas a ofrecer servicios de cuidado infantil y a personas adultas mayores, promoción de la autonomía personal o atención a las personas en situación de dependencia, en cualquier parte del territorio nacional, podrán obtener los beneficios que establece esta ley, siempre y cuando cumplan con los requisitos aquí establecidos.*
	TÍTULO IIIReformas [*sic*] *a la Ley de Creación de la Red de Cuido y Desarrollo Infantil, Ley N.° 9220, del 24 de marzo de 2014, y sus reformas, y reformas y derogatorias a la Ley de Creación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, Ley N.° 10.192, del 28 de abril de 2022*
	ARTÍCULO 10- Calidad de los servicios de la Redcudi *Se adicionan un nuevo artículo 15, y se ajusta la numeración subsiguiente, a la Ley N.° 9220, del 24 de marzo de 2014, y sus reformas, el cual se leerá de la siguiente manera:* *Artículo 15- Calidad de los servicios* *La Secretaría Técnica definirá estándares esenciales de calidad y seguridad para los centros y servicios, e indicadores de calidad para la evaluación, la mejora continua y el análisis comparado de los centros y servicios de la Red. Corresponderá a esa Secretaría Técnica otorgar un certificado de acreditación de la calidad cuando verifique el cumplimiento de dichos*

	estándares, para el caso de los servicios provistos por instituciones públicas, y de aquellos servicios privados financiados con recursos públicos. Las instituciones públicas concedentes de recursos a organizaciones privadas solicitarán dicho certificado. *Este certificado de acreditación de la calidad se utilizará también para los servicios privados que deseen acceder a incentivos fiscales o económicos creados por ley.* *El procedimiento, los criterios y el plazo de vigencia de la acreditación serán oficializados mediante un reglamento específico. La Secretaría Técnica mantendrán una publicación actualizada y en línea de los centros y servicios acreditados.*
	ARTÍCULO 11- De la creación del SINCA *Se reforman los artículos 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 28 y 29 de la Ley de Creación del Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para Personas Adultas y Personas Adultas Mayores en Situación de Dependencia, Ley N.° 10.192, del 28 de abril de 2022, para que en adelante se lean de la siguiente manera:* *Artículo 1- Creación del Sinca* *Se crea el Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para personas adultas y personas adultas mayores en situación de dependencia (SINCA), con la finalidad de establecer un sistema de promoción de la autonomía personal y la atención a la dependencia de acceso público, universal y de financiamiento solidario que articule las diferentes modalidades de prestación pública y privada de servicios en materia de apoyos y cuidados para personas en situación de dependencia, y amplíe las prestaciones de atención para las personas sujetas de cuidados y de las personas cuidadoras.* *Bajo el principio de universalidad que le rige, el Sinca cubrirá a la población mayor de edad en situación de dependencia, que requiere cuidados y apoyos de manera progresiva o permanente, sin distinciones o exclusiones de ninguna naturaleza, según los criterios de priorización que dicta esta ley y su reglamento.*
	Artículo 7- Conformación del SINCA *El Sistema se configura como una red que integra, de forma coordinada, centros y servicios, públicos y privados, así como prestaciones económicas.* *El Sinca está conformado por las diferentes entidades, sean públicas, privadas o mixtas que, por mandato legal ostenten competencia o por iniciativa privada, desarrollen actividades en materia de promoción de la autonomía personal, y el cuidado y la atención a las personas en situación de dependencia.*

	TÍTULO IV Financiamiento de los servicios públicos de cuido infantil y atención a la dependencia
	ARTÍCULO 14- Del financiamiento del Fodesaf al sistema de cuidados *Se reforman los incisos g) y o) del artículo 3 de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, Ley N.° 5662, del 23 de diciembre de 1974 y sus reformas, para que se lean de la siguiente manera:* *Artículo 3- Con recursos del Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf) se pagarán los programas y los servicios a las instituciones del Estado y a otras expresamente autorizadas en esta ley, que tienen a su cargo los aportes complementarios al ingreso de las familias y la ejecución de los programas de desarrollo social.* *Para ello, se procederá de la siguiente manera:* *(…)* *g) Se destinará al Fondo de Subsidios para la Vivienda, creado por la Ley N.º 7052, de 13 de noviembre de 1986, al menos un trece por ciento (13%) de todos los ingresos anuales, ordinarios y extraordinarios, del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).* *(…)* *o) Al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) se destinará un siete por ciento (7%) de todos los ingresos anuales, ordinarios y extraordinarios percibidos por Fodesaf, para el cumplimiento de los fines y las funciones establecidos en su ley de creación. A partir del primer giro de los recursos aquí dispuestos, Fodesaf cesará el financiamiento actual y futuro de programas de Conapam acordados mediante convenios.*
	ARTÍCULO 18- Eficiencia y control en la asignación de beneficios *Se reforma el artículo 5 de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, Ley N.° 5662, del 23 de diciembre de 1974 y sus reformas, para que se lea de la siguiente manera:* *Artículo 5-* *Las instituciones y los programas que reciban recursos del Fondo, por medio de ley específica o convenio, deberán escoger a dichos beneficiarios con una metodología de selección definida y aprobada por los organismos jerárquicos superiores de cada institución involucrada, de conformidad con las leyes y el reglamento aplicables, tomando como base la clasificación socioeconómica propuesta por el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE).*

	Mensualmente, cada institución y programa financiado, por medio de ley o convenio, con recursos del Fodesaf deberá reportar a SINIRUBE la lista completa de beneficiarios de ese período. Con esa información, el SINIRUBE levantará una única base de datos para evitar la duplicación en el otorgamiento de beneficios por parte de cualquier entidad pública.
Transitorios	*TRANSITORIO I- Acreditación de servicios existentes* *Los servicios privados de cuido infantil, atención a la dependencia y promoción de la autonomía personal que, al momento de entrar en vigencia esta ley, estén financiados parcial o totalmente con recursos públicos, contarán con un plazo impostergable de cinco años para obtener el certificado de acreditación de la calidad; caso contrario, no serán sujetos de asignaciones presupuestarias adicionales.*
	TRANSITORIO II- Funcionamiento del Conapam *Durante los primeros tres años de implementación de esta ley, se autoriza al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor para crear las plazas y realizar las contrataciones que le permitan dar cumplimiento a las obligaciones que le impone esta ley, de acuerdo con los estudios técnicos y financieros que acrediten su necesidad y sostenibilidad. Asimismo, se autoriza a esta institución a utilizar los recursos que se le otorgan por medio del artículo 14 de la presente ley para cumplir con lo establecido en este transitorio.*
	TRANSITORIO III- Sobre las personas beneficiarias actuales *En el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de esta ley, las instituciones competentes deberán aplicar el baremo de dependencia y definir un modelo de atención interinstitucional para todas las personas que actualmente son beneficiarias de los servicios y prestaciones descritos en el catálogo de servicios.*

B) Incidencia del Proyecto para la Autonomía Universitaria

La autonomía universitaria sustentada en el artículo 84 de la Constitución[1] Política garantiza el derecho a organizarse, administrarse y regularse a sí misma, sin interferencias de grupos o sectores externos, así como a emplear sus recursos de acuerdo con sus propias decisiones. Todo esto dentro de los límites establecidos por la misma Carta Magna. Las universidades tienen independencia funcional. Tienen facultades y potestades suficientes para reglamentar autónomamente tanto el servicio público de docencia como el

[1] *ARTÍCULO 84.- La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Las demás instituciones de educación superior universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica.*
El Estado las dotará de patrimonio propio y colaborará en su financiación.

de investigación y de extensión, así como disponer y ejecutar las políticas que mejor considere convenientes en estas áreas.

En este caso el proyecto ley pretende regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho de la ciudadanía al cuidado y desarrollo infantil, la promoción de la autonomía personal y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para Personas Adultas y Personas Adultas Mayores en situación de dependencia (SINCA). Por ello desde el punto de vista jurídico se determina que el Proyecto de Ley no transgrede directamente las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por cuanto su contenido no regula ni interfiere en el funcionamiento interno, la organización, la administración, ni la gestión de los recursos de las universidades públicas, que son los elementos esenciales protegidos por el principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica; pero si podría implicar la participación de las Universidades y CONARE, según sea si se cuenta con programas de atención de adultos mayores, o centros de cuido de personas menores de edad que reciban los beneficios de dicha ley, por lo que se recomienda que el proyecto de ley aclare expresamente que sus disposiciones no se aplican a los programas y servicios administrados por las universidades públicas bajo su régimen de autonomía

III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

Con base en lo expuesto se recomienda, para efectos de atender la audiencia conferida por la Asamblea Legislativa: Sobre el Proyecto de Ley N°23.719 no presentar oposición en razón de que, desde el punto de vista jurídico se determina que no transgrede las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica.

No obstante, es importante resaltar que el presente Proyecto Ley si [*sic*] *podría implicar la participación de las Universidades y CONARE, según sea si se cuenta con programas de atención de adultos mayores, como lo es el caso del Instituto Tecnológico de Costa Rica, por medio del Centro de Vinculación y el Proyecto Educativo para la Persona Adulta Mayor (PAMTEC) que desarrolla estrategias y acciones educativas en investigación, docencia, extensión y acción social, o el centro de cuido de personas menores de edad, si bien recibieran beneficios que se indican en la ley, por lo que se recomienda que el proyecto de ley aclare expresamente que sus disposiciones no se aplican a los programas y servicios administrados por las universidades públicas bajo su régimen de autonomía.*

... (La negrita y el subrayado corresponden al original)

CONSIDERANDO QUE:

1. El Instituto Tecnológico de Costa Rica, por medio del Consejo Institucional, debe emitir criterio sobre los proyectos de ley que la Asamblea Legislativa le envía a

consulta, en acatamiento del artículo 88 de la Constitución Política. De conformidad con la normativa establecida por este Consejo, el pronunciamiento que se efectúe ordinariamente versará sobre la transgresión de la autonomía universitaria; no obstante, cuando lo considere conveniente podrá pronunciarse sobre otros aspectos de los proyectos consultados.

2. El texto actualizado del proyecto de ley bajo expediente N.° 23.719, denominado "LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA DE LOS CUIDADOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CUIDADO, ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y APOYOS PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL", propone el reconocimiento del derecho al cuidado como un derecho humano, la creación de un sistema nacional para la atención de personas en situación de dependencia, y el impulso de la economía de los cuidados como una estrategia de inclusión, equidad y bienestar social.

3. Este proyecto de ley propone, entre otros aspectos, en el numeral 10 la adición del artículo 15 a la Ley de Creación de la Red de Cuido y Desarrollo Infantil, Ley N.° 9220, bajo el texto siguiente:

> *Artículo 15- Calidad de los servicios*
> *La Secretaría Técnica definirá estándares esenciales de calidad y seguridad para los centros y servicios, e indicadores de calidad para la evaluación, la mejora continua y el análisis comparado de los centros y servicios de la Red. Corresponderá a esa Secretaría Técnica otorgar un certificado de acreditación de la calidad cuando verifique el cumplimiento de dichos estándares, para el caso de los servicios provistos por instituciones públicas, y de aquellos servicios privados financiados con recursos públicos.* ***Las instituciones públicas concedentes de recursos a organizaciones privadas solicitarán dicho certificado.*** (La negrita es proveída)

Además, un Transitorio I que detalla:

> *TRANSITORIO I- Acreditación de servicios existentes*
> ***Los servicios privados de cuido infantil, atención a la dependencia y promoción de la autonomía personal que, al momento de entrar en vigencia esta ley, estén financiados parcial o totalmente con recursos públicos, contarán con un plazo impostergable de cinco años para obtener el certificado de acreditación de la calidad****; caso contrario, no serán sujetos de asignaciones presupuestarias adicionales.* (La negrita es proveída)

4. El criterio emitido por la Oficina de Asesoría Legal determina que, desde el punto de vista jurídico, el proyecto de ley no transgrede directamente las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por cuanto su contenido no regula ni interfiere en el funcionamiento interno, la organización, la administración, ni la gestión de los recursos de las universidades públicas, que son los elementos esenciales protegidos por el principio de autonomía

universitaria consagrado en el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica. Sin embargo, sí podría implicar la participación de las universidades, si se cuenta con programas de atención de personas adultas mayores, o cuido de personas menores de edad que cuenten con los beneficios que indicaría dicha ley. Al respecto “recomienda [...], no presentar oposición, con la observación de que el proyecto de ley aclare expresamente que sus disposiciones no se aplican a los programas y servicios administrados por las universidades públicas bajo su régimen de autonomía”.

5. Desde el punto de vista de este Consejo, si la universidad acepta voluntariamente recursos públicos asignados bajo una ley específica o convenio para un fin determinado (fondos del Fodesaf por ejemplo), para la creación o administración de centros de cuido de personas menores de edad o programas de atención de personas adultas mayores, entonces queda jurídicamente obligada a cumplir con las condiciones que esa ley establezca para el uso de esos recursos.

Por otra parte, la obligación de certificarse que este proyecto incorpora no necesariamente vulneraría la autonomía en aquellas actividades no integradas formalmente como parte de la función universitaria y que reciben presupuesto público (del FEES incluso), dado que podrían considerarse fuera del ámbito protegido por el artículo 84 constitucional.

No obstante, los proyectos universitarios dirigidos a personas menores de edad o adultas mayores, gestionados con base en el quehacer universitario y financiados con el presupuesto de la universidad, no deben correr un riesgo interpretativo, por lo que sería prudente solicitar que el proyecto de ley excluya expresamente las actividades relacionadas con personas adultas mayores o menores de edad gestionados bajo autonomía, tal y como recomienda la Oficina de Asesoría Legal.

SE ACUERDA:

a. Indicar en respuesta a la consulta recibida de parte de la Asamblea Legislativa, a través de la instancia consultante que, en el proyecto de ley indicado a continuación, desde el punto de vista jurídico, no se transgreden directamente las competencias propias de la Institución, ni se presentan roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica; no obstante, es necesario que se aclare expresamente que los requisitos que incluye no aplican a las actividades relacionadas con personas adultas mayores o menores de edad, que están bajo el régimen de autonomía universitaria y formen parte del quehacer institucional:

Expediente	Nombre del proyecto	Comisión consultante
N.° 23.719 (texto actualizado)	LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA DE LOS CUIDADOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CUIDADO, ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y APOYOS PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL	Departamento Secretaría del Directorio AL-DSDI-OFI-0049-2025

b. Encargar a la Vicerrectoría de Administración para que mantenga seguimiento de este proyecto de ley, y con el apoyo de la Oficina de Asesoría Legal, oportunamente se indague, con mayor profundidad, sobre la obligatoriedad del requisito del certificado de calidad de los servicios que se anuncia para cuando se conceden recursos a organizaciones privadas que desarrollen actividades en materia de cuidado y atención a personas en situación de dependencia; en nuestro caso, a la Asociación Taller Infantil Psicopedagógico del Tecnológico de Costa Rica (ATIPTEC), así como una revisión oportuna del convenio vigente, en caso de que las conclusiones a las que lleguen así lo demanden y se dé la aprobación de este proyecto de ley.

c. Indicar que el presente acuerdo no podrá ser impugnado por carecer de efectos jurídicos propios.

ACUERDO FIRME

La señora Ana Rosa Ruíz Fernández agradece el espacio y aprovecha para destacar la importancia que el tema del cuido ha tenido para el Instituto Tecnológico de Costa Rica en el marco del proyecto previamente apoyado por el Consejo Institucional. Señala que, aunque dicho proyecto se orienta principalmente hacia instituciones, el TEC ha asumido este compromiso de manera integral y a distintos niveles. Explica que, además del Taller Infantil Psicopedagógico del Campus Tecnológico Central de Cartago cuyo modelo espera que se replique en los demás recintos, la institución cuenta con otras acciones significativas en materia de cuido. Destaca, en particular, la existencia de una beca de cuido otorgada a madres y padres estudiantes en todos los recintos, lo que contribuye a mitigar las brechas de acceso y permanencia en la educación superior. Adicionalmente, menciona la promoción de códigos de buenas prácticas que visibilizan la corresponsabilidad en el cuido, enfatizando que esta no debe recaer únicamente en las mujeres. Sostiene que tanto hombres como mujeres deben tener acceso a licencias y apoyos cuando asumen responsabilidades de cuido en sus familias. Asimismo, resalta los esfuerzos del Centro de Vinculación por atender a la población adulta mayor mediante proyectos y actividades específicas, lo cual refleja un enfoque amplio e inclusivo. Subraya que el cuido debe concebirse no como una ayuda secundaria, sino como una responsabilidad social compartida, que debe ser asumida por toda la comunidad institucional.

La discusión de este punto consta en el archivo digital de la Sesión Ordinaria N.° 3406.

ARTÍCULO 23. Pronunciamiento sobre el proyecto de ley Expediente N.° 24.819 "LEY PARA LA GESTIÓN POSCONSUMO DE RESIDUOS FARMACÉUTICOS Y COSMÉTICOS" ***(A cargo de la Presidencia)***

La señora Maritza Agüero González presenta la propuesta denominada: "Pronunciamiento sobre el proyecto de ley Expediente N.° 24.819 "LEY PARA LA GESTIÓN POSCONSUMO DE RESIDUOS FARMACÉUTICOS Y COSMÉTICOS", a cargo de la Presidencia (adjunta al acta de esta sesión).

El señor Teodolito Guillen Girón somete a votación la propuesta, quedando aprobada con el siguiente resultado: 10 votos a favor y 0 votos en contra. Se somete a votación la firmeza del acuerdo y es aprobada con: 10 votos a favor y 0 votos en contra.

Por lo tanto, el Consejo Institucional:

RESULTANDO QUE:

1. El artículo 84 de la Constitución Política de la República de Costa Rica establece:

> *La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Las demás instituciones de educación superior universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica.*
>
> *El Estado las dotará de patrimonio propio y colaborará en su financiación.*

2. El artículo 88 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, establece:

> *Para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a las materias puestas bajo la competencia de la Universidad de Costa Rica y de las demás instituciones de educación superior universitaria, o relacionadas directamente con ellas, la Asamblea Legislativa deberá oír previamente al Consejo Universitario o el órgano director correspondiente de cada una de ellas.*

3. El artículo 18, inciso i) del Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica, señala:

> *Son funciones del Consejo Institucional:*
> *…*

i. Evacuar las consultas a que se refiere el Artículo 88 de la Constitución Política de la República.

…

4. En el "Procedimiento para la atención y emisión de criterio ante consultas de proyectos de ley enviados por la Asamblea Legislativa", se establece la metodología de atención y emisión de criterio a las consultas de los Proyectos de Ley sometidos a conocimiento del Consejo Institucional por la Asamblea Legislativa. En lo conducente se extrae lo siguiente:

1. Recibe el documento en consulta enviado por la Asamblea Legislativa.

2. Traslada el documento a la Oficina de Asesoría Legal, de inmediato una vez recibido, para que emita dictamen en el plazo de 3 días hábiles…

[…]

4. El documento es dado a conocer a la Comunidad Institucional mediante la cuenta oficial de correo electrónico, para consulta pública, indicando que las observaciones deberán ser enviadas directamente a la Asamblea Legislativa y señalando la dirección de correo pertinente.

5. Recibido el dictamen de la Oficina de Asesoría Legal, la Presidencia confecciona la propuesta que conocerá el Consejo Institucional. El Consejo se pronunciará ordinariamente solo sobre si el proyecto afecta o no la autonomía universitaria. No obstante, cuando lo considere conveniente podrá pronunciarse sobre otros aspectos del proyecto.

…

5. La Secretaría del Consejo Institucional recibió en consulta por parte de la Comisión Especial de Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa, el texto del proyecto "Ley para la Gestión Posconsumo de Residuos Farmacéuticos y Cosméticos" (AL-CPEAMB375-2025 del 21-04-2025), contenido en el Expediente N.° 24.819, mismo que fue consultado a la Oficina de Asesoría Legal en oficio SCI-327-2025, fechado 24 de abril de 2025. De igual forma fue sometido a conocimiento y consideración de la comunidad institucional a través de mensaje de correo electrónico.

6. Al respecto, la Oficina de Asesoría Legal emitió criterio en oficio AL-310-2025 del 23 de abril del 2025, indicando lo siguiente:

…

I. SINOPSIS

Expediente	*N.° 24.819*
Nombre	*Ley para la Gestión Posconsumo de Residuos Farmacéuticos y Cosméticos*
Objeto	*Modificar el artículo 6 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, N.º 8839, del 24 de junio del 2010, y sus reformas,*

	para la definición de residuos peligrosos; se adiciona una nueva definición al artículo 6 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, N.º 8839, y se agrega un inciso f) al artículo 53 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, N.º 8839, del 24 de junio del 2010, para clasificar estos residuos como peligrosos y de manejo especial y plantea que los residuos farmacéuticos sean cubiertos por la responsabilidad extendida del productor, lo que garantizará que los productores o importadores de medicamentos y productos farmacéuticos asuman un rol activo en la mitigación de los impactos ambientales y en salud pública asociados a sus residuos.
Incidencia	*Desde el punto de vista jurídico se determina que el Proyecto de Ley no transgrede las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por cuanto su contenido no regula ni interfiere en el funcionamiento interno, la organización, la administración, ni la gestión de los recursos de las universidades públicas, que son los elementos esenciales protegidos por el principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica. Sin embargo, se debe analizar el tema de los residuos peligrosos y farmacéuticos que se producen en la institución*
Recomendación	*Con base en lo expuesto se recomienda, para efectos de atender la audiencia conferida por la Asamblea Legislativa, no presentar oposición con la observación de que se establezca expresamente que en su implementación se debe garantizar el respecto de los principios de la autonomía universitaria.*

II. CRITERIO JURÍDICO

La presente consulta se contrae fundamentalmente a la revisión y emisión del criterio en torno al Proyecto de Ley "Ley para la Gestión Posconsumo de Residuos Farmacéuticos y Cosméticos", tramitado bajo Expediente N°24.819; y al efecto se indica:

A) CONSIDERACIONES GENERALES

Objeto del Proyecto: *El objetivo del Proyecto es modificar el artículo 6 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, N.º 8839, del 24 de junio del 2010, y sus reformas, para la definición de residuos peligrosos; se adiciona una nueva definición al artículo 6 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, N.º 8839, y se agrega un inciso f) al artículo 53 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, N.º 8839, del 24 de junio del 2010.*

Motivación: *En respuesta a la necesidad urgente de manejar adecuadamente los residuos farmacéuticos, se propone reformar la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos para clasificar estos residuos como peligrosos y de manejo especial. Esta categoría incluye aquellos residuos*

que, por sus características de composición, transporte, almacenamiento, uso y valor de recuperación, presentan riesgos significativos para la salud y el medio ambiente. Por lo tanto, es crucial que se manejen fuera de los sistemas normales de desechos, bajo condiciones que minimicen su impacto ambiental y en la salud pública.

También se plantea que los residuos farmacéuticos sean cubiertos por la ***responsabilidad extendida del productor****, lo que garantizará que los productores o importadores de medicamentos y productos farmacéuticos asuman un rol activo en la mitigación de los impactos ambientales y en salud pública asociados a sus residuos.*

Contenido de la propuesta: *De la revisión efectuada del texto propuesto sobre la cual se nos confiere audiencia se determina que está conformada por seis artículos y dos transitorios, que modificar el artículo 6 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, N.º 8839, del 24 de junio del 2010, y sus reformas, para la definición de residuos peligrosos; se adiciona una nueva definición al artículo 6 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, N.º 8839, y se agrega un inciso f) al artículo 53 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, N.º 8839, del 24 de junio del 2010.*

Texto vigente	***Propuesta de reforma***	***Observaciones***
Ley para la gestión posconsumo de residuos farmacéuticos y cosméticos		
ARTÍCULO 1- Para que se modifique el artículo 6 de ***la Ley para la Gestión Integral de Residuos, N.º 8839****, del 24 de junio del 2010, y sus reformas, para que la definición de residuos peligrosos se lea de la siguiente manera:*		
Artículo 6- Definiciones. Para los efectos de esta ley se define lo siguiente: *Residuos peligrosos: son aquellos que, por su reactividad química y sus características tóxicas, explosivas, corrosivas, radioactivas, biológicas, bioinfecciosas e inflamables, o que por su tiempo de exposición puedan causar daños a la salud y al ambiente.*	*Artículo 6- Definiciones* *[…]* ***Residuos peligrosos****: aquellos residuos que, por su reactividad química, bioactividad y sus características tóxicas, explosivas, corrosivas, radioactivas, biológicas, bioinfecciosas e inflamables****, ecotóxicas o de persistencia ambiental, o que, por su tiempo de exposición, puedan causar resistencia antimicrobiana, daños a la salud o el ambiente****. Asimismo, se consideran residuos peligrosos aquellos que el Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Energía, defina como tales, así como los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. Se excluirán los envases, empaques y embalajes que hayan recibido previo tratamiento para su descontaminación según la reglamentación presente.*** *[…].*	*Se agrega ecotóxicas o de persistencia ambiental, o que, por su tiempo de exposición, puedan causar resistencia antimicrobiana, daños a la salud o el ambiente. Asimismo, se consideran residuos peligrosos aquellos que el Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Energía, defina como tales, así como los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. Se excluirán los envases, empaques y embalajes que hayan recibido previo tratamiento para su descontaminación según la reglamentación presente.*

*ARTÍCULO 2- Para que se **adicione una nueva definición al artículo 6 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos**, N.º 8839, del 24 de junio del 2010, y sus reformas, que se leerá de la siguiente manera:*		
	Artículo 6- Definiciones *[…]* ***Residuos farmacéuticos y cosméticos**: residuos peligrosos de manejo especial que resultan de la **producción, elaboración, empaque, comercialización, consumo y disposición de medicamentos, productos farmacéuticos y cosméticos destinados a la atención de la salud humana y animal**. Incluyen productos no utilizables, caducados, contaminados, deteriorados, adulterados, falsificados y decomisados, así como residuos generados durante el proceso de fabricación, análisis de control de calidad y uso final. Estos residuos comprenden tanto los medicamentos, productos cosméticos y materias primas, así como sus envases y embalajes contaminados, los cuales poseen características de toxicidad, bioactividad, teratogenicidad, carcinogenicidad, mutagenicidad y generación de resistencia antimicrobiana. Debido a su naturaleza, requieren procesos de disposición final especializados para mitigar su potencial impacto en la salud pública y el medio ambiente.* *…].* [*sic*]	*Se adiciona la definición de residuos farmacéuticos y cosméticos*
*ARTÍCULO 3**-** Para que se agregue un **inciso f) al artículo 53 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos,** N.º 8839, del 24 de junio del 2010, y sus reformas, que se lea de la siguiente manera:*		
Artículo 53- Infracciones gravísimas y sus sanciones Se considerarán infracciones gravísimas, sin perjuicio de que constituya delito, las siguientes: *a) Gestionar, almacenar, valorizar, tratar, depositar y disponer residuos peligrosos o residuos de manejo especial declarados por el Ministerio de Salud, en lugares no autorizados o aprobados por las autoridades competentes o*	*Artículo 53- Infracciones gravísimas y sus sanciones* ***Se considerarán infracciones gravísimas**, sin perjuicio de que constituya delito, las siguientes:* *[…]* *f) La gestión inadecuada de cualquier residuo farmacéutico y cosmético.* *[…].*	*Se agrega un nuevo inciso: La gestión inadecuada de cualquier residuo farmacéutico y cosmético*

en condiciones contrarias a las establecidas en las disposiciones correspondientes. *b) Mezclar residuos ordinarios con residuos peligrosos, contraviniendo lo dispuesto en esta ley y demás ordenamientos que de ellas deriven.* *c) Comprar, vender y almacenar material valorizable robado o sustraído ilícitamente.* *d) Quemar, incinerar, enterrar, almacenar o abandonar residuos peligrosos, en sitios no autorizados.* *e) Transportar residuos peligrosos, sin la autorización correspondiente.* *Sin perjuicio de la obligación del infractor de indemnizar y reparar el daño ambiental, las infracciones gravísimas se sancionarán con una multa de cien a doscientos salarios base, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 7337, de 5 de mayo de 1993, y con el pago del daño ambiental.)*		
	ARTÍCULO 4- Responsabilidad extendida del productor y responsabilidad compartida sobre los residuos farmacéuticos. *Los residuos farmacéuticos y cosméticos serán clasificados como residuos peligrosos de manejo especial. Por ende, todos los expendedores, distribuidores, productores e importadores tienen la responsabilidad de estos productos durante todo su ciclo de vida de acuerdo con el principio de responsabilidad extendida del productor descrito en la Ley para la Gestión Integral de Residuos, N.º 8839, del 24 de junio del 2010, y sus reformas, incluyendo las fases posindustrial y posconsumo. Los expendedores, distribuidores, productores e importadores deberán presentar un informe anual que demuestre el cumplimiento de la recolección,*	

	gestión, tratamiento y disposición final adecuada de estos residuos ante la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud. Esta información permitirá evidenciar el consumo, el incremento de la recuperación y contribuirá a la generación de propuestas de prevención y mitigación, en beneficio de la salud pública y ambiental del país.	
	ARTÍCULO 5- Procedimientos de cumplimiento de la responsabilidad extendida del productor sobre los residuos farmacéuticos *Se establece que en todo sitio en donde existan medicamentos, productos farmacéuticos y cosméticos para la entrega, expendio, venta y distribución a la población, se implementen procedimientos obligatorios para la recepción, almacenamiento y envío a tratamiento y disposición final adecuada de estos residuos; de tal forma que se garantice que:* *a) La población pueda disponer de forma gratuita estos residuos sin que esta recepción se supedite a la venta de nuevos productos.* *b) Los residuos se almacenen de forma segura, en condiciones que prevengan su falsificación, el acceso público, su degradación o liberación al ambiente, protegiendo así la salud pública y los ecosistemas.* *c) La disposición final se realice a través de un gestor autorizado, conforme a las técnicas autorizadas vía reglamentaria; de modo que maximice la recuperación de los materiales valorizables y minimice su impacto en la salud pública y el ambiente.*	
	ARTÍCULO 6- Análisis y tratamiento de aguas residuales con presencia de moléculas farmacéuticas y cosméticas *El Ministerio de Salud deberá controlar, prevenir y prohibir la contaminación del ambiente con principios activos farmacéuticos*	*El Ministerio de Salud deberá incorporar, vía reglamento, la realización del análisis de residuos farmacéuticos entre los parámetros complementarios de análisis obligatorio en aguas residuales de tipo especial.*

	(fármacos) e ingredientes cosméticos, además de garantizar la mitigación del daño a los ecosistemas y la salud pública causado por estas sustancias.	
	El Ministerio de Salud deberá incorporar, vía reglamento, la realización del análisis de residuos farmacéuticos entre los parámetros complementarios *de análisis obligatorio en aguas residuales de tipo especial.*	
	TRANSITORIO I- Se otorga un plazo de doce (12) meses, a partir de la publicación de esta ley, para que el Estado y el sector privado implementen las acciones necesarias para cumplir con las disposiciones establecidas.	
	TRANSITORIO II- En un plazo de doce (12) meses ***deberá actualizarse la reglamentación correspondiente para incorporar el análisis de residuos farmacéuticos entre los parámetros complementarios de análisis obligatorio en aguas residuales de tipo especial para las actividades hospitalarias*** *(código CIIU 85110), actividades de práctica médica y* ***dental (código CIIU 85120) y otras actividades en salud humana*** *(código CIIU 85190).*	***Se deberá actualizar la reglamentación correspondiente para incorporar el análisis de residuos farmacéuticos entre los parámetros complementarios de análisis obligatorio en aguas residuales de tipo especial para las actividades hospitalarias*** *(código CIIU 85110), actividades de práctica médica y* ***dental (código CIIU 85120) y otras actividades en salud humana*** *(código CIIU 85190).* *En el caso del ITCR debe revisarse los tipos de residuos de los laboratorios existentes, consultorios médicos y odontológicos.*

B) Incidencia del Proyecto para la Autonomía Universitaria

La autonomía universitaria sustentada en el artículo 84 de la Constitución[1] Política garantiza el derecho a organizarse, administrarse y regularse a sí misma, sin interferencias de grupos o sectores externos, así como a emplear sus recursos de acuerdo con sus propias decisiones. Todo esto dentro de los límites establecidos por la misma Carta Magna. Las universidades tienen

[1] *ARTÍCULO 84.- La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Las demás instituciones de educación superior universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica.*
El Estado las dotará de patrimonio propio y colaborará en su financiación.

independencia funcional. Tienen facultades y potestades suficientes para reglamentar autónomamente tanto el servicio público de docencia como el de investigación y de extensión, así como disponer y ejecutar las políticas que mejor considere convenientes en estas áreas.

En este caso, el proyecto ley referente pretende modificar el artículo 6 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, N.º 8839, del 24 de junio del 2010, y sus reformas, para la definición de residuos peligrosos; se adiciona una nueva definición al artículo 6 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, N.º 8839, y se agrega un inciso f) al artículo 53 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, N.º 8839, del 24 de junio del 2010.

Por ello desde el punto de vista jurídico se determina que el Proyecto de Ley no transgrede directamente las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por cuanto su contenido no regula ni interfiere en el funcionamiento interno, la organización, la administración, ni la gestión de los recursos de las universidades públicas, que son los elementos esenciales protegidos por el principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica.

Sin embargo, se establece que el Ministerio de Salud deberá incorporar, vía reglamento, la realización del análisis de residuos farmacéuticos entre los parámetros complementarios de análisis obligatorio en aguas residuales de tipo especial, y que se deberá actualizar la reglamentación correspondiente para incorporar el análisis de residuos farmacéuticos entre los parámetros complementarios de análisis obligatorio en aguas residuales de tipo especial para las actividades hospitalarias (código CIIU 85110), actividades de práctica médica y dental (código CIIU 85120) y otras actividades en salud humana (código CIIU 85190), por lo cual, en el caso de la Institución se deberán revisar los tipos de residuos que se generan en los laboratorios existentes y los residuos que se generan en los consultorios médicos y odontológicos que cuentan con permisos del Ministerio de Salud, así como con los trámites de las aguas residuales de tipo especial. Por ello, por medio de GASEL y otras instancias, se deberán revisar los tipos de residuos que se generan en los laboratorios existentes y los residuos que se generan en los consultorios médicos y odontológicos que cuentan con permisos del Ministerio de Salud.

III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

Con base en lo expuesto se recomienda, para efectos de atender la audiencia conferida por la Asamblea Legislativa: Sobre el Proyecto de Ley N°24.819 no presentar oposición en razón de que, desde el punto de vista jurídico se determina que no transgrede las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica.

Sin embargo, se recomienda realizar la observación de que el proyecto de ley establezca expresamente que en su implementación se debe garantizar el respecto de los principios de la autonomía universitaria.

Se recuerda que esta Asesoría Legal en su carácter consultivo emana criterios técnico- jurídicos por lo que este dictamen no es vinculante, dada las facultades de decisión que ostenta y ejerce el Consejo Institucional.

CONSIDERANDO QUE:

1. El Instituto Tecnológico de Costa Rica, por medio del Consejo Institucional, debe emitir criterio sobre los proyectos de ley que la Asamblea Legislativa le envía a consulta, en acatamiento del artículo 88 de la Constitución Política. De conformidad con la normativa establecida por este Consejo, el pronunciamiento que se efectúe ordinariamente versará sobre la transgresión de la autonomía universitaria; no obstante, cuando lo considere conveniente podrá pronunciarse sobre otros aspectos de los proyectos consultados.

2. El proyecto de ley N.° 24.819, denominado “Ley para la Gestión Posconsumo de Residuos Farmacéuticos y Cosméticos”, tiene por objeto modificar el artículo 6 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, N.° 8839, estableciendo nuevas obligaciones para la gestión de residuos peligrosos derivados de productos farmacéuticos y cosméticos, así como disposiciones sobre responsabilidad extendida del productor y cambios en los análisis de residuos de aguas residuales de tipo especial.

3. El criterio emitido por la Oficina de Asesoría Legal determina que, desde el punto de vista jurídico, el proyecto de ley no transgrede las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, recomendando no presentar oposición.

4. Añade la Oficina de Asesoría Legal que, en el caso de la Institución se deberán revisar los tipos de residuos que se generan en los laboratorios y en los consultorios médicos y odontológicos que cuentan con permisos del Ministerio de Salud, así como con los trámites de las aguas residuales de tipo especial.

5. El Instituto Tecnológico de Costa Rica, como institución comprometida con la sostenibilidad ambiental, la salud pública y la excelencia académica, reconoce la importancia de revisar internamente los procesos institucionales relacionados con la gestión de residuos farmacéuticos y cosméticos, así como con el tratamiento de aguas residuales, a fin de asegurar el cumplimiento normativo y la mejora continua de sus prácticas ambientales.

SE ACUERDA:

a. Indicar en respuesta a la consulta recibida de parte de la Asamblea Legislativa, a través de la instancia consultante que, el proyecto de ley citado a continuación no transgrede las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica:

Expediente	Nombre del proyecto	Comisión consultante
N.° 24.819	LEY PARA LA GESTIÓN POSCONSUMO DE RESIDUOS FARMACÉUTICOS Y COSMÉTICOS	Comisión Especial de Ambiente AL-CPEAMB375-2025

b. Encargar a la Rectoría asignar a la instancia competente, la revisión interna de los procesos institucionales relacionados con la gestión de residuos farmacéuticos y cosméticos, así como con el tratamiento de aguas residuales, a fin de asegurar el cumplimiento de los cambios que eventualmente pudieran ser aprobados con este proyecto de ley.

c. Indicar que el presente acuerdo no podrá ser impugnado por carecer de efectos jurídicos propios.

ACUERDO FIRME

La discusión de este punto consta en el archivo digital de la Sesión Ordinaria N.° 3406.

ARTÍCULO 24. Pronunciamiento sobre el proyecto de ley Expediente N.° 24.675 "LEY PARA LA RECUPERACIÓN SOSTENIBLE DE CRUCITAS Y LA CREACIÓN DEL POLO DE DESARROLLO DE LA REGIÓN HUETAR NORTE DE COSTA RICA" ***(A cargo de la Presidencia)***

La señora Maritza Agüero González presenta la propuesta denominada: "Pronunciamiento sobre el proyecto de ley Expediente N.° 24.675 "LEY PARA LA RECUPERACIÓN SOSTENIBLE DE CRUCITAS Y LA CREACIÓN DEL POLO DE DESARROLLO DE LA REGIÓN HUETAR NORTE DE COSTA RICA", a cargo de la Presidencia (adjunta al acta de esta sesión).

El señor Teodolito Guillen Girón somete a votación la propuesta, quedando aprobada con el siguiente resultado: 10 votos a favor y 0 votos en contra. Se somete a votación la firmeza del acuerdo y es aprobada con: 10 votos a favor y 0 votos en contra.

Por lo tanto, el Consejo Institucional:

RESULTANDO QUE:

1. El artículo 84 de la Constitución Política de la República de Costa Rica establece:

> *La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Las demás instituciones de educación*

superior universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica.

El Estado las dotará de patrimonio propio y colaborará en su financiación.

2. El artículo 88 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, establece:

Para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a las materias puestas bajo la competencia de la Universidad de Costa Rica y de las demás instituciones de educación superior universitaria, o relacionadas directamente con ellas, la Asamblea Legislativa deberá oír previamente al Consejo Universitario o el órgano director correspondiente de cada una de ellas.

3. El artículo 18, inciso i) del Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica, señala:

Son funciones del Consejo Institucional:
…
i. Evacuar las consultas a que se refiere el Artículo 88 de la Constitución Política de la República.
…

4. En el "Procedimiento para la atención y emisión de criterio ante consultas de proyectos de ley enviados por la Asamblea Legislativa", se establece la metodología de atención y emisión de criterio a las consultas de los Proyectos de Ley sometidos a conocimiento del Consejo Institucional por la Asamblea Legislativa. En lo conducente se extrae lo siguiente:

1. *Recibe el documento en consulta enviado por la Asamblea Legislativa.*

2. *Traslada el documento a la Oficina de Asesoría Legal, de inmediato una vez recibido, para que emita dictamen en el plazo de 3 días hábiles…*

[…]

4. *El documento es dado a conocer a la Comunidad Institucional mediante la cuenta oficial de correo electrónico, para consulta pública, indicando que las observaciones deberán ser enviadas directamente a la Asamblea Legislativa y señalando la dirección de correo pertinente.*

5. *Recibido el dictamen de la Oficina de Asesoría Legal, la Presidencia confecciona la propuesta que conocerá el Consejo Institucional. El Consejo se pronunciará ordinariamente solo sobre si el proyecto afecta o no la autonomía universitaria. No obstante, cuando lo considere conveniente podrá pronunciarse sobre otros aspectos del proyecto*.

…

5. La Secretaría del Consejo Institucional recibió en consulta por parte de la Departamento Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa, el proyecto "LEY PARA LA RECUPERACIÓN SOSTENIBLE DE CRUCITAS Y LA CREACIÓN DEL POLO DE DESARROLLO DE LA REGIÓN HUETAR NORTE DE COSTA RICA" (AL-CE23118-0035-2025 del 06 de marzo de 2025), contenido en el Expediente N.° 24.675, mismo que fue consultado a la Oficina de Asesoría Legal en oficio SCI-194-2025, fechado 11 de marzo de 2025. De igual forma fue sometido a conocimiento y consideración de la comunidad institucional a través de mensaje de correo electrónico.

6. La Oficina de Asesoría Legal emitió criterio en oficio AL-318-2025 del 30 de abril del 2025, indicando lo siguiente:

…

I. SINOPSIS

Expediente	*N°24.675*
Nombre	*Ley para la Recuperación Sostenible de Crucitas y la Creación del Polo de Desarrollo de la Región Huetar Norte de Costa Rica*
Objeto	*Crear el marco normativo necesario para titularizar el valor del oro que se encuentra en la roca dura mediante un novedoso mecanismo de creación de certificados digitalizados de activos que permitan recaudar fondos sobre el valor de ese bien del Estado, con la condición de que dicho oro permanecerá en su bóveda natural a cambio de la protección de la naturaleza, la fijación de carbono, la generación de oxígeno y agua y la generación de oportunidades de vida digna para los habitantes de la zona.*
Incidencia	*Desde el punto de vista jurídico se determina que el Proyecto de Ley no transgrede directamente las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por cuanto su contenido no regula ni interfiere en el funcionamiento interno, la organización, la administración, ni la gestión de los recursos de las universidades públicas, que son los elementos esenciales protegidos por el principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica. Sin embargo, si implicaría participación en temas de investigación y docencia que se autorizan realizar en la zona*
Recomendación	*Con base en lo expuesto se recomienda, para efectos de atender la audiencia conferida por la Asamblea Legislativa, no presentar oposición, con la observación de que se establezca expresamente que en su implementación se debe garantizar el respecto de los principios de la autonomía universitaria.*

II. CRITERIO JURÍDICO

La presente consulta se contrae fundamentalmente a la revisión y emisión del criterio en torno al Proyecto de Ley "LEY PARA LA RECUPERACIÓN SOSTENIBLE DE CRUCITAS Y LA CREACIÓN DEL POLO DE DESARROLLO DE LA REGIÓN HUETAR NORTE DE COSTA RICA", tramitado bajo Expediente N°24.675 y al efecto se indica:

A) CONSIDERACIONES GENERALES

Objeto del Proyecto: *La presente iniciativa de ley pretende ser de aplicación única y exclusiva para las actividades autorizadas en la ley, en razón del saneamiento y la restauración ambiental que se llevará a cabo en el área comprendida en el denominado "Proyecto Minero Crucitas", según concesión de explotación minera que fuera otorgada mediante Resolución del Poder Ejecutivo número R-217-2008-MINAE, de las 15:00 horas del 21 de abril de 2008, que a su vez fuera anulada por sentencia firme del Tribunal Contencioso Administrativo número 4399-2010 de las 10:40 horas del 14 de diciembre de 2010; así como sus áreas aledañas; y para las ganancias obtenidas por tales actividades y su debida distribución y retribución a las comunidades locales y al Estado costarricense.*

Motivación: *En el presente proyecto se dispone que es una sistematización general que reúne una serie de iniciativas que se han venido planteando desde distintos sectores que proponen que el país no retroceda en el gran avance histórico que significó la prohibición de la minería metálica a cielo abierto*

La sostenibilidad y la sustentabilidad no pueden entenderse ni vivirse en la desigualdad. Son incompatibles con la pobreza extrema y la acumulación obscena de la riqueza. La minería irregular es una consecuencia de esa desigualdad y falta de oportunidades. Si no hay oportunidades de ganarse la vida de manera digna, muchas personas optarán por hundirse en la miseria del barro contaminado y de comprometer su salud, el futuro de su calidad de vida y la de sus hijos e hijas, a cambio de obtener un ingreso que sólo les permitirá resolver su situación inmediata. Nunca les permitirá salir de la pobreza y asegurar un futuro digno.

Contenido de la propuesta: *De la revisión efectuada del texto propuesto sobre la cual se nos confiere audiencia se determina que está conformada por veintitrés artículos y un transitorio, destacándose lo que tiene relación con esta Institución:*

ARTÍCULO	***PROPUESTA***
	CREACIÓN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE COSTA RICA [*sic*]
1	*ARTÍCULO 1- Ámbito de aplicación* *La presente ley resulta de aplicación única y exclusiva para las actividades autorizadas que se describirán en los artículos siguientes, en razón del saneamiento y la restauración ambiental que se llevará a cabo en el área comprendida en el*

	denominado "Proyecto Crucitas" según concesión de explotación minera que fuera otorgada mediante Resolución del Poder Ejecutivo número R-217-2008-MINAE, de las 15:00 horas del 21 de abril de 2008, que a su vez fuera anulada por sentencia firme del Tribunal Contencioso Administrativo número 4399-2010 de las 10:40 horas del 14 de diciembre de 2010; así como sus áreas aledañas; y para las ganancias obtenidas por tales actividades y su debida distribución y retribución a las comunidades locales y al Estado costarricense.
2	*ARTÍCULO 2- Creación del Polo de Desarrollo Sostenible de la Región Huetar Norte de Costa Rica* *Créase el Polo de Desarrollo Sostenible de la Región Huetar Norte de Costa Rica, con sede en el caserío de Crucitas, distrito Cutris, cantón San Carlos, de la provincia de Alajuela.* *El fin principal del Polo de Desarrollo Sostenible será la responsabilidad y dirección de la restauración y recuperación de la funcionalidad ecosistémica de las zonas afectadas por la minería ilegal de oro y otros metales en las áreas indicadas en el artículo 1 y en zonas aledañas también afectadas por la minería ilegal en el caserío de Crucitas.* *El Polo de Desarrollo será el ente impulsor del desarrollo sostenible de la Región Huetar Norte de Costa Rica, con especial énfasis en los distritos de menor índice de desarrollo humano, a partir de la creación de oportunidades de crecimiento económico sostenible para la generación de bienestar de las comunidades locales*
3	*ARTÍCULO 3- Sobre la administración del Polo de Desarrollo Sostenible de la Región Norte-Norte de Costa Rica* *El SINAC tendrá la administración general del Polo de Desarrollo Sostenible, debiendo coordinar y supervisar las acciones que allí realicen las comunidades organizadas y las demás entidades privadas y públicas competentes, en cada materia de que se trate.*
4	*ARTÍCULO 4- Autorización al Poder Ejecutivo para la adquisición de inmuebles impactados por la minería ilegal* *Se autoriza al Poder Ejecutivo para la compra directa o expropiación de las fincas inscritas en el Registro Público comprendidas en el área indicada en el artículo 1 de esta ley, que serán la base material de la sede del Polo de Desarrollo Sostenible y de las actividades sostenibles y de restauración ecosistémica autorizadas en esta ley. Estos terrenos pasarán a ser propiedad inalienable del Estado y las actividades que terceros realicen en ellos al amparo de esta ley no generarán ningún tipo de derecho de posesión sobre estos.*
8	*ARTÍCULO 8- Autorización de actividades productivas comunales* *Se autoriza la realización de actividades productivas comunales de bajo impacto ambiental, que mantengan el equilibrio ecológico y el desarrollo regenerativo en los terrenos del Polo de Desarrollo Sostenible para la siembra,*

	comercialización y adición de valor agregado de la raicilla ipecacuana (Carapichea ipecacuanha) y sus componentes químicos requeridos para el uso farmacéutico y medicinal. *El INDER incluirá dentro de sus planes de trabajo el financiamiento de proyectos y apoyará a los micro, pequeños y medianos emprendimientos comunales o asociativos locales, de conformidad con el párrafo anterior.*
9	*ARTÍCULO 9- Coordinación y financiamiento de proyectos económicos en el lugar* *La realización de la actividad indicada en el artículo anterior deberá ser aprobada por el SINAC en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y el Instituto de Desarrollo Rural, que actuarán como entes asesores de los grupos comunales organizados en asociaciones de cualquier índole y en cooperativas, para la elaboración, ejecución, industrialización y comercialización de la raicilla y sus subproductos.* *Así mismo, el INDER queda autorizado para financiar cualquier otro tipo de proyecto productivo sostenible en el lugar, de conformidad con la presente ley.* *Además, el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo deberá implementar las acciones necesarias para la facilitación, agilización y colocación de créditos, de conformidad con la ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, Ley N.° 8634, del 23 de abril del 2008, y sus reformas, para cualesquiera de las actividades que sean autorizadas con arreglo a la presente ley.*
10	*ARTICULO 10- **Autorización para el establecimiento de centros educativos y de investigación*** ***Se autoriza al INA, al CONARE, y en general a toda universidad pública o privada, tanto nacional como internacional, así como a centros o institutos de investigación públicos o privados, a ejecutar programas de investigación y desarrollo, así como todo tipo de actividades académicas y de extensión, dirigidos a coadyuvar, complementar o potenciar la capacidad de los grupos comunales organizados para la obtención de los máximos beneficios derivados de las actividades productivas sostenibles que esta ley autoriza.*** *Se autoriza al SINAC, en su carácter de Administrador General del Polo de Desarrollo Sostenible, para que suscriba, ejecute y administre convenios con las instituciones mencionadas en el párrafo primero de este artículo, que tengan carácter de investigación, educación y desarrollo o que tengan como fin asentar centros de investigación, aulas o instalaciones educativas en los inmuebles del Polo de Desarrollo Sostenible.*
11	*ARTÍCULO 11- Autorización para otras actividades productivas armónicas con el ambiente* *Queda autorizada cualquier otra actividad productiva en los terrenos del Polo de Desarrollo Sostenible, siempre y cuando,*

	previa autorización del MINAE, se realice de manera que mantengan el equilibrio ecológico y se lleve a cabo por grupos comunales organizados en asociaciones de toda índole, o en cooperativas.
12	*ARTÍCULO 12- Acompañamiento del Estado de conformidad al giro comercial u organizacional de la actividad a realizar* *Toda actividad productiva comunal que se lleve a cabo en los terrenos del Polo de Desarrollo Sostenible, cuando corresponda por el giro comercial u organizacional, deberá tener el obligado acompañamiento del CNP, INDER, el IMAS, INFOCOOP, DINADECO y el COMEX, así como cualquier otra institución pública para garantizar la producción sostenible, los mercados para esa producción y la sostenibilidad económica y financiera de dichas actividades comunales.* *El Estado incentivará la creación de alianzas público-privadas para el cumplimiento de los fines de esta ley.*
13	*ARTÍCULO 13- Creación del Geoparque Internacional Ambiental de Crucitas* *Créase el Monumento Natural "Geoparque Internacional Ambiental de Crucitas", conformado por las zonas boscosas comprendidas en los cerros de la Fortuna y Botija, pertenecientes a los terrenos del Polo de Desarrollo* Sostenible. *El Geoparque Ambiental tendrá como objetivo la promoción de la investigación científica nacional e internacional de las formaciones geológicas y mineralizaciones existentes en la zona, así como la promoción del turismo científico y ecoturístico de experiencia.*
14	*ARTÍCULO 14- Creación del Museo Natural e Histórico de Crucitas* *Créase el Museo Natural e Histórico Crucitas, como parte del Geoparque Internacional Ambiental de Crucitas, que tendrá como objetivo el rescate y promoción de la riqueza natural e histórica de Crucitas, así como la promoción del turismo ecológico y el turismo rural comunitario.* *El ICT, en el ámbito de sus competencias, deberá dar prioridad a la gestión y promoción del turismo científico en la zona, así como del ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural comunitario.*
	ARTÍCULO 16- Incentivos fiscales *Para la consecución de los fines de esta ley, el Estado podrá aplicar los siguientes incentivos:* *1- Quienes para la realización de las actividades previstas en esta ley demuestren la contratación o participación en los proyectos de un mínimo del 50% de personas con domicilio comprobado en los distritos Cutris o Pocosol de San Carlos, podrán gozar de una deducción del 50% del impuesto sobre la renta.* *2- El mismo incentivo gozarán las entidades privadas que participen de alianzas o contrataciones con el Estado para la consecución de los fines de esta ley.*

	3- La exoneración total de impuestos y aranceles por la importación de la maquinaria y equipos requeridos para efectuar la restauración del ecosistema en los terrenos contaminado. *4- La exoneración total de impuestos y aranceles para materiales de construcción que sean armónicos con el ambiente, siempre y cuando se utilicen para las actividades previstas en esta ley.*
17	*ARTÍCULO 17- Financiamiento de las labores de restauración ecosistémica* *Los procesos de recuperación de la funcionalidad de los ecosistemas mediante saneamiento podrán ser financiados con fondos públicos disponibles al efecto, mediante fondos de cooperación internacional obtenidos a través del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, cualquier otra fuente de cooperación internacional y organizaciones no gubernamentales, o mediante los ingresos que obtenga el Estado de la venta del subproducto oro obtenido del proceso de remoción del mercurio. Dicho porcentaje deberá cubrir los costos del proceso y un porcentaje de utilidad que no podrá ser superior del cinco por ciento, en el caso de que la realización del saneamiento lo realice una entidad privada contratada al efecto.* *Se autoriza al Poder Ejecutivo para utilizar en el financiamiento del presente proyecto los fondos existentes, tanto de capital como intereses, obtenidos de la garantía ambiental depositada por Industrias Infinito en SETENA, del fenecido Proyecto Minero Crucitas, siempre que sean utilizados para la reparación ambiental de la tala rasa realizada durante la vigencia del Decreto de Interés Público y Conveniencia Nacional del Proyecto Minero Crucitas del año 2008, número 34801 del 13 de octubre de 2008, según lo ordenado por la autoridad judicial respectiva.*
18	*ARTÍCULO 18- Sobre el oro restante obtenido del saneamiento* *El resto del oro obtenido como subproducto del saneamiento por la remoción del mercurio pasará al Banco Central de Costa Rica y será utilizado para financiar infraestructura pública básica y las operaciones del Polo de Desarrollo Sostenible, mediante la creación del Fideicomiso para la Recuperación Sostenible de Crucitas y el Mantenimiento del Polo de Desarrollo Sostenible de la Región Huetar Norte de Costa Rica.*
19	*ARTÍCULO 19- Del Fideicomiso para la Recuperación Sostenible de Crucitas y el Mantenimiento del Polo de Desarrollo Sostenible de la Región Huetar Norte* *Créase el Fideicomiso para la Recuperación Sostenible de Crucitas y el Mantenimiento del Polo de Desarrollo Sostenible de la Región Huetar Norte, que tendrá como objetivo el financiamiento de construcción de infraestructura básica de servicios públicos, la operación y mantenimiento del Polo de*

	Desarrollo Sostenible de la Región Huetar Norte de Costa Rica, así como financiamiento de los proyectos de recuperación ambiental y desarrollo sostenible al amparo de esta ley. *El fideicomitente será el Estado a través del Banco Central de Costa Rica, que será la entidad encargada de administrar los fondos provenientes del oro obtenido durante el saneamiento.* *El fiduciario será la entidad pública que el fideicomitente determine con arreglo a la legislación vigente.* *Los fideicomisarios serán las comunidades locales de la Región Huetar Norte de Costa Rica, con prioridad en los distritos de Cutris y Pocosol del cantón de San Carlos, así como los demás distritos de la Región con el menor índice de desarrollo humano.* *Recursos: Los recursos provendrán del oro recuperado por el saneamiento y cualquier otro fondo asignado, como la titularización del valor del oro certificado en la roca dura en los terrenos del Polo de Desarrollo Sostenible.* *Supervisión: El fideicomiso estará bajo la supervisión del SINAC, para asegurar que los fondos se usen conforme a los fines establecidos.* *Este enfoque alineará el fideicomiso con los objetivos de la ley, promoviendo el desarrollo sostenible y la recuperación ambiental en la región de Crucitas.* *El Poder Ejecutivo reglamentará el funcionamiento del fideicomiso creado en el presente artículo*
	ARTÍCULO 20- Participación del Gobierno Local *El Fideicomiso creado en el artículo anterior deberá obligatoriamente coordinar sus acciones con la Municipalidad de San Carlos y considerar en su plan de acción, los planes y proyectos de dicho gobierno local. Lo mismo deberá hacer con los demás gobiernos locales de los territorios en los que se ubiquen los demás distritos prioritarios de la Región Huetar Norte.* *Se autoriza al Fideicomiso para que pueda convenir con los gobiernos locales con jurisdicción en la Región Huetar Norte, el establecimiento de un Fondo de Desarrollo Económico Local con la participación de las municipalidades, la Agencia de Desarrollo Económico de la Zona Norte y representantes de los beneficiarios finales a través de las asociaciones de desarrollo comunal de los distritos prioritariamente beneficiados. Este Fondo tendrá como objetivo el financiamiento de actividades productivas en armonía con el ambiente, que fomenten el desarrollo económico local, así como construcción de infraestructura pública básica para esos fines.*
23	*ARTÍCULO 23- Distribución de los fondos del Fideicomiso* *El Fideicomiso para la Recuperación Sostenible de Crucitas y el Mantenimiento del Polo de Desarrollo Sostenible de la Región Huetar Norte de Costa Rica no podrá girar al Gobierno Central más del cincuenta por ciento de los fondos que*

	ingresen a su patrimonio. Los fondos así girados tendrán como destino específico el financiamiento de los programas sociales y la seguridad social, así como el fortalecimiento de los regímenes de pensiones administrados por la Caja Costarricense de Seguro Social.
Transitorio	*Transitorio I- El Poder Ejecutivo con la asesoría técnica del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en un plazo no mayor a seis meses a partir de la publicación de esta Ley, deberá reglamentar la misma.*

B) Incidencia del Proyecto para la Autonomía Universitaria

La autonomía universitaria sustentada en el artículo 84 de la Constitución[1] *Política garantiza el derecho a organizarse, administrarse y regularse a sí misma, sin interferencias de grupos o sectores externos, así como a emplear sus recursos de acuerdo con sus propias decisiones. Todo esto dentro de los límites establecidos por la misma Carta Magna. Las universidades tienen independencia funcional. Tienen facultades y potestades suficientes para reglamentar autónomamente tanto el servicio público de docencia como el de investigación y de extensión, así como disponer y ejecutar las políticas que mejor considere convenientes en estas áreas.*

En este caso el proyecto ley pretende la Creación del Polo de Desarrollo Sostenible de la Región Huetar Norte de Costa Rica, con sede en el caserío de Crucitas, distrito Cutris, cantón San Carlos, de la provincia de Alajuela. Y el fin principal del Polo de Desarrollo Sostenible será la responsabilidad y dirección de la restauración y recuperación de la funcionalidad ecosistémica de las zonas afectadas por la minería ilegal de oro y otros metales en las áreas indicadas en el artículo 1 y en zonas aledañas también afectadas por la minería ilegal en el caserío de Crucitas.

Dentro de los objetivos de la Ley destaca la Autorización [*sic*] *para el establecimiento de centros educativos y de investigación y se indica, que autoriza al INA, al CONARE, y en general a toda universidad pública o privada, tanto nacional como internacional, así como a centros o institutos de investigación públicos o privados, a ejecutar programas de investigación y desarrollo, así como todo tipo de actividades académicas y de extensión, dirigidos a coadyuvar, complementar o potenciar la capacidad de los grupos comunales organizados para la obtención de los máximos beneficios derivados de las actividades productivas sostenibles que esta ley autoriza.*

También se autoriza al SINAC, en su carácter de Administrador General del Polo de Desarrollo Sostenible, para que suscriba, ejecute y administre convenios con las instituciones mencionadas, que tengan carácter de investigación, educación y desarrollo o que tengan como fin asentar centros

[1] *ARTÍCULO 84.- La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Las demás instituciones de educación superior universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica.*
El Estado las dotará de patrimonio propio y colaborará en su financiación.

de investigación, aulas o instalaciones educativas en los inmuebles del Polo de Desarrollo Sostenible.

Es decir, las Universidades podrían tener importante participación según los objetivos del proyecto ley, en cuanto a que las Universidades y CONARE se les autoriza para ejecutar programas de investigación y desarrollo, así como todo tipo de actividades académicas y de extensión, dirigidos a coadyuvar, complementar o potenciar la capacidad de los grupos comunales organizados según las actividades productivas sostenibles que la ley autoriza.

Por ello desde el punto de vista jurídico se determina que el Proyecto de Ley no transgrede directamente las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por cuanto su contenido no regula ni interfiere en el funcionamiento interno, la organización, la administración, ni la gestión de los recursos de las universidades públicas, que son los elementos esenciales protegidos por el principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica; pero si podría implicar la participación de las Universidades y CONARE, según la autorización dada para ejecutar programas de investigación y desarrollo, y según lo podría solicitar el Polo de Desarrollo Sostenible de la Región Huetar Norte de Costa.

Por otro lado, en los temas de turismo y las carreras relacionadas que se imparten en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, con esta Ley puede tener importancia la Creación [*sic*] *del Geoparque Internacional Ambiental de Crucitas, conformado por las zonas boscosas comprendidas en los cerros Fortuna y Botija, pertenecientes a los terrenos del Polo de Desarrollo Sostenible; y a su vez, la Creación* [*sic*] *del Museo Natural e Histórico de Crucitas, como parte del Geoparque Internacional Ambiental de Crucitas, que tendrá como objetivo el rescate y promoción de la riqueza natural e histórica de Crucitas, así como la promoción del turismo ecológico y el turismo rural comunitario.*

III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

Con base en lo expuesto se recomienda, para efectos de atender la audiencia conferida por la Asamblea Legislativa: Sobre el Proyecto de Ley N°24.675 no presentar oposición en razón de que, desde el punto de vista jurídico se determina que no transgrede las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica.

Sin embargo, se recomienda realizar la observación de que el proyecto de ley establezca expresamente que en su implementación se debe garantizar el respecto de los principios de la autonomía universitaria.

... (La negrita y subrayado es del original)

CONSIDERANDO QUE:

1. El Instituto Tecnológico de Costa Rica, por medio del Consejo Institucional, debe emitir criterio sobre los proyectos de ley que la Asamblea Legislativa le envía a consulta, en acatamiento del artículo 88 de la Constitución Política. De conformidad con la normativa establecida por este Consejo, el pronunciamiento que se efectúe ordinariamente versará sobre la transgresión de la autonomía universitaria; no obstante, cuando lo considere conveniente podrá pronunciarse sobre otros aspectos de los proyectos consultados.

2. El Proyecto de Ley N.° 24.675 “LEY PARA LA RECUPERACIÓN SOSTENIBLE DE CRUCITAS Y LA CREACIÓN DEL POLO DE DESARROLLO DE LA REGIÓN HUETAR NORTE DE COSTA RICA”, pretende crear el marco normativo necesario para titularizar el valor del oro que se encuentra en la roca dura mediante un novedoso mecanismo de creación de certificados digitalizados de activos que permitan recaudar fondos sobre el valor de ese bien del Estado, con la condición de que dicho oro permanecerá en su bóveda natural a cambio de la protección de la naturaleza, la fijación de carbono, la generación de oxígeno y agua y la generación de oportunidades de vida digna para los habitantes de la zona.

3. El criterio emitido por la Oficina de Asesoría Legal determina que, desde el punto de vista jurídico, el proyecto de ley no transgrede directamente las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica; sin embargo, sí podría implicar la participación de las universidades y el Conare, según la autorización dada [artículo 10] para ejecutar programas de investigación y desarrollo, así como todo tipo de actividades académicas y de extensión, dirigidos a coadyuvar, complementar o potenciar la capacidad de los grupos comunales organizados para la obtención de los máximos beneficios derivados de las actividades productivas sostenibles que esa ley autoriza.

4. El Instituto Tecnológico de Costa Rica, como institución comprometida con el desarrollo sostenible, la investigación científica y la vinculación con las comunidades, valora positivamente las oportunidades que el Proyecto de Ley N.º 24.675 podría representar para la participación académica en procesos de restauración ambiental, desarrollo territorial y fortalecimiento de capacidades locales en la Región Huetar Norte. En este marco, se reconoce que las universidades públicas, en ejercicio de sus funciones sustantivas, ya desarrollan actividades de extensión, docencia e investigación en diversas regiones del país, por lo que la mención de la autorización para su participación en el marco de este proyecto de ley se interpreta como un reconocimiento a su rol estratégico en el desarrollo nacional.

SE ACUERDA:

a. Indicar en respuesta a la consulta recibida de parte de la Asamblea Legislativa, a través de la instancia consultante que, en el proyecto de ley indicado a continuación, no se transgreden las competencias propias de la Institución, ni presenta roces con la autonomía otorgada constitucionalmente al Instituto Tecnológico de Costa Rica:

Expediente	Nombre del proyecto	Comisión consultante
N.° 24.675	LEY PARA LA RECUPERACIÓN SOSTENIBLE DE CRUCITAS Y LA CREACIÓN DEL POLO DE DESARROLLO DE LA REGIÓN HUETAR NORTE DE COSTA RICA	Comisión Especial de la Provincia de Alajuela AL-CE23118-0035-2025

b. Indicar que el presente acuerdo no podrá ser impugnado por carecer de efectos jurídicos propios.

ACUERDO FIRME

La discusión de este punto consta en el archivo digital de la Sesión Ordinaria N.° 3406.

La señora Laura Hernández Alpízar se refiere a la constante inclusión de disposiciones relacionadas con las universidades públicas dentro de diversos proyectos de ley, tal como lo ha resumido Marit. Señala que muchos de estos proyectos incorporan de manera reiterada mandatos o autorizaciones hacia las universidades, sin una comprensión adecuada de su funcionamiento y autonomía. Ante esta situación, propone que el Consejo Institucional considere emitir un pronunciamiento de carácter educativo. Este pronunciamiento tendría como objetivo aclarar el papel de las universidades públicas y su marco normativo, con el fin de prevenir la proliferación de iniciativas legislativas que no respetan su naturaleza y funcionamiento. Enfatiza que, aunque mucha de esta información ya está documentada, es necesario reiterarla públicamente. Considera que si quienes redactan leyes y propuestas tuvieran mayor claridad sobre cómo operan las universidades, se podrían evitar muchos de los problemas actuales. Anuncia además su intención de presentar próximamente una propuesta formal de pronunciamiento al respecto.

ASUNTOS VARIOS

ARTÍCULO 25. Temas de Asuntos Varios

- La señora Ana Rosa Ruíz Fernández presenta el siguiente tema por escrito:

Síntesis del tema:

En la Sesión Ordinaria del Consejo Institucional Nº 3406, se tienen en agenda diez propuestas individuales de algunos proyectos que la Asamblea Legislativa está tramitando. Estos proyectos requieren que las universidades, en cumplimiento de la Constitución Política, emitan un criterio sobre si afectan o no su autonomía.

En cada propuesta se expone lo que la Asamblea Legislativa está analizando. Se destacan en color negro los elementos de contenido a considerar y se subrayan aquellos que podrían generar una transgresión a la autonomía. Este enfoque permite identificar en qué aspectos y con qué grado se afecta la autonomía.

Este análisis detallado de las propuestas ha llevado a la generación de considerandos, los cuales permiten identificar y analizar los elementos que podrían transgredir la autonomía. Además, según la naturaleza del proyecto de ley, se recomiendan acciones a la Administración para prever futuras implicaciones de su aprobación o, por el contrario, iniciar acciones institucionales para evitar el riesgo de incumplir leyes.

Conclusión:

El accionar de las universidades públicas en el trámite de proyectos de ley en la Asamblea Legislativa no debe limitarse solo a señalar si existe afectación o no a su autonomía universitaria. También deben aportar elementos que permitan mejorar el proyecto o detallar los riesgos asociados.

En este sentido, gracias Doña Maritza por el interés y el gran trabajo que realiza para que el Consejo Institucional envié a la Asamblea Legislativa pronunciamiento de calidad.

Este esfuerzo debería ser replicado por las diferentes instancias internas del ITCR, para que puedan remitir a la Asamblea Legislativa sus análisis de fondo. Aunque ya se están haciendo avances, el formato y la calidad de los dictámenes de las instancias técnicas, que hacen observaciones sobre el contenido de los proyectos de ley, deberían alcanzar el mismo nivel.

- La señora Maritza Agüero Gonzalez indica, en atención a la intervención de la señora Ana Rosa Ruiz Fernández, que la Oficina de Asesoría Legal ha implementado mejoras sustanciales en la revisión de los proyectos de ley, incorporando tablas comparativas, análisis detallados y cuadros resumen que describen el objeto de cada iniciativa, su incidencia en la Universidad y las recomendaciones correspondientes.

  Estas herramientas facilitan la gestión, permiten a la Secretaría decidir con claridad qué aspectos acoger y, en su caso, justificar el desacuerdo -cuando así corresponda- con propuestas específicas. Extiende su felicitación a las compañeras de la Secretaría que colaboran en la construcción de estas propuestas, así como a la directora de la Oficina de Asesoría Legal y a la

abogada Xinia Guerrero Araya, quienes están a cargo de la revisión jurídica de los proyectos.

- El señor Randall Blanco Benamburg expresa su total adhesión al reconocimiento previamente manifestado por la señora Ana Rosa Ruíz Fernández hacia el trabajo realizado por la señora Agüero González y el equipo de la Secretaría del Consejo Institucional. Asimismo, enfatiza su especial agradecimiento a la Oficina de Asesoría Legal, destacando su labor como equipo, así como la dirección ejercida por su titular y el trabajo puntual de la profesional encargada de atender los pronunciamientos legislativos. Señala que se evidencia una mejora sustancial en los insumos que recibe el Consejo, lo cual resulta fundamental para el cumplimiento de una de sus funciones más delicadas: responder las consultas enviadas por la Asamblea Legislativa respecto a proyectos de ley, en el marco de las competencias institucionales. Subraya que, ante la gran cantidad de proyectos que se deben revisar, el apoyo de la Oficina de Asesoría Legal se vuelve indispensable como primer insumo, y que el trabajo de sistematización y redacción final realizado por la Secretaría permite contar con propuestas bien fundamentadas para remitir al órgano legislativo.

  Finalmente, reconoce la mejora en el formato y contenido de los dictámenes que se presentan, y coincide en que, idealmente, no debería ser necesario advertir constantemente sobre las amenazas a la autonomía universitaria. No obstante, señala que en el contexto actual donde algunos sectores políticos no valoran o desconocen dicho principio esta función del Consejo resulta vital. Indica que queda a la espera de la propuesta anunciada por la señora Laura Hernández Alpízar para manifestarse al respecto.

- La señora Raquel Lafuente Chryssopoulos se une a los reconocimientos expresados por sus compañeros y compañeras en relación con los pronunciamientos emitidos sobre los proyectos de ley provenientes de la Asamblea Legislativa. Destaca que el trabajo ha sido siempre significativo desde la Presidencia de la Secretaría; sin embargo, resalta que en esta ocasión se evidencia un esfuerzo particularmente intenso por parte de varias personas involucradas. Subraya que este trabajo no solo permite revisar cuidadosamente aquellos proyectos que podrían afectar la autonomía universitaria o incidir en las actividades académicas e institucionales, sino que también demuestra la capacidad de la institución para responder con diligencia y compromiso ante cada consulta recibida, manteniéndose vigilante respecto al resguardo de los recursos institucionales.

  Agradece especialmente a la señora Maritza Agüero González, al equipo de Asesoría Legal y a todas las personas colaboradoras que participan en la elaboración de los pronunciamientos, reconociendo la calidad del trabajo reflejado en cada uno de los documentos presentados.

Sin más temas que atender y siendo las once horas con cincuenta y un minutos, se levanta la sesión.

MAG/kmm

MARIA ESTRADA SANCHEZ (FIRMA)
Firmado digitalmente por MARIA ESTRADA SANCHEZ (FIRMA)
Fecha: 2025.05.22 12:21:13 -06'00'

Ing. María Estrada Sánchez, MSc.
PRESIDENCIA

TEC | Tecnológico de Costa Rica
Firmado digitalmente por MARITZA AGUERO GONZALEZ (FIRMA)
Fecha: 2025.05.21 17:16:50 -06'00'

MAE. Maritza Agüero González
DIRECTORA
SECRETARÍA DEL CONSEJO INSTITUCIONAL

TEC | Tecnológico de Costa Rica
Firmado digitalmente por TEODOLITO GUILLEN GIRON (FIRMA)
Motivo: Estoy de acuerdo con las partes especificadas de este documento
Fecha: 2025.05.22 16:17:19 -06'00'

Dr. Teodolito Guillén Girón
PRESIDENCIA a. i.